

JOSE JOAQUIN REAL DIAZ

ESTUDIO DIPLOMATICO
DEL
DOCUMENTO INDIANO



Sevilla, 1970



INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
DE SEVILLA

ESTUDIO DIPLOMATICO
DOCUMENTAL

ESTUDIO DIPLOMATICO DEL DOCUMENTO INDIANO



Los contenidos de esta obra son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la opinión de la editorial.

PUBLICACIONES DE LA
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
DE SEVILLA

CXC
(N.º General)



Las noticias, asertos y opiniones contenidos en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad de su autor. La Escuela de Estudios Hispano-Americanos sólo responde del interés científico de sus publicaciones.

JOSE JOAQUIN REAL DIAZ

ESTUDIO DIPLOMATICO
DEL
DOCUMENTO INDIANO



SEVILLA, 1970

Primera edición de 1.000 ejemplares

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF SEVILLE
1970 JUN 10
1000000000

ESTUDIO DIPLOMATICO
DEL
MOVIMIENTO INDIANO

RESERVADOS
LOS DERECHOS



Depósito legal SE - 273 - 1970

G.E.H.A.—Alfonso XII, 12.—Sevilla, 1970

PREFACIO

*Al profesor Aurelio Tanodi, pionero
en los estudios de Diplomática indiana,
con afecto y agradecimiento.*

Primera edición de 1.000 ejemplares

RESERVADOS
LOS DERECHOS

Depósito legal SE - 273 - 1970

G.E.H.A.—Alfonso XII, 12.—Sevilla, 1970

PREFACIO

Al profesor Aurelio Tanodi, pionero
en los estudios de Diplomática indiana,
con afecto y agradecimiento.

P R E F A C I O N

Grato deber —de amigo y mentor— es ofrecerte, amable lector, esta monografía, parte fundamental de la tesis del Dr. José Joaquín Real Díaz, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, en la que obtuvo una justa y brillante calificación.

Perfectamente conoce el Prof. Real el Archivo General de Indias de Sevilla, donde ha trabajado durante más de quince años, aún antes de licenciarse en la sección de Historia de nuestra Facultad. Fruto maduro de sus persistentes investigaciones son un conjunto de monografías donde los valiosos descubrimientos y los nuevos enfoques históricos e institucionales, siempre han sido deducidos de un certero conocimiento de la auténtica documentación.

Era muy natural que al decidir el tema de su memoria de doctor lo hiciera sobre un difícil, y apenas tocado tema: «El documento indiano. Estudio diplomático». Y repito difícil puesto que la investigación de su tesis no ha sido verificada sobre uno o más legajos, sino que ha tenido que enfrentarse —y a mi juicio con óptimo resultado— con casi la totalidad de la ingente documentación indiana, conservada cual fabuloso tesoro histórico, en el «archivo de dos mundos».

Seis capítulos —aparte de la Introducción— integran esta obra: Tradición documental; La actio del documento indiano; Génesis de la conscriptio del documento indiano;

Tipos diplomáticos indianos emanados de la autoridad soberana; Documentos emanados de las autoridades delegadas indianas; La fecha y el sello en el documento indiano; y en cada uno de ellos, unos enjundiosos parágrafos donde el tema capitular se desarrolla pletórico de sistemática exornada de congruentes ejemplos y basado en abundantes testimonios documentales. Cada apartado tiene, cómo no, su precedente diplomático europeo e hispano.

Mención especial merece todo el proceso de formación, desarrollo y conclusión de los documentos jurídico-indianos, nacidos en la península o en las Indias occidentales y orientales, desde el memorial o la petición, pasando por la minuta, las consultas, el decreto ordenador hasta el precepto aprobado, sancionado, publicado, obedecido y cumplido.

La clasificación de las normas legales: pragmáticas, provisiones, ordenanzas, cédulas, instrucciones, decretos, órdenes de la vía reservada, cartas emanadas del Monarca y dirigidas a los reinos y provincias del Nuevo Mundo por el Real y Supremo Consejo de las Indias, o la Secretaría del despacho universal de Indias, con sus requisitos formales e internos, su diversa significación y contenido, clarifican toda una confusa serie de —hasta ahora— términos poco precisos.

El conjunto de resoluciones normativas dictadas por las autoridades de Ultramar —virreyes, presidentes, gobernadores, intendentes, corregidores, alcaldes mayores, alcaldes ordinarios, Reales audiencias, y chancillerías, municipios, oficiales de la Real Hacienda y magistrados de los Tribunales mayores de cuentas— en forma de mandamientos, autos de gobierno, ordenanzas, sentencias y provisiones audienciales, autos acordados, resoluciones fiscales, son estudiadas, analizadas y ejemplificadas por el Dr. Real, con probada suficiencia.

Los titulares —secretario del Consejo indiano, escribanos de gobernación y de justicia, secretarios de las negocia-

ciones de la Nueva España y del Perú (las dos grandes secciones burocráticas del supremo organismos indiano, cuya nómina completa en el siglo XVIII da el autor), los secretarios de la Cámara de Indias y en el siglo XVIII, los secretarios del despacho universal de Indias, los escribanos de gobernación de las autoridades del Nuevo Mundo y los de las audiencias— y sus respectivas funciones, constituyen una serie de acápites del mayor valor.

La extraordinaria importancia de los libros registros cedularios (libros reales de gobierno y gracia, en feliz expresión de León Pinelo), su imperiosa necesidad, fidelidad, autenticidad y valor fehaciente, son resaltadas por el autor. Junto al registro general del sello (foradado), donde se anotan las disposiciones registradas en la chancillería del Consejo y en las chancillerías y audiencias indianas, la numerosa serie de cedularios: generalísimos, generales —Perú y Nueva España—, audienciales, de gobernaciones, municipales, de la Real Casa de la Contratación de las Indias.

El Dr. Real realiza un completo estudio acerca de la «validación» de los documentos indianos —originales, copias simples, certificados, traslados notariales, sobrecartas, etc.— garantizados no sólo por la firma del Rey —manuscrita o de estampilla—, el refrendo del secretario, la firma entera o rúbrica (señal) de los consejeros indianos y de su presidente, sino por el Real sello que representa «el cuerpo místico y figurativo del Rey nuestro señor» en ponderativa frase de Francisco Tello de Sandoval.

El Estudio diplomático del documento indiano del Doctor José Joaquín Real Díaz, es una obra de indispensable consulta para todos los estudiosos del americanismo, que en ella encuentran una guía valiosísima para sus investigaciones en el Archivo General de Indias de Sevilla.

Su estudio es del mayor interés para la diplomática general e imprescindible para la indiana.

Alentamos al Dr. Real a continuar en esta tarea para la cual está perfectamente preparado y a la que auguramos—sin que se pueda tacharnos de exagerado— un brillante porvenir. ¡Enhorabuena!

ANTONIO MURO OREJÓN

*14 de agosto, víspera de la Asunción
de la Virgen María, de 1970*

INTRODUCCION

El documento surgido en la Edad Moderna no ha tenido en España suficiente fuerza como para atraer sobre sí la atención de los diplomatas, los cuales, movidos por el indudable interés que el documento medieval plantea,¹ han polarizado sobre él la meta de sus afanes.

Salvo casos aislados —los trabajos del doctor Arriabas Arranz y de su discípula la doctora Martín Postigo— este campo de estudio permanece prácticamente virgen. Esta afirmación adquiere aún más fuerza si nos concretamos a un sector determinado de ese campo: el documento indiano, donde sólo encontramos al meritisimo profesor argentino doctor Tanodi, auténtico pionero de los estudios diplomáticos indianos y al español profesor García Gallo.

Y sin embargo la investigación de este sector documental —tanto si mantenemos un criterio amplio como restringido de la ciencia diplomática—² se presenta plena de po-

1 No ha ocurrido lo mismo en Alemania donde incluso el documento contemporáneo es sujeto de numerosos trabajos diplomáticos. Cfr. abundante bibliografía en *Archivium*, VI, 1956, págs. 201-208; VIII, 1958, págs. 150-156.

2 Si la Diplomática, de acuerdo con un criterio restringido, tiene como fin juzgar la autenticidad o falsedad del documento (Muñoz Rivero: *Nociones de Diplomática*, la define como: *ciencia que juzga de la autenticidad o falsedad de los documentos antiguos por medio del estudio de sus caracteres*) dado que entre los indianos hubo abundantes falsifi-

sibilidades y de interés, y sus conclusiones rebasan el campo de estudio de esta ciencia para incidir en el de historiadores y juristas.

Séanos permitido en esta introducción exponer una serie de consideraciones de tipo conceptual sobre el objeto material de este trabajo, que simultáneamente nos servirán para delimitar el tema que tratamos y desarrollamos en él.

Concepto de documento indiano

Documento es un concepto que encierra amplia extensión. Nos conviene, pues, dejar sentado dentro de sus diversas acepciones en qué sentido lo usamos y a qué realidad responde.

Podemos entender por tal, entre otras, las siguientes significaciones:

caciones está plenamente justificada la posibilidad de este estudio que vamos a llevar a cabo.

Para aseverar nuestra afirmación basta observar los Inventarios de las secciones de Justicia y Escribanía de Cámara, del Archivo General de Indias, que conservan la documentación emanada del Consejo de Indias en su función de Tribunal de Justicia, donde aparecen diversos pleitos sobre documentos falsos. Uno de los tipos que más se falsificaron fueron las Reales Cédulas que concedían licencias para pasar a Indias. Hubo falsificadores tan osados como Lamberto Cuenca que, en 1550, puso un cartel en la propia puerta del Consejo anunciando la venta de licencias, por supuesto falsas (A. G. I., Justicia, 1.177), o aquél otro, Francisco Briz, que colgó un aviso que textualmente decía "Quien quisiere comprar una licencia para pasar a Yndias bayase entre la puerta de San Juan y la de Santisteban al camino que sale a Tudela cabe una puente de piedra y allí en aquella calle pregunte por Francisca Braba que allí se la venderán". Por supuesto la Real Cédula resultó falsificada (A. G. I., Justicia, 1.118).

Si consideramos, de acuerdo con Battelli (la define en su *Diplomática*, cap. I, como la *Scienza dei documenti*), que el fin de la Diplomática queda constituido por el documento en toda su integridad y posibilidades, por razones más obvias aún queda justificado este estudio.

- 1) Cualquier testimonio material capaz de representar un hecho. Así decimos que un hacha paleolítica es un «documento prehistórico» o que un cuadro de Velázquez es un documento del siglo XVII.
- 2) Cualquier testimonio escrito que da noticia de un hecho aunque carezca de formas legales. Tal, por ejemplo, una crónica, unos anales, un epígrafe.
- 3) Cualquier testimonio escrito sobre un hecho de naturaleza jurídica, realizado bajo la observancia de ciertas y determinadas formalidades, variables según las circunstancias de lugar, tiempo, materia y persona destinadas a conferir a tal testimonio autoridad y fe, dándole fuerza de prueba. Este es, como veremos, el documento estrictamente diplomático.
- 4) Por último, entendemos por documento cualquier escritura de carácter legal, histórico y administrativo que se conserva en los archivos —llamamos, por ejemplo, documento a todo papel, sea cual sea su carácter, en el Archivo General de Indias.

Pero no todas estas realidades son el objeto de la Diplomática, ni todas entrarán bajo el mismo concepto en el estudio de esta ciencia.

La Diplomática rechaza de principio los conceptos de documento que hemos descrito en los apartados 1) y 2). El primero porque en realidad no es tal documento, sino que el uso de tal denominación lo es exclusivamente con carácter trópico; el segundo porque entra dentro de las fuentes narrativas y su carácter es directa y específicamente histórico.

Todos los demás, es decir, los testimonios escritos, legal-

mente válidos, revestidos de determinadas formalidades, destinados a ser prueba jurídica de un hecho y los escritos de cualquier clase, de índole histórica, legal y administrativa que se conservan en los archivos, todos, al menos parcialmente, son objeto de la Diplomática.

Nosotros al realizar nuestro trabajo, siempre desde el punto de vista diplomático, aceptamos como objeto de él estas dos realidades, incluso los últimos, es decir ese cúmulo inmenso y heterogéneo de escritos que junto con el otro grupo constituye los fondos de nuestros archivos y entran en nuestra área bajo los siguientes aspectos y motivos:

- a) En un aspecto que pudiéramos llamar negativo, en cuanto a nosotros competirá discernir y dictaminar sobre la naturaleza y calidad de cada uno de ellos y decidir en muchos casos sobre si son o no documentos estrictamente tales.
- b) En el aspecto de la relación, más o menos directa, que la mayor parte de ellos tienen con los documentos estrictamente diplomáticos, al conocimiento de cuya génesis y de cuyas formas características contribuye extraordinariamente el conocimiento y estudio de aquéllos.
- c) En el aspecto comparativo que cualquiera de estos escritos, aún sin tener relación directa con determinados documentos estrictamente tales, ofrece a la crítica en muchos de sus caracteres internos y externos, la cual —como dice Boüard— podrá confrontarlos con los usos generales, los gustos y los grados de cultura de la época.³

3 Boüard, *Manuel*, tomo I, pág. 33.

Los aceptamos como objeto de nuestro trabajo, decimos, pero distinguiendo perfectamente entre cada uno de estos grupos, que por supuesto no ocuparán los mismos lugares, tanto desde el punto de vista jurídico como del diplomático.

La *minuta* de una real cédula, por ejemplo, no tiene jurídicamente valor ninguno, en definitiva no es más que un borrador, ni da fe de un hecho ni su contenido obliga. La misma *actio* que aquélla reflejaba vertida ya en real cédula, es decir validada con la firma y rúbrica del monarca, refrendada por el secretario real y rubricada por los consejeros de Indias⁴ se convierte automáticamente en disposición legal, es sujeto de obediencia inmediato y del consecuente cumplimiento, salvo los casos previstos de subrepción y obrepción.

Si analizamos el mismo ejemplo, ahora desde el punto de vista diplomático, la *minuta* de la real cédula en cuestión nos interesa tanto en cuanto es una etapa por la que pasa la *conscriptio* de un documento y no en sí misma, que ni se sujeta a reglas, ni tiene otra misión que ser revisada por el funcionario competente para observar si se adecúa al estilo legal y si su contenido jurídico responde a lo ordenado.

La real cédula, sin embargo, entrará específicamente dentro del campo diplomático pues responde, como más adelante veremos, a todas las notas determinativas del objeto material de la ciencia que nos ocupa.

En nuestro deseo de mantener siempre claramente des-

4 Vid. más adelante las características diplomáticas de la Real Cédula.

lindados estos grupos de documentos, hemos buscado una terminología adecuada.

Llamaremos documento *stricto sensu* —documento a secas— al descrito más arriba en el apartado 3), cuya definición está inspirada en la que diera el padre de la Diplomática moderna Teodoro von Sickel en su *Acta regum carolinorum*... —por ejemplo, una real provisión, un mandamiento, un documento de venta, etc.— y reservaremos para todos los demás el término de documento *lato o latissimo sensu*, según la proximidad o lejanía que tengan con el documento estrictamente diplomático —por ejemplo una petición, un memorial, una minuta, un decreto, etc.— a cuya génesis contribuyen más o menos directamente.

Expresado ya el concepto general de documento, justifiquemos el término indiano con el que calificamos al objeto de nuestro trabajo.

En realidad no añade al documento ninguna nota diplomática, no determina dentro del campo documental español de la Edad Moderna un grupo de documentos con características diplomáticas que permitan separarlos o agruparlos y estudiarlos por sí mismos. No hay que olvidar el principio que informa la mentalidad de la Corona con respecto a las Indias:

«y porque siendo de vna corona los reynos de Castilla y las Indias: las leyes y manera del gouierno de los vnos y de los otros, deue ser lo más semejante y conforme que ser pueda, los del nuestro Consejo en las leyes y establecimientos, que para aquellos estados ordenaren, procuren de reducir la forma y manera de gouierno dellos al estilo y orden con que son regidos y gouerna-

dos los reynos de Castilla y de León en quanto vuiere lugar y se sufriere por la diuersidad y diferencia de las tierras y naciones». ⁵

Principio que por supuesto también afectaría hasta la mera redacción documentaria. Y si la realidad americana se impuso, obligando a veces a seguir caminos distintos en las «leyes y manera de gouierno», no ocurrió lo mismo en el campo documental, manteniéndose los mismos tipos y formas desde el punto de vista diplomático.

Y sin embargo el término *indiano* restringe enormemente la extensión del concepto documento, cuando, abandonando su materialidad —*conscriptio* en lenguaje diplomático—, lo referimos al asunto jurídico que encierra, a la *actio* documental.

Ante este nuevo aspecto, documento indiano es, para nosotros, aquel cuya *actio* está mediata o inmediatamente relacionada con ese ente jurídico-geográfico que abarcaba desde los territorios al norte de Nueva España, hasta la inhóspita región de la Patagonia y desde las islas Filipinas hasta la isla de Trinidad; es decir las llamadas Indias Occidentales. Después de esto nos es lícito apartar o segregar, agrupándolos, de la producción documental española, al documento indiano, ya que tienen una característica común.

Junto a este elemento primordial de unión, que significa a su vez un elemento de desglose desde el punto de vista de la documentación castellana coetánea, añadiremos también como notas distintivas, nombres geográficos nuevos, intituciones desconocidas hasta entonces y ajenas a lo

5 Ordenanzas del Consejo de 1571, núm. 14.

castellano, y —ya afectando un poco al campo diplomático— mayor barroquismo en la expresión formulística, fundamentalmente en el documento privado.

Después de estas observaciones creemos tener claramente expresada la legitimidad del concepto documento indiano.

Clasificación del documento indiano

No pretendemos el estudio exhaustivo del documento indiano. Nos hemos marcado unos límites cronológicos: desde 1492, fecha de su aparición, hasta principios del siglo XIX, momento en que surgen los primeros movimientos independentistas con carácter general en las Indias; y jurídico-diplomáticos: el documento público, tanto dispositivo como probatorio.

Y porque a lo largo de este trabajo tendremos que manejar constantemente estos últimos conceptos e incluir en uno y otro grupo a cierto tipo de documentos indianos, vamos a describirlos someramente partiendo de diversos criterios de clasificación, con lo cual, además, habremos intentado la sistematización de ese cúmulo heterogéneo de documentos que transmiten negocios indianos.

Podríamos utilizar como norma de división el lugar donde el documento fue expedido y así cabrían dos grandes grupos:

- a) Documentos expedidos en la península (por el rey, por el Consejo de Indias, por la Casa de la Contratación, etc.).

- b) Documentos expedidos en las Indias (virreyes, presidentes-gobernadores, audiencias, alcaldes mayores, etc.).

Este criterio, sin embargo, no nos satisface porque en realidad no añade ni modifica esencialmente en nada el documento.

Nos parece más lógico y adecuado aceptar un criterio jurídico-diplomático, por otra parte punto de vista central de nuestro trabajo.

Paoli,⁶ al acometer la clasificación de los documentos medievales, presenta diversos criterios:

- 1) Según la calidad y condición de las personas de que proceden.
- 2) Según la naturaleza y contenido del documento mismo.
- 3) Atendiendo a las diversas denominaciones aplicadas a cada clase de documentos en las diversas épocas.

A esta enumeración de criterio sugerida por Paoli, pueden añadirse como dignos de tenerse en cuenta:

- 4) Forma externa del documento.
- 5) Los efectos jurídicos producidos por cada uno o cada clase de documentos.

De todos éstos elegiremos, para fundar nuestra clasificación, dos de ellos que tienen la ventaja de comprender

⁶ Paoli, *Diplomatica*, pág. 27. El primer criterio fue el mantenido por Mabillon y seguido por Fumagalli (*Istituzioni diplomatiche*).

adecuadamente, bajo dos aspectos precisos y deslindados, todos los documentos de la época que nos interesan y porque dentro de ambas cabrán luego cumplidamente ulteriores clasificaciones (forma, contenido, denominaciones típicas, etc.):

- a) La naturaleza del documento en relación con la acción jurídica que contiene.
- b) La calidad jurídica de las personas de quien emanan.

Documento dispositivo y documento probatorio

De acuerdo con el criterio de clasificación que hemos expuesto en el último apartado a), es muy clara la existencia de dos grupos bien definidos dentro del documento en general y concretamente dentro del indiano: documento dispositivo y documento probatorio.

En efecto, en todo documento debemos tener en cuenta dos elementos esencialmente necesarios, ya que precisamente la fusión de estos dos elementos o categorías lo hacen posible: la *actio* jurídica, el hecho o negocio documentado, y su propia puesta por escrito, su *conscriptio*. Precisamente de la relación entre ambas surgirá la doble división de que venimos hablando.

Existe un primer grupo en los que la *actio* jurídica cobra entera efectividad en el mismo momento de ponerse por escrito; los derechos y obligaciones que tal negocio llevan consigo nacen por el mismo hecho de su *conscriptio*, es decir la *actio* obtiene plena eficacia jurídica en el momento de ser registrada o consignada por escrito. *Actio* y

conscriptio se simultanean: es el documento dispositivo. Es el caso de la real cédula en la que, incluso a veces, se expresa en la misma redacción del tenor documental frases como «por la presente vos doy licencia...», clara manifestación del carácter dispositivo del documento.

En otro grupo, sin embargo, la *actio* jurídica ha tenido su plena eficacia antes de ser documentada, ha producido realmente los derechos y obligaciones que derivan de ella, antes de ser puesta por escrito, y el hecho de serlo no tiene más fin que el de servir de prueba a tal hecho y perpetuar su recuerdo. Es el documento probatorio que recoge un hecho anterior y cumplido y del que es independiente.

Si por ejemplo, estudiamos una ejecutoria observaremos cómo ésta no puede ser documentada sino después de cumplida la *actio* jurídica a que se refiere y consigna: la proclamación de una sentencia.

Si como hemos visto en los ejemplos anteriores —la real cédula y la ejecutoria— denominación esta última más jurídica que diplomática— es muy claro su carácter de documento dispositivo, el primero; probatorio, el segundo, existe bastante dificultad en otros casos para poder distinguir si ambos elementos —*actio-conscriptio*— son simultáneos o consecutivos.

Documento público y documento privado

De acuerdo con el segundo criterio de clasificación que más arriba hemos esbozado —calidad jurídica de las personas de quien emanan— los documentos indianos pueden

ser públicos o privados⁷ como lo son los documentos de cualquier época.

Claro está que antes de describir ambas categorías nos es preciso aclarar ambos conceptos, ya que difieren según los empleemos con terminología jurídica o diplomática.

Según aquélla, documento privado equivale a particular, es decir el efectuado entre particulares y por particulares sobre un asunto privado sin intervención alguna de la autoridad pública o del representante de la misma.

Por el contrario, será documento público para el jurista el realizado por funcionario público en el ejercicio de su cargo, bien por sí mismo o por delegación, siempre que ésta esté autorizada, o entre particulares y sobre asunto particular pero con esa intervención de la autoridad pública ya en sí misma, ya a través de su representante legítimo.

Para la Diplomática, la cosa cambia radicalmente, y el documento privado, con o sin intervención de la autoridad pública, lo entenderemos por contraposición a aquellos documentos que dimanen de la misma autoridad pública y se refieren a asuntos de derecho público: concretamente los documentos de gobierno y administración.

Pero —y la pregunta es inmediata— ¿quién es autoridad pública en el período histórico en el que se desarrolla nuestra tesis? La autoridad pública, la máxima autoridad pública de derecho y por antonomasia es el rey. Y lo es durante los tres siglos a que nos referimos, aunque los fundamentos político-filosóficos en que se basa el ejercicio de esta autori-

7 Distinción que ya encontramos en las *Formulae Marculfi*, escritas quizá a fines del Siglo VII, donde se agrupan los formularios de documentos en dos categorías: *chartae regiae* y *chartae pagenses*. Un estudio sintético sobre estos formularios, con abundantes citas bibliográficas en Bolland, *Manuel*, págs. 131 a 135.

dad varíen, al decir de los teólogos y tratadistas, según gobierne la Casa de Austria o la Casa de Borbón. Pero —en ambos casos— esta máxima autoridad pública no puede llevar a cabo el directo gobierno de los inmensos territorios que suponen los reinos y provincias integrantes de la monarquía hispana. Este imperativo le ha obligado a delegar funciones. Y este proceso de cesión de atribuciones venía de antiguo, aunque en definitiva el rey conservó siempre el fundamento de esa delegación de poderes, de tal manera que decide cómo el país ha de ser administrado y si bien concede la administración de muchas regiones o materias a sus funcionarios, se reserva siempre en ellos el derecho soberano de inspección.

Para nuestro fin nos interesa dejar sentado que estas autoridades ejercen función pública, aunque ésta lo sea por delegación y que todo acto que hagan en el ejercicio de esa función tendrá el carácter de público. La documentación que de ellos emane tendremos, pues, que incluirla bajo el concepto de documento público.

Cuando, por ejemplo, el virrey don Francisco de Toledo publica en Perú las Ordenanzas de Minería, en 7 de febrero de 1574,⁸ lo hace como tal virrey y gobernador del Perú, es decir en el desempeño de las atribuciones que como tal autoridad ha recibido del monarca. Deben ser consideradas pues —siempre desde el punto de vista diplomático—, como documento público.

Sin embargo cabe distinguir —y así lo haremos— entre el documento público emanado mediata e inmediatamente

⁸ Estas Ordenanzas están editadas en Levillier: *Gobernantes del Perú*, tomo VIII, págs. 143-240.

del rey y de esas autoridades —instituciones o personas— delegadas.

Es esta la ocasión de repetir que en esta obra nos ocuparemos exclusivamente del documento público indiano, dejando para otra ocasión el análisis del documento privado. No haremos tampoco ninguna referencia al documento eclesiástico.

Otras divisiones del documento indiano

Realizada esta doble gran división, el documento indiano es susceptible de nuevas clasificaciones atendiendo a los diversos criterios que más arriba dejamos apuntados.

Así tendremos:

a) Según la calidad y condición de las personas de que proceden:

De virreyes.

De presidentes.

De gobernadores.

De intendentes.

De corregidores.

De alcaldes mayores, etc., etc.

b) Según la naturaleza y contenido del documento:

Legislativos.

Gubernativos.

Judiciales.

Hacendísticos, etc., etc.

c) Atendiendo a las denominaciones que en la época recibieron:

Real provisión.

Real cédula.

Mandamiento.

Real orden.

Auto acordado, etc.

Panorama general del documento hispano-indiano en la Edad Moderna

Como tendremos ocasión de expresar detalladamente en las páginas que siguen, es preciso señalar, en unas consideraciones de carácter general, que el documento indiano surge en un momento de importancia singular de la historia del documento español: el reinado de los Reyes Católicos. Su gobierno marca el fin de un periodo, aquél que comenzara con el reinado de Alfonso X, y el inicio, a su vez de uno nuevo, cuyo límite tendríamos que extenderlo hasta finales del siglo XVIII.

En efecto, el gobierno del rey Sabio⁹ puede considerarse como un hito para la Diplomática española. Durante él cumplen su evolución una serie de tendencias que habían ido apuntándose en años anteriores y cuyo pleno desarrollo traspasará los límites de su reinado.

Esquemáticamente estos fenómenos se pueden sintetizar así: a) separación definitiva entre las cancillerías como productoras de documentos públicos y los escribanos públicos que redactan los documentos privados; b) mayor inde-

⁹ Obra fundamental para el estudio del documento durante el gobierno de Alfonso X es Procter, *The Castilian Chancellery*. En ella realiza un estudio comparativo entre la teoría reflejada en las *Partidas* y la práctica documental del momento.

pendencia diplomática y caracteres más propios de los documentos eclesiásticos y municipales; c) preponderancia absoluta del castellano para la redacción documental; d) fijación de las estructuras documentales con tipos bien definidos y caracterizados; e) nuevas nomenclaturas de los diferentes tipos documentales, la cual se refleja y expresa en el mismo texto del documento; f) abundante teoría diplomática, entendiendo por tal toda la legislación, sobre redacción y expedición de las distintas clases documentales;¹⁰ g) aparición de estas nuevas clases de documentos en número considerable.

Como decíamos, no todos los fenómenos que acabamos de expresar se cumplen definitivamente con Alfonso X. En su reinado se inician, durante el de sus sucesores se desarrollan, y será precisamente con los Reyes Católicos cuando el proceso se cumple.

Durante los años de gobierno de estos soberanos, se implantan las bases del estado moderno, hecho que tanta trascendencia tuvo en todos los órdenes. La nueva estructura político-administrativa, que irá desarrollándose en años posteriores, repercute en el documento notablemente. Hasta tal punto que podemos considerar el reinado de estos monarcas un nuevo hito en la periodificación de la diplomática española.

Esquemáticamente los fenómenos que hemos observado son: a) desaparición definitiva de tipos documentales de amplia tradición medieval, b) simplificación de tipos diplo-

10 Nos referimos fundamentalmente a las *Partidas*, cuyo libro III puede en cierto modo ser considerado como un tratado de *Ars dictandi* aunque el fin que pretendía cumplir era muy otro de los tratados medievales de este nombre. En el *Especulo* también se encuentran disposiciones sobre nuestro tema.

máticos, c) simplificación de la estructura formulística, d) predominio de las cláusulas jurídicas sobre las solemnes, e) profusión de documentos públicos emanados de autoridades delegadas, f) desaparición de la cancillería real como única institución encargada de la *conscriptio* del documento real, g) cesión por parte de la corona a personas e instituciones del derecho de expedir documentos a nombre del soberano, h) profusión de documentos *lato sensu*, i) organización y legalización de los libros registros, j) creación e institucionalización de los archivos.

Por supuesto no todos estos fenómenos se cumplen en seguida. En realidad son tendencias que necesitan de algún tiempo —reinado de Carlos I y Felipe II— para desarrollarse plenamente. El período de los Reyes Católicos es pues un momento de transición durante el cual junto a formas y caracteres documentales y usos cancelerescos de clara tradición medieval se apuntan y vigorizan cambios sustanciales en el campo y en las instituciones documentales. En un ejemplo gráfico podríamos sintetizar la característica de este período: la real cédula y la real provisión conviven con el privilegio rodado y el albalá.

Pudiéramos pensar que el advenimiento al trono de la nueva dinastía borbónica supondría modificaciones sustanciales con respecto al documento. En realidad sí las hubo; pero no de tanta trascendencia como para que lo consideremos, a semejanza de los reinados de Alfonso X y los Reyes Católicos, hito fundamental.

Las reformas administrativas llevadas a cabo por el primero de sus soberanos Felipe V —la creación de las secretarías de despacho— no repercutieron sino en intensificar

uno de los fenómenos ya en desarrollo desde dos siglos atrás: la profusión de documentos emanados de autoridades delegadas, en detrimento de los emanados del rey mismo. Nos referimos concretamente a la aparición de la real orden.

Capítulo I

TRADICION DOCUMENTAL

El hecho fácilmente comprobable de que el documento no haya llegado a nosotros siempre en su estado de perfección diplomática, nos obliga a dedicar nuestra atención a lo que viene llamándose entre los estudiosos de esta disciplina tradición documental.¹

En definitiva se trata de establecer los posibles estadios o categorías en que se nos han transmitido los documentos. Aclarar esta cuestión no sólo es fundamental a la ciencia diplomática, sino primordial para el historiador y el jurista. No hace falta demostrar que no se pueden sacar las mismas conclusiones, al menos sin ciertas salvedades, de un documento original, de una minuta o de una copia. En todo momento el estudioso ha de saber, con frase de Floriano Cumbreño, el grado de ingenuidad documental que le garantizará la validez, como testimonio, de la fuente que utiliza.²

1 Bolland, A. *Manuel*, pág. 159, entre otros autores.

2 Floriano, *Curso*, pág. 226 y ss., sostiene que la tradición documental está estrechamente vinculada con la autenticidad del documento. Prefiere utilizar para este tema el nombre de ingenuidad documental, es decir el grado de relación de un documento con su origen, con el hecho documentado.

Partiremos del concepto de documento original del cual hemos dicho que goza de la perfección diplomática.

Original

Llamamos, con Paoli, documento original al hecho por la directa voluntad de los autores y conservado en la materia y forma genuinas, bajo las cuales fue primordialmente emitido.³ Es decir, conserva los caracteres internos y externos en que fue documentado.

Tanto, pues, gozan de este atributo los documentos autógrafos como los heterógrafos en los que su formación material se debe a una segunda persona (secretario, escribano, amanuense) que en definitiva obra de acuerdo con el pensamiento y voluntad del autor de la *actio* jurídica.

En el período cronológico que abarca nuestro estudio encontraremos pocos documentos autógrafos en el sector del documento público. La complicada máquina burocrática, la gran cantidad de asuntos a resolver, son factores, entre otros, determinantes de la gran abundancia documental. Las autoridades públicas, cada una en su escala, no pueden materialmente llevar adelante la documentación que emana del ejercicio de su función. Es necesario que junto a ella exista una institución, más o menos complicada —cancillería, secretaría, escribanía, etc.— una de cuyas misiones sea la preparación y confección de esa documentación, siempre de acuerdo con la voluntad de la autoridad que por supuesto validará el documento.

3 Paoli, C., *Diplomatica*, pág. 265.

La originalidad lleva implícita la autenticidad diplomática, es decir la garantía de que el documento está hecho en la fecha que indica y ha sido validado por la persona que lo intitula, y la autenticidad jurídica, o lo que es lo mismo que el hecho jurídico del que la materialidad del documento no es más que el vehículo, responde a la intención de su autor. La originalidad, sin embargo, no garantiza la veracidad histórica de su contenido.⁴

Por esta razón la legislación prevé para el documento de la máxima autoridad pública —que por supuesto no duda de la autenticidad diplomática y jurídica del documento de la regia cancellería— las dos figuras legales de subrepción y obrepción.⁵ Es decir admite la falsedad en un documento original —diplomática y jurídicamente auténticos— bien por defecto de información, bien por equivocación material en la redacción.

Por el contrario puede darse veracidad histórica en un documento que diplomáticamente no goce de autenticidad, sin embargo, no por esta circunstancia llamaremos al documento original.

Externamente el documento original presenta todas las formalidades que le son propias, según la categoría documental a que corresponde y le vienen dadas por la legislación o la costumbre. Así, una real provisión original, emanada del Consejo de Indias, será firmada y rubricada por el rey, refrendada por el secretario, rubricada por los consejeros de Indias y sellada con el sello real de placa; una

4 Floriano, *Curso*, págs. 227-228.

5 "Los ministros y jueces obedezcan y no cumplan nuestras cédulas y despachos en que intervinieren los vicios de obrepción y subrepción, y en la primera ocasión, nos avisen de la causa porque no lo hicieron", *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 21.

real cédula llevará la firma del rey, el refrendo del secretario y las rúbricas de los del Consejo de Indias.⁶

Deberá presentar un cuidado aspecto formal, sin enmiendas ni tachaduras que la invalidarían.⁷ Precisamente las ordenanzas del Consejo de Indias prescriben que el consejero semanero⁸ no pase a la firma del rey «las provisiones y cédulas que fueren de mala letra, o procesada, ni las que estuvieren testadas o enmendadas o con mala ordinata o con otros defectos...»⁹ y le faculta a romperlas si observara alguno de estos defectos.¹⁰

Durante la época que estudiamos, el concepto original

6 Vid. más adelante, en el capítulo IV, el análisis diplomático de estos tipos documentales.

7 El procedimiento del raspado fue una de las técnicas más utilizadas por los falsificadores. Bastaba una simple raspadura y una pequeñísima enmienda para alterar el sentido de un documento. En 1545 Gonzalo Díez de Vargas, nombrado alguacil mayor de la ciudad de los Angeles, en la Real Provisión que contenía su título donde decía "podais vos o vuestros lugarestenientes", tras raspar la conjunción disyuntiva *o* y sobrescribir la conjunción copulativa *e* cambió totalmente el sentido del negocio jurídico. A. G. I., Justicia, 199, r. 5.

8 Semanalmente y en orden rotativo se nombraba de entre los consejeros, uno que, entre otras misiones —además de la que entrecomillamos en el texto—, tenía la de llevar a la firma real "la libranza de las Provisiones y Cédulas y otros despachos". El portero de cámara de Estrados era el encargado de avisar cada sábado o último día de Consejo, por la mañana, al consejero que estaría de semana durante la próxima. *Recopilación*, lib. II. tit. III, ley 4.

En los territorios americanos vela por que el documento emanado de aquellas autoridades tenga aspecto externo cuidado el Canciller de las Audiencias. El precepto lo recogen las Ordenanzas de las distintas Audiencias. Vid., por ejemplo, las de Santo Domingo, Monzón 4 noviembre 1528. A. G. I., Indif. Gral., 421, lib. 13, fol. 197 y ss., ordenanza XXIV.

9 Ordenanzas del Consejo de 1636, núm. 77.

10 Sabemos de algún caso en el que fue el mismo soberano el que no quiso despachar un documento por observar en él cierta "rascadura", ordenando se hiciese otro y se "cancelase" el raspado. Ocurrió con una Real Provisión por la que se nombraba teniente de rey en Manila a D. Mariano Fernández de Felguera en mayo de 1804. A. G. I., Filipinas, 911.

tuvo mayor extensión del que le hemos dado y así se aplicó el mismo término —incluso en preceptos legales— a las disposiciones contenidas en los «libros reales de gobierno y gracia», es decir los libros registro del Consejo de Indias, por ejemplo, que más adelante incluiremos bajo el dictado de copias.

Originales múltiples

Un original puede no ser único; es decir que del mismo negocio jurídico se hayan hecho varios ejemplares en un mismo acto cronológico y bajo las mismas formalidades.¹¹

Precisamente una de las características de la documentación indiana, sobre todo del documento emanado de autoridades públicas, es la enorme abundancia de originales múltiples. Y esto hasta tal punto que podemos asegurar que casi todas las disposiciones emanaron de su correspondiente organismo con la característica de múltiples.

El análisis de estos originales nos permite distinguir dos grupos que surgen por causas diversas y tienden a cumplir fines distintos. Uno de los grupos, que podíamos llamar *disposiciones generales o circulares*, nacen del concepto unitivo de la política indiana que dentro de la diversidad de territorios, separados geográficamente, a veces por enormes distancias, debe mantenerse. En efecto de cada organismo gubernativo surgen órdenes generales que deben cumplirse en su correspondiente jurisdicción. De la disposi-

¹¹ Acto cronológico lo referimos a lo espiritual y no a lo físico, es decir aunque en la redacción material de los ejemplares puede transcurrir algún tiempo, es voluntad del autor de la actio que simultáneamente se vierta en varios ejemplares semejantes.

ción en cuestión habrán de hacerse tantos ejemplares como destinatarios tenga. Todos estos ejemplares responden a un mismo acto del autor de la *actio* jurídica que se documenta. Todos se redactarán de acuerdo con el mismo formulario. Todos en definitiva se validarán con un mismo procedimiento. Este tipo de originales múltiples pretende conseguir una acción jurídica simultánea.

En la chancillería o secretaría, a la hora de redactar estos documentos generales o circulares, se adoptarán dos modelos, cuya diferencia gira en torno de la *dirección*:

- a) o bien se hace constar en todos los ejemplares las autoridades, instituciones o particulares a quienes la disposición va dirigida: «A los Venerables deanes y Cabildos de las iglesias metropolitanas y catedrales de las provincias del Perú y Nueva España...». ¹²
- b) o bien se individualiza en cada uno de los ejemplares la institución, cargo o particular a quien se dirige la disposición. Cada ejemplar, pues, surge con una dirección concreta y por lo tanto distinta, que no nos permite, sin embargo, catalogarlos como distintos documentos, en cuanto que en la mente del autor no hubo tal intención. Así las llamadas Leyes de Burgos cambian su fórmula de dirección —intercalada en la exposición— según se trate del ejemplar dirigido a las autoridades de la isla Española o a las de San Juan de Puerto Rico, por ejemplo. ¹³

¹² Real Cédula, Buen Retiro, 10 junio 1688. Se asentó esta cédula tanto en el Registro de Nueva España (A. G. I., Indif. Gral., 537, lib. 44, 8, fol. 183) como en el de Indiferente Gral. (Indif., 431, lib. 43, fol. 89 v.º).

¹³ Publica su transcripción paleográfica, Muro, A.: *Ordenanzas Reales sobre los Indios*.

Ni estuvo legislado ni hubo costumbre establecida sobre adoptar uno u otro tipo de redacción, excepto en las Pragmáticas, una de cuyas características formulísticas fue precisamente el llevar enormemente desarrollada y semejante su dirección: el hacer constar en cada ejemplar una dirección universal.

Con respecto al documento emanado del soberano, el número de ejemplares que había de hacerse en la generalidad de los casos llegó a ser abrumador. Para obviar esto se legisló en 1795 que las disposiciones circulares sólo se comunicarían «a los jefes superiores con la expresión de que las hagan publicar o circular en los distritos de sus respectivos mandos o las comuniquen a quienes corresponda sin perjuicio de dirigirse también en derecho a los obispos, cabildos, audiencias, prelados, religiosos... cuando expresamente se mande».¹⁴

El otro grupo anunciado tiene como primordial finalidad la de asegurar la llegada del documento a su destinatario.

Unas circunstancias, por completo ajenas al campo diplomático, determinan su existencia: la enorme distancia que separa los supremos organismos de gobierno en la península de los centros de gobierno delegados; un mar inmenso y peligroso —no sólo por los posibles accidentes naturales que podrían producirse, sino por los muy frecuentes ataques de piratas y corsarios y armadas extranjeras en guerra— para los navíos que lo surcan, transportando en uno y otro sentido la documentación que relaciona la metrópoli con los súbditos americanos de la corona.

¹⁴ Real Orden de Silvestre Collar a D. Antonio Ventura Taranco. Madrid, 3 marzo 1795. A. G. I., Indif. Gral., 15.

Existe siempre la posibilidad de que un accidente corte el camino de la documentación hacia su destinatario. Para salir al paso de este peligro y remediarlo, la legislación dispuso con respecto a la documentación pública que: «De todas las prouisiones, cédulas, cartas y otros despachos nuestros, que de offiçio se libraren y despacharen en el Consejo de las Indias y se vuieren de embiar a aquellas partes se embíen duplicados en diuersos nauíos, encaminándolos por donde más conuenga con buen recaudo de cubiertas». ¹⁵

Disposición que fue ampliada en 1739, cuando se dispuso que a partir de entonces, refiriéndose a la documentación emanada por y con intervención de las secretarías de despacho:

«Todos los despachos que se ejecutaren desde hoy en adelante por ambas Secretarías, así de oficio, como de parte se harán con triplicados...». ¹⁶

No obstante estas disposiciones de carácter general, cada vez que la corona se ve envuelta en una guerra, se legisla concretamente que se aumente el número de ejemplares de cada documento que se cruce entre las autoridades de ambos lados del Atlántico. Durante la guerra sostenida contra Inglaterra entre 1779 y 1783, por ejemplo, se ordena

¹⁵ *Ordenanzas del Consejo* de 1571, núm. 84. *Ordenanzas del Consejo* de 1636, n.º 149. *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 36. Lo mismo tenían ordenado los escribanos de cámara con respecto a la documentación que emanaba de su oficio: *Recopilación*, lib. II, tít. X, ley 7.

¹⁶ Auto Acordado del Consejo de Indias, 14 diciembre 1739. A. G. I., Indiferente General, 265.

al entonces virrey interino de Nueva España don Martín de Mayorga que envíe siempre por quintuplicado la correspondencia oficial que mantenía con le Secretaría de Indias. Orden que cumplió siempre el desgraciado virrey.

En documentos públicos hemos encontrado hasta un septuplicado.

Durante el siglo XVIII, ante el constante y considerable crecimiento de la burocracia, el rey autorizó —en cada caso particular— a las autoridades indianas —secretarios del Despacho Universal de Indias, virreyes, presidentes, gobernadores, etc.— para que pudieran validar los duplicados con sólo su rúbrica.¹⁷

En cuanto al valor jurídico de estos originales múltiples debemos puntualizar que, tratándose de un documento dispositivo, cada uno produce los mismos derechos; cada uno obliga como los demás. Si es de un documento probatorio, cada uno sirve de prueba del hecho documentado. Los ejemplos prácticos de tal afirmación son numerosos: frecuentemente llegaron antes a su destino los duplicados que los documentos principales, sin embargo, se obedecían y cumplían —caso de ser un precepto real— o sobre ellos se toma-

17 "Para que las órdenes que se comunican a América por duplicado y sólo sirven en los casos de no haberse recibido los principales no atrasen el curso de otras igualmente convenientes a el Real servicio: quiere el Rey que, rubricados por mí los duplicados como lo está el adjunto de 19 de diciembre último, tengan el debido cumplimiento como si fuesen principales por falta de éstos, sin que sea obstáculo el no llevar mi firma según hasta ahora se ha practicado; cuya real resolución hará V. S. entender a la Audiencia, Gobernadores, oficinas de real Hacienda, y demás personas del distrito de ese Reino a quienes corresponda para su observancia en la parte que les toque". R. O. firmada por José de Gálvez al presidente interino de Guatemala, El Pardo, 11 enero 1772. A. G. I., Guatemala, 450.

ban las pertinentes resoluciones —caso por ejemplo de ser una carta de un virrey—. ¹⁸

Generalmente estos originales llevan un signo distintivo y es la palabra principal, duplicado, triplicado, etc. desarrollada o abreviada, lo que no nos permite, por supuesto, considerarlo como un nuevo documento.

Una crítica sutil llegaría a distinguir grados de originalidad entre estos documentos, considerando de segundo grado al duplicado, de tercero al triplicado, etc., cuestión que no dejaría de ser un bizantinismo diplomático, tanto más cuanto que en el momento histórico que se produjeron no hubo tal distinción, salvo la de hacer constar, como hemos indicado, su carácter de duplicado, triplicado, etc.

Copias

Todo lo que no es original o le es anterior o le es posterior. Este principio, mantenido por los diplomatistas, para todas las épocas del documento, es también una realidad al referirlo al documento indiano. ¹⁹

En efecto, al no ser el documento un original o es *minuta* o es copia; es decir, o es el esquema primario y casi necesario para la redacción de todo *mundum* o es un reflejo más o menos exacto de su contenido y posterior en el tiempo.

¹⁸ En un índice de cartas oficiales escritas por José Iturrigaray, virrey de Nueva España, al ministro José Antonio Caballero, hay una nota de un oficial del ministerio que dice: "Se dieron curso a los duplicados por haber llegado primero." A. G. I., México, 1466. Una carta de 29 mayo 1591 del virrey Velasco al Rey es el duplicado el que está decretado al margen. A. G. I., México, 22.

¹⁹ Bolland, A.: *Manuel*, pág. 161.

Dejando para más adelante el estudio de la *minuta* a la que no conviene el concepto que ya hemos expuesto de documento *stricto sensu*, pasaremos a describir la copia y analizar todos sus grados.

En general, la copia no es la *conscriptio* de un hecho jurídico sea cual sea, sino que presenta un hecho tal y como resulta de otro documento,²⁰ y esto independientemente de que el tal documento sea dispositivo o probatorio.

Aunque los fines que pretenden cumplir las copias son múltiples y variados, si tienen una última razón de ser, común a todas ellas: reproducir el tenor de un documento anterior, es decir ser prueba de la existencia de un hecho jurídico que en su momento adoptó estado documental.

Clasificación de las copias

Un simple estudio de los documentos copias que guardan nuestros archivos nos permite una tajante separación entre lo que podemos llamar copias simples o libres y copias autenticadas, susceptible esta última categoría de subdividirse en diversos grupos, como más adelante señalaremos.

Copias simples

Entendemos por copia simple aquella que se hace directamente del original, sin que en ella aparezca ninguna fórmula que garantice su autenticidad como tal copia.²¹

20 Bollard, *Manuel*, pág. 167, y Floriano: *Curso*, pág. 231.

21 Aunque en ocasiones lleve una cláusula que anuncie exclusivamente su carácter de copia.

Es, pues, un documento que carece de valor jurídico y diplomático, pues, por una parte, no hace fe del hecho que documenta; por otra, al no ser original carece de los signos de validación propios de la categoría documental que reproduce.

La copia simple tiende a cumplir un fin particular y privado. Sólo es aprovechable al historiador y esto tras una aguda crítica.

Copias autorizadas

En contraposición a las copias simples, llamamos autorizadas a aquellas en que además del documento reproducido se añade cierta fórmula que acredita su autenticidad como tal copia, y la reviste de la fe pública. De entre éstas vamos a distinguir las *copias certificadas* y los *traslados*.

Copias certificadas

Si, como principio general, podemos mantener que los actos que verifican en el desempeño de su misión todos los que ejercen cargos de la Administración hacen fe pues proceden de los ejecutores de las funciones públicas y constituyen en esencia la realización práctica de los fines del Estado, cuando estos funcionarios garantizan con su firma la copia de un documento lo revisten de autenticidad. La copia así autorizada gozaba de fe administrativa y como tal fue utilizada por la Administración para fines internos.

Sin embargo, hubo ocasiones en que la copia garantizada

por el funcionario competente se le reconoció fe pública.

Es el caso, relativamente frecuente en las Indias, donde, por no haber escribano público o real, la función autenticadora tuvo que ejercerla una autoridad pública. Así, por ejemplo, el alcalde ordinario de la villa de San Germán en Puerto Rico autentica la copia de una real cédula por no haber escribano público en la villa, circunstancia que se recoge en el documento de esta manera:

«Copia y traslado de una carta que el Rey Nuestro Señor que esta en el cielo escribió a esta villa de San German a veinte y cinco de junio del año pasado de mill y seiscientos y veinte y seis... [sigue íntegra la copia de la real cédula, al final de la cual se añade]:

«Yo Andrés Martín de Quiñones, alcalde ordinario desta villa de San Germán en esta isla de San Juan de Puerto Rico hice sacar este traslado de su original que esta en el archivo y lo corregi y concerté y va cierto y verdadero y con el concuerda a que me refiero y al pie de la dicha Real Carta parece estar nueve rubricas y para que conste doy el presente en esta villa en quince de julio de mil y seiscientos y setenta y ocho años que lo firme en testimonio de verdad.

Andrés Martín de Quiñones (rúbrica).

El cabildo y justicia y regimiento desta villa de San German en esta isla de san Juan de Puerto Rico certificamos y damos por fe donde convenga de como Andres Martin de Quiñones cuya subscriçion y firma es la de arriba es alcalde ordinario este presente año de esta villa y los autos judiciales, scripturas, testamen-

tos y demas diligencias de justicia, pasan ante la justicia ordinaria por no haber escribano publico, ni real en esta dicha villa por su pobreza y se autua en papel comun por no correr sellado, por lo referido y a los autos y demás diligencias de justicia se les ha dado entera fe y credito en juicio y fuera de el y para que conste damos la presente en esta villa en 17 de julio 1678. Por la villa Antonio Rodriguez Borrero». ²²

Otro caso es el de Juan de Olazával que necesitando comprobar en un pleito que sigue ante el corregidor de la provincia de Guipúzcoa cómo es cierto que de distintos parajes del reino de la Nueva España y en especial de las islas Margarita y Trinidad han llegado al Consejo en diferentes ocasiones instrumentos, autos y papeles legalizados de los gobernadores y alcaldes mayores por falta de escribanos, suplica se le dé tal certificación en la secretaría de Nueva España. ²³

Traslados

Son las copias que están validadas con la fe notarial la cual le hace suplir con toda su fuerza jurídica al original. ²⁴ El único objetivo de la intervención del escribano público, mediante la aposición de su rúbrica y signo, es certificar el absoluto paralelismo entre ésta y su original.

²² A. G. I., Santo Domingo, 165.

²³ Petición de Juan de Olazával al Consejo de Indias, año 1707. A. G. I., Indiferente General, 75.

²⁴ Floriano: *Curso*, pág. 232.

El Rey

Nro. P^{te} de la m^a Audiencia Real que reside en la ciudad de
Santiago del N^o Rey de Granada, y en vista de las peticiones
de personas a cuyo cargo fuere el gobierno de esta ciudad por una
nra. C^{es} auemos se ha acordado a virtud de la m^a Real C^{es}
de la ciudad de Arzobispo de Popayan de que los
la Real C^{es} levala el yegorismo de la Real C^{es} que tiene en comu-
nidad de la Real C^{es} de los milleros de la Real C^{es}
en cada un año por dos vidas situados en los indios vacos o en los
primeros vacaron en esta tierra en consideracion de lo que
se ha visto y nos ha hecho relacion que a causa de la voracidad
muchas cédulas que se cumplen una a cumplirse los caudillos
dado con mucha dilacion por lo qual para que sea mas celeridad el y
mucho y si el dicho y tiene suplicando nos que en el presente
y se cumple tiene la administracion de los indios mitayos
de esta ciudad que es off^o de esta Real Audiencia de que se alquilen
los dichos indios y que se les pague sus jornales por el orden
que se acostumbra como la m^a Real C^{es} y ha sido visto
por los del nro. Consejo de las Indias se acordó que se diesen
mandar dar esta m^a cédula por la qual se mandamos q^e
quando el dho. off^o vacare concurrendo en el dho. vicente
de Tamayo las qualidades que se requirieren para que
se pudiese en la Real Audiencia de la Real Audiencia
que asi lo haemos hecho de los dichos dos milleros de la
en cada un año se ha en el año de 1580 de noviembre
de milleros de la Real Audiencia de la Real Audiencia
de la Real Audiencia de la Real Audiencia, —

Yo el Rey

confermando

Copia certificada de Real Cédula, fecha en El Pardo, 11 noviembre 1583
(A. G. I., Indif. Gral., 1.373).

La copia se realiza dentro del Consejo utilizando como modelo el documento asentado en los libros-registro o libros reales de gobierno y gracia. Un oficial de la secretaría, mediante la fórmula «corregida con el asiento del libro» certifica de su autenticidad como tal copia. (Vid. pág. 305).

Y así se hará constar, como veremos, en la fórmula que acompaña a la intervención del notario.

El ya citado diplomatista Paoli, hace sobre los traslados dos atinadas observaciones, que aunque referidas a los medievales, tienen plena significación en el campo del traslado del documento indiano: ²⁵

a) Que un traslado lo puede ser de un documento falso y no por eso hay que tachar de tal al traslado. En efecto acabamos de decir que la misión del traslado consiste en reproducir los caracteres internos del documento en cuestión, ser copia fiel, independientemente del contenido del documento trasladado. El notario garantiza exclusivamente su paralelismo.

En la práctica existen numerosos traslados de documentos falsos, pues precisamente este procedimiento fue aprovechado por los falsificadores para intentar presentar, vestidos por la fe pública que le da la suscripción notarial, documentos amañados que de haberlos presentado como originales hubieran levantado inmediatamente sospechas.

Sírvanos como ejemplo lo siguiente: años atrás hemos vivido un intenso revuelo producido por el intento de hacer pasar por original una burda falsificación de una pretendida carta de privilegios, dada en Barcelona el 18 de abril de 1493, a Cristóbal Colón. De esta provisión se hizo en 1757 un traslado ante un notoria de la ciudad de Jerez. Que el documento colombino es plenamente falso no cabe la menor duda, después del exhaustivo estudio que de él ha hecho don José de la Peña y Cámara. El traslado, sin embargo, es plenamente auténtico en cuanto que el notario jerezano

25 Paoli: *Diplomática*, págs. 271-272, citado por Floriano, *Curso*, pág. 232.

a quien se le presentó sólo certificó la concordancia entre aquél y la copia que él mismo hizo.²⁶

b) La segunda observación de Paoli es la de advertir las enormes posibilidades que ha habido de errar en la reproducción del documento trasladado.

Como atinadamente expresa Floriano, la copia del documento es hecha por un amanuense al que no se le puede pedir pericia caligráfica, histórica, ni filológica, y a veces, a distancia de siglos de que emanó el original que se traslada. Esta posibilidad aumenta con respecto al documento indiano, por la dificultad misma de los nombres geográficos, onomásticos, etc.

Por esto los traslados son documentos aprovechables, siempre con prudencia, por el historiador y el jurista al que sólo le interesa el contenido del documento. Para el diplomata pierden interés, al tratarse de copias que no reproducen sino los caracteres internos del documento. Por nuestra cuenta queremos hacer también constar que los traslados, signados como ya hemos dicho por los escribanos públicos, son las únicas copias de documentos que dan fe en juicio. Y hasta tal punto esto es así que cuando la copia, por tratarse de un documento guardado en el archivo de una oficina pública, fue hecha por el funcionario jefe de ella, que se responsabilizó de su autenticidad, tenía que pasar ante dos o tres escribanos públicos para que éstos autenticaran el nombre y rúbrica de aquél, lo que en definitiva representaba responsabilizarse de la autenticidad de la copia.

Sirvanos de ejemplo lo siguiente: en 1596, Francisco

²⁶ Peña y Cámara, José: "Mundo Hispánico".

Gutiérrez de Villafañe, escribano de cámara de la Real Audiencia de la Española, saca un traslado de la información que sobre los servicios de Pedro de Villafañe, alcaide de la fortaleza de la ciudad, existía en el archivo de aquel organismo. El documento termina de la siguiente manera:

«En fee de lo qual e para que dello conste di el presente testimonio y traslado de todo lo susodicho el qual es cierto y verdadero. Fecho en Santo Domingo de la isla Española en veynte y seis dias del mes de otubre de mill e quinientos e noventa e seis años. Va entre renglones o diz nuestra, vala; y va testado o diz la villa, no vala. Francisco Gutiérrez Villafañe, escribano de cámara» [rubricado].

La copia estaba autenticada y sin embargo como iba a ser presentada como prueba en un pleito se pasó a tres escribanos públicos que añadieron:

«Los escribanos publicos desta çiudad de Santo Domingo que aqui firmamos nuestros nombres certificamos y damos fe que Francisco Gutierrez de Villafañe de quien este testimonio va firmado es escribano de camara de esta rreal Audiencia que reside en esta çiudad de Santo Domingo y como tal a sus testimonios y traslados que ante él han pasado y pasan se ha dado y da fee y credito en juicio y fuera del. Fecho en Santo Domingo a 30 días del mes de octubre de 1596 años. Miguel Allimen, escribano publico (rub.), Juan Fernandez (rub.), Pedro de Ledesma (rub.). Sin derechos». ²⁷

27 A. G. I., Santo Domingo, 15.

El traslado que, como decimos, está autenticado por escribano público, con la excepción mencionada, adquiere dos formas de expresión diplomática:

a) Los que podemos llamar traslados simples, y b) los traslados acta, siguiendo la terminología apuntada por Floriano.

En uno y otro el formulario adoptado es distinto y son fácilmente discernibles; ambos tienen el mismo valor desde el punto de vista jurídico.

Traslado simple

El primero, el traslado simple, comienza siempre con la calificación jurídica del documento: «Esto es un traslado de la materia en que está escrito, acompañada de la categoría diplomática del original que se traslada y descripción de la materia en que está escrito, acompañada de la mención de los signos de validación que lo autentican: «de una carta de poder original, escrita en papel e sinada de scriuano publico...», «de una cabeça e pie de vn testamento con una clausula del que paresçe que otorgó Martín Ybañes de Hernani, signado de García de Leon, escribano publico de la ciudad de Puebla...», «de una prouision rreal de nuestro señor el rrey escripta en papel, firmada de su nombre e sellada de su sello...».

Sigue el anuncio de la copia con fórmula casi siempre invariable: «su thenor de la qual es este que se sigue», copiando entonces el documento trasladado generalmente entero, desde la intitulación hasta el protocolo final.

Termina el documento con la cláusula notarial que generalmente se constituye por la fecha en que se ejecuta el traslado, consignación de los testigos que presentes estuvieron al acto, salva si la hubo y suscripción autenticadora del escribano público.

Analicemos cada una de estas cláusulas: la fecha es tópica y crónica, es decir, lugar donde se ejecuta, y día, mes y año en que se traslada: «Fecho y sacado fue este dicho traslado en la ciudad de Mexico el dia 8 de septiembre año del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e setenta e ocho años».

La comparecencia de testigos, dos o tres, se expresa con sus nombres y apellidos, y a veces la profesión y vecindad además de la circunstancia de su presencia: «testigos que fueron presentes a lo ver, sacar, corregir y concertar con el dicho original de donde fue sacado. Alonso de Aranda, boticario e Juan Perez e Martin Sanchez».

Entendemos por salva —fórmula que cuando se expresa va detrás de la comparecencia de testigos— la expresión de los errores materiales o accidentes que han ocurrido al trasladar el documento. Tres accidentes ha podido haber: que se haya tachado alguna letra o palabra; que se haya enmendado alguna letra o palabra y por último que se haya escrito algo entre renglones. Estas modificaciones de lo escrito podían invalidar el traslado pues podía pensarse en manipulaciones intencionadas. El escribano tiene la obligación de consignar estos accidentes certificando, al indicarlo, que son producto de la mano del escribano que copió el documento y anteriores al acto de la comprobación con el original que hace el notario. La fórmula empleada es gene-

ralmente: «Va testado una, de, e, o, de; va enmendado en dos partes: o diz cierto, e o diz Cuernavaca; va escrito entre renglones o diz primera renunciación. Vala e no le empezca».

La suscripción autenticadora del notario que cierra el documento está constituida por el nombre del escribano, su oficio, el testimonio de comprobación, signatura, rúbrica y signo, en fórmula más o menos como la siguiente: «E yo Juan Gutierrez de Salamanca, escribano publico y del numero desta dicha cibdad de Guadalajara, con los dichos testigos fui presente a ver, sacar, leer y conçertar este dicho treslado con el original y doy fee que esta cierto y conçertado con el original y va escrito en tres hojas de papel con esta en que va este myo signo que es a tal en testimonio de verdad (signo) Juan Gutierrez de Salamanca (rubicado)».

* * *

Por la importancia que para el historiador presentan, pues en ellos encuentra en general una importante fuente de noticias, queremos hacer especial mención a un tipo de traslados: los llamados en la época *Testimonio de autos*.

La necesidad de mantener por parte de las autoridades indianas estrechos vínculos con la administración central, les obligaba a dar estrecha cuenta de las disposiciones importantes que dictaban.²⁸ Por otra parte los negocios ema-

28 Estaba ordenado que "en materias graves no executen los virreyes, presidentes, audiencias y gobernadores lo que ordenaren sin dar cuenta al Consejo", Recopilación, lib. II, tit. III, ley 51. Por otra ley (lib. III, tit. III, ley 41) se ordenaba "que los virreyes no escriban generalidades y remitan las informaciones necesarias".

nados de aquéllos —legislativos, gubernativos o judiciales— tanto en sus génesis como en su ejecución, daban lugar a una serie de actuaciones.

A fin de justificar en Madrid sus actos, enviaban un traslado de todo lo actuado en el expediente en cuestión. Estos testimonios de autos no son más que una copia autenticada de una serie de documentos, estrictamente diplomáticos y *lato sensu*, que goza de todas las características anteriormente expuestas. El personaje que les da fe pública no es el notario público, es el escribano de gobernación o de cámara, que tiene el título y ejercicio de escribano real, después de haber sido examinado y aprobado.²⁹

Traslado acta

La otra forma ya anunciada que pueden adoptar los traslados es la que Floriano bautiza con el nombre de traslados acta.³⁰ Con respecto al documento indiano es la más usada en asuntos judiciales y el traslado se hace siempre a petición de parte que acude con el documento original ante la autoridad con atribuciones judiciales —gobernador, alcalde ordinario, corregidor, etc.—.

Esquemáticamente su distribución formulística es la

29 Escolano de Arrieta, Pedro: *Práctica del Consejo*, divide a los "escribanos, a quienes se dan los nombres de notarios, actuarios y otros diversos en el derecho común" en cuatro clases: a) "los que intervienen en la formación de las leyes y providencias que sirven al gobierno del Estado". b) los de los juzgados y ayuntamientos que extienden los autos judiciales y actas de estos cuerpos. c) los que autorizan los contratos y escrituras de particulares. d) los que sirven para la cobranza y resguardo de las rentas públicas y para practicar probanzas y otras diligencias y encargos de los tribunales".

30 Floriano: *Curso*, pág. 234.

siguiente: se inicia el documento con la fecha en que se traslada: tópica: lugar geográfico, y crónica: año, mes, día y a veces hora: «En la cibdad de Mexico, cabeça desta Nueva España, en veinte e quatro días del mes de mayo de mill e seiscientos e tres años». ³¹

A continuación se expresa la autoridad ante quien se comparece, el nombre del notario presente y los testigos que asistirán al acto, junto con la persona que solicita el traslado: «en presençia del muy ilustre señor Don Juan Pérez de Guzmán, caballero de la Orden de Alcántara, alcalde de primer voto este presente año y de mi el infraescripto escriuano e testigos de yuso scriptos, paresçio Francisco de Trigueros natural y vecino desta çibdad». ³²

Se señala a continuación, el acto de presentar el documento y se describe externamente: «y presento una Real Cédula firmada de la Reina nuestra señora, refrendada de Juan de Samano, su secretario y con quatro señales en las espaldas». ³³

A continuación, tras anunciarlo, se copia el documento de *verbo ad verbum*: «su thenor de la qual es este que se sigue: La reyna...».

Trasladado el documento se expresa la voluntad del peticionario para que se le expida la copia, la orden de la autoridad para que así se haga; añadiéndose los nombres y vecindad de los testigos y la fórmula autenticadora del notario, con su signo, firma y rúbrica.

31 A. G. I., México, 254.

32 A. G. I., Santo Domingo, 165. Traslado acta, San Juan de Puerto Rico, 28 de abril de 1581.

33 A. G. I., Filipinas, 23. Traslado acta, Manila, 4 agosto 1543.

Códices diplomáticos

Tanto los autores de documentos como las personas o instituciones a quienes se dirigían, tuvieron la costumbre, obligados por diversas causas que enunciaremos, de copiar los documentos que emitían o recibían en libros, conocidos, según las épocas y circunstancias, con distintos nombres y reunidos, con terminología técnica, bajo el dictado de códices diplomáticos.

De las diversas causas que justifican la existencia de esos libros copiadores destaca una de ellas como básica y primaria: asegurar el contenido documental. Esta conservación tiende a cumplir distintos fines que pueden considerarse como causas secundarias de la existencia de los libros en cuestión: reexpedir el original perdido; comprobar la autenticidad de un original sospechoso; poder sobrecartar o confirmar un original dado con anterioridad; conocer en un momento los documentos expedidos sobre un negocio concreto o persona o región determinada, etc.

Basta una ojeada a los catálogos de los diversos centros que guardan documentación indiana para darnos idea de la inmensa cantidad de códices diplomáticos que se nos han conservado.³⁴ Cantidad inmensa y heterogénea que algunos estudiosos han intentado clasificar, con mayor o menor fortuna, atendiendo a veces a complicados e irreales criterios.

Los códices diplomáticos nos interesan en cuanto son

³⁴ Cfr. Altamira, Rafael: *Los Cedularios*; Domínguez Bordona, Jesús: *Manuscritos de América*; Paz, Julián: *Catálogo de manuscritos*.

colecciones de copias de documentos. La clasificación que sigamos irá encaminada a establecer unos principios generales que nos permitan señalar la autenticidad de las copias en ellos contenidas; fijar un criterio valorativo de la copia como fuente jurídica e histórica.

Desde un principio hacemos una tajante división entre códigos de formación oficial y de formación privada. La diferencia fundamental entre uno y otro grupo estriba en que la existencia de los primeros está sancionada por la legislación; la del segundo se debe a la iniciativa privada.

Códices de formación privada

Examinemos estos últimos. Prescindiendo de la finalidad que pretendieron sus compiladores para formarlos debemos advertir que lo único que nos garantiza la autenticidad de las copias en ellos contenidas es la persona autora de la colección. La utilización de este material como fuente de historia debe estar precedida de un conocimiento del método, finalidad y circunstancias de la obra y someter ésta a una aguda crítica interna, histórica y filológica. La prudencia en suma debe presidir la utilización de estas fuentes.

En este apartado incluimos desde las colecciones manuscritas o impresas, coetáneas a la misma documentación, hasta las modernas publicaciones de documentos.

Las conocidas compilaciones de Manuel José de Ayala³⁵ pueden ser ejemplo de las primeras; el *Cedulario Americano*

35 Entre otras muchas obras de este fecundo compilador y polígrafo, hombre típico del siglo XVIII, destacan y nos sirven de ejemplo *Diccionario del gobierno y legislación de Indias* y su *Miscelánea*.

del siglo XVIII, Los Pleitos colombinos y la recientísima *Monumenta centroamericana historica*,³⁶ por citar sólo algunos de los que, personalmente, nos merecen la mayor garantía por la pericia paleográfica, la honradez científica y método seguido por sus autores, ilustran el segundo ejemplo.

Códices de formación oficial

Integran este grupo los códices cuyo origen, formación, redacción, conservación y custodia están reglamentados por la legislación en vigor. La administración cuidó de rodearlos de las suficientes garantías para que las copias en ellos conservadas gozaran de los atributos de auténticos, fidedignos y fehacientes.

De entre todos ellos vamos a ocuparnos, en primer lugar, de los registros.

Registros

Con esta palabra se designa en la legislación de la época a diversos libros cuyas notas en común son las de ser compilaciones de copias de documentos y la de estar encomendada su formación a la administración.³⁷

De entre ellos, sin embargo, podemos formar grupos definidos atendiendo a diversas circunstancias que iremos expresando.

36 Muro Orejón, Antonio: *Cedulario Americano*; Muro Orejón y otros: *Los pleitos colombinos*; Molina, Carlos: *Monumenta*.

37 Vid., por ejemplo, las distintas leyes del tít. IV, lib. II de la *Recopilación*.

a) Registro del sello

Se presenta como el registro por antonomasia. Recoge la copia de los documentos que llevan como elemento de validación el sello real.

Las primeras disposiciones, reunidas en cuerpo legal, que concretamente legislan sobre su formación, calidades y funcionamiento, están recogidas en las ordenanzas del Consejo de 1636.³⁸ Hasta ese momento las disposiciones que lo reglamentan y la práctica que se seguía fueron las vigentes, sobre esta materia, en el Consejo de Castilla.

Y si en las Leyes Nuevas —consideradas como las primeras Ordenanzas del Consejo de Indias, aunque en realidad sólo los capítulos del 1.º al 9.º afectan a la organización institucional de este organismo— de un modo genérico así se establece, al decir: «Ytem ordenamos y mandamos que los del dicho nuestro Consejo de las Yndias sean obligados a guardar y guarden todas las leyes y ordenanças destos nuestros rreynos y especialmente las que estan hechas por los del nuestro consejo rreal»,³⁹ en las Ordenanzas de 1571 se concreta mucho más al disponer que: «El chanciller, *Registrador*, abogados, porteros y procuradores de causas y de pobres y los demás oficiales del nuestro Consejo de las Indias, *guarden en el vso y exercicio de sus offiçios las leyes y pregmaticas destos rreynos que acerca dellos hablan...*». ⁴⁰

38 En ellas se refieren al registro desde las número 89 a 97.

39 Capítulo 5 de las *Leyes Nuevas*.

40 Ordenanza 103 de las *Ordenanzas del Consejo de 1571*. Es digno de notar cómo estas ordenanzas, las primeras que de una manera orgánica institucionalizan al Consejo de Indias, nada establecen, excepto lo transcrito en el texto, sobre el Registro del Sello.

Tenemos, pues, que adentrarnos en la legislación castellana para encontrar los antecedentes del registro del sello indiano.

Antecedentes castellanos

Prescindiendo de la posible influencia de la cancellería pontificia —heredera a su vez de muchos de los usos diplomáticos de la cancellería imperial— e incluso de la existencia de registros en el reino aragonés desde el reinado de Jaime I,⁴¹ en Castilla las primeras disposiciones que se refieren al registro están contenidas en las Partidas. En ellas por primera vez se nos da su definición, su finalidad, modo de registrar los documentos y funcionarios encargados de él:

«Registradores son dichos otros Escriuanos que ha en casa del Rey, que son puestos para escriuir cartas en libros que han nombre de Registros: e Nos queremos aquí dezir, por qué han nombre assí estos libros, e qué proviene dellos. E otrosi estos escriuanos que los han de escreuir, deuen guardar e fazer. E dezimos que registro tanto quiere dezir, como libro que es fecho para remembrança de las cartas, e de los preuillejos que son fechos. E tiene pro, porque si el preuillejo, o la carta se pierde, o se rompe, o se desfaze la letra por vejez, o por otra cosa; o si viniere alguna dubda sobre ella,

41 Vid. Sevillano Colom: *La Cancellería de Pedro IV*, pág. 140. La colección de registros de la cancellería aragonesa continuó hasta 1727. Hoy se conservan 6.389 vols. González Hurtebise, Eduardo: *Guía del archivo de la Corona de Aragón*.

por ser rayda, o de otra manera cualquier; por el registro se pueden cobrar las perdidas, o renovarse las viejas. E otrosí por él pueden perder las dubdas de las otras cartas de que han los omes sospecha. E aun yaze y otra pro, que si alguna carta diessen como non deuan, por el registro se puede prouar quién la dio, o en qué manera fue dada. E lo que deuen guardar, e fazer los Registradores, es esto: que escriuan las cartas lealmente como ge las dieren, non menguando, nin añadiendo ninguna cosa en ellas: e no deuen mostrar el registro, sino al Notario, o al Sellador, o a otro alguno por mandado del rey, o destes sobredichos; o alguno de aquellos que han poder de judgar, o de fazer justicia, si alguna carta ouiere menester, de aquellas que pertenescen a lo que en ellos han de fazer: e deuen señalar en el registro cada mes sobre sí, porque pueden saber más ciertamente quanto fue fecho en él; e por este lugar pueden saber a cabo del año todo lo que en él fue fecho». ⁴²

Debian existir varios libros registros que quizá correspondieran a regiones geográficas o incluso a una división por materias, ya que más adelante en el mismo *Código* se dice que los registradores debían registrar las cartas «cada una en el registro que la conviniera». ⁴³

En el Ordenamiento de Cancillería, promulgado en las

⁴² Partida III, tít. IX, ley VIII.

⁴³ Partida III, tít. XX, ley IV. Hay constancia de la existencia real de estos registros en el reinado de Sancho IV. Vid. Sánchez Belda, L.: *La Cancillería de Sancho IV*, pág. 188.

Cortes de Toro de 1371,⁴⁴ reinando Enrique II, se declara cómo la copia del documento inserta en el registro debe ser auténtica, pues es el medio que tiene la administración para descubrir la posible falsedad del documento «porque si de otra guisa se fallare que estoviere en el Registro de como estoviere la carta, que ayan la pena que ha el que falsa nuestras cartas». En el mismo Ordenamiento se preceptúa que el registrador ponga su nombre tanto en el documento —en la práctica se observa que firmaban en el extremo inferior del pergamino y la firma quedaba oculta al hacer la plica— como en el registro, en señal de que se había registrado; se concreta cómo deberían llevarse los registros por una persona los de cámara, por otras los de los alcaldes; se señala que pasado un año los registros deberían entregarse al camarero y tesorero para archivarlos, precepto que no debió cumplirse: de aquí que hoy no se conserve ninguno.

Tres años después, concretamente en 1374, en las Cortes de Burgos se aprueba el arancel que señala los derechos de los registradores por el registro de los documentos.⁴⁵

Enrique IV, en Valladolid, en 1447 y en Toro en 1462,⁴⁶ vuelve a legislar sobre el registro. Prohíbe que las provisiones y otros documentos emanados del rey, Consejo Real, contadores mayores y otras autoridades palatinas, se registren fuera de la Corte. Admite que el cargo se sirva por tenientes siempre que éstos sean aprobados por el Consejo

⁴⁴ Cortes, tomo II, pág. 171, citado por Martín Postigo, María de la Soterraña: *La Cancillería de los Reyes Católicos*, pág. 163.

⁴⁵ Cortes, tomo II, pág. 271.

⁴⁶ Estas disposiciones están recopiladas en las *Ordenanzas de Montalvo*, lib. II, tit. VII, ley I. Vid. *Códigos españoles*, tomo VI.

e insiste en la obligación de firmar los documentos y el registro. Si en el Ordenamiento de Cancillería de 1371 se asignaba al registro la misión de servir para garantía de la autenticidad documental, ahora su existencia se justifica para cumplir un fin gubernativo «aver razón de todo ello cada que nuestra merced fuere mandar estar en los dichos registros qualquier cosa que ocurriere».

El reinado de los Reyes Católicos supuso, como para tantos otros aspectos, la organización prácticamente definitiva del Registro Castellano. En las Ordenanzas Reales de Castilla, recopiladas y compuestas por el doctor Alonso Días de Montalvo, se recogen diversas disposiciones en torno al registro del sello que se llevaba en el Consejo Real o de Castilla.⁴⁷

No nos detenemos a examinar las características que este cuerpo legal le asigna, primero porque, como hemos dicho, éstas estuvieron en vigor hasta 1636 con respecto al registro indiano; segundo, porque cuando se contó con legislación propia ésta no es más que un fiel trasunto de la legislación castellana. Sería una repetición inútil.

El registro del sello indiano

Las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636 —adelanto, en lo concerniente a la organización del Consejo de Indias, de la Recopilación de 1680—⁴⁸ dedican varios de sus

⁴⁷ Vid. *Códigos españoles*, tomo VI.

⁴⁸ En efecto, habida cuenta la lentitud de las tareas recopiladoras de la legislación indiana se desglosaron y editaron por separado las Ordenanzas del Consejo. Según declaración de Juan de Solórzano, uno de los comisarios de la Recopilación, las ordenanzas se deben a León Pinelo. Cfr. Manzano, Juan: *Historia de las Recopilaciones*, tomo I.

capítulos al registro y al registrador. De ellos y del propio registro conservado⁴⁹ podemos establecer sus características:

1) El registro se lleva en «papel agujereado».⁵⁰ Es decir en hojas sueltas, con un agujero redondo en la parte superior izquierda. En hojas sueltas, para facilitar el trabajo a la hora de trasladar documentos; agujereado, para, a través de él, pasar una cinta que las agrupara —de aquí

49 Desde que el cargo de Registrador del Consejo de Indias fue concedido por juro de heredad a una persona —Vid. capítulo VI—, ésta guardaba el Registro en su propia “posada” (aunque la ley 8, del tit. IV del lib. II de la *Recopilación* ordenaba: “que el registrador tenga en la Corte registros de diez años y los demás estén en Simancas”). En el último tercio del siglo XVIII, “aunque se mandó trasladar todos los papeles que había en el Archivo de Simancas al nuevo que se estableció en la Casa de la Lonja de la ciudad de Sevilla [Archivo General de Indias] por propuesta a S. M. por el señor Don Josef de Gálvez, secretario del Despacho Universal entonces de Indias (a mucha costa de dinero, por la hermosura de sus estantes de madera de caoba, fino herrajes, y lozetas de su embaldosado) no se embiaron los Registros que se conservan en la casa del gran Chanciller [que era a la vez Registrador] que es oy la Excm. Sra. viuda duquesa de Alba”. Así escribía Manuel José de Ayala a principios del siglo XIX en sus *Notas*, tomo II, pág. 97 (a la ley VIII, tit. IV, lib II).

Desgraciadamente, en el incendio ocurrido en el palacio de Liria en 1936 se quemó el Registro del sello indiano, que comprendía la serie desde 1532 hasta la extinción del gran cancillerato en 1873 (Cfr. Duque de Alba: *El Archivo de la Casa de Alba*, “Hidalguía” Revista de Genealogía).

Por razones que desconocemos, sí conserva el Archivo General de Indias una serie de registros del sello comprendida entre los años 1685 a 1733 (A. G. I., Indif. Gral., 680 a 735). Nosotros hemos encontrado un Inventario de los legajos y Registros del Gran Canciller de Indias desde 1502 a 1808, pero sólo recoge el número y fecha de los documentos (A. G. I., Indif. Gral., 916).

50 Efectivamente, así se hace constar en los títulos de registrador o de chanciller y registrador, cuando estuvieron unidos en una persona. Cfr. por ejemplo el título de chanciller y registrador a Juan Ramírez de Arellano, Tordesillas 1 marzo 1605, y el de Francisco de Mondragón. A. G. I., Indif. Gral., 502, lib. I, fols. 57 y 192.

Este Registro agujereado es el “registro forado” de las ordenanzas castellanas:

“Otrosí ordenamos y mandamos que el nuestro registrador tome registro forado de cada una carta y provisión que registrare y lo ponga en el libro de su registro”. Cfr. Ordenanzas de Montalvo, lib. II, tit. VII, ley II, en *Códices españoles*, tomo VI.

el nombre genérico de libro— protegiéndolas de una posible pérdida.

2) Los documentos deben registrarse «letra por letra», «con los nombres de los que la firmaron y señalaron y el día, mes y año en que se despacharon». ⁵¹ No cabe registrar el documento en resumen o en «sumario». En la práctica sin embargo la intitulación aparece siempre resumida y tras el nombre del monarca de quien emana el documento se pone un etc. que resume los reinos y señoríos sobre los que gobierna.

3) El registro se hará con «concierto y aseo» y «buena letra». ⁵² Si del registro había que *sacar* los traslados de los documentos que hiciesen falta es lógico que se cuidaran estos extremos para evitar errores de transcripción.

4) Se asentarán «todas las provisiones que se hallaren por sus años con buen orden». ⁵³ Es decir, el criterio que debe seguirse —y se siguió— en el registro de los documentos es exclusivamente el cronológico. Se prescinde de su contenido jurídico: a una ejecutoria sigue inmediatamente un título de gobernador, por ejemplo; y se prescinde también del organismo burocrático de donde dimanó —tanto de las secretarías, Perú y Nueva España, como de las escribanías de cámara, de justicia.

5) El registrador deberá... «En el registro que en su poder tuviere firme el o su oficial». ⁵⁴ La firma del funcionario competente garantiza la autenticidad de la copia.

⁵¹ *Ordenanzas de 1636*, núm. 96. *Recopilación*, lib. II, tít. IV, ley 8.

⁵² *Ordenanzas de 1636*, núms. 91 y 96. *Recopilación*, lib. II, tít. IV, ley 3 y 8.

⁵³ *Ordenanzas de 1636*, núm. 91. *Recopilación*, lib. II, tít. IV, ley 3.

⁵⁴ *Ordenanzas de 1636*, núm. 96. *Recopilación*, lib. II, tít. IV, ley 7.

La fórmula práctica en que se resolvió este precepto: «concuerta con su original», seguido de la firma y rúbrica del registrador o su teniente.

6) Aunque no estuvo legislado, la práctica introdujo una serie de costumbres que, aunque no eran preceptivas, se siguieron siempre. Tales fueron: sacar la fecha del documento registrado, año, mes y día, en el margen superior izquierdo y el resumen del contenido jurídico del mismo en el espacio superior del folio del registro,⁵⁵ sin duda, para facilitar la localización de un documento determinado.

7) El registrador debería tener el registro «en buena guarda» y tener en la corte «Los Registros de todas las cartas y provisiones que en cualquiera forma se hubieran registrado por tiempo de 10 años próximos y los registros de antes de ellos los envíe al Archivo de Simancas, si el Consejo lo ordenara así».⁵⁶

* * *

Hubiera bastado para hacer fidedigno al registro la autoridad con que la Administración lo revistió por medio de las minuciosas disposiciones que hemos comentado, sin embargo, el legislador consciente de la importancia que tenía el darle las mayores garantías, toda vez que de esto dependía, en gran parte, el reconocimiento público de la autenticidad de los traslados que de él se sacasen, no dudó

⁵⁵ Cfr. A. G. I., Indif. Gral., 680 a 735 que conserva el registro del sello indiano correspondiente a los años 1685 a 1733. Vid. nota 49 de este capítulo.

⁵⁶ *Ordenanzas 1636*, núm. 95. *Recopilación*, lib. II, tít. IV, ley 7. Vid. nota 49 de este capítulo.

en declarar que las provisiones que no fueran registradas «no sea en si ninguna y no sea cumplida». ⁵⁷

Las copias contenidas en el registro del sello se nos presentan en un orden valorativo, como las más cercanas al documento original, al que suple con todo su valor.

Traslados del registro

La autenticidad del traslado de un documento copiado en el registro le viene dada por la autoridad y dignidad del registrador o su teniente, que es el autor espiritual del traslado. Así, la legislación «tras exigir previo decreto del Consejo, ordenando hacer la copia, requiere la presencia material del registrador o su teniente en el acto de sacar y concertar dicho traslado». ⁵⁸

Podemos aplicar además la real provisión expedida en Valladolid a 13 de agosto de 1524, aunque referida al registro castellano, en que se ordena se dé tanta fe a un traslado que se saca del registro del sello como al original. ⁵⁹

⁵⁷ Ordenanzas de 1636, núm. 95. *Recopilación*, lib. II, tit. IV, ley 7.

⁵⁸ "Que no saque ni de traslado alguno de los dichos registros, sin decreto y mandado del Consejo so la dicha pena /dos mil maravedis/ y las demas que pareciere al los del Consejo": *Recopilación*, lib. II, tit. IV, ley 8.

"Quando se hubiere de sacar o dar alguna carta de el registro, no se saque el original de poder del Registrador y los escribanos que las hubieren de sacar, vayan al lugar donde estuviere el dicho registro, y allí en presencia del Registrador o su oficial se saque y concierte, pena de quatro ducados al Registrador que diere los tales registros pora sacar fuera de su poder y lugar, donde están por cada vez que lo hiciere, la mitad para la Cámara y la otra mitad para el acusador". *Recopilación*, lib. II, tit. IV, ley 9.

⁵⁹ Archivo. Simancas, Registro General del Sello. Reg. agosto, 1524; citado por Muro Orejón, A.: *Los libros registros*.

Registro del sello de las audiencias indianas

El hecho de que las audiencias indianas —al igual que las de Valladolid y Granada— pudieren despachar documentos validados con el sello real, obligó a la formación del correspondiente registro del sello, donde se asentaran los documentos sellados que de estas instituciones emanaran. Así, en las Ordenanzas de las respectivas audiencias se dispuso que tuviesen el correspondiente registro.⁶⁰

Nada se dice en concreto en la Recopilación ni en las Ordenanzas de las audiencias sobre las características de este registro. Se señala sólo que se debe hacer «según e de la manera que al presente se libra e despacha en las dichas nuestras Audiencias y Chancillerías de Valladolid e Granada».⁶¹

60 Aunque en las ordenanzas del juzgado de apelación establecido en la isla Española (Burgos, 5 octubre 1511) se anuncia el envío del sello real: "Otrosy hordenoy mando, que los dichos juezes ayan de despachar e despachen las cartas executorias que dieren..., por "Don Fernando e doña Juana" e que vayan selladas con nuestro sello, que mandaremos poner en las dichas Yndias...", nada se dice del registro. El original de estas ordenanzas no se conoce. En A. G. I., Patronato, 170 r. 12, existe un traslado autenticado de ellas. Las publica: Molina Argüello, C. *Monumenta*, tomo I, pág. 3.

Ya en las ordenanzas de la audiencia de México (22 abril 1528) y en las restantes se señala concretamente: "libren y despachen todas las cartas y provisiones y cartas executorias que dieren, con nuestro título y con nuestro sello y registro..."

Por fin, la *Recopilación*, lib. II, tít. XXI, ley 3 dispondría "que los presidentes y oidores que ahora son, o por tiempo fueran de las Audiencias, libren y despachen todas las cartas y provisiones... que dieren con nuestro título, sello y registro..."

Por otra parte en el primer título de nombramiento de registrador de las Audiencias indianas —solamente la de México y Santo Domingo en ese momento— despachado en 22 de abril de 1528 a favor de Diego Beltrán se le ordena "registreis las cartas y provisiones que con nuestro título se ovieren de despachar", A. G. I., Indif. Gral., 421, lib. 13, fol. 90.

61 Ordenanzas de la Audiencia de México, Madrid, 22 abril de 1528, cap. II; a la misma Audiencia en Madrid, 12 de julio de 1530, cap. II; ordenanzas a la Audiencia de Pa-

La «manera» segunda en ambas audiencias era, en definitiva, la misma del Consejo de Castilla y del de Indias.⁶² Valga, pues, todo lo dicho al respecto cuando nos referimos al que se llevaba en el Consejo de Indias.

Tenemos constancia de que en aquellas instituciones se llevó el registro.⁶³

b) Registros administrativos

Debemos volver a situarnos en la Edad Media castellana a fin de explicar el proceso de formación de otros libros registros que llamamos administrativos porque este es su carácter más acusado. Concretamente en el siglo XIII.

Todos los documentos que emanan de la Cancillería Real van validados con el sello del monarca —sea pendiente o de placa; de metal o de cera—. El registro que existe es el que hemos llamado del sello.

Durante el siglo XIV se introdujeron en la Cancillería Real novedades importantes. De una manera insensible —al principio para transmitir órdenes internas en el Consejo Real— empiezan a aparecer documentos no sellados. Son documentos siempre dispositivos, muy poco solemnes, es-

namá, Valladolid, 26 de febrero de 1578; y en la *Recopilación*, lib. II, tít. XXI, ley 3. Las Ordenanzas citadas en Molina, C. *Monumenta*, págs. 83, 89.

62 Cfr. Mendizábal, F.: *Chancillería de Valladolid*.

63 Al reseñar los fondos del Archivo General del Gobierno de Guatemala, el Padre Díez Canedo recoge: "núm. 24: Registro de la Real Cancillería, 1602-1821. Se conservan 120 volúmenes". Indentificamos estos fondos con el registro del sello de aquella Audiencia.

En el Archivo General de Indias, en la sección de Guatemala, leg. 620, se conserva un expediente sobre el arreglo efectuado en los registros del sello de la Audiencia de Guatemala, en el siglo XVIII, por su canceller.

cuetos en su redacción. La rapidez y facilidad de su génesis se va imponiendo poco a poco. Del Consejo saldrán para transmitir órdenes a otros funcionarios reales. A la vez se van fijando dos tipos, con formulario definido y características diplomáticas concretas: cartas misivas y la real cédula.

Surge entonces un problema en la Cancillería Real: ¿dónde asentar los nuevos documentos?

La circunstancia de no estar validados con el sello los aparta del único registro hasta entonces en uso. Por otra parte, si la existencia del registro del sello convenía tanto a la Administración como a los particulares,⁶⁴ ahora el carácter administrativo del contenido de los documentos hace que sea la primera —la Administración— quien tenga necesidad de crear otros registros donde se asienten estos nuevos documentos.

Junto al del sello, aparecen, pues, los nuevos registros, que hemos llamado administrativos.

La utilidad de éstos pronto es advertida por los funcionarios del Consejo. Más aún, cuando, ya en el reinado de los Reyes Católicos, esta institución evoluciona y de ser esencialmente un tribunal de justicia se transforma en un organismo técnico de gobierno y administración. Es imprescindible para la resolución de los problemas de gobierno suscitados, tener recogidas todas las disposiciones emanadas de la autoridad gobernadora. Y en registros de inmediata consulta y fácil manejo.

Independientemente de que el documento sellado se asiente en el registro del sello, se le da cabida también en

⁶⁴ El particular podía acudir, por pérdida o deterioro del documento al registrador para que de su registro le extendiese una copia.

los registros administrativos, junto a los documentos no validados con el sello, pues unos y otros interesan en cuanto que son disposiciones gubernativas.

Todo el proceso que acabamos de analizar está plenamente concluido en el momento que, al otro lado del océano, se descubren nuevas tierras.

Cuando del Consejo de Castilla comienzan a emanar disposiciones sobre asuntos indianos, a partir de 1492, debieron ir asentándose en los correspondientes libros registros, intercalados, según su fecha, con los de asuntos castellanos.⁶⁵

Llega un momento, 1501, en que deciden, a la vista del progresivo aumento de esta documentación, dedicarles un libro registro propio.⁶⁶

Registros administrativos indianos

Desde esta fecha, 1501, podemos hablar ya de registros concretamente indianos.

De entre todos los nombres con los que son conocidos estos libros —cedularios, registros, registros-celularios, etc.— el que, a nuestro modo de ver, más le cuadra es el de «libros reales de gobierno y gracia» con que los designaron trata-

65 Desgraciadamente los libros registros administrativos del Consejo de Castilla que corresponden a estas fechas se han perdido.

66 El primer "libro de gobierno" es decir registro administrativo propio para materias indianas, decimos que se comenzó en 1501. En efecto esta es la fecha del primer documento copiado. Se encuentra hoy en el Archivo de Indias, en Indif. Gral., 418. Los últimos 11 folios del libro copian documentos de fecha anterior (el más antiguo es una copia de las Capitulaciones de Santa Fe de 17 de abril de 1492). En una fecha no determinada debieron copiarse estos últimos, habida cuenta la importancia que tenían.

Corresponde a uno de los folios de los que hemos llamado «libros reales de gobierno y gracia», verdaderos libros registros formados por la institución —en este caso el Consejo de Indias— a través de la cual emanaron los documentos. Como es característico las fórmulas de estilo están abreviadas y el documento se copia a línea tendida. La utilización constante de estos libros en el Consejo de Indias es patente: al margen observamos, además del resumen del contenido de uno de los documentos copiados, que es de la época, dos anotaciones posteriores. Concretamente en esta lámina se copian dos reales provisiones. (A. G. I., Indif. Gral., 418).

distas como León Pinelo, Aguiar y Acuña y Díaz de la Calle.⁶⁷ La legislación indiana se ocupó de ellos —de aquí su carácter de oficiales— y ya las Ordenanzas del Consejo de 1571⁶⁸ dedicaron varios de sus capítulos a reglamentar su formación, como veremos en seguida. Capítulos que pasarían después a la Recopilación.⁶⁹

Contenido y caracterización

Para todo lo relativo a estos libros reales remitimos al lector a las obras que sobre esta materia tiene publicadas el Dr. Muro.⁷⁰ En ellas además se encontrará una guía segura para el manejo de estos registros, conservados hoy día en el Archivo General de Indias y que constituyen fuente indiscutible e imprescindible para cualquier trabajo histórico o jurídico sobre la América hispana.

Brevemente nos ocuparemos de sus características más notables:

1) Valgan las palabras de Pinelo que nos ilustran sobre el contenido de estos libros: «Los libros de las dos secretarías del Real Consejo de las Indias, contienen los originales propios de todas las provisiones y cédulas y cartas acordadas del Consejo y ministros dél, que se han despachado

67 León Pinelo, Antonio: *Libros Reales de gobierno y gracia de la Secretaría del Perú*; Muro Orejón, A.: *Libros reales*; Aguiar y Acuña: *Libros Reales de gobierno, gracia y partes*, incluido en "Sumarios de la Recopilación de las Leyes de Indias" (1628), citado por Muro Orejón en: *Libros reales*; Díez de la Calle, Juan: *Libros Reales de gobierno, gracia y partes*; en Muro Orejón: *Libros reales*.

68 *Ordenanzas de 1571*, núms. 73 a 79.

69 *Recopilación*, lib. II, tit. VI, leyes 40 a 44 y 48.

70 Muro Orejón, A.: *Cedulario americana del XVIII*, págs. VII-XII; Muro Orejón, A.: *Los Registros Cedulares del Consejo de Indias*; León Pinelo, A.: *Libros Reales*, pág. 2.

desde su descubrimiento por los Reyes y gobernadores de Castilla, en cuya corona están incorporados aquellos extendidos reinos». ⁷¹

Palabras que coinciden esencialmente con el contenido que les adjudica la Recopilación: «Los secretarios tengan libros... en que se asiente a la letra todo lo que en sus oficios se despachare por Nos o por el Consejo». ⁷²

2) Si la legislación estableció un criterio geográfico en la formación de estos libros, «...libros en que por sus provincias se asiente...», ⁷³ la realidad práctica obligó a utilizar, junto con éste, otros puntos de vista. Así se formaron libros teniendo en cuenta: el destinatario del documento —Casa de la Contratación, despachos de don Francisco de Toledo, etc.—; el asunto o materia sobre los que versaban —armada de Barlovento, esclavos, frailes, Junta de Guerra de Puerto Rico, etc.—; según la oficina expedidora —cámara, escribanía de cámara—; de acuerdo con el lugar de expedición del documento —Despachos de Monzón—, etc. ⁷⁴

3) Los libros deberían estar «bien encuadernados y tratados»; ⁷⁵ en el primer folio debería hacerse constar «el día, mes y año en que comenzaron». ⁷⁶

En efecto, los libros reales, en su mayoría, se encuentran cosidos y encuadernados en pergamino; en la lomera se anota su nombre concreto, los años que comprende y la

⁷¹ León Pinelo, A.: *Libros Reales*, pág. 2.

⁷² *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 40, trasunto del capítulo 72 de las *Ordenanzas de 1571* y del núm. 153 de las *Ordenanzas de 1636*.

⁷³ Cfr. las disposiciones citadas en la nota anterior.

⁷⁴ Lista completa de los Cedularios existentes en el siglo XVII y su actual localización en el estudio preliminar de Muro Orejón a la obra de León Pinelo: *Libros Reales*.

⁷⁵ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 48.

⁷⁶ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 40.

signatura de la época —utilizan letras o números—. En el primer folio —éste es su tamaño— se repite el nombre específico y las fechas de su comienzo y fin, así como los folios de que constan.

Los documentos se asientan uno tras otro dejando entre ellos un espacio en blanco perfectamente advertible; los márgenes con amplios a uno y otro lado, de tal manera que el documento queda copiado en el centro del folio. El margen izquierdo se aprovecha para escribir el resumen del documento, sin duda para facilitar su localización. Aunque es conveniente advertir que muchos de tales resúmenes no son coetáneos de la copia del documento, sino hechos con posterioridad, aunque siempre con la misma finalidad: la de facilitar el manejo y localización de los documentos registrados.

Dentro de cada libro se sigue un orden cronológico, en muy pocas ocasiones alterado.

Si lo que se copia es una real cédula se destaca de ella la intitulación —el rey, el príncipe— al igual que en el original. El resto se transcribe íntegro; la validación va a línea tendida. Únicamente no se copia al pie de la letra el refrendo del secretario, aunque hay excepciones, esta fórmula se resuelve generalmente así: «refrendada de Joan de Ibarra y señalada del Consejo».

Cuando se han despachado reales cédulas iguales a la registrada —es decir, en caso de originales múltiples—, no se repite la disposición y para hacerla constar se siguen dos métodos: o bien se añade: «El dicho día, mes y año se despachó cédula en conformidad de la arriva para la

Audiencia de Quito», o bien «idem al Presidente de la Audiencia del Nuevo Reyno de Granada».

Si el documento asentado es una real provisión, de la intitulación sólo se conserva «Don Phelipe, por la gracia de Dios, etc...», o más brevemente «Don Phelipe, etc.», «Don Carlos etc.». Se continúa copiando el documento íntegramente. Al llegar al refrendo del secretario puede copiarse íntegro y la validación de los consejeros a continuación a línea tendida, o bien resumirse y agrupar las rúbricas de los consejeros bajo la fórmula de «librada por los del Consejo».

Como el documento se registra antes de que pase por la oficina del sello y registro, las fórmulas en que cuaja la intervención del chanciller no se indicarán.⁷⁷

4) Para garantizar la autenticidad de las copias contenidas en estos libros la legislación⁷⁸ señala diversos métodos:

a) Los secretarios, bajo cuya directa responsabilidad están, deberían, una vez copiados los documentos «corregir y concertarlos con el original salvando las erratas y equivocaciones de transcripción que el copista hubiere cometido, haciéndolas constar al fin de la copia. Hecho que se resolvió con la fórmula de «corregida», seguida de la rúbrica del secretario.⁷⁹

b) Cada folio del libro debería estar «cerrado por pie y cabeza con la rúbrica y señal» del secretario.

⁷⁷ Vid. nota anterior.

⁷⁸ Concretamente la ley 40 del tít. VI, lib. II de la *Recopilación*.

⁷⁹ No siempre se cumplió esta disposición y aparecen con bastante frecuencia documentos copiados en los que no figura señal ninguna. Cfr. Indif. Gral., 428, libs. 28, 33, 34, 35.

c) Al terminarse el registro el mismo secretario debería firmar y rubricarlo.⁸⁰

d) Por último para evitar tachaduras intencionadas se ordena que en el caso de que en un documento «asentado conviniera mudar o enmendar alguno de ellos, en tal caso se asienten en otra hoja o hojas del dicho libro adelante, y en la margen del primer asiento, sin cancelarlo, se apunte lo que de él se hubiere acordado, y la hoja de el dicho libro donde se hubiere vuelto a asentar».⁸¹

Valoración de los libros reales de gobierno y gracia

El carácter de libros administrativos, de uso interno de la Administración, no disminuye en absoluto la nota de fidedignos con que los hemos caracterizado. Constantemente se sacan de ellos copias, que autoriza el secretario, para evacuar expedientes, para sobrecartar disposiciones, para hacer duplicados de los originales perdidos.

Una diferencia fundamental los distingue, sin embargo, del registro del sello, a nuestro modo de ver: de estos libros no se dan traslados en pública forma. En orden a terceros no existen estos registros: si la Administración tiene que despachar una copia del documento registrado no lo hace como tal copia: o bien la sobrecarta y entonces tenemos un nuevo documento que responde a un nuevo acto jurídico, cuya parte expositiva es el documento registrado, o hace

80 Los procedimientos señalados en los apartados b y c se cumplieron prácticamente en muy pocas ocasiones.

81 *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 42.

un duplicado, que en definitiva no es una copia del original sino el mismo original.⁸²

Sólo y exclusivamente para fines internos el secretario despacha copias de estos libros, autenticadas con la fórmula «concertada» con el original y rubricadas por él.

Junto a estos libros administrativos, coexiste el registro del sello. En los primeros, como decimos, se copian todos los documentos que emanaron del soberano sean sellados —reales provisiones— o no —reales cédulas—. En los segundos sólo se registran los validados con el sello real.

Para estos últimos documentos, pues, existen dos registros, que tienden a cumplir fines distintos.⁸³

El papel histórico y jurídico que estos libros reales han desempeñado en el transcurso de los tiempos es incuestionable. Han sido las fuentes exclusivas de los que tuvieron el encargo de hacer la Recopilación de las Leyes de Indias⁸⁴ y su manejo continúa siendo imprescindible para cualquiera que se asome al campo del Americanismo.

Libros de gobierno de las autoridades indianas

Las mismas circunstancias que motivaron la formación en el Consejo de Indias de los libros reales de gobierno y

82 Al margen del fol. 48, lib. 32, A. G. I., Indif. Gral., 428, se señala: "En 17 de agosto de 1624 se boluieron a despachar otras tales cédulas como estas por duplicados [rúbrica]".

83 Veamos por ejemplo: Por Real Provisión de Madrid, 7 de julio de 1685, nombrando Provincial de la Santa Hermandad de Panamá y Portovelo a Don Antonio Echeverry y Subirá se registra: a) en el del Sello (A. G. I., Indif. Gral., 680) y en el administrativo (A. G. I., Panamá, 240, lib. 22, fol. 219 v.).

84 Vid. Manzano Manzano, J.: *Historia de las Recopilaciones*.

gracia, obligaron a que los virreyes, presidentes-gobernadores y gobernadores tuvieran en sus respectivas oficinas un registro, con independencia del registro del sello, donde se copiaran los documentos emanados a su propio nombre.

En las instrucciones dadas a los virreyes durante el siglo XVI se les ordenó: «Ansi mismo os mandamos que de todo lo que proveyeredes por vuestros mandamientos y en otra cualquier manera, quede registro dello, ad longum, firmado del escribano que lo refrendare, lo qual asiente en un libro que mandaréys hazer para el dicho efecto porque es razón que aya registro de los dichos vuestros mandamientos, como lo ha de haber de lo que proveyeredes por Nuestro Título y Real Sello». ⁸⁵

Más adelante, ya en el siglo XVII se les mandó que en estos registros se asentaran no sólo los documentos despachados en su nombre, sino incluso los que emanaban de su autoridad, a nombre del rey y validados con el sello real, con independencia de que estos últimos continuaran registrándose en el registro del sello. ⁸⁶

En el mismo sentido se legisló con respecto a las au-

⁸⁵ Instrucción dada a Luis de Velasco, electo virrey de Nueva España, Valladolid, 16 de abril de 1550. A. G. I., Indif. Gral., 415.

En el mismo sentido a Francisco de Toledo, electo virrey del Perú en sus Instrucciones de 1568, Vid. Encinas, Diego: *Cedulario indiano*, lib. II, fol. 105.

⁸⁶ "Por otro de los capítulos de las Ynstrucciones pasadas se ordenava a vuestros antecesores que hiciesen formar otro libro donde se asentare a la letra todo lo que proueyeren así por sus mandamientos como por mi título Real y sello como es de creer que se habra hecho. Y siendo así ordenareis que se continúe y que si no se haga desde luego que vos llegasedes y que los registros queden firmados de mano del escribano que los refrendare". Cap. 16 de la Instrucción al Conde de Chinchón, electo virrey del Perú. Madrid, 15 de mayo de 1628. A. G. I., Indif. Gral., 512, lib. 1, fol. 110v. y ss. En este legajo y en el siguiente, Indif. Gral., 513, pueden verse las Instrucciones de otros virreyes. En el Cap. 15 de las restantes se recoge el mismo que hemos transcrito.

diencias, cuyos presidentes tenían facultad gubernativa —audiencias pretoriales—: «Tengan otro libro donde se asienten todos los despachos que los Presidentes y Oidores dieren y mandaren librar tocantes al gobierno de la tierra y todo lo demás que de oficio se proveyere y esté en poder de uno de los escribanos de Cámara de la Audiencia...». ⁸⁷

De lo expuesto se deduce el paralelismo entre estos libros y los que el Consejo forma en sus secretarías. Les convienen todas las características respecto a su finalidad y valoración, que con respecto a éstos hemos dejado expuesto. ⁸⁸

Libros registros formados por el destinatario

Hasta ahora nos hemos referido a los libros registros formados por el autor del documento. Sin embargo, desde la Alta Edad Media, ⁸⁹ por costumbre u obligación, los destinatarios de los documentos —personas o instituciones— fueron copiando en libros, que han recibido diversos nombres, ⁹⁰ los documentos dirigidos a ellos.

Prescindiendo de los formados por particulares o para fines privados, vamos a estudiar los oficiales, es decir, aquellos en que su origen, formación, redacción, conservación y custodia están reglamentadas por la legislación en vigor.

Nos referimos concretamente a los que preceptivamente

⁸⁷ *Recopilación*, lib. II, tit. XV, ley 158.

⁸⁸ Se preceptúa incluso que "tengan los registros cosidos y los signen a fin de cada año, so pena de treinta pesos para nuestra cámara"; *Recopilación*, lib. II, tit. XXIII, ley 60.

⁸⁹ Los primeros que se conservan son del siglo IX. Cfr. Bouard, A.: *Manuel*, tomo I, págs. 213 y ss. Floriano Cumbreño, *Curso*, págs. 240 y ss.

⁹⁰ Cartularios, becerros, cedularios, cabreos, registros, etc.

i dose o qual del dho Omo andade en
 andade andade del colpe de pena de foyen
 andade a melloz

112

Andigo ad m. d. l. g. e. t. e. n. u. a. d. l. h. e. y. n. d. i. s. o. r. t. e.
 S. d. y. n. f. a. m. a. b. p. o. r. p. r. e. d. e. d. l. g. m. o. s. d. e. m. a. d. l. o. s. o. f. a.
 y. n. d. i. a. s. t. u. e. n. e. d. l. l. a. S. u. o. p. a. r. t. e. e. r. i. s. s. o. p. o. l. l. i. d. u. s. q. t.
 p. o. m. i. m. d. n. o. s. e. t. f. n. e. l. l. a. s. d. f. n. s. y. n. d. i. a. s. l. e. s. p. o. n. y. n. r.
 p. a. r. a. d. e. i. c. l. l. m. p. e. d. m. i. s. m. o. l. e. s. d. e. p. d. y. n. d. i. a. s. m. d. n. l. a. y. s. i. n. d. e.
 d. e. x. e. r. c. i. o. s. c. a. a. S. m. t. n. d. e. q. f. f. a. b. i. a. d. i. g. n. i. s. s. o. p. h. a. m. i. l. m. d. v. o. r.
 d. i. g. a. q. u. e. c. a. v. e. n. d. i. l. l. e. S. a. n. d. o. s. n. o. l. o. f. u. e. s. e. p. n. e. s. t. e. l. d. f. y. n. p. e. d. i. n. y.
 c. i. n. d. e. m. i. n. l. a. t. t. o. r. o. m. i. l. i. m. m. d. f. n. e. l. (d. n. d. i. s. o. s. v. o. s. m. a. d. S. u. d. a. n.
 l. a. d. e. o. n. t. r. a. n. S. y. n. d. i. a. s. i. n. d. e. l. d. e. c. l. a. s. t. e. p. a. n. y. n. o. m. i. s. y. n. p. e. d. i. n. y.
 S. t. a. i. n. l. a. l. l. a. s. i. a. s. i. o. n. e. s. n. o. v. a. m. p. d. n. c. o. l. l. i. g. y. t. h. o. f. i. c. i. s. y. n. d. i. a. s. o. m. i.
 à. l. l. a. d. e. N. o. v. a. l. l. e. t. h. o. s. l. e. s. d. y. e. n. o. s. m. l. m. d. p. e. r. c. l. l. o. s. p. u. o. f. i. n. e. s. o. n. d. e. l.
 S. i. n. n. e. v. a. l. l. o. s. d. i. d. n. o. s. d. i. a. s. d. e. n. o. s. d. i. a. s. n. o. m. e. h. e. d. e.
 S. i. n. t. e. p. a. r. t. e. o. m. i. v. e. m. o. r. S. e. l. d. f. a. z. o. r. m. a. n. d. u. b. d. e.
 S. n. a. l. l. o. r. o. m. b. i. l. l. o. s.

ne f

al m de pñ G rex
 zinto de la msa
 de am e pñ pñ
 de vñ de dñm mñ pñ
 A' Por
 11-16. Juan
 para q' dñe ocau
 una dñe a lo
 co ady m ag.
 Tia

Un folio de un Registro-cedulario del Consejo de Indias. (A. G. I., Indif., 418). En él se copian varias reales cédulas que, como es característico, van a línea tendida, y sólo se destaca la intitulación: el Rey. Al margen resúmenes de los documentos para facilitar su localización. (Vid. pág. 56).

deberían tener las autoridades e instituciones en las Indias, donde asentaban las disposiciones que recibían de la corte.

Desde muy pronto, en las instrucciones de los virreyes se les ordena «que aya un libro donde todas provisiones y reales cédulas se asienten por extenso, para que más fácilmente se allen y se puedan executar porque podría ser que por no saverse lo que está proveído se dexen algunas cédulas e provisiones nuestras de cumplir e executar como conven-dría y las que de aquí adelante mandaremos dar, assentarse han en el dicho libro luego». ⁹¹

De la misma disposición transcrita podemos deducir que el principal objetivo que se pretende cumplir con la formación de estos libros es tener reunidas en un cuerpo las disposiciones soberanas para su más fácil manejo y así poder seguir su cumplimiento y ejecución.

En los registros formados por el autor del documento éste se asienta antes de haber alcanzado su perfección diplomática; en los registros del destinatario el documento se copia con todas las fórmulas que caracterizan su categoría diplomática. Se hacen constar, pues, cláusulas como la de chanciller y registrador que en absoluto reflejan los registros del autor. Más aún, el documento antes de ser asentado es obedecido por el destinatario y este acto, rodeado de una especial solemnidad, se hace constar en el

91 Instrucción a Don Luis de Velasco citada en la nota 86 de este capítulo. En las Instrucciones del siglo XVII y XVIII se dice: "el libro que está formado en el Archivo de la dicha Audiencia en que se sientan todas las cédulas y provisiones que yo mando despachar para esas provincias areis continuar y que se ponga por títulos y materias para mayor claridad y que más fácilmente se allen y puedan executar...". Al conde de Chinchón, Madrid, 15 mayo 1628. A. G. I., Indif. Gral., 512, lib. I, fol. 11 a 110, cap. 15. Se recogió luego en la *Recopilación*, lib. II, tít. XV, ley 161.

propio documento. El registro del destinatario recogerá esta nueva fórmula añadida al original, así como la del pregón de la disposición, si se había efectuado.⁹²

Libros registros de documentos *lato sensu*

Tanto en el Consejo de Indias como en las secretarías de las autoridades americanas hubo, obedeciendo a las mismas razones que para la formación de los registros de documentos *stricto sensu* hemos expuesto, libros copiadores de documentos *lato sensu*.

Los memoriales y peticiones, las consultas, cartas, etc. tuvieron sus propios registros donde se copiaron en extenso o resumidas.⁹³ Registros que tuvieron un marcado matiz administrativo.

La garantía de las copias contenidas en ellos nos viene dada por su carácter de libros oficiales.

* * *

⁹² Vid. más adelante cap. IV donde recogemos fórmulas de obediencia y pregón.

⁹³ En las *Ordenanzas del Consejo de 1571*, se dispone: "mandamos que en el Consejo de las Indias aya dos libros, vno en que luego como se acordare, que algún negocio se nos consulte, demas de tomarlo por memoria la sustancia, de lo que como dicho es se nos vulere de consultar. Y otro en que a lo largo se asienten en forma todas las consultas que se nos hizieren, con lo que por nos fuere respondido a ellas, firmadas del consultante que las vulere hecho, y el vno y otro libro, esten guardados en el Consejo con mucha guarda y secreto", cap. 18, cap. 36, cap. 75, cap. 77.

"Ordenamos y mandamos que las Audiencias tengan dos libros: el uno en que se asienten las cartas ordinarias que a vos escribieren, por mano del escribano de el Acuerdo de las Audiencias; y en el otro las cartas secretas que escribieren por mano de alguno de los oidores". Recopilación, lib. II, tit. XV, ley 157. Vid. cap. IV donde dedicamos un epígrafe a los registros de las Consultas.

Conviene advertir a la hora de valorar a los registros como fuentes de historia que incluso los que gozaron de la mayor garantía y autenticidad jurídica, no están libres de errores de transcripción, imputables a la ignorancia, a la negligencia o a la equivocación de los oficiales de las secretarías.

Inserciones

Epigrafe aparte merece el estudio de aquellos documentos que se nos han transmitido insertos en otros originales. Tienen, por supuesto, también el carácter de copias y en ellos vamos a distinguir tres grupos: confirmaciones, sobre-cartas y simplemente incluidos.

Confirmaciones

Confirmación es el acto por el cual el soberano prolonga la validez de un título jurídico o lo inviste de autoridad. En el primer caso —cuyos antecedentes remotos hay que buscarlos en la revocabilidad de las donaciones germánicas, como apunta Sánchez Albornoz—⁹⁴ el título jurídico confirmado emanó de su propia autoridad o de un antecesor y el hecho de la confirmación obedece generalmente a petición de parte; en el segundo caso, el documento confirmado

94 Sánchez Albornoz, Claudio: *Documentos de Samos*, pág. 152.

lo expidió una autoridad delegada⁹⁵ y el hecho de la confirmación es una obligación legal.⁹⁶

Los testimonios más antiguos que conservamos de confirmaciones reales se remontan a la Alta Edad Media⁹⁷ y han sido muy diversos los procedimientos prácticos que se han utilizado por las cancillerías a lo largo de la historia del documento español, para llevarlas a cabo.⁹⁸

Con respecto a la documentación indiana, según fuera una u otra la causa que motiva la confirmación, así se siguen procedimientos distintos.

En el primer caso el documento que se desea confirmar es presentado originalmente. La confirmación adoptando el tipo de provisión real, inserta la copia del original; en el segundo, pedida la confirmación, se expide el nuevo documento, también por real provisión, pero en él sólo se hace referencia del negocio jurídico al que se pretende investir de validez.

95 En este sentido necesitaban confirmación las mercedes concedidas por el Rey pero que fueron comunicadas al interesado por Real Cédula: "Ordenamos que la calidad de llevar confirmación de encomiendas, pensiones, rentas, y situaciones, se observe sin diferencia, así en las que dieren los virreyes y ministros referidos en las leyes de este título, conforme a nuestras facultades, como en las que nos diéremos por Cédulas y..." *Recopilación*, lib. VI, tít. XIX, ley 2.

96 La *Recopilación* señala los negocios que necesitaban confirmación real, cfr. lib. VI, título XIX.

97 A estos procedimientos aluden, además de los principios generales contenidos en las obras citadas de Giry, Bouard, Sarrabio y Floriano: Marín Martínez, Tomás: *Confirmación real*; Arribas Arranz, Filemón: *La confirmación de documentos reales*; Martín Mostigo, María de la Soterraña: *La cancellería castellana*; Sánchez Belda, Luis: *La confirmación de documentos*.

98 Ya el primer documento real —el mal llamado Preceptum Silonis del 775— que se conserva en España, lleva en sí las fórmulas de confirmación de los reyes posteriores Alonso II, Ramiro I, Ordoño I y Alfonso III. Facsimil en García Villada: *Paleografía española*, lám. 34. Estudia el documento Sánchez Belda, Luis: *La confirmación de documentos*, pág. 87; lo transcribe Floriano Cumbreño: *Diplomática Astur*, tomo I.

Es claro que en este epígrafe sólo nos interesa tratar del primer caso.

Diplomáticamente el nuevo documento es una real provisión; jurídicamente recibieron el nombre de cartas de privilegio y confirmación. Las fórmulas características y jurídicamente necesarias son:

- a) La vista.
- b) La inserción.
- c) La petición.
- d) La confirmación propiamente dicha.

a) En la primera de estas cláusulas el rey declara expresamente haber tenido presente ante su vista el documento que pretende confirmar e incluso describe su aspecto externo y signos de validación: «vimos vnos capítulos firmados de nuestros nombres e sellados con nuestro sello...». ⁹⁹

b) El documento a confirmar se traslada íntegro. Como es un documento ya expedido goza de todas las cláusulas y fórmulas de validación que le son propias, según su categoría diplomática. La copia insertada nos refleja todas ellas. A diferencia de los documentos que se nos han con-

99 Carta de privilegio y confirmación de las Capitulaciones de Santa Fe de 17 de abril de 1492, expedida por los Reyes Católicos en Burgos, 23 de abril de 1497.

Está, como es característico de este tipo documental, escrito en pergamino. Lleva las firmas y rúbricas de don Fernando y doña Isabel y lo refrenda el secretario Fernando Álvarez de Toledo. Ha perdido el sello pendiente de plomo, pero conserva restos del cordón que lo unía al pergamino. A. G. I., Patronato, 295, documento, 31 (Perteneció al Archivo de Don Cristóbal Colón).

Existe un ejemplar impreso en caracteres góticos en el Archivo de la Casa de Alba. Cfr. Muro Orejón: *Cristóbal Colón*; Duquesa de Berwick y Alba: *Autógrafos de Colón*, páginas 10-16.

servado en los registros, en éstas se hace mención de la cláusula del registro, del canciller y del sello si lo tiene.

c) La petición es la indicación de que se hace a instancia de la persona indicada: «E agora... nos suplicaste e pediste por merçed que vos confirmásemos la dicha nuestra carta que de suso va incorporada e la merçed en ella contenida...». ¹⁰⁰

d) La confirmación propiamente dicha que refleja el nuevo acto jurídico del soberano y que se resuelve en una fórmula como: «...confirmamos e aprobamos para siempre jamás...», «por ende por la presente confirmamos e aprobamos...». ¹⁰¹

Sobrecartas

Este término aparece en el siglo XV para designar al documento que tiene por fin renovar la vigencia de una disposición anterior olvidada o simplemente incumplida por aquellos a quienes obligaba su obediencia. ¹⁰² Característica de la sobrecarta es la inserción del documento cuya validez se pretende renovar.

La sobrecarta es un nuevo documento ya que responde a un nuevo acto del autor del documento. El insertado se convierte en la cláusula expositiva.

¹⁰⁰ Confirmación, Burgos, 23 abril de 1497, de la carta de merced a Cristóbal Colón, Granada, 30 de abril de 1492. A. G. I., Patronato, 295.

¹⁰¹ Real Provisión dada en Toledo, 12 enero de 1526, que sobrecarta otra Real Provisión emanada a nombre del rey por los gobernadores del reino en Burgos, 7 de junio de 1521. A. G. I., Contaduría, 425.

¹⁰² Cfr. Floriano Cumbreño, A.: *Curso*, págs. 542-543.

Considerada diplomáticamente la sobrecarta, observamos que puede expedirse adoptando forma de real provisión o real cédula. La primera puede indistintamente sobrecartar reales cédulas o reales provisiones.¹⁰³ La segunda sólo reales cédulas.¹⁰⁴ Incluso ambas pueden sobrecartar a otras sobrecartas.¹⁰⁵

La técnica formulística es siempre semejante: el documento insertado se transcribe completo desde la intitulación a las fórmulas de validación. No intenta sin embargo reproducir la estructura externa documental sino que se copia a línea tendida.

La garantía sobre la autenticidad del documento copiado nos viene dada por la fórmula de validación del nuevo documento.

Incluidos

Reservamos el nombre de incluidos a aquellos documentos que por razones fundamentalmente jurídicas, se nos han conservado insertos en otros documentos y que no gozan de las características con las que hemos descrito a las confirmaciones y sobrecartas.

103 R. P. Madrid, 26 mayo 1546 que sobrecarta otra R. P. de Madrid, 26 mayo 1536: Encinas: *Cedulario Indiano*, tomo II, fol. 201. R. P. Madrid, 1 agosto 1636 que sobrecarta una Real Cédula de Madrid, 1608. A. G. I., México, 646.

104 R. C. Buen Retiro, 25 abril 1679, sobrecarta una Real Cédula, Madrid, 24 sept. 1624. A. G. I., Indif. Gral., 430, lib. 42, fol. 110.

105 Real Provisión de 19 de julio de 1527 que inserta la R. P. de 2 de noviembre de 1525 la cual a su vez es sobrecarta de la R. P. de 7 de mayo de 1525. A. G. I., Justicia, 154. Real Cédula de Madrid, 2 de septiembre de 1679 que inserta otra de 30 de septiembre de 1670 que es sobrecarta, a su vez de una tercera Real Cédula de 16 de marzo de 1662. A. G. I., Indif. Gral., 430, lib. 42, fol. 135.

Entre las razones que obligan a la existencia de estos documentos incluidos son las más frecuentes:

- a) Documentos que se alegan para justificar un derecho o una acción.
- b) Documentos soberanos que se presentan para su cumplimiento.
- c) Documentos que se exhiben para justificar la intervención en un negocio.
- d) Documentos que reflejan autos y diligencias en un proceso administrativo o judicial.

El documento insertado se copia in extenso y como en las confirmaciones y sobrecartas, la garantía de la autenticidad de la copia nos viene dada por el hecho de su inclusión en el nuevo documento.

Capítulo II

LA ACTIO DEL DOCUMENTO INDIANO

El documento nace, es decir, emana de su autor, después de pasar por una serie de fases, el conocimiento de las cuales es de primordial importancia para el diplomatista, el historiador y el jurista.

Los tratadistas clásicos del documento se han preocupado de individualizar cada una de ellas, denominarlas, estudiarlas y rastrear sus huellas reflejadas muchas veces con precisión en el documento mismo.

Una vez más podemos aceptar la terminología que, prácticamente sin excepciones, establecieron aquellos estudiosos y referirla al documento indiano de carácter público.

Hemos dejado sentado que el documento es la fusión de dos elementos esencialmente necesarios: la *actio* jurídica, el hecho o negocio documentado, y su propia puesta por escrito, su *conscriptio*.

Fases de la actio

Vamos a ocuparnos, en primer lugar, de las fases por

las que pasa el hecho jurídico contenido en el documento que si, en definitiva, es obra de la autoridad pública —estudiamos en este trabajo el documento público— sin embargo, concurren en su génesis una serie de elementos que, o bien provocan su nacimiento, o bien porque le acompañan en su alumbramiento, podemos considerarlas como fases de la *actio*.

Petitio

El hecho jurídico que posteriormente adoptará forma documental —cualquiera que sea— puede surgir por petición o súplica de la parte interesada o sin que medie petición alguna, es decir, espontáneamente, como un acto de la administración, de la autoridad en el desempeño de su triple actividad judicial, legislativa o ejecutiva.¹

En el primero de los casos apuntados, previo al negocio jurídico y sirviéndole de causa u origen encontramos esta petición formal.

Peticiones y memoriales

Es costumbre incorporada a los usos burocráticos, cuando el documento indiano irrumpe en el campo del docu-

1 Por supuesto mucho de los documentos que emanan de la autoridad surgen a petición o por indicación de otras autoridades delegadas. En estos casos el negocio no surge a petición de parte sino como un acto de la administración. Es lo que ocurre frecuentemente con respecto a la documentación emanada de la autoridad soberana que surge a indicación de las autoridades delegadas indianas. Estas indicaciones no adoptan las características formales de peticiones. Se transmiten en la correspondencia oficial establecida entre ambas autoridades.

mento español, el hacer por escrito las peticiones que se elevan a la autoridad, bien directamente, bien a través de las oficinas encargadas de la conscripción de la documentación que emana en el ejercicio de su cargo.

Por otra parte el derecho de petición era reconocido por el rey a sus súbditos. De ahí que sea ingente la cantidad de peticiones que se nos han conservado.²

La terminología de la época es un tanto imprecisa y alterna dos términos para expresar este tipo documental: petición y memorial, sin que prácticamente encontremos los límites de ambos conceptos.

La distinción, sin embargo, existió en teoría: memorial era «el papel o escrito en que se pide alguna merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que funda su razón» y petición «es el escrito con que se pide jurídicamente ante juez».³

El carácter del contenido documental es la base de la distinción. Podemos, pues, hoy día resucitar esta precisa terminología para evitar las vacilaciones que se observan a la hora de nombrar esta categoría documental, aunque al hecho jurídico que contienen le llamamos petición, indistintamente.

Caracterización diplomática

La primera pregunta que se nos ocurre en torno a los memoriales y peticiones, es ésta: ¿son documentos *stricto*

2 V. por ejemplo en A. G. I., en la sección Indiferente General, la serie de "Peticiones y memoriales" que comprende los legajos 1373 a 1503 y abarca los años 1573 al 1796.

3 Diccionario de la Real Academia, edición de 1791, vos *memorial*; voz *petición*.

sensu?, ¿gozan de las características que hemos reservado para designar al testimonio documento? En absoluto. El administrado pide o suplica algo. La *actio* que se documenta en la misma petición que no engendra ni derechos ni obligaciones.

Si la petición o memorial se realiza bajo la observación de ciertas y determinadas formalidades, variables según las circunstancias de lugar, tiempo, materia y persona, ni éstas están destinadas a conferir a tal testimonio autoridad y fe, ni cumplen con el requisito de que lo que se documente sea un negocio jurídico. ¿Queda su estudio fuera de la diplomática? En absoluto. Precisamente el hecho de que sean origen de muchos documentos *stricto sensu* y que su contenido se vierta en éste, en la cláusula denominada exposición de motivos o prefacción, nos permite considerarlos dentro del campo de esta disciplina.

El memorial y petición en cuanto contribuyen al conocimiento de la génesis documental ocupan por derecho propio un lugar en nuestro estudio.

Por todo lo expuesto concluimos que no podrán formar parte del grupo que designamos *stricto sensu*, sí, en cambio, le cuadra el dictado de documento *lato sensu*.

Formulario y caracteres externos de la petición

La petición puede estar hecha por el mismo solicitante —individuo o institución— o por un representante legal suyo, para lo cual ha de tener una carta de poder otorgada por el peticionario.⁴ Este representante podrá ser un pro-

⁴ Nos hemos servidos para redactar este epígrafe de las peticiones catalogadas en Real Díaz, J. J.: *Cartas y peticiones del cabildo de San Juan*.

curador elegido y nombrado para que resuelva un determinado asunto, o bien un procurador general, con amplios poderes. Tal es el caso muy frecuente de los cabildos americanos⁵ que tenían nombrados en la Corte un procurador general⁶ encargado de resolver y avivar los asuntos que la ciudad planteaba, a través de su correspondencia oficial con la corona.⁷

En uno y otro caso la descripción diplomática de la petición es la siguiente: Tras la cruz, en muchos casos tan cursiva que casi es una alfa minúscula, en el centro y parte superior del documento, comienza éste con dos variantes: o bien, se expresa el nombre del peticionario —o el del apoderado y nombre por quien lo hace— indicando su vecindad y más raramente su oficio, o se hace anteceder por una dirección en vocativo en la cual se indica el tratamiento de la persona o institución ante quien se eleva la petición —Muy poderosos señores; S[acra] C[atólica] R[eal] M[ajestad]—. Inmediatamente se da paso a la exposición de motivos introducida generalmente por los verbos: «Dize que» —si se redacta en tercera persona—, «digo que» —si

5 "Declaramos que las ciudades, villas y poblaciones de las Indias puedan nombrar procurador que asistan a sus negocios y los defiendan en nuestro Consejo, Audiencias y Tribunales, para conseguir en derecho y justicia. Y las demás pretensiones, que por bien tuvieren": R. P., Barcelona, 14 noviembre 1519. Recogida en la *Recopilación*, lib. IV, tít. XI, ley 1.

6 Este procurador debía ser persona que residiera con anterioridad en la corte, pues estaba prohibido que sin expresa licencia real, pudieran enviarlo de las Indias: *Recopilación*, lib. IV, tít. XI, ley 1.

Por otra parte las ciudades tenían en su mismo término un procurador que era nombrado por votación entre los regidores. *Recopilación*, lib. IV, tít. XI, ley 2.

7 A estos procuradores se enviaba una carta de poder y unas instrucciones sobre su cometido. Vid. documentos, 23 y 64 de Real Díaz, J. J.: *Cartas y peticiones del cabildo de San Juan*.

lo es en primera—. Si la petición es personal y se solicita gracia o merced la cláusula expositiva recoge los méritos y servicios del peticionario y antecesores.⁸ Viene a continuación la fórmula esencial, es decir, la petición propiamente dicha que se resuelve en las siguientes expresiones: «Pide y suplica», «Suplica», seguida de la indicación de lo que se desea conseguir.

Esta cláusula unas veces va a línea tendida, a continuación de la exposición de motivos, separada de ésta por una raya diagonal; otras claramente separada de ella pero dentro de la caja del texto documental y por último, a mediados del siglo XVIII se saca al margen, tal como hoy es práctica común en las *instancias*.

Llevan siempre fórmula de despedida en la que se recogen las fórmulas de cortesía comunes en la época.

A pesar que la legislación en diversas ocasiones se preocupó de disponer que siempre llevaran la fecha, es excepcional la que la lleva. Quizá influye en esto la circunstancia de su entrega a mano.⁹ Las mismas circunstancias ocurren con respecto a la firma y rúbrica del peticionario que la mayoría de las veces falta en las peticiones.¹⁰

Los memoriales deberían tener un cuidado aspecto externo «de buena letra y no estén emendadas, ni raydas en parte alguna».¹¹

8 "Cuando alguna parte diere memorial, ponga en el todos sus servicios que hasta entonces hubiere hecho porque después no se le admitirán": *Ordenanzas de 1636*, núm. 65.

9 Lo mismo estaba legislado con respecto a los memoriales que se presentaban en el Consejo de Castilla. Cfr. *Recopilación de Castilla*, lib. 2, tit. 4, ley 64.

10 "Que los virreyes y ministros no reciban memoriales sin firma". *Recopilación*, lib. III, tit. III, ley 44.

11 Encinas: *Cedulario*, tomo II, fol. 285. Ordenanza año 1563.

Su tamaño más común es el folio y a partir de 1639 fue preceptivo escribirlos en papel sellado del sello tercero.¹²

En el Consejo de Indias se tenía reglamentado los días que deberían leerse las peticiones.¹³ No se leían ni decretaban los originales, sino un resumen hecho por el escribano de Cámara.¹⁴

La petición en el documento original

Si en el origen de la mayoría de los documentos en que se concedían mercedes, en muchos de carácter judicial e incluso puramente gubernativos, encontramos la súplica de la parte interesada, no es extraño que, una vez que el negocio jurídico adopte forma documental, en la cláusula expositiva se refleje su existencia. Es fácil, pues, que en el documento original quede huella de la petición que, en definitiva, fue la causa de su nacimiento.

12 "Asimismo ordenamos y mandamos que todas las peticiones y memoriales que se dieran a nuestros virreyes, audiencias, tribunales, juzgados, gobernadores, corregidores y otras cualesquier justicia hayan de ser escritos en papel del sello tercero, y no siendo así, no se han de poder decretar, ni remitir, ni hacer relación en ninguno de los dichos tribunales y justicia...": Pragmática sobre el establecimiento del papel sellado en Indias, Madrid, 28 diciembre de 1638. A. G. I., Indif. Gral., 608, fol. 21v. a 29v. *Recopilación*, lib. VIII, tit. XXIII, ley 18.

13 Los lunes, miércoles y viernes por la tarde, "y se lean todas juntas por las tardes en los dichos tres días de la semana, sin que Consejo ninguno se acabe hasta que todas esten leídas y respondidas": *Ordenanzas del 1636*, núm. 5.

En 1614 se ordenó que no se admitiese ni consultase a S. M. memoriales que no hubieran sido remitidos por el rey. A. G. I., Indif. Gral., 1.651.

14 "Mandamos que todas las peticiones así judiciales como de gracia y merced y gobierno que en el Consejo de Indias se presentaren o que nos remitiéremos a el, se saquen en relación por el escribano de Cámara que las ouiere de leer las cuales se lean en el Consejo por las dichas relaciones al pie de las quales se ponga el decreto de lo que a ellas se respondiere": *Ordenanzas de 1571*, núm. 69.

En este caso se hace constar: a) la persona o institución de quien surge la petición; b) la exposición de motivos que justifica la petición; c) el asunto o negocio suplicado y se resuelve en fórmulas como: «...por parte del prior, frailes y convento del monasterio de San Pablo me ha sido hecha relación... (exposición de motivos) suplicándome...»; ¹⁵ «...por parte de doña Beatriz Núñez viuda mujer que fue de Hernán Gómez ya difunto, nos ha sido hecha relación que... suplicándonos atento a ello vos mandásemos que...»; ¹⁶ «...Alonso de San Juan, en nombre de Andrés Corzo, vecino de esa ciudad del Nombre de Dios me ha hecho relación que el dicho su parte... me suplicó en el dicho nombre...»; ¹⁷ «...por quanto Don Sebastián Antonio de Ortega mi fiscal en el Consejo de Indias, por memorial que ha presentado en él me ha hecho relación... suplicándome... fuere servido de mandar despachar cédulas generales a ambos reinos para que...». ¹⁸

Intercessio

El segundo de los elementos que debe ser considerado como concausa, junto a la *petitio*, de la aparición de alguno de los hechos jurídicos que emanan de la autoridad pública es la *intercessio*.

Por *intercessio* entendemos el acto por el cual una tercera persona, generalmente cualificada, influye en la autori-

15 Real Cédula, Madrid, 28 de abril de 1567. A. G. I., Panamá, 236.

16 Real Cédula, Madrid, 27 de octubre de 1571. A. G. I., Panamá, 236.

17 Real Cédula, Madrid, 13 de febrero de 1699. A. G. I., Indif. Gral., 431.

18 Real Cédula, Madrid, 13 de febrero de 1699. A. G. I., Indif. Gral., 431.

Xponal. gacia Sabado
^{ca}
sup a. V. m. monde dar
le. licençia para pasar
a meda es paña que le
llama. Antio suyo q
no tiene otro heredero

Calo
sup Lope de soua

licençia suprema.

ffr

La lámina nos presenta el resumen de una petición para que sea vista en el Consejo. Nos queda una huella de esa etapa por la que pasa el hecho jurídico antes de su nacimiento y que los diplomatas llaman «intercessio». Nos referimos a ese «suplícalo Lope de Soria», a quien no conocemos, pero que sería persona influyente. El documento refleja también la resolución que se dio al asunto: «licencia en forma» rubricado por el escribano de cámara, Juan de Ledesma (1571-1595) y por último la nota de uno de los oficiales de secretaría haciendo constar —con la palabra «fecha» (abreviada)— la conscripción del documento que concedía la licencia solicitada. (A. G. I., Indif. Gral., 1.373). (Vid. pág. 80).

dad pública, para que de ésta surja el hecho jurídico solicitado por el peticionario. La *intercessio* es en definitiva una recomendación.

No es necesario que exista y de hecho una gran cantidad de negocios emanaron de la autoridad pública sin la previa existencia de este elemento.

Casi siempre los intercesores son individuos de la familia real, altos dignatarios de la Corte, funcionarios de la Administración, parientes o allegados. A ellos acudían los peticionarios para buscar el valimiento de su persona, a fin de asegurar el resultado positivo de su súplica.

Si en la Baja Edad Media la existencia de la *intercessio* se refleja claramente en el documento emanado de la autoridad —«e a ruego de la reina mi muy cara e muy amada mogier», «e porque así nos lo suplicó el Infante nuestro tío», etc.— en la documentación indiana prácticamente queda en el secreto y raramente en la cláusula expositiva encontramos la huella de esta fase.

Si es frecuente encontrar consignado en los memoriales la intervención a favor de la súplica, comprimida en una fórmula como «Suplícalo el secretario Juan Vázquez de Salazar». ¹⁹

Mientras que la *intercessio* amparara una súplica justa y fuera incluso garantía de la honestidad de lo demandado, podía tolerarse su existencia; pero cuando se convertía en un medio de favoritismo apoyando peticiones infundadas y perjudiciales para terceros, era necesario desterrar esta infundada práctica.

¹⁹ Al margen de un memorial de Pedro de Olmos [siglo XVI]. A. G. I., Indif. General, 1.373.

Como en realidad era difícil averiguar la verdad de la *intercessio* el soberano optó por prohibirla, bajo graves penas,²⁰ aunque no podemos pensar que cesara en absoluto.

En su lugar surge oficialmente el *informe*. Los memoriales presentados a través de las autoridades delegadas y no directamente al rey deberían ser informados, es decir, se debería juzgar sobre la verdad, justicia, necesidad y oportunidad del hecho suplicado.²¹

Intervinentes

Bajo el nombre de *intervenientes* agrupan los diplomatas la participación que por diversos títulos²² tienen ter-

20 Así en las *Ordenanzas de 1571*: Núm. 38: "porque el fauor no sea parte para perturbar ni torzer la justicia, ni las cosas del gouierno que se han de proueer en el Consejo de Indias: prohibimos y defendemos, que ninguno de los officiales del consejo, ni sus hijos, deudos, criados, ni familiares, ni allegados de sus casas no sean procuradores ni solicitadores en ningun negocio de Indias, so pena de diez años de destierro destos reynos al que lo contrario hiziere. Y assi mismo mandamos que los del consejo ni sus mugeres ni hijos, deudos, criados o allegados no intercedan en los dichos negocios, con apereibimiento que haziendo lo contrario, lo mandaremos proueer como conuenga".

Núm. 42: "El presidente y los del Consejo de las Indias, y los fiscales secretarios, escriuianos de camara, relatores y los demas officiales no escriuan cartas de recomendacion alguna a las Indias, so las penas contenidas en las dichas leyes y ordenanzas...". En el mismo sentido se había legislado ya en las *Leyes Nuevas*, caps. 4 y 5.

21 "Muchas vezes acaesçe que personas que residen en las Yndias vienen o envian a suplicarnos que les hagamos merçed de algunas cosas de las de alla, y por no teper aca la ynformaçion, asi de la calidad de la persona que lo suplica y sus meritos y abilidad, como de la cosa que se pide no se puede proueer con la satisfaçion que conuernia; por ende mandamos que la tal persona manifieste en la Audiencia alla lo que nos entiende suplicar para que la dicha Audiencia se informe asi de la calidad de la persona como de la cosa, y envíe la tal ynformaçion cerrada y sellada con su pareçer, al nuestro Consejo de las Indias para que con esto se tenga más luz de lo que conuerna a nuestro seruicio que se prouea": *Ordenanzas de Audiencia de 1542*, núm. 39: en Encinas, Diego de: *Cedulario*, tomo I, fol. 8.

22 Enumera las razones de la participación de estos intervenientes: Bouard, A.: *Manuel*, pág. 79. Aporta abundante bibliografía sobre el asunto.

ceras personas en el nacimiento de la *actio* documental. Esa participación constituye, junto a la *petitio* y la *intercessio*, otro de sus estadios.

Dar su consentimiento o parecer es la doble actividad que desarrollan los *intervenientes* o *consentientes*.

Históricamente el origen de dicha participación hay que situarlo en la Alta Edad Media al presentarse asuntos jurídicos documentales que, como decimos, exigían por su calidad la intervención o el consentimiento de alguien. Tal ocurría en las confirmaciones de anteriores documentos. Al suplicar los interesados dicha confirmación, la autoridad soberana debía investigar, antes de concederla, los posibles derechos de terceras personas con relación al asunto confirmatorio. Por ejemplo, del obispo, si se trataba de privilegios de un monasterio o de una iglesia. Esa investigación se concretaba de ordinario en consultar al propio obispo u a otras personas conocedoras del asunto, los cuales daban su parecer o asentimiento o ambas cosas a un tiempo.

De las confirmaciones pasó en seguida este sistema de pedir parecer y consentimiento a otras clases de asuntos jurídicos. Por ejemplo, se explica bien que los personajes presentes en la corte del rey o del señor participaran en los actos jurídicos de éstos, ya a título de consejeros, ya de autorizantes o consentientes, por ejemplo, en épocas de minoría de edad del nuevo rey o en período de debilidad y abandono del poder real.

Con el transcurso del tiempo, la participación en la génesis del documento público de estos *intervenientes* sufre una doble evolución: por una parte, cada vez se va destacando más su actividad de consejeros del soberano y es a

título de tales que participan conjuntamente con él en la expedición de la *actio*, cuyo reflejo es el documento; por otra parte, se va institucionalizando esa intervención y de una actuación concreta y personal, casi privada, se tiende a la constitución de organismos consultivos permanentes y de carácter público. Del «consilio et consensu comitum et principum meorum»²³ se pasa al «visto por los del nuestro consejo, fue acordado...».

Intervenientes en la *actio* del documento público indiano

Vamos a dividir este epigrafe en dos apartados concretos: en uno de ellos, el primero, estudiaremos los intervinientes en la *actio* del documento que emanará de la autoridad soberana; dedicaremos el otro, al análisis de las instituciones o personas que colaboran en la génesis del negocio jurídico emanado de las autoridades delegadas indianas.

a) Intervenientes en la *actio* emanada del soberano

El punto culminante de la evolución que hemos expuesto más arriba lo supone el reinado de los Reyes Católicos con la plasmación práctica del Estado moderno. Es durante

23 Así se señala en el Fuero de Valpuesta, otorgado por Alfonso II en 21 diciembre de 804, publicado en Muñoz y Romero, Tomás: *Colección de fueros municipales*, tomo I, Madrid, 1847 y en Flórez, E.: *España Sagrada*, tomo XXVI.

su período de gobierno cuando el Consejo Real acentúa su transformación de una institución fundamentalmente con atribuciones judiciales en un organismo técnico, eminentemente gubernativo y legislativo, siendo su principal misión asesorar, aconsejar al rey en ciertos asuntos.

Al incorporarse las nuevas tierras descubiertas allende el océano a la corona castellana, el Consejo Real se convierte en el consejero por antonomasia del soberano en los asuntos indianos. Fundamentalmente Juan Rodríguez de Fonseca, ayudado por un secretario, primero Gaspar de Gricio, más tarde Lope de Conchillos, y otros miembros de la mencionada institución castellana como Zapata, Carvajal, Fernando Tello, Palacios Rubios, etc. Es decir los que pronto iban a constituir dentro del Consejo Real el grupo especializado de «los que entienden en las cosas de las Indias...». ²⁴ Sin embargo, el «acrescentamiento y ampliación de las nuestras Indias...» ²⁵ obligó a que el 1 de agosto de 1524 se estableciera como institución independiente el Consejo de Indias.

A partir de este momento y hasta su desaparición, ya en el siglo XIX, constituyó el máximo organismo consultivo del soberano en los asuntos indianos. ²⁶

Al decir Consejo de Indias hemos englobado en él a una

²⁴ Vid. Schäfer, Ernesto: *El Consejo de Indias*, tomo I, págs. 22 y ss.

²⁵ *Ordenanzas de 1571*, núm. 1.

²⁶ El Consejo de Indias tuvo, por delegación real, atribuciones judiciales e incluso gubernativas. En el texto hemos querido sólo resaltar su misión como organismo consultivo del soberano.

La creación de las Secretarías del despacho Universal, en el siglo XVIII, supusieron una importante merma en las tradicionales actividades gubernativas y legislativas del Consejo. Sin embargo continuó siendo organismo consultivo del monarca e incluso asuntos que se resolvieron con absoluta independencia del Consejo, le fue pedido su parecer.

serie de organismos, en realidad juntas especializadas dentro del mismo Consejo, que recibirían nombres y atribuciones concretas, tales como la Cámara de Indias, la Junta de Guerra, la Junta de Hacienda, la Junta de Azogues, etc.

Tanto el Consejo de Indias como las juntas especializadas constituyen organismos consultivos permanentes. El soberano, sin embargo, cada vez que lo creyó conveniente, nombra juntas especiales o solicita de individuos concretos asesoramiento para la resolución de asuntos determinados. Así la de 1503 que estableció el régimen de encomiendas; la de Burgos de 1512 que confeccionó las ordenanzas reales para el buen tratamiento de los indios; la de Barcelona de 1541-42 de cuya actividad resultó la publicación de las Leyes Nuevas; la de Madrid, comenzada en 1598, que preparó la creación de la Cámara de Indias, etc...²⁷

De lo que llevamos dicho se deduce la posibilidad de agrupar en dos grandes apartados las instituciones asesoras del monarca: a) organismos creados para asesorar al soberano, b) instituciones o individuos que circunstancialmente les ha sido sometido a su asesoramiento un asunto concreto.

Desde este momento separamos de nuestro estudio estos últimos, precisamente por las mismas circunstancias que nos han dado pie para integrarlas en un grupo.

En 1524 nace el Consejo de Indias y desde ese mismo momento se convierte en el supremo órgano asesor del monarca en asuntos indianos. Por propia voluntad real, desde ese instante y «para la buena gouernación dellas [las Indias] y administración de justicia, puedan [los consejeros] or-

27 Vid. Ybot León, A.: *Juntas de Teólogos*.

denar y hazer con consulta nuestra las leyes, pragmáticas, ordenanzas y prouisiones generales y particulares... que por tiempo para el bien de aquella república conuiniere». ²⁸

Por supuesto la máxima autoridad pública conserva absoluta libertad para consultar los negocios que quisiere con las personas e instituciones que creyere conveniente; sin embargo, el Consejo es el organismo permanente e institucionalmente creado con ese objetivo, y en la mayoría de las disposiciones gubernativas, de gracia y merced, nombramientos, etc., que emanan del soberano, interviene el Consejo de Indias, asesorando o aconsejando la *actio* jurídica de la cual el documento es su reflejo escrito.

Los años 1600 y 1705 suponen dos hitos importantes y marcan una evolución en el desarrollo de los organismos permanentes asesores del gobierno. Las dos fechas antes señaladas, suponen, al segregar del conocimiento directo del Consejo de Indias una serie de asuntos, una disminución de su capacidad consultiva.

En la primera fecha, concretamente el 25 de agosto de 1600, se crea la Cámara de Indias. A partir de este momento en la nueva institución se tratarán y consultarán «las prouisiones eclesiásticas y seglares que hubiere de hacer para el buen gobierno espiritual y temporal de las Indias» y todos los asuntos de merced y gracia. ²⁹

Igualmente por la misma disposición que comentamos, se convierte en institución permanente la junta particular y temporal creada en 1583 para resolver los problemas que

28 Ordenanzas de 1571, cap. I. Incorporado a la *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 1.

29 Sobre la creación de la Cámara de Indias, Vid. Real Díaz, José J.: *El Consejo de Cámara de Indias y sobre su azarosa vida*, concretamente la nota 4. También Vid. Schäfer, Ernesto: *El Consejo de Indias*, tomo I, pág. 175 y ss.

ocasionaban los corsarios y piratas que pululaban en torno a la isla de Puerto Rico. El nuevo organismo —Junta de Guerra de Indias— tendría bajo su jurisdicción los negocios y materias de guerra y sobre éstos asesoraría al soberano.³⁰

Pocos años después —1609— se añadían expresamente a su jurisdicción la consulta de los «oficios tocantes a la guerra, de mar y tierra».³¹

La segunda fecha, 1705, inicia un proceso que se desarrollará a todo lo largo del siglo XVIII. Supone la institucionalización de un cargo —el secretario del despacho— situado entre el rey y los tradicionales Consejos, que asumirá las riendas del gobierno en materias o territorios que la legislación le atribuya. El secretario del despacho se convertirá en el primer asesor del rey en los asuntos a él encomendados. En definitiva «todo lo que mira directamente o indirectamente al manejo de mi Real Hacienda, Guerra, Comercio y Navegación de aquellos a estos reynos, provisiones de empleos y cargos y órdenes respectivas a estas tres clases y sus incidencias y dependencias...».

Los Consejos —el de Indias, concretamente— quedan convertidos en organismos consultivos de segundo orden:

30 León Pinelo, Antonio: *Real Junta de Guerra de Indias; Ordenanzas de la Junta de guerra; Recopilación*, lib. II, tit. II, leyes 72 a 82.

31 Real Cédula, Madrid, 16 marzo 1609. Incorporada a la *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 17: "Para que las provisiones de los oficios y cargos tocantes a la guerra, así de mar como de tierra, de nuestras Indias, se hagan con la inteligencia, noticia y conocimiento necesario de las personas más práctica y suficientes y aprobadas en las cosas de la mar y de la guerra, éstos y todos los oficios que tocan a la distribución, cuenta y razón de la hacienda que se gaste en las Armadas y flotas de la Carrera de Indias, se nos consulten y provean por la Junta de Guerra de ellas, y no se han de comprender en estos oficios los de nuestra Hacienda Real de las dichas Indias; porque éstos, aunque tengan a su cargo la cuenta y razón, y la paga de la gente de guerra y Presidios se han de proveer por nuestro Consejo de las Indias".

Consulta del Consejo de Indias. Madrid, 11 septiembre 1571 (A. G. I. Indf. Gral., 738).

Aunque por estas fechas las consultas utilizan para su redacción el doble folio, en sentido apaisado, ésta que publicamos es una de las pocas excepciones y a la larga será la que se imponga. Como es anterior a 1584 todavía firman y rubrican con sus nombres y apellidos, precedidos del grado académico, los consejeros de Indias. (Vid. págs. 91-105).

«quedando sólo al cuidado del Consejo el participarme las noticias de que yo mandare me informe y no en otros términos». ³² Sí continúa siendo tribunal supremo de justicia.

Hemos llamado proceso al desarrollo del establecimiento de las Secretarías del Despacho porque a lo largo de la décimo octava centuria variarán tanto en su número como en su jurisdicción. Esquemáticamente fue así: Por decreto de 11 de julio de 1705 se crean dos secretarías del despacho Universal: por una, a cuya cabeza se pone a Grimaldo, se despacharía todo lo tocante a Hacienda y Guerra; por la otra —como titular el marqués de Mejorada— todas las demás materias de gobierno. ³³ El 30 de noviembre de 1714 se reestructuran las secretarías y se crean cinco que respectivamente se denominarán: de Estado, de Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e Indias. ³⁴

Por reales decretos de 20 de enero y 11 de septiembre de 1717 el soberano puntualizaba al Consejo los asuntos y negocios que desgajaba de su jurisdicción y encomendaba a la «vía reservada» es decir a las nuevas secretarías, concretamente a la de Marina e Indias.

³² Esto y lo inmediatamente superior entrecomillado, en el Decreto de 11 de septiembre de 1717, en el que se responde a una representación del Consejo que mostraba las dudas y dificultades de interpretación del decreto de 20 de debrero del mismo año. Un intento en definitiva de conseguir del soberano la revocación de este último, que supone una merma absoluta en su tradicional jurisdicción. En él se declara la competencia de ambas instituciones. A. G. I., Indif. Gral., 827.

³³ Se comunicó al Consejo de Indias por Real Decreto de 12 de julio de 1705. A. G. I., Indif. Gral., 260.

³⁴ Real Decreto, Madrid, 30 noviembre 1714. En *Novísima Recopilación de Castilla*, lib. III, tit. VI, ley 4. Los nombrados para estas secretarías fueron: Estado, Grimaldo; Gracia y Justicia, Manuel de Vadillo; Guerra, Miguel Fernández Durán; Hacienda, con el título de Intendente Universal de la Veeduría General, al obispo de Girona; Marina e Indias, D. Bernardo Tinajero. Real Decreto, Madrid, 2 diciembre 1714. A. G. I., Indiferente, 831.

En líneas generales esta estructura permaneció, aunque en distintas ocasiones los reyes fueron delimitando las atribuciones y jurisdicciones de las distintas secretarías.³⁵

Carlos III dividió en 1787 la Secretaría del Despacho de Indias en dos: una que entendería en los asuntos de Gracia y Justicia, a cuya cabeza se puso a don Antonio Porlier y otra bajo cuya jurisdicción se someten los asuntos de guerra, hacienda, comercio y navegación, siendo nombrado titular de ella Antonio Valdés.³⁶

En 1790 se produciría un cambio radical en la evolución del proceso que señalamos. Hasta entonces, con respecto a los asuntos indianos, se había seguido un criterio de unidad territorial. Carlos IV suprimirá ambas secretarías y distribuirá el conocimiento de los asuntos indianos en las secretarías que crea, no ya con un criterio territorial, sino según sus materias. Así quedarán establecidas las secretarías de Estado, de Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina y de Hacienda.³⁷

Dada la especialísima característica e importancia de algunos asuntos indianos se creaban directamente subordinados al secretario de Hacienda, tres directores de rentas, real hacienda y comercio de Indias, que entenderían directamente de estos ramos concretos.

35 Así Fernando VI por varios Decretos de 15 mayo y 26 agosto de 1754 y 24 mayo 1755. Todos en la Novísima Recopilación de Castilla, lib. III, tit. VI, leyes VII, VIII, IX, X y XI.

36 El Decreto de división es de Madrid, 8 julio 1787, *Novísima Recopilación de Castilla*, lib. III, tit. VI, leyes 11 y 12. Vid. leyes 14 y 15. Este Decreto se imprimió. Un ejemplar en A. G. I., Indif. Gral., 831. Los nombramientos se le comunicarán a Valdés por decreto de 10 de julio de 1787. A. G. I., Indif. Gral., 831.

37 Real Decreto, Aranjuez, 25 abril 1790, *Novísima Recopilación*, lib. III, tit. VI, ley 16.

Y con esta estructura se inició el siglo XIX, hito cronológico de nuestro estudio.

La creación de las secretarías supone un cambio radical en muchos órdenes.³⁸ Desde el punto de vista diplomático, y ya tendremos ocasión de volver sobre ello, obliga a la aparición de un nuevo documento, la real orden y un nuevo tipo de real cédula. Por otra parte, disminuye la capacidad consultiva de los organismos que tradicionalmente desarrollaban esta función al reducir la jurisdicción del Consejo de Indias, Cámara y Junta de Guerra. Los nuevos secretarios al despachar directamente con el soberano los asuntos de su departamento, lo hacen oralmente, auxiliados por notas y memorandums y no mediante consulta formal.

Hemos introducido el término consulta y vamos a exponer su concepto y caracterización.

La consulta

Consulta es el acto por el cual una institución o individuo, en cumplimiento de un precepto genérico o específico del soberano, lo asesora en un asunto determinado.³⁹

En la consulta por tanto se plasma la participación de los *intervenientes* en el nacimiento del negocio jurídico que adoptará estado documental.

38 Hay una reciente publicación sobre este tema que no hemos podido manejar, Escudero, José A.: *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*. Madrid, 1969 y una lista de los Secretarios del Despacho, en Bernard, Gildas: *Liste des Secrétaires d'Etat espagnols*.

39 También se llamaba consulta al acto por el cual el soberano sometía al asesoramiento de una institución o individuo la resolución de cualquier acto jurídico.

Por extensión recibió el nombre de consulta el documento en que el individuo o institución transmitía al soberano su consejo en el negocio que le había sido encomendado. Y fue, en efecto, por escrito, el modo más normal de relación entre el consultante y el consultado, aunque en determinadas ocasiones fue la palabra el vehículo en que se evacuó el asunto solicitado. En este caso, no excepcional como decimos, se conoció en la época como «consulta de boca». ⁴⁰

El concepto de consulta que acabamos de exponer es igualmente aplicable en nuestro caso: recibirá, pues, el nombre de consulta el acto —y su reflejo escrito— ⁴¹ por el cual los órganos asesores del rey, en asuntos indianos le transmiten su parecer en un asunto determinado.

De lo expuesto deducimos, que, al igual que en el docu-

⁴⁰ Entre los documentos que hemos manejado ha quedado a veces testimonio de estas "consultas de boca"; así, en una consulta escrita en 7 noviembre 1576, se dice: "El Consejo tiene algunas cosas que consultar a S. M. de palabra, siendo V. M. servido de señalar día para ello...". A. G. I., Indif. Gral., Este mismo legajo conserva un apunte recordatorio de "Consulta de boca que hizo el Consejo a S. M. en 1568".

En ocasiones, aunque el Consejo había determinado hacerlas de "boca", las hacía por escrito por las razones que él mismo aduce: "El Consejo hauiá acordado algunas cosas para consultarlas a V. M. de palabra y porque las partes aguardan la resolución ha parecido meditarlo más y hazerlo en ésta..." (Consulta de 12 diciembre 1580. A. G. I., Indif., 739). Aunque las "consultas de boca" se hacían oralmente al monarca por el presidente o un consejero, éste tomaba nota por escrito de los asuntos tratados, —generalmente mercedes a personas o ciudades—, añadiendo de su mano la resolución real, indicando su nombre y la fecha. Vid. A. G. I., Indif. Gral., 738, docs. 90, 95, 108 y 123, que corresponden a consultas de "boca" hechas el 4 de mayo de 1568, 7 mayo 1569, 26 noviembre 1569 y 20 marzo 1571, respectivamente.

⁴¹ Al documento que transmite la consulta se le denomina en un principio "carta". Así es frecuente encontrar: "consultan por otra carta" (19 de diciembre de 1533). Hacia 1552 se generaliza el nombre de *consulta*, aunque no falta la mención de carta hasta 1580. Tal vez el nombre de carta se deba a que el tipo documental que nos ocupa responde externamente a las estructuras de las *cartas oficiales* de la misma época.

mento *stricto sensu*, podemos distinguir la *actio* y su puesta por escrito, es decir el negocio que se consulta y el documento en que se vierte, e incluso distinguir, al igual que estamos haciendo en este capítulo, una serie de etapas o estadios por las que transcurre la consulta: en definitiva estudiar su génesis.

Dejando para más adelante el tratar de la materia sobre la que versa, digamos que la consulta como acto, surge en cumplimiento de una disposición genérica o de un precepto concreto del soberano.⁴²

42 Estos preceptos genéricos están contenidos en los documentos constitutivos de estas instituciones asesoras y en sus respectivas ordenanzas. En ellas se dispone que se consulte a S. M. sobre las materias determinadas sobre las que ejercen jurisdicción.

Al Consejo de Indias se le ordena: "porque los del nuestro Consejo de las Indias con más poder y autoridad nos sirvan y ayuden a cumplir con la obligación que tenemos al bien de tan grandes reynos y señoríos, es nuestra merced y queremos que el dicho Consejo tenga la jurisdicción suprema de todas las nuestras Indias occidentales descubiertas y por descubrir y de los negocios que de ellas resultaren y dependieren y para la buena gouernacion dellas y administracion de justicia pueda ordenar y hazer con consulta nuestra las leyes, pragmáticas, ordenanças y prouisiones generales y particulares que por tiempo para el bien de aquella republica conuinere": *Ordenanzas de 1571*, núm. 2.

En el documento de creación de la Cámara de Indias: "...y que traten y me consulten las prouisiones eclesiásticas y seglares que hubieren de hazer para el buen gobierno espiritual y temporal de las Indias..." Real Cédula, Valladolid, 25 de agosto de 1600, publicada en Real Días, José J.: *El Consejo de Cámara de Indias*.

Con respecto a la Junta de Guerra: "Para que las provisiones de los oficios y cargos tocantes a la guerra, así de mar como de tierra... se nos consulten y provean por la Junta de Guerra": *Recopilación*, lib. II, tít. —, ley 77. Por otra parte, es bastante frecuente que el rey envíe acompañando a memoriales, directamente remitidos "a sus manos" un decreto dirigido a estas instituciones ordenándole concretamente que se le consulten: "La Junta de Guerra de Indias me dirá su parecer en inteligencia de lo que representa y suplica en el memorial incluso...": Decreto de S. M., Madrid, 22 de marzo de 1770 (A. G. I., Indif., 258); "viendo en el Consejo de Indias las propuestas de Pedro Gutiérrez Ortiz que se contienen en el memorial incluso... se me consultará lo que pareciere": Decreto de S. M., Madrid, 14 diciembre 1639 (A. G. I., Indif., 761).

Una vez acordado ⁴³ lo resuelto en el asunto a consultar, cuyo acuerdo debería surgir por mayoría, excepto si se trataba de revocar leyes establecidas o promulgar una nueva, ya que en estos casos se exigía la conformidad de los dos tercios de los consejeros, ⁴⁴ se decide por estos mismos el inicio del proceso que finalizaría con la *conscripción* del acto.

El secretario que había asistido a la sesión donde se decidió la consulta y había tomado por escrito el acuerdo, ⁴⁵ encargaba a sus oficiales la confección de una minuta. Si el examen de ésta correspondía al secretario, el cual dictaminaba sobre la adecuación entre lo en ella dicho y lo acordado por los consejeros y lo conveniente de las fórmulas protocolarias, en la redacción definitiva, es decir la formación del *mundum*, su directa intervención no ocurriría hasta 1597. Hasta esa fecha son los propios oficiales los que lo escriben.

Desde entonces —la disposición que así lo ordena es de 6 de mayo— ⁴⁶ esta función recayó concretamente en los secretarios, que deberían escribir el documento en limpio por su propia mano, excepto aquellos que transmitieran al soberano el parecer del Consejo sobre asuntos planteados a petición de parte y materias de gracia. Bastaría en estos casos que sólo escribieran el parecer del Consejo; las cláusulas formulísticas las redactarían los oficiales. ⁴⁷ Esto era

43 Sobre la manera de trabajar el Consejo de Indias, Cfr. Manzano y Manzano, Juan: *Cómo funcionaba el Consejo de Indias*.

44 *Ordenanzas de 1517*, núm. 32; *Ordenanzas de 1636*, núm. 15; *Recopilación*, lib. II, tít. II, ley 15.

45 *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 5.

46 Real Cédula, Torrelodones, 6 mayo 1597, incluida en *Ordenes que se han dado para el gobierno del Consejo de Indias*.

47 *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 13.

lo legislado. Sabemos, sin embargo, que «insensiblemente la desidia, vejez, achaques y otras causas, como la tolerancia del Consejo... ha introducido su inobservancia en cuanto a que los secretarios no sólo no escriben las consultas, más ni las forman, sino por ellos sus oficiales, respectivamente conforme están repartidos los negocios a cada uno y únicamente en las provisiones de empleos que propone la Cámara suscriben dichos secretarios los nombres de los propuestos». ⁴⁸

En realidad la inobservancia de esta disposición se justifica por la multitud de funciones que estaban encomendadas a los dos secretarios del Consejo ⁴⁹ —de la negociación del Perú y de Nueva España—.

Una vez que se tenía la consulta en limpio había que validarla. Aunque más adelante desarrollaremos el contenido de esta cláusula, adelantemos que dicha validez consiste en este tipo documental en las firmas completas o rúbricas de los consejeros. La consulta en limpio, como decimos, era llevada por los oficiales de la secretaría a los domicilios privados de los consejeros para que en aquélla estampasen sus firmas. ⁵⁰ Costumbre que en el siglo XVIII se rompió y fue desde entonces en el Consejo, donde tuvo lugar la validación de las consultas. ⁵¹

48 Esto lo declaraba a fines del siglo XVIII un personaje que tan de cerca conocía el Consejo como era Manuel José de Ayala. Cfr. *Notas a la Recopilación*, a la ley 31 del lib. II, tít. VI.

49 En la *Recopilación*, lib. II, tít. VI, se especifican las múltiples misiones encomendadas a los secretarios.

50 Auto acordado del Consejo, 23 febrero 1637, A. G. I., Indif. Gral., 880, incorporado a la *Recopilación*, auto 101 del lib. II, tít. VI. Estas consultas, así como otros documentos que tenían que firmar los consejeros, eran llevados a sus domicilios en una bolsa o caja especial, cerrada con llave, de la que tenía un ejemplar cada consejero.

51 Ayala: *Notas a la Recopilación*, Comentario al auto 101 del lib. II, tít. VI.

El envío del documento al rey tocaba a los mismos secretarios del Consejo,⁵² que lo remitían directamente a la real persona si estaba en la corte.⁵³ Cuando se ausentaba de ella, y le acompañaba el presidente del Consejo, se le enviaba a través de éste. En el siglo XVIII en ausencia del monarca el intermediario era el secretario de Estado y del Despacho.

Resuelta la consulta por el rey, volvía ésta al presidente del Consejo, siempre que estuviera en la Corte o fuera de ella, en comisión de servicios. En otro caso la consulta iba al gran canciller.⁵⁴ Este acordaba la formación del despacho correspondiente de cuyos trámites nos ocuparemos más adelante. La consulta inmediatamente después quedaba archivada en el Consejo de Indias.

En el Archivo de esta institución —hoy en el General de Indias de Sevilla— quedaban, pues, las minutas de las consultas, las consultas originales y además los registros de las consultas a los que aludiremos más adelante.⁵⁵

Caracterización diplomática de las consultas

Podemos hacernos con respecto a las consultas las

52 R. C. de 6 de mayo 1597 en *Órdenes que se han dado para el Gobierno del Consejo de Indias*, incorporada a la *Recopilación*, lib. II, tit. VI, ley 13.

53 En 1710 el Ministro Frigiliana, intentó recabar para sí el presentar directamente las consultas del Consejo de Indias a S. M., lo que suponía una trasgresión a la ley citada en la nota anterior. Sin embargo no fue aceptada la modificación por el monarca. El expediente en A. G. I., Indif. Gral., 824 y 825.

54 *Recopilación*, lib. II, tit. VI, ley 14.

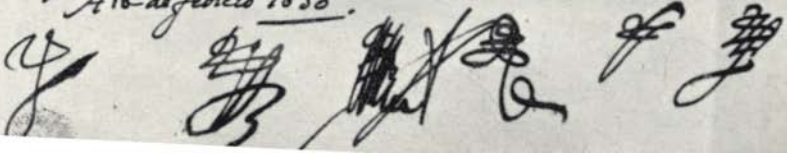
55 Un utilísimo y muy completo catálogo de las consultas elevadas al monarca, durante el siglo XVI, por el Consejo de Indias y Juntas especiales, ha sido realizado por Doña Antonia Heredia Herrera. Son unas cuatro mil las consultas extractadas. Actualmente la obra está aún inédita.

Señor

Por una horden de 16. de este mes. manda V. M.^d se va luego con el
consejo el memorial que con el viene del capp.^{an} fr.^{co} Nicolás sobre
la visita que se le dio para su nao y que se guarde lo que V. M.^d fuere
mandado dando satisfacci^{on} al dho capp.^{an} o que se diga a V. M.^d luego
la causa porque no se cumple.

Lo que en particular supp.^{en} el dho fr.^{co} Nicolás en su memorial es
que en conformidad de la m^{ra} que V. M.^d le tiene hecha de que se
visita a una nao suya por cédula de 2 de octubre de 624. se le
V. M.^d demandar le tenga en el cregimiento que se haze de toneladas
en la flota que se está aprestando para la nueva esp.^a

Haviendo escrito el prior y consules que respecto de no haver havido
el año pasado flota para la nueva esp.^a y ser muy limitado el
bugue que estaua señalado para la que ha de ser este presente por
la mucha carga que ay conuenia se diese visita a una nao de
Pedro Lorenzo de Andrada. visto en el Consejo y una peticion
que presento en el fr.^{co} Nicolás pidiendo se señalase su nao
para el cregimiento que se haia de hazer, se le concedió como lo p^{ra}
antes que llegase la horden de V. M.^d cumpliendo con la cédula que
tenia de m^{ra} de V. M.^d como lo haze siempre el Consejo con
la puntualidad y cuidado que debe. y asi no se le ofrezca otra cosa
que digir a V. M.^d en respuesta de dicha horden. En Madrid
A 18 de febrero 1630.



Consulta del Consejo de Indias. Madrid, 18 febrero 1630 (A. G. I., Indif. Gral., 756).

Como es característico, a partir de 1584, en la validación de la consulta la firma y rúbrica de los consejeros de Indias, ha sido simplificada por sólo su rúbrica o señal. (Vid. págs. 91-105).

mismas preguntas que planteamos en torno a las peticiones y memoriales: ¿son las consultas documentos *stricto sensu*?, ¿gozan de las características que hemos reservado para designar al testimonio documento?

Las respuestas que demos a ambos interrogantes coincidirán absolutamente con las que en su momento dimos para responder a aquéllas.

La consulta no puede ser incluida dentro del grupo que, desde el punto de vista diplomático, llamamos documento *stricto sensu*. La consulta no es más que un reflejo escrito de esa etapa o estadio por el que pasa la *actio* jurídica desde su inicio, como respuesta a una *petitio*, hasta su otorgamiento por la autoridad soberana. La *actio* que encierra la consulta no es más que una proposición o consejo; ni engendra derechos, ni obligaciones; aporta al monarca elementos de juicio para que de él emane el negocio a documentar. Sin embargo en cuanto contribuye al conocimiento de la génesis del documento *stricto sensu* ocupa por derecho propio un lugar en este estudio y deberemos incluirla dentro del grupo de documentos *lato sensu*.

Cláusulas de la consulta

En el formulario de las consultas podemos distinguir entre la parte central del documento, es decir, lo que pudiéramos llamar cuerpo del mismo, aquella que contiene el hecho documentado y la parte literal o complementaria que contiene las fórmulas legales necesarias para dar al documento perfección jurídica y personalidad reconocida.

Entre estas últimas destaca, en primer lugar, la direc-

ción. El documento que nos ocupa va siempre dirigido o alevado a la máxima autoridad pública, es decir al rey. Sólo en casos de ausencia del monarca de los reinos de España, éste dispone expresamente que determinadas consultas, generalmente de asuntos ordinarios, se eleven a la persona que hubiere dejado como gobernador del reino —casi siempre el príncipe o la reina—. ⁵⁶

La dirección viene expresada por el tratamiento que en el momento se daba a la real persona. Así a Carlos V con las siglas de S. C. C. R. M. (Sacra, Católica, Cesárea, Real Majestad); a Felipe II, S. C. R. M. (Sacra, Católica, Real Majestad), ⁵⁷ hasta el momento que se dispone, todavía en tiempos de este monarca, que los documentos a él dirigidos vengan con el tratamiento de *señor*. Esta última forma perdura hasta el fin del periodo que estudiamos. ⁵⁸

La cláusula cronológica cierra el tenor documental. Prácticamente consta de fecha tópica, es decir, lugar geográfico y de fecha crónica. Se sitúa a continuación de la fórmula de despedida y su expresión es sencilla: el lugar —siempre dentro de la península, en el lugar de residencia del Consejo— se señala escuetamente o todo lo más —durante el siglo XVI— precedido de la preposición *de*: «De Madrid...». ⁵⁹ La fecha crónica, día, mes y año, adopta para ex-

⁵⁶ Siendo el príncipe Felipe, gobernador de los reinos de España, durante el periodo comprendido entre 1552-1556, por ausencia de su padre Carlos V, es frecuente la expedición de dos ejemplares de una misma consulta, con la única diferencia de ir uno de ellos dirigido al Emperador y otro al Príncipe. Ejemplos de esta duplicidad podemos encontrarlos en A. G. I., Indif. Gral., 737 y en ellos podemos comprobar uno de los ejemplares con la dirección de S. C. C. R. M. y otro con la de "Alto y muy poderoso señor".

⁵⁷ A. G. I., Indif. Gral., 737, Lima I, México, I (S. C. C. R. M.); Indif. Gral., 738 (S. C. C. R. M.), etc.

⁵⁸ A. G. I., Indif. Gral., 781 (Señor).

⁵⁹ Consulta de 12 de octubre de 1589. A. G. I., Lima, I.

presarla la numeración romana (XX de diciembre de MLDXXXX)⁶⁰ o la numeración arábiga —la más corriente y exclusiva desde el siglo XVII—. El día del mes puede expresarse por el adjetivo numeral ordinal (Madrid, seys mayo 1599).⁶¹

La fecha que lleva la consulta es la de su *conscriptio* o puesta por escrito y no la del día en que se acordó por el Consejo.

Más aún, la consulta se fecha cuando ésta ha alcanzado su perfección diplomática, es decir cuando incluso ha sido validada. Por esta razón esta cláusula —sobre todo el día y el mes— aparece generalmente escrita de otra mano o de otra tinta que el tenor documental. La razón es obvia: cuando se hacía en limpio el documento no se podía prever el momento en que la firmarían los consejeros; así se dejaba en blanco esta fórmula y después se rellenaba.

Conviene no perder de vista esto que acabamos de decir, porque en las consultas de finales del siglo XVII y en las del siglo XVIII al dorso del documento figura una segunda fecha precedida por las palabras *Acordada en*. Tal fecha es la del momento en que los consejeros reunidos deciden consultar a S. M. un determinado asunto: es la fecha del nacimiento de la *actio* que documenta la consulta.

A veces la puesta por escrito de la consulta tiene lugar el mismo día en que se acuerda y entonces las dos fechas coinciden; pero lo más frecuente es que entre uno y otro

⁶⁰ Consulta de 20 diciembre 1590. A. G. I., Chile, I. Adviértase la evidente falta de conocimiento del empleo de la numeración romana en la expresión del año, incorrección frequentísima es la época. Pueden verse muchas más en A. G. I., Patronato, 33.

⁶¹ Consulta de 6 marzo de 1599. A. G. I., Charcas, I.

momento haya un espacio de varios días que prácticamente nunca pasa de los quince.

Una tercera indicación cronológica aparece en este tipo documental, a partir del siglo XVIII y también al dorso. Es la mención del día en que fue leída por el rey y decretada por él.

A finales de este mismo siglo surge una nueva costumbre burocrática: al dorso de la consulta se indica una cuarta referencia cronológica. Es la que señala el día en que, devuelta al Consejo y reunido éste, se da lectura a la resolución real, se acata y se decide su puesta por escrito en el documento diplomático.⁶²

Inmediatamente, a continuación de la data, aparecen los elementos de validación o autenticación de la consulta que se reducen en este tipo documental a las suscripciones de los consejeros autores de aquélla. Hasta 1584, la suscripción consiste en los nombres y rúbricas de los consejeros, precedidos de los grados de licenciado o doctor, a línea tendida, siendo la primera la del presidente y a continuación, por orden de antigüedad, la de los demás. En 1584, a fin de simplificar la tramitación de la consulta —no olvidemos que es un documento interno y que en él se ha sacrificado la solemnidad por la eficacia y rapidez— las suscripciones quedan reducidas a las rúbricas de los consejeros.⁶³ Sin embargo, el nuevo método podía plantear cierta dificultad, la de identificar la rúbrica con el consejero al que corres-

62 Cfr. las consultas conservadas en el A. G. I., en Indiferente General, 803 a 807.

63 En esta fecha debió dítarse una disposición —Real Decreto o Auto acordado— que prescribía la simplificación que hemos expuesto. Aunque no hemos encontrado dicha disposición, es a partir de esta fecha, cuando las consultas adoptan la variante señalada en la fórmula de validación. Cfr., A. G. I., Indif. Gral., 740.

pondía. Para resolver esta cuestión, a mediados del XVII, se decidió expresar independientemente de las rúbricas, y escritos por los oficiales que la redactaban, los nombres completos de los consejeros que habían intervenido en el negocio jurídico consultado, con lo cual, a la vez que se facilitaba la inmediata identificación de las rúbricas, como estos nombres eran puestos con anterioridad a la validación—es decir al acto de estampar las rúbricas—, los encargados de recoger las firmas de los consejeros sabían así los domicilios que habían de visitar. Esta lista de nombres, conocida en la época por la «nominilla», escrita de arriba a abajo ocupaba en la consulta el margen superior izquierdo.

En el siglo XVIII, no con mucha frecuencia, para simplificar el procedimiento validativo de la consulta se rubricaba por sólo el secretario del Consejo. En este caso, la rúbrica viene precedida de la indicación: «Señor, por acuerdo de la Junta [o del Consejo, en otros casos] sube con mi señal» (rubricado).⁶⁴

Queremos advertir que algunas consultas conservan en mejor o peor estado un sello de placa en el dorso del documento. No tuvo éste función validadora o autenticadora, sino exclusivamente misión de cierre,⁶⁵ que garantizaba la inviolabilidad del contenido documental hasta su recibo por la persona real, cuando ésta se encontraba lejos de la corte española. De aquí que estos sellos de cierre sólo se encuentran en las consultas remitidas al monarca fuera de la corte y son más frecuentes en tiempos de Carlos V.⁶⁶

64 Algunos ejemplos en A. G. I., Indif. Gral., 799.

65 Sobre las funciones del sello, Vid. Cap. VI.

66 Cfr. A. G. I., Indif. Gral., 737.

Inmediatamente después de las fórmulas esenciales de la consulta —entre el parecer y la fecha— y cerrando el tenor documental aparece una cláusula protocolaria de saludo final o despedida, cuya expresión está condicionada por la misma característica del negocio manifestado en este tipo documental —asesoramiento o consejo—. En ella el consejo reconoce la libertad decisoria del monarca y se traduce en fórmulas como las siguientes:

«V. Md. mandara lo que fuere servido» (expresión encontrada en consultas de los años 1586, 1591, 1668, 1689, y que es la más frecuente y generalizada desde fines del XVI y durante todo el siglo XVII).⁶⁷

«S. Mg. lo mandara considerar y resolver lo que más conviniere para todo» (en consultas de 1607).⁶⁸

«V. Mg. resolvera lo que mas fuere servido» (en consultas de 1661).⁶⁹

V. Mg. mandara lo que mas convenga a su servicio» (en consultas de 1676).⁷⁰

«V. Mag. mandara lo que fuere su real voluntad» (en las de 1680).⁷¹

«V. Mag. resolvera lo que mas convenga a su real servicio» (en las de 1682).⁷²

«V. Mag. se servirá resolver lo que fuere mas de su real agrado» (en las de 1799).⁷³

67 A. G. I., entre otros legajos: Lima, I; Indif. Gral., 741, 781, 792.

68 A. G. I., Indif. Gral., 750.

69 A. G. I., Indif. Gral., 968.

70 A. G. I., Lima, I.

71 A. G. I., Indif. Gral., 817.

72 A. G. I., Indif. Gral., 817.

73 A. G. I., México, 1.139.

«V. Mag. mandara lo que sea mas de su real agrado» (en muchas del siglo XVIII).⁷⁴

Sólo durante los años 1570-1584, en los que la consulta adopta unas características excepcionales de solemnidad, como veremos en el epigrafe destinado a su evolución externa, coexiste esta fórmula que hemos indicado arriba con otra, expresión de auténtico saludo final, localizada entre la data y la validación y que generalmente adopta esta expresión:

«S.C.R.M.

Humildes criados de Vuestra Majestad que sus reales manos [o pies] besan».

Fórmula que parece manuscrita por el presidente del Consejo.⁷⁵

En la parte central del documento, es decir lo que pudiéramos llamar cuerpo del mismo —la expresión del negocio que contiene— distinguimos dos cláusulas fundamentales: una primera que genéricamente podríamos llamar exposición de motivos de la consulta y otra segunda en la que el organismo consultivo expresa su parecer o consejo.

La exposición de motivos detalla el asunto a consultar y sus circunstancias y no adopta un formulario determinado.

La segunda, el parecer del organismo consultivo que generalmente adopta en su expresión el siguiente esquema: «Haviendose visto en el (Consejo, Cámara, Junta de guerra, etc.) ha parecido que... (se señalan los fundamentos históricos o jurídicos en que se apoyan los consejeros para manifestar su opinión).⁷⁶

74 A. G. I., Indif. Gral., 569.

75 Cfr. A. G. I., Indif. Gral., 737 y 738.

76 A. G. I., Indif. Gral., 817, entre otros muchos.

Forma externa de la consulta

Hemos analizado el formulario de este tipo documental —documento *lato sensu*— y las cláusulas fundamentales del mismo. Veamos ahora cómo quedan plasmados en su aspecto externo.

Aunque va a ser costumbre generalizada el presentar el tenor documental escrito en folios, dos o más, con un margen que oscila entre dos o tres centímetros —hasta 1570— y la mitad exacta del folio —desde finales del siglo XVI—, hay un periodo comprendido entre 1570 y 1584 en que el texto ocupa los dos folios pero en sentido apaisado.⁷⁷ Coincide este modo de escribir la consulta con la aparición de la fórmula de despedida a que hemos aludido anteriormente, destacada del tenor documental ocupando varios renglones y con letras de mayor tamaño y de distinta mano que la del resto de la consulta.

Todas estas circunstancias dan al documento un carácter de mayor solemnidad, en relación a las anteriores y posteriores.⁷⁸

Durante todo el siglo XVI y XVII la letra utilizada por los oficiales que las escribieron es muy cuidada y de clara adscripción al tipo itálico. No hemos encontrado ningún ejemplar escrito en cortesana o procesal. Las dificultades de lectura surgen en torno a la resolución real estampada

⁷⁷ En este periodo también las cartas escritas por las autoridades indianas adoptan esta forma externa, lo que nos hace sospechar que quizá hubiera una disposición sobre la materia aunque no hemos podido encontrarla.

⁷⁸ Estas consultas se conservan en A. G. I., Indif. Gral., 738-740.

Yo. Vn Mag. Sea cordada de como hizo mud abia Vn Año. Alcapitan Juandeopeda En Re-
muneracion dello mucho que auia Seruido a Vn Mag. en el alaminato delope de aguirre conseruacion y
nauios y gente quelluso asueto sta desde santodomingo alaprouina de Veneguela delloffio de receptor
dela auerua q se coban en sculla el qual offio tiene de solario encada vna de rentos duados y los se
leeste offio por aorar a Vn mag. de rentos duados de fairs que stua acordado que Seledus en
la casa dela contratacion de Seuilla, el qual dho capitan yendo agora A santodomingo con vn nauios q
tenia dho altraues contemporal en la costa depalos donde se ahogo y perdio su nauios y lo q en el llaua
de xia cinco o seis hijos y hijas y muger con hazian necesidad Sea obia de Caridad y muy mercedia
q Vn mag. hagamid. del dho offio de receptor, asu hijo maior atento lo mucho que seledus por
sus Seruis y que gozo tan poco dela mid, y por que el dho Su hijo no tiene al presente sino de
y siete años pocas mas, o menos entre tanto que la tiene Sirua el dho offio elteniente que supadre
dexo q tiene a Validad y Sufiama, la cedula Va, ordenada en esta Sustancia para quasi
V. M. fuxre Seruido la mande firmaz. no Señor guarde y acuerde, la C. R. Por Joma de
Vn mag. con aumento de maiores Reinos y seruios como su Real corazon de pad emadud a x vide
dizi. de M. D. lx y as.

C.B. mt

En milles criados de Vint que sus reales manos vean

Indel 738

Lp don ju
 sar in
 E lio don
 gomez
 Sotro fiam^{co}
 mrs delectm
 eth alonso
 mrio

Consulta del Consejo de Indias. Madrid, 16 diciembre 1563 (A. G. I., Indif. Gral., 738).

Es digno de notar en esta consulta la fórmula de saludo final, autógrafa del Presidente del Consejo, Don Juan Sarmiento, característica general en las consultas emanadas entre 1570-1584. Al margen aparece la resolución real del asunto planteado, es decir el decreto, en este caso autógrafo de Felipe II. (Vid. págs. 91-105).

en la misma consulta, personalmente o por el secretario del monarca.⁷⁹

La dirección, que como hemos dichos responde al tratamiento de la persona real, a la que va dirigida, ocupa la parte superior y central del documento, separada del texto de la consulta propiamente dicha, sin que se olvide dibujar en ningún caso, inmediatamente encima, la cruz cursiva.

El texto ocupa según los casos casi todo el folio, la mitad o una tercera parte.

Durante casi todo el siglo XVI en que los asuntos consultados en una misma consulta eran varios, cada uno de ellos, con la exposición de motivos y el parecer de la institución asesora, va separado del siguiente por un espacio en blanco perfectamente distinguible.⁸⁰ Cuando, a finales del siglo XVI, es práctica común el tratar en cada consulta un solo negocio, el tenor documental —exposición y parecer— forma un todo seguido de la expresión o fórmula de sometimiento y de la data.⁸¹

Destacadas del texto aparecen las firmas y rúbricas —o sólo las rúbricas— de los consejeros asesores.

Aunque en el último tercio del siglo XVI es frecuente que las consultas lleven al dorso un resumen del asunto o asuntos consultados, tal práctica es costumbre interna del Consejo y posterior al momento de la presentación al rey.

79 Aún no nos hemos referido a este estadio de la *actio* documental. Cfr. en este mismo capítulo el epígrafe: el Decreto.

80 A. G. I., Indif. Gral. 737 a 739.

81 A. G. I., Indif. Gral., 745-748.

Es un resumen hecho para fines archivísticos: para su más fácil búsqueda y localización posterior.⁸²

Es a partir de 1630 cuando para dar una mayor rapidez a la tramitación de los asuntos, se dispone que todas las consultas lleven al dorso un resumen breve y preciso del negocio consultado. De la exactitud de tal resumen se hacía responsable el secretario del Consejo, en señal de lo cual lo rubricaba.

También es práctica común desde fines del siglo XVI, indicar al dorso la institución que consulta —Consejo de Indias, Junta de Guerra, Cámara, Junta de Hacienda, etc.—.

Clasificación de las consultas

Diversos criterios podemos seguir a la hora de intentar una clasificación de las consultas. Ya hemos dejado apuntado la existencia de consultas de «boca» y de consultas escritas. He aquí una primera clasificación que nos surge al considerar el modo como fueron evacuadas y que nos permite delimitar el campo de su estudio, pues al ser objeto de nuestro trabajo el documento, las consultas orales quedan fuera de sus límites.

El criterio de procedencia nos sirve también para fundar otra clasificación de ellas. Así, y abundando en lo ya dicho, haríamos dos grandes apartados:

- a) consultas que proceden de instituciones o individuos circunstancialmente asesores del soberano;

⁸² Como se prueba por el hecho de que a veces en el resumen se contienen conceptos vertidos en la resolución real. A. G. I., Indif. Gral., 740.

b) consultas evacuadas por órganos permanentes de asesoramiento.

Clasificación que también nos permite delimitar nuestro estudio, precisamente por las circunstancias como institución asesora, del organismo del que proceden. Ya dentro de las consultas que corresponden al apartado b) podríamos constituir subgrupos, en relación a la institución concreta de donde emanaron: consultas del Consejo de Indias, de la Cámara, de la Junta de Guerra, etc.

El último criterio que nos parece válido, en nuestro deseo de sistematizar la ingente cantidad de consultas que se nos han conservado, está en relación con el contenido mismo de la consulta. Es decir la materia sobre la que versa.

De acuerdo con esto distinguiremos entre consultas sobre temas de Hacienda, de Guerra, de Justicia y de Gobierno. Y concretando aún más: consultas sobre concesión de mercedes, sobre proposición de cargos —civiles, eclesiásticos, militares—, sobre defensas y fortificaciones, etc..., clasificación que se haría casi infinita pues la capacidad consultiva del Consejo que tenía «la jurisdicción suprema de todas las nuestras Indias occidentales, descubiertas y por descubrir»,⁸³ era muy amplia.

Sin embargo de entre todos los asuntos consultados hay uno que aparece como tema constante: la provisión de cargos indianos. Vamos a dedicar un estudio más concreto a estas consultas.

⁸³ *Ordenanzas de 1571*, núm. 2; *Recopilación*, lib. II, tit. I, ley 2. La disposición contenida en este último texto legal es la misma que nos transmite el primero con la variante "... y que se descubrieren" en lugar de "por descubrir".

Consultas sobre provisión de cargos

El soberano fue siempre consciente de la importancia que «para el bien publico y buen gobierno de nuestras Indias, Islas y Provincias de ellas» tuvo la elección de personas para ocupar cargos. Debían reunir una serie de cualidades tales como ser «personas de calidades, letras, virtud, entendimiento, suficiencia, experiencia y aprobación». No es de extrañar, pues, la abundancia de disposiciones que emanaron de los reyes para reglamentar el procedimiento de la elección de estas personas. De una manera genérica los nombramientos de estos cargos los hacía el rey, previo asesoramiento de sus órganos consultivos,⁸⁴ en la práctica, y durante algunos periodos, en obediencia de una disposición concreta, el Consejo fue investido de autoridad suficiente para nombrar directamente algunos cargos menores.

A lo largo de los tres siglos, durante los que se desarrolla nuestro estudio, la función asesora en esta materia estuvo encomendada, según la época, a distintas instituciones. Podríamos periodificarla de esta manera:

- a) desde la fundación del Consejo hasta 1571 es éste, como órgano colegiado, el encargado de proponer a S. M. las personas, tanto para los cargos civiles como para hacer las presentaciones de los eclesiásticos;

⁸⁴ Una lista de los cargos de gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, alguaciles, oficiales reales, etc. que se reservaba directamente el rey para nombrarlos, con acuerdo del Consejo de Indias, en Encinas, Diego de: *Cedulario*, tomo I, fols. 25 a 31.

b) a partir de 1571, concretamente a partir del 6 de octubre, siendo ya Ovando presidente del Consejo, el rey da facultad expresa para que «vos el presidente solo, nos propongays, nombreys las personas que se ayan de presentar a nuestro muy Santo Padre para prelados de las Yndias y las que en ellas nos hubieren de servir de virreyes y presidentes de qualquiera de las audiencias dellas y las que huuieren de ser oydores o alcaldes del crimen en las Audiencias que residen en Mexico y en la ciudad de los Reyesy los alguaziles mayores de las dichas Audiencias y çiudades de Mexico y los Reyes y los que en ellas huuieren de ser offiçiales de nuestra real hazienda y asi mesmo, todos los offiços, de escriuanias que se hubieren de proueer en las Indias». ⁸⁵

Y, efectivamente, desde esa fecha, mientras el Consejo tiene presidente, a él queda reservada la consulta de provisión de cargos indianos. Cuando vaca la presidencia y en obediencia de la reglamentación establecida por el mismo precepto que comentamos, esta facultad de asesoramiento vuelve al Consejo pleno. Situación que se mantuvo hasta 1591, cuando el rey, accediendo a las súplicas de los consejeros, vuelve a encomendar a todo él, como cuerpo, la propuesta de los oficios indianos. ⁸⁶

⁸⁵ En esta misma Real Cédula se concede autoridad a Ovando para que directamente y sin consulta tenga facultad para nombrar: "todas las demás presentaciones y prouisiones de benefiçios o officios seculares y eclesiásticos, juezes de comisión, escriuanos, receptores y otros cargos y comisiones para estos Reynos y fuera dellos". Real Cédula, Madrid, 3^o octubre de 1571. A. G. I., Indif. Gral., 5.821, lib. I, fols. 3 a 3v.

⁸⁶ "... quando estuviesen vacos o vacaren en las mis Indias, islas y Tierra Firme del mar Oçeano algunos arçobispados, obispados, dignidades, prebendas, canongias y otras

c) el tercer período queda inaugurado en 1600 con la creación de la Cámara de Indias, precisamente para cumplir la función de asesorar al rey en los nombramientos indianos, aunque en los períodos comprendidos entre 1609-1614; 1701-1716; 1717-1721, al estar suprimida la institución, hizo de nuevo el Consejo las propuestas.⁸⁷

Una excepción queremos señalar: a partir de 1609 y coincidiendo con la primera supresión de la recién creada Cámara, ordenó el rey que la propuesta de «los oficios tocantes a guerra, de mar y tierra, y a la hacien-

qualesquiera beneficios eclesiásticos y los cargos de virrey, Presidencias, plaças de assiento; governaciones, corregimientos, alguazilazgos mayores y menores y otros oficios de assiento o temporales, y los que se proveen y han de proveer para la administración de mi hazienda, assi en las dichas Indias como en la Casa de la Contratación de Sevilla, como son Contadurías, Tesorerías, Factorías, Veedorías, oficiales del dicho consejo, capitanes Generales de Armada y Flotas, almirantazgos y otros oficiales y ministros dellas, capitanes particulares de galeras, galeones y navíos, alcaides de fuercas y sus castillos y todo lo demás que estuviere vaco y vacare, assi eclesiástico como seglar que yo aya de proveer y se me aya de consultar, se trate en el dicho Consejo de todas las personas que parecieren a proposito y demas partes assi propuestos por Vos /El Presidente/ como por los demas del dicho Consejo y destas se me consulten tres o quatro...". Real Cédula al Presidente del Consejo, Pedro Moya de Contreras, Madrid postrero de enero de 1591. A. G. I., Indif. Gral., 1651 (Es una copia autógrafa de León Pinelo) incorporada a las Ordenanzas de 1636, como Cap. 38 y a la *Recopilación* en el lib. II, tit. II, ley 38.

En efecto hasta que murió el Presidente Ovando, él rubricaba la consultas de provisión de cargos. A partir de esa fecha y hasta 1591 cuando hay Presidente en el Consejo éste solo propone los nombramientos —así entre 1579 y 1580— siendo Presidente Antonio de Padilla, entre 1584 y 1590 cuando lo es Hernando de Vega. En caso de vacar la Presidencia —1576 a 1578, de 1581 a 1583— la proposición parte de todo el Consejo. Cfr. las consultas conservadas en A. G. I., Indif. Gral., 738 al 742.

87 Siempre que se acordó la supresión de la Cámara emana un Real Decreto declarando "la forma que se ha de observar por el Consejo en las consultas de puestos eclesiásticos, políticos y militares que tocaba a la Cámara", que en definitiva reafirma la situación que creó la Real Cédula de 16 de marzo de 1609, cuando por primera vez se disolvió la Cámara. Así el Real Decreto de 19 de marzo de 1701. A. G. I., Indif. Gral., 258.

da de armadas y flotas se consulten por la Junta de Guerra». ⁸⁸

- d) el último periodo lo inaugura la creación de las secretarías del despacho que se reservó la proposición a S. M. de los cargos importantes, fundamentalmente de carácter gubernativo, solicitando de la Cámara o Consejo asesoramiento en la provisión de los menores y de los de justicia.

Independientemente de que la consulta sobre provisión de oficios emanará del Consejo, Cámara o Junta de Guerra, en su génesis se siguió un procedimiento semejante.

En primer lugar, recibida en la institución la noticia de la vacante producida, se estudia por los miembros de ella los candidatos más a propósito, ⁸⁹ entre los que la habían solicitado ⁹⁰ o entre los que directamente proponían los

88 Real Cédula, Madrid, 16 marzo de 1609. Incorporada en: *Ordenes que se han dado para el gouierno del Consejo Real/ de las Indias y Secretarios del desde el /año pasado de quinientos y nouenta/ y siete, hasta el de seyscientos/ nueue*. B. N. M., Ms. núms. 3 - 34.336.

89 Por decreto de 2 de mayo de 1643 el rey declaró la precisa obligación en conciencia que tenían los consejeros de proponer los más virtuosos, útiles y convenientes para ocupar los oficios públicos. Vid. Voz, *consulta*, en Ayala, Manuel José: *Diccionario de Gobierno y legislación de Indias*.

90 Era inmenso el número de los memoriales que se recibían en el Consejo en solicitud de los cargos vacantes. Era costumbre que, recibida la noticia de la vacante, se pudiese un aviso en la respectiva secretaría dando cuenta de ella; se abría un plazo —generalmente de 20 días— dentro del cual se admitían solicitudes para cubrir tal cargo. Este sistema se aplicó a partir de 1792 a la provisión de las vacantes eclesiásticas (Acuerdo de la Cámara de Indias de 7 de mayo de 1792 y Oficio de Silvestre Collar a Alonso Ventura de Taranco de 28 de junio de 1793. A. G. I., Indif. Gral., 855).

Por otra parte el rey pidió siempre al Consejo o Cámara que tuviera noticia y relación de las personas beneméritas capaces de ocupar un cargo (Por ejemplo en Resolución a una consulta del Consejo de 18 mayo de 1549: incorporado a la *Recopilación*, auto 2 del lib. II, tit. II), para lo que constantemente deberían pedir a los Virreyes y Gobernadores indianos

consejeros. Si la persona no era conocida se analizaban minuciosamente las relaciones de méritos y servicios que hubieren presentado.⁹¹

Para decidir los sujetos que se propondrían al rey se llevaba a cabo una votación. Hasta el siglo XVII no hubo disposición concreta sobre el número de los que debían proponerse a S. M. en las consultas. Si examinamos éstas observaremos la irregularidad en el número de los propuestos: unas veces es uno solo; otras tres, e incluso cinco y más

nombres y opinión de personas capaces (Resolución a la consulta de 10 septiembre de 1595. A. G. I., Indif. Gral., 473).

Sobre el inmenso número de pretendientes a oficios indianos que pululaban por la Corte es muy expresivo el texto de una Real Cédula, fecha en San Lorenzo, 22 de junio de 1588, que transcribimos: "... porque mirado en que se vienen aqui muchas personas dellas con pretensiones de ser proueydos, y que de mas de muchos inconuenientes que desto se siguen, como los viages son tan largos, y de tanto trabajo y riesgo y costa, si no consiguen sus intentos, bueluen gastados y mal contentos y mi voluntad es, que en quanto fuere posible se procuren remediar los dichos inconuenientes, que principalmente consisten en el dessassosiego, trabajos y ausencias de sus casas de los dichos pretensesores, y que se de orden en ello: os mando, que luego hagays notificar a todas las personas eclesiásticas y seglares, que han venido de Indias, y estan en mi Corte en pretensiones, respectivamente los clérigos de ser presentados y proveydos en dignidades, prebendas o beneficios, y los letrados, en plazas de assiento e temporales, y los demás en gobernaciones, corregimientos, alcaldías y otros oficios assi de justicia como de hacienda, que dexando sus papeles y memoriales, se salgan luego de la Corte, y se bueluan a las Indias, en las flotas que se aprestan, apercibiéndoles a que lo cumplan ansi precisamente, y que no se detengan más, ni pierdan esta ocasión porque hasta que se ayan buuelto cada vno a la parte donde uviere venido no les dare merced, ni se tratara de sus prouisiones. Y lo mismo hareys notificar a los clérigos, letrados y otras qualesquier personas destos reynos que pretenden ser proueydos en Indias. De manera que los vnos, ni los otros entiendan que por ninguna vía han de quedar ni detenerse ahi". A. G. I., Indif. Gral., 681.

91 Por decreto de 20 julio 1643 (Recogido en la *Recopilación* como auto 130) ordené el rey que no se le consultara quienes no "calificaren sus meritos y seruicios con fees y testimonios bastantes, asi presentados por la parte, como por informaciones remitidas de oficio, hechas en las Audiencias, e informes de los Virreyes y prelados en cartas particulares, escritas a S. M. y Consejo".

para un solo cargo.⁹² Durante la décimo séptima centuria, para unificar el criterio con respecto a estos nombramientos S. M., tras prohibir que sólo se le propusiera un nombre⁹³ establece en tres el número de los que para «prelacias, prebendas eclesiásticas, plazas de asiento, corregimientos y otros oficios» se le presentaran.⁹⁴ Disposición que fue modificada en 1726⁹⁵ cuando se ordenó que además de los propuestos se incluyesen en la consulta nómina de todos los pretendientes a la plaza.

Además de los individuos propuestos, la consulta debería reflejar el salario y gajes del oficio,⁹⁶ y las calidades, méritos y servicios de cada uno de los pretendientes.⁹⁷ Si eran parientes o criados de los consejeros se debería reflejar tal circunstancia⁹⁸ y si eran religiosos los años que hacía que fueron ordenados.⁹⁹

92 Consulta de 13 junio 1578 proponiendo persona para oidor de la Audiencia de los Reyes al Dr. Artiaga Mendiola (A. G. I., Indif. Gral., 739).

Consulta de 26 enero 1595 proponiendo personas para el corregimiento de la ciudad de la Plata: a Diego de Olivares, Diego Rodríguez, Tristán de Orive, Pedro de Mercado y Luis de Sotomayor, es decir cinco individuos (A. G. I., Charcas, I). Por consulta de 18 septiembre 1597, el Consejo propone 4 nombres para alcaldes del crimen de la Audiencia de Lima. El rey responde "Nombrense mas personas" (A. G. I., Lima, I).

93 "Que para ningún cargo se proponga uno solo...": Resolución real a la consulta del Consejo de 8 de noviembre de 1607. A. G. I., Indif. Gral., 1.651.

94 Decreto de 23 de mayo de 1625. Recogida en las *Ordenanzas de 1636*, Cap. 39 y en la *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 39.

95 Resolución a la consulta de 4 de septiembre de 1726 en que se proponían sujetos para ocupar el cargo de contador de la isla de Puerto Rico. En Ayala, Manuel José: *Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias*, voz: consulta. Disposición reafirmada en resolución a la consulta de 10 de marzo de 1755 sobre la alcaldía mayor del cerro y minas de Potosí. Vid. Ayala, ob. cit., voz *consulta*.

96 Resolución a la consulta de 10 de noviembre de 1601. A. G. I., Indif. Gral., 868.

97 Real Decreto de 9 de abril de 1605, incorporado a la *Recopilación*, auto 16, lib. II, título VI.

98 En principio estaban prohibidos los nombramientos de familiares y parientes. Sólo por causas excepcionales se permitían. En este caso así se debería declarar en la consulta.

Libros registros de consultas

Al describir en el capítulo I los libros registros de documentos indianos, indicábamos cómo los hubo también de documentos *lato sensu*. Tales fueron por ejemplo los registros de consultas. Con respecto a la existencia de estos libros, el Consejo de Indias no recogía sino una práctica común en el Consejo de Castilla.¹⁰⁰ Y así las ordenanzas de la institución indiana de 1571¹⁰¹ disponen que haya «dos libros, uno en que luego como se acordare que algun negocio se nos consulte, demas de tomarlo por memoria el consultante, se ponga por memoria la sustancia de lo que como dicho es se nos uuiere de consultar. Y otro en que a lo largo se assienten en forma todas las consultas que se nos hizieren, con lo que por nos fuere respondido a ellas, firmadas del consultante que las uuiere hecho y el uno y otro esten guardados en el consejo con mucha guarda y secreto».

Y en efecto en las secretarías del Consejo se elevaron ambos tipos de registros: uno en que se transcribía el re-

Cap. 47 de las *Ordenanzas del Consejo de 1571*; Cap. 36 de las de 1636, ley 36, lib. II, tit. II de la *Recopilación*. Decreto del duque de Lerma al Presidente del Consejo de Indias, 22 de junio de 1617. A. G. I., Indif. Gral., 879.

99 Resolución a la consulta de 20 de noviembre de 1612 en que se proponían personas para el obispado de Quito. A. G. I., Indif. Gral. 1.651.

100 *Recopilación de Castilla*, lib. VIII, tit. IV, ley 2. Sobre estos registros dice Fernández Navarrete, P.: *Conservación de la monarquía*, pág. 39. "Y por ser cosa asentada que los Reyes deben pedir parecer a sus consejeros en todos los negocios arduos mandaron los señores Reyes [en la ley citada arriba] que todos los acuerdos se registrasen, para que los venideros se pudieren aprovechar de las prudentes resoluciones de los pasados, guardándoles —como dixo Platón— por cosa sagrada."

101 *Ordenanzas de 1571*, núm. 18; *Ordenanzas de 1636*, núm. 26; *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 26.

sumen del negocio a consultar, inmediatamente que, reunidos los consejeros lo habían acordado.¹⁰² Otro en el cual se asentaban las consultas de *verbo ad verbum*, además de la resolución real, una vez que éstas eran devueltas por el soberano.¹⁰³

* * *

En definitiva, pues, la consulta es un documento desde el punto de vista diplomático de los llamados *lato sensu*; desde el punto de vista jurídico es un documento de carácter interno que no hace fe en juicio, que no sale de la esfera de la administración. Para el historiador y el jurista es fuente inagotable de noticias, no sólo para construir una historia positiva sino para adentrarse en el pensamiento de los rectores de la política indiana.

Al resumirse en la consulta el hecho que la inicia, al exponer los consejeros las razones y circunstancias históricas y jurídicas que justifican su consejo y al expresar el soberano en ellas mismas su resolución, como en seguida indicaremos, la consulta, decimos, resume en sí misma las tres etapas de la génesis de la *actio* documental. En primer lugar la petición que inició el asunto; en segundo, la parti-

102 Ejemplo de este tipo, en A. G. I., Indif. Gral., 556. El Registro tiene las siguientes características: libro tamaño folio, encuadernado en pergamino de 310 folios numerados, más diez sin numerar, que recogen el índice onomástico y topográfico de las consultas transcritas: En el lomo dice: Consultas desde 31 de marzo de 1739 hasta 12 noviembre de 1745. En su interior se resume el asunto consultado.

103 Cfr. A. G. I., Indif. Gral., 557: libro tamaño folio encuadernado en pergamino, 462 fols. numerados. Se recoge la consulta completa y la resolución real. Al margen del folio se indica un resumen de su asunto, los nombres de los consejeros que la rubricaron y la institución que la elevó al monarca, su fecha.

cipación de los consejeros junto al soberano en el nacimiento del hecho o negocio; en último lugar este mismo hecho, nacido de la resolución real, tal como inmediatamente se documentará adoptando el tipo diplomático que le convenga.

b) Intervenciones en la *actio* del documento emanado de autoridades indianas

Más arriba¹⁰⁴ expusimos cómo dividiríamos en dos epígrafes el tema de los intervinientes en la *actio* cuyo vehículo de expresión es el documento público. Abordado en las páginas precedentes el estudio de los organismos asesores del soberano, tocanos ahora el análisis de los intervinientes en la *actio* emanada de las autoridades indianas. Centraremos la cuestión en torno a la máxima jerarquía de estas autoridades: virreyes y presidentes-gobernados.¹⁰⁵

Con respecto al tema hemos de distinguir entre órganos o personas circunstancialmente asesores en un asunto concreto y los que permanentemente ejercen esa misión. Como hicimos al estudiar los órganos consultivos del monarca, prescindimos de los que esporádicamente ejercieron esta función junto al virrey, precisamente por la circunstancialidad de su consejo.

104 Vid. en este capítulo pág. 84.

105 Presidente-gobernador era la máxima autoridad política militar de ciertas provincias indianas, independientes de la autoridad virreinal y directamente subordinadas al rey. Estaba investido de las mismas prerrogativas y ejercía los mismos poderes en la jurisdicción de su gobernación que los virreyes en las suyas, excepto el ser representantes personales del monarca. Preside la Audiencia que reside en la cabecera de su provincia, aunque por no ser perito en derecho no tiene voto en los asuntos judiciales. La Audiencia que preside se llama *Audiencia pretorial*.

LA REAL AUDIENCIA

Legalmente los virreyes y presidentes - gobernadores ejercen pleno poder con las excepciones que la ley les marca y sólo están sujetos en su gestión al rey y a su representante el Consejo de Indias. De aquí que «pueden hacer y despachar en las provincias de su gobierno, en los casos que especialmente no se les hubiere exceptuado, todo aquello que pudiere el príncipe que los nombró, si en ella se hallara presente, y que por esta razón y causa, su jurisdicción y potestad se ha de tener y juzgar más por ordinaria que por delegada». ¹⁰⁶ No necesitan legalmente de ningún asesoramiento en el desempeño de sus oficios, sin embargo, en la práctica, y por razones obvias, se sirvieron, como tendremos ocasión de señalar, de asesores.

Entre las instituciones asesoras permanentes de los virreyes y presidentes-gobernadores, ocupa el primer lugar la Audiencia. En efecto, recién creado el Juzgado y Audiencia de apelación en Santo Domingo, en 1511, se dispone que el gobernador de la isla debería reunirse con los jueces de apelación «a platicar e proveer en todas las cosas que se ofrecen tocantes a la población y estado de aquellas partes...», ¹⁰⁷ y en las instrucciones a los virreyes se les ordena:

106 Solórzano Pereira, Juan: *Política indiana*, tomo IV, cap. XIII, párrafo 2.

107 En principio la frase entrecomillada puede interpretarse como que los jueces de apelación deberían ser cogobernadores y no meros asesores del gobernador. Así lo entendió el gobernador Diego Colón, que pleiteó sobre su derecho a gobernar solo. (Cfr. Armas Medinas, Fernando: *La Audiencia de Canarias*, págs. 11-12). Sin embargo, la disposición se refería a que los oidores fueran asesores; así se recogió más adelante en la *Recopilación*, lib. III, tít. III, ley 45, donde se dice: "Es nuestra voluntad que los virreyes solos provean y determinen en las materias de gobierno de su jurisdicción; pero será bien que siempre comuniquen con el Acuerdo de oidores de la Audiencia donde

«en las cosas que tocaren a la gobernación de esa tierra entenderéis vos solo conforme a las provisiones e instrucciones que para ello os he mandado dar; pero sera bien que siempre comuniquéis con los dichos oidores las cosas importantes y que a vos os pareciere para mejor acertar y seguireis lo que despues de comunicado con ellos os pareciere». ¹⁰⁸

Es decir, que además de su función primordial de tribunal de justicia, la Audiencia se constituye en órgano asesor de los virreyes y presidentes-gobernadores.

Es en esta su función asesora cuando se le conoce, con terminología de la época, con el nombre de *Real Acuerdo*.

EL ASESOR GENERAL

Fue costumbre general entre los virreyes nombrar a una persona como asesor «para las materias de gobierno y guerra». Sabida en la corte esta práctica se extendió, ahora por disposición real, a todos los gobernadores y capitanes generales de Tierra Firme y a los presidentes-gobernadores de las audiencias. ¹⁰⁹

presiden, las que tuviesen los virreyes por más arduos e importantes para resolver con mejor acierto, y habiéndolas comunicado resuelvan lo que tuvieren por mejores."

108 Recogido en las Instrucciones que se daban a los Virreyes, y que puede extenderse a los Presidentes-gobernadores. El texto entrecomillado corresponde al capítulo 70 de la Instrucción de gobierno dada al electo virrey del Perú, Conde de Chinchón, en Madrid, a 15 de marzo de 1628. A. G. I., Indif. GraI., 512, lib. I. (*Despachos de virreyes del Perú*), fols. 132-133. En este mismo legajo y en el siguiente —513— existen otras instrucciones, anteriores y posteriores, de virreyes del Perú y Nueva España. En todas se les preceptúa lo mismo sobre este asunto.

109 Cfr. Ayala, Manuel José: *Diccionario de gobierno*, tomo I, pág. 351. La ley 35, tít. III, del lib. III de la *Recopilación* dispone que el asesor no debe ser oidor de la Audiencia.

La misión fundamental de este asesor, perito en derecho, consistía en aconsejar a la autoridad en materias de justicia dado que ésta no era funcionario *togado* y sí de *capa y espada*. Sin embargo, de los asuntos judiciales pasó a intervenir en los extrajudiciales y en general su opinión fue muy consultada por los virreyes y gobernadores.

FISCAL DE LA AUDIENCIA

Al ser el fiscal, por su propio instituto, defensor de los derechos y hacienda reales, era considerado por los virreyes y presidentes-gobernadores, como asesor indiscutible de los asuntos gubernativos. Raro era el expediente que no pasaba por sus manos. Su conocimiento de las leyes hacía muy valioso su consejo.¹¹⁰

JUNTA DE HACIENDA

Por último para los asuntos hacendísticos tienen como asesor permanente la Junta de Hacienda. La constituyen, bajo la presidencia del virrey o presidente-gobernador, los oidores y los oficiales reales y contadores.

Tuvo su origen en la junta que, para asesorarse en materias hacendísticas, constituyó el gobernador del Perú La Gasca y a partir de entonces se aconsejó a los virreyes en sus instrucciones que las formaran.¹¹¹

* * *

110 Cfr. *Recopilación*, lib. II, tít. XVIII.

111 Cfr. las Instrucciones citadas en la nota 112 de este mismo capítulo. Trata de estas Juntas de Hacienda: Sánchez-Bella, Ismael: *La Organización Financiera*, cap. IV, pág. 201.

La proximidad de los órganos asesores de la autoridad indiana, hicieron que muchas veces la transmisión del consejo, es decir la participación en la futura *actio* de los intervinientes, fuese oral. Cuando tomó forma escrita el documento que la transmitió —documento *lato sensu*— no tuvo unas características formulísticas determinadas. Su redacción fue bastante libre.¹¹²

Comunicación de la *actio*

En teoría el hecho jurídico y su puesta por escrito son simultáneos, cuando se trata de documentos dispositivos. Con respecto al documento público, siguiendo en esta línea de pura teoría, sólo podría conseguirse esta circunstancia en los documentos que emanaron ológrafos o autógrafos de la autoridad pública, pues, a primera vista podríamos pensar que al realizarse la *Conscriptio* en una oficina, más o menos alejada de la autoridad pública, el negocio a documentar tiene que surgir con anterioridad a su puesta por escrito. Un más atento examen nos permite aclarar la cuestión y a la vez fijar una nueva etapa, la última, en la génesis de la *actio*. En efecto, la autoridad de quien emana el negocio jurídico, dados los usos burocráticos de la época, necesita comunicarlo al funcionario encargado de su puesta por escrito. Todavía no podemos hablar de *actio*; ésta aún no existe, no es posible que engendre ni derechos ni obligaciones, su conocimiento queda dentro de la esfera de la

112 Pueden verse algunos de estos informes: del Fiscal de Nueva España Doctor Posada, México, 6 octubre 1781. A. G. I., México, 1362. Del asesor del virreinato de Perú D. Manuel Romero, Lima, 2 abril 1768. A. G. I., Lima, 689.

Al Conde de Monterrey que va a Roma con cien-
ta embaxada extraordinaria he hecho mud de ocho
mil ducados de ayuda de costa. Hacer que se libren
por este Con: y paguen en los effectos mas pronto
que fuere porque conuene mucho a mi servicio
y pasta luego.

En San Juan a 30 de Abril 1628

Al Gran Canciller de la India

Real Decreto, Aranjuez, 30 de abril 1628 (A. G. I., Indif., 756).

Está dirigido al Consejo de Indias, en la persona del Gran Canciller, que ostenta la presidencia de la institución cuando no hay presidente nombrado. El Rey sólo rubrica el documento. (Vid. pág. 121).

administración. La autoridad sólo ha anunciado el negocio a documentar que sólo adquirirá su perfección una vez puesta por escrito, rodeada de las cláusulas jurídicas y de la solemnidad diplomática que le son propias. Por esta razón, la comunicación del negocio a las instituciones documentarias la consideramos como una etapa en la génesis de la *actio* y no impide que califiquemos al documento como dispositivo.

El decreto

La comunicación del negocio a documentar al oficial encargado de su *conscriptio*, adopta, generalmente, forma escrita. Desde el momento que tomó esta forma la *actio* emanada de la autoridad se denomina, utilizando terminología de la época, *decreto*.

A fin de describir las características del decreto —por que así se llamó también al documento que transmite el negocio o asunto— nos conviene recordar cómo la *actio* surge de la autoridad, previa consulta— que se plasma en el documento del mismo nombre— de organismos asesores permanentes o por propia iniciativa de la autoridad.

En el primer caso, la *actio*, el *decreto*, queda estampado en la misma consulta. El procedimiento que sigue en este caso la autoridad es bien sencillo. Si acepta el parecer del consejero, lo hace suyo mediante frases como: «Assi; haga-se como parece; podrase hacer lo que se me ha consultado»; ¹¹³ si se muestra disconforme expone el suyo propio:

113 Los ejemplos corresponden a resoluciones reales. Están escritas en las consultas que respectivamente son de 18 julio 1578 (A. G. I., Indif. Gral., 739, núm. 99); 14 di-

«He visto lo que dezis y los motivos que las dos partes tienen para fundar su parecer y tengo por mas seguro y que sera mas conueniente no dar la lança a Rodrigo de Esquivel porque sería intrduccion y consecuencia, que es cosa que se deue en quanto se pudiere excusar. Y assi se haga». ¹¹⁴

El decreto, estampado en la consulta puede ser manuscrito por el mismo soberano o escritos por el secretario que en su presencia asiste al despacho. ¹¹⁵

En el segundo caso, la *actio*, se transmite en documento independiente, también llamado decreto (real decreto, si la autoridad es el soberano). Desde el punto de vista diplomático tendremos que incluirlo, al igual que los memoriales, peticiones y consultas, en el grupo de los que hemos llamado *lato sensu*, pues es el vehículo de una de las fases de la *actio* y no verdadero documento diplomático.

Sus características formularias son sencillas. Se prescinde de toda solemnidad y sólo se expresan las cláusulas esenciales: la exposición de motivos, la resolución de la autoridad, la fecha y la dirección. El documento queda validado por la rúbrica de la autoridad. Con respecto a su

ciembre 1584 (A. G. I., Indif. Gral., 740, núm. 295); 11 marzo 1578 (A. G. I., Indif. Gral., 739, núm. 56). En alguna ocasión, formando parte del Decreto, encontramos la *iusso* u orden para hacer el documento: "está bien lo uno y lo otro y háganse los despachos": consulta de 15 de febrero de 1576, en A. G. I., Indif. Gral., 738, núm. 175, tema del que nos ocuparemos en el próximo capítulo.

¹¹⁴ En consulta del Consejo de Indias decretada por el rey, Madrid, 16 diciembre 1581. A. G. I., Indif. Gral., 739, núm. 394.

¹¹⁵ Es Felipe II el soberano que más decretos autógrafos nos ha dejado, circunstancia muy acorde con su personalidad. La lectura de sus decretos ocasiona grandes dificultades por la cursividad de su letra. Cfr. A. G. I., 19 mayo 1569, Indif. Gral., 132, docs. 96, y otros muchos anteriores y posteriores a éste.

estructura externa, diremos que excepto la dirección, que va situada al pie del documento, todas las demás cláusulas forman una unidad o cuerpo.¹¹⁶

Capítulo III

GENESIS DE LA CONSCRIPTIO DEL DOCUMENTO INDIANO

La resolución dada por la autoridad a la conscripta, o en otro caso el decreto, supone el nacimiento del acto jurídico, como acabamos de exponer en el capítulo precedente. Sin embargo, para que los derechos y obligaciones que tal negocio engendra cobren plena efectividad es jurídicamente necesaria su publicación o en caso de tener una dirección restringida el conocimiento y obediencia por parte del destinatario de tal negocio. Es necesario, pues, para cumplir esta requisito su puesta por escrito, con lo que a la vez sirve de vehículo de transmisión de la disposición, se convierte en prueba del hecho. En tal caso es cuando podemos hablar de verdadero documento, de acuerdo con el concepto que de él exponemos en su correspondiente lugar.

Al igual que hemos observado y distinguido una serie de casos en la acto jurídico, su puesta por escrito, su conscripción con terminología técnica, surge tras cumplir una serie

116 Cfr. Real Decreto de 11 de julio de 1768, dirigido al Secretario del Consejo de Indias. A. G. I., México, 2.410. Real Decreto de 8 de enero de 1638. A. G. I., Indif. Gral., 761. Decreto del virrey de Nueva España, Martín de Mayorga, al secretario de Cámara, Pedro Antonio de Cossío. A. G. I., México, 1.315.

Capítulo III

GENESIS DE LA CONSCRIPTIO DEL DOCUMENTO INDIANO

La resolución dada por la autoridad a la *consulta*, o en otro caso el *decreto*, supone el nacimiento del acto jurídico, como acabamos de exponer en el capítulo precedente. Sin embargo, para que los derechos y obligaciones que tal negocio engendra cobren plena efectividad es jurídicamente necesaria su publicación o en caso de tener una dirección restringida el conocimiento y obediencia por parte del destinatario de tal negocio. Es necesario, pues, para cumplir este requisito su puesta por escrito, con lo que a la vez que sirve de vehículo de transmisión de la disposición, se convierte en prueba del hecho. En tal caso es cuando podemos hablar de verdadero documento, de acuerdo con el concepto que de él expusimos en su correspondiente lugar.¹

Al igual que hemos observado y distinguido una serie de fases en la *actio* jurídica, su puesta por escrito, su *conscriptio* con terminología técnica, surge tras cubrir una serie de etapas cuya existencia tiende a garantizar la absoluta

1 Vid. Introducción.

fidelidad entre la *actio* emanada de la autoridad soberana y su *documentación* y a proclamar su inequívoca paternidad.

Iussio

El proceso comienza con la orden dada por el autor para que se ponga por escrito el hecho recién surgido.

Por supuesto la autoridad de la que emanó el negocio, cualquiera que fuera su esfera de atribuciones, podía por sí misma realizar la *documentación* del mismo; sin embargo por razones obvias, desde siempre tuvo a su disposición una oficina, encargada de tal actividad, que recibiría diversos nombres, y aunque en su momento analizaremos la estructura y organización de las encargadas de la redacción del documento indiano, adelantemos que cumple estos menesteres la secretaría del Consejo de Indias y la de la «*vía reseirvada*», con respecto al documento emanado de la suprema autoridad pública² y la escribanía de goberna-

2 En alguna ocasión la *conscriptio* del documento real de tema indiano se llevó a cabo fuera del Consejo, no con la aquiescencia de este organismo, que presentó su respetuosa protesta al soberano: "...de tal manera que todas las cédulas y prouisiones de cosas tocantes a Yndias se han despachado por este Consejo y siendo esto assi de algun tiempo aca se ha tenido otra orden en algunos casos como en el officio de contador de la Casa de Sevilla que se dio a Ortega de Melgalosa, licençias para permanecer en España etc. que después de haber consultado este Consejo a S. M. sobre ellos y nombrado personas se les dieron alla las provisiones sin hacerse el despacho por este Consejo..." El Secretario real, en nota manuscrita sobre la misma consulta, aconseja al rey la respuesta: "parece que lo que se le deve desponder es que lo que hasta aqui se a hecho a sydo por conuenir asy a su seruicio por causas que se an ofrescido y que en lo de adelante su magestad terna cuenta con el autoridad de aquel consejo", Consulta de 12 de marzo de 1558, A. G. I., Indif. Gral., 738.

En diversas fechas se dieron tajantes órdenes para que no se cumplieran despachos expedidos por instituciones distintas del Consejo de Indias. Cfr. Real Cédula, Madrid, 29 julio 1675, por la que se comunica al virrey del Perú que no cumpla despachos que

ción la que ejecute los que expiden los virreyes y gobernadores indianos.

En el caso de la puesta por escrito de la *actio* emanada de la autoridad soberana la *iussio* parte siempre de esa misma autoridad. Claro está que unas veces se expresa de manera explícita y otras lo es de un modo implícito.

Bueno será recordar los tres procedimientos que hemos señalado con respecto al nacimiento de la *actio*, del hecho jurídico a documentar que emanó del rey, a fin de puntualizar sobre esta cuestión:

a) directamente del rey o con consulta de personas o instituciones ajenas al Consejo de Indias.

En este caso siempre existe la orden explícita del rey dirigida al presidente o gobernador del Consejo: «Háganse todos los despachos del cargo del virrey del Perú»;³ «Haganse luego los despachos que tengo resuelto para la execución de las propuestas de Don Juan de Cabrera Girón...».⁴

b) del rey, previa consulta del Consejo de Indias.⁵

expidiere y remitiere el Consejo de Ordenes no yendo sobrecartados por el de Indias. A. G. I., Indif. Gral., 430, fol. 371 v.

3 Decreto marginal en consulta del Consejo de Indias sobre otro asunto, Madrid, 27 septiembre 1583. A. G. I., Indif. Gral., 740.

4 Real Decreto al Presidente del Consejo, Conde de Castrillo, 1 de agosto de 1639. A. G. I., Indif. Gral., 761.

5 Para que el Consejo iniciase la consulta no hacía falta precepto concreto del rey. Esta facultad general, concedida desde el momento de su fundación, es actualizada en diversas ocasiones. En 1701 le escribe el rey al Consejo: "que en cuanto pertenezca a su Instituto me consulten con celo, cristiana libertad y suma pureza y sin respeto humano lo que juzgaren ser de mi obligacion y mas conveniente a mis reynos y porque el secreto es el alma de las resoluciones encargo y mando que se observe religiosamente advirtiéndole que hace gran cargo al que faltare en lo que tanto importa". Real Decreto al marqués del Carpio, presidente del Consejo de Indias. Madrid, 26 febrero 1701. A. G. I., Indif. Gral., 258.

Generalmente la *iussio* viene implícita en la resolución real: «Esta bien todo lo que en esto dezis, y assi se haga». ⁶ Recibida la orden por el presidente del Consejo, es éste el que decreta la *iussio* al secretario del Consejo: «Remito a v. m. las consultas inclusas para que conforme a las resoluciones de S. M. ejecute Vm. los despachos con toda brevedad». ⁷

Sin embargo, aunque muy excepcionalmente, la orden real puede aparecer explícitamente expresada en la misma respuesta a la consulta: «Esto es una cosa muy conveniente, y assi se haga ordenándolo luego, para que los despachos que fuesen para el Peru vayan en esta flota». ⁸

c) del Consejo de Indias, facultado previamente por parte de la autoridad soberana que, por supuesto, validará el documento. ⁹

En este último caso, la *iussio* está contenida implícitamente en esta cesión de facultades y la orden explícita parte concretamente del secretario del Consejo que asistió a la sesión en la que los consejeros acordaron el nacimiento del acto jurídico. El secretario la transmite a los oficiales de la secretaría: «Despachese cedula para que el virrey de Nueva España...». ¹⁰

6 Resolución real a una consulta del Consejo de Indias, Madrid, 8 mayo 1581. A. G. I., Indif. Gral., 739.

7 Decreto del Presidente del Consejo, D. Pedro Portocarrero, al secretario del Consejo, D. Gabriel Bernardo de Quirós. A. G. I., Indif. Gral., 880.

8 Resolución a la consulta del Consejo, Madrid, 13 de enero de 1582. A. G. I., Indif. Gral., 740.

9 En efecto, el Consejo de Indias, de acuerdo con sus ordenanzas, está facultado para resolver una serie de asuntos y para que éstos se documenten a nombre del rey. La consulta que en estos casos eleva al rey es anunciándole el envío del documento y rogándole que lo valide con su firma. Así, "...la cedula va ordenada en esta sustancia para que si S. M. fuere servido la mande firmar": Consulta de *remisión* de 16 diciembre 1563. A. G. I., Indif. Gral., 738.

10 Acuerdo del Consejo, Madrid, 10 octubre 1671. A. G. I., México, 277.

Se transmita de una manera explícita o implícita, la *iussio*, que desencadenará el proceso que finalizará con el despacho del documento, parte, pues, de la autoridad soberana. Y así se hará constar en el original donde el secretario acompaña su nombre y rúbrica de fórmulas como: «Por mandado del rey nuestro señor N.», o «Yo N., secretario de sus cesarea y catholicas magestades la fize escreuir por mandado de su alteza». Y si en la primera fórmula podría pensarse que se refería a la *actio* y no a la *conscriptio*, en la segunda, característica de las reales provisiones, el «la fize escreuir por mandado de su alteza» no deja lugar a dudas.

Paralelamente, la documentación de la *actio* emanada de las autoridades delegadas se inicia mediante la *iussio* de esa autoridad —virrey, gobernador, etc.— a la oficina encargada de llevar a cabo este menester, en la persona de su jefe, el escribano o secretario de gobernación o de cámara de justicia, según la materia documentada, los cuales dejarán constancia de la procedencia de esa orden en la fórmula del refrendo.

Mención especial merece el problema que plantean los documentos que emanan de autoridades o instituciones subordinadas, a nombre del soberano. Tal, por ejemplo, de virreyes, Audiencias o Consejo de Indias.¹¹ Si analizamos la fórmula de refrendo en estos documentos: «Yo NN. secretario de Camara de su catolica magestad la fice escribir por su mandado, con acuerdo del su presidente y oidores», o esta otra «Yo N. secretario de gobernación del rey nuestro

11 Nos referimos a las Reales Provisiones, documentos que, según analizaremos más adelante, podían emanar de estas instituciones a nombre del rey. Cfr. capítulo V.

señor la fize escribir por su mandado, su virrey en su nombre»,¹² observamos cómo el secretario lo escribe por orden del rey. Sin embargo, nos consta que tanto el hecho documentado como su puesta por escrito, surge y se realiza sin la directa intervención del monarca. La razón de la aparente paradoja hay que buscarla en la disposición que autorizaba a las autoridades indianas a documentar a nombre del rey. Cada vez que una de estas instituciones emitía un documento de este tipo, es decir, cada vez que actualizaba esa disposición que genéricamente lo autorizaba, era como si el rey mismo ordenara en cada caso la puesta por escrito del negocio.¹³

Así, pues, en este tipo de documentos la *iussio*, al igual que la misma *actio*, aunque aparentemente emana en cada caso de la autoridad soberana, directamente la ordena parte de la institución o individuo a los suales, como norma general, el rey les tiene cedida esa facultad.

Minutatio

Como acabamos de exponer la orden para que se do-

12 Vid., por ejemplo, la Real Provisión de la Audiencia de los Reyes: "Dada en la ciudad de los Reyes a ocho días del mes de marzo de mill e quinientos e setenta y dos años". A. G. I., Escribanía de Cámara, 498 A.; Real Provisión emanada del virrey de Nueva España, Luis de Velasco, México, 28 abril 1555. A. G. I., México, 19.

13 Aunque más adelante —Capítulo V— insisteremos en este punto, transcribimos a continuación uno de los preceptos en que se autoriza a la Audiencia de México a despachar a nombre del rey: "Otrosy, es nuestro merced e voluntad que los dichos nuestros Presidentes e Oydores que agora son o por tiempo fueren, libre y despachen todas las cartas y provisiones y cartas executorias que dieren, con nuestro título y con nuestro sello y registro...": *Ordenanza II* de las de la Audiencia de México, Madrid, 12 de julio de 1530. En Puga, Vasco de: *Provisiones, cédulas*, fol. 56v.

cumente el negocio jurídico en cuestión, cuando se indica explícitamente, sólo consiste en ordenar su puesta por escrito. El análisis de los documentos dispositivos originales conservados nos muestran diversos tipos diplomáticos —reales provisiones, reales cédulas, mandamientos, etc.—. ¿A quién compete, pues, la elección de ese tipo? En esta ocasión sólo dejamos planteado el problema que será objeto de adecuado tratamiento en próximas páginas.¹⁴

Démoslo ahora por elegido o decidido.

La fase inmediata sería la redacción del documento, es decir, la puesta por escrito de la *actio* que se vertería en una serie de fórmulas jurídico-literarias, más o menos iguales para cada clase de documentos.

Los documentos son títulos jurídicos que tienen su fundamento en la *actio* correspondiente. Por esta razón deben estar concebidos y expresados en fórmulas concisas y exactas, con un orden graduado y constante, sin que puedan dar lugar a subterfugio ni interpretación ambigua dentro del asunto que se trata de documentar. Esta es la razón fundamental por la que antes que la *actio* adquiera su forma definitiva se hace un escrito preparatorio que llamaremos *minuta* y sobre la cual podrán hacerse las correcciones pertinentes para que la expresión de la *actio* goce de validez jurídica y se acomode a las fórmulas de estilo.

La existencia de la minuta es consecuencia de una necesidad práctica, es una costumbre burocrática. La legislación no obliga a su confección,¹⁵ y aunque sin temor a

14 Vld. Capítulo V.

15 Ni en las Ordenanzas del Consejo de 1571 y 1636, ni en la Recopilación se menciona la existencia de la minuta. Tampoco hemos encontrado ningún precepto no recopilado que la exija.

equivocarnos podemos asegurar que muy pocos documentos emanaron de la autoridad competente sin que antes tomaran cuerpo en una minuta, si existieron esos pocos casos. Así, sobre el extracto de una carta del virrey de Nueva España, aparece la resolución autógrafa del ministro José Godoy: «Aprobada. Febrero, 22, 1796», y más abajo, de otra letra: «Fecho en 4 de marzo, sin minuta». ¹⁶

Dado el carácter de escrito preparatorio que le hemos asignado, la minuta no presentará un aspecto formal cuidado, antes bien, resumirá algunas fórmulas de estilo, tales como la intitulación; carecerá absolutamente de los signos de validación y de la data. Sobre ella se harían las enmiendas pertinentes por lo que mostrará tachaduras y escritura entre renglones. ¹⁷

Todas estas circunstancias harán que carezca en absoluto de valor jurídico, y sin embargo, la minuta cobraba para los responsables de la administración indiana un valor indudable, pues quedaba incorporada al expediente que originó el asunto documental como testimonio, si no fidedigno y fehaciente, al menos administrativo e histórico del original que lógicamente fue a parar a su destinatario. Y si este valor se le reconoció cuando aquellas instituciones eran organismos vivos, ahora a distancia de siglos presta al historiador un valor incalculable habida cuenta de la necesaria dispersión de los originales. ¹⁸

16 El documento en A. G. I., Estado, 23.

17 Una abundante colección de minutas en A. G. I., Indif. Gral., 681.

18 En efecto los archivos de cualquier institución conservan las minutas, copias y registros de la documentación que en el ejercicio de sus funciones emanaron de ella. Por otra parte conservan los originales de los documentos que recibieron.

El Archivo General de Indias guarda los originales de los documentos que le llegaban procedentes de Indias y las minutas, copias y registros de los que se enviaron a aquellas

Generalmente la minuta se hacía en cada caso en papel aparte; no obstante, cuando la *actio* a documentar consistía en la prorrogación de una merced, la minuta se hizo sobre la copia del primer documento de concesión de ella, actualizando las nuevas circunstancias. Para lo cual se tachaban sobre la copia y se escribían entre renglones las modificaciones en cuestión.¹⁹

¿Quién es el autor material de la minuta?

Si la legislación, como ya hemos apuntado, ni siquiera presupone la existencia de la minuta, tampoco hubo precepto alguno que reglamentara las funciones del encargado de su confección.

La *conscriptio* documental, de acuerdo con las disposiciones legales cae dentro de la esfera de actuación de los secretarios.²⁰ Estos tendrían que «hacer y ordenar los despachos en su oficio». Teóricamente son ellos los autores de la minuta, como lo son también de los documentos ya en limpio (*mundum*). En la práctica son los oficiales de su oficina los directamente encargados de redactarlos, aunque pensamos que ejercerían una labor de revisión sobre éstas.

provincias. Sin embargo, desde el momento que en sus fondos están incluidos también el Archivo de la Casa de la Contratación y de las gobernaciones de Cuba, Puerto Rico, Luisiana y la Florida, hemos podido consultar sus propios originales enviados a aquellas instituciones.

19 El Cabildo secular de San Juan de Puerto Rico solicitaba en 1620 la prórroga de la merced concedida por Real Cédula de 23 de enero de 1616 de no pagar más que el 7'5% de impuestos sobre los frutos de la tierra vendidos en España. Concedida la prórroga por cuatro años, para redactar el nuevo documento utilizaron los oficiales de la Secretaría del Consejo la copia simple de la Real Cédula de 23 de enero de 1616, haciendo sobre ella las modificaciones pertinentes. Cfr. Real Díaz, J. J.: *Peticiones y Memoriales*, núm. 186, folio 108.

20 Cfr. *Recopilación*, lib. II, tít. VI, leyes 5, 10, 13, 16 y 19. Ahora sólo los citamos, más adelante volveremos sobre ellas.

Quizás intervendría también en esta revisión el consejero semanero.

Formularios

El funcionario encargado de redactar la minuta debía dar forma a la *actio* que se le había comunicado inserta en un decreto. En él, como hemos tenido ocasión de observar, sólo se recogía el asunto o negocio jurídico. Debería, pues, revestir esa *actio* de una serie de fórmulas, jurídica y diplomáticamente necesarias, que variarían según las circunstancias de lugar, tiempo, materia y persona, según el asunto a documentar o de acuerdo con el tipo diplomático a adoptar.

Sin embargo, junto a estas razones que diversificaban la expresión formulística del documento incidirán otros factores que producirán un efecto contrario, es decir, la semejanza estructural de muchos de ellos como consecuencia de la igualdad de las ideas y hechos que muchos contienen o consignan.

Partiendo de esta realidad es lógico, pues, a la vez que constante realidad cancelleresca, que los amanuenses y oficiales de las instituciones documentarias, llevados de la ley del menor esfuerzo y obligados por la necesaria precisión conceptual de que deberían gozar los documentos, a la hora de darles forma, tuvieran presente modelos admitidos por el uso o sancionados por las leyes. Estos modelos pueden ser de dos tipos: o documentos anteriores auténticos y reales o colecciones de fórmulas especialmente agrupadas, cuya formación puede, a su vez, tener un doble origen: tomados

de documentos originales, aunque despersonalizándolos o artificiosamente hechos, al plasmar en cláusulas documentales preceptos jurídicos.²¹

En todos los casos estos modelos han recibido desde siempre el nombre de formularios.²²

Formularios indianos

¿Se sirvieron de formularios los oficiales encargados de la *conscriptio* del documento indiano?

Ciñámonos concretamente a los que emanan de la máxima autoridad.

En los preceptos que reglamentan las funciones de los secretarios del Consejo aparece uno que sanciona la obligatoriedad de su formación.²³

«Porque el despacho del Consejo de las Indias sea todo mas conforme, facil y presto, mandamos que se haga formulario de todos los titulos de oficios, presentaciones y otros

21 De este último tipo son fundamentalmente los formularios de documentos notariales. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se publicaron numerosos tratados, mitad teóricos, mitad prácticos, conocidos bajo el título genérico de "Cartillas de escribanos". Fueron famosos los de Gabriel Monteroso (Madrid, 1579); Diego de Ribera (Madrid, 1605), Antonio de Argüello (Madrid, 1643), Francisco González Torneo (Madrid, 1651), Tomás de Palomares (Madrid, 1646), Pedro Melgarejo (Madrid, 1667), Juan de la Ripia (Madrid, 1755), etc.

22 Juristas y diplomatas se han dado cuenta del enorme valor que para ambas disciplinas tiene el estudio de los formularios. El A. H. D. E., publica frecuentemente formularios medievales españoles. Por ejemplo: Cuesta Gutiérrez, María Luisa: *Un formulario inédito de Cataluña*; Idoata, Florentino: *Un formulario de la Cancillería navarra del siglo XV*; Sánchez, Galo: *Colección de fórmulas jurídicas castellanas de la Edad Media*; Usón y Sesé, M.: *Un formulario latino de la Cancillería real aragonesa*, etc.

23 Recopilación, lib. II, tit. X, ley 2 que recoge la ordenanza núm. 183 de las Ordenanzas de 1636.

despachos ordinarios visto y aprobado por los del Consejo, por el cual se ordenen y despachen todos los que en el se hubiesen de hacer, e como los despachos se fueren haciendo ordinarios, se vaya haciendo formula de ellos, y ninguna de las hechas y aprobadas por el consejo se puedan alterar ni mudar en lo general ni en parte de ello, sin aprobación y autoridad del consejo».

Obligación que también se exige al escribano de cámara: «...y tenga formulario de los despachos ordinarios de su oficio...». ²⁴

Preceptos de los que podemos entresacar una serie de consideraciones sobre el origen, finalidad y formación de los formularios indianos, de acuerdo con la mente del legislador.

En primer lugar, la disposición apunta los fines que se persiguen con la utilización de ellos: conformidad, facilidad y rapidez en la conscripción de los documentos. Se hace descansar en el Consejo la responsabilidad de aprobar y sancionar los formularios a utilizar. Por último nos permite entrever el proceso de su formación: a medida que fuesen emanando documentos de estructura semejante se deberían constituir en formulario para los que conteniendo el mismo negocio jurídico surgieran posteriormente.

Veamos ahora la realidad de esta cuestión: el contador general del Consejo, Ortiz de Landázuri, en 1768 exponía que «apenas hay negocio en las Secretarías del Patronato que no tenga ya modelo y ejemplares idénticos o muy semejantes para la ordenación y forma de su despacho, al

²⁴ Ordenanza 94 de las del Consejo de Indias de 1571; 135 de las de 1636 y ley 22, tít. VI, lib. II de la *Recopilación*.

igual que ocurre en las Secretarías de los Consejos de Ordenes y Hacienda. Bien al contrario de las de Indias, donde como país nuevo, en que a proporción que se adelantan las reducciones, provincias, ciudades, reinos y minerales, o se arruinan otros, es necesario formar ordenanzas, reglas, disposiciones acomodadas a el semblante y constitución de los parajes y por esto no hay ni puede haber formulario fijo, pues hasta los títulos e instrucciones de los virreyes, gobernadores, corregidores y demás empleados se mudan y alteran frecuentemente, añadiendo unas cláusulas y suprimiendo otras, según dictan el tiempo y las circunstancias...». ²⁵

No nos cabe la menor duda sobre el conocimiento que Landázuri tenía de los procedimientos burocráticos del Consejo pero nos parece —y la realidad viene en nuestro apoyo— que es excesivamente exagerado en su apreciación.

La investigación en los papeles del Consejo de Indias, nos ha permitido sistematizar hasta tres procedimientos empleados por los oficiales para redactar nuevos documentos.

1) Formularios constituidos utilizando copias de documentos originales, aunque despersonalizándolos. Así hemos encontrado:

a) Una copia de real provisión en que se concede facultad para hacer mayorazgo que, además de llevar la fecha en blanco, comienza: Don Carlos, etc. por cuanto por parte de vos *fulano* nos fue fecha relación. ²⁶

²⁵ Informe del contador General del Consejo de Indias, Tomás Ortiz de Landázuri, emitido en 9 de agosto de 1768 sobre una petición de aumento de sueldo de los oficiales de las Secretarías de Nueva España y Perú del Consejo. A. G. I., Indif. Gral., 846.

²⁶ A. G. I., Patronato, 276, núm. 2, r. 9.

b) Una copia de real cédula a la que igualmente faltan fecha y validación, concediendo licencia para pasar carabelas a Cubagua que comienza: «El Rey, por cuanto Vos F[ulano]». ²⁷

2) Copias de documentos originales preparados para servir concretamente de formulario o que circunstancialmente sirvieron para este fin: este debió ser el procedimiento más empleado. ²⁸ No nos cabe la menor duda que el libro que actualmente se conserva en el legajo de la Sección Indiferente General del Archivo General de Indias y donde se copian instrucciones, Ordenanzas, Títulos emanados en diversas ocasiones y a individuos concretos, fue utilizado para este fin. ²⁹

Por otra parte la riquísima colección de registros —libros reales de Gobierno y Gracia— ³⁰ que se guardaban en las secretarías del Consejo sirvieron accidentalmente de formularios. Así entre los papeles que dejó en su morada, al fallecer, el que fue secretario del Consejo Juan Díaz de la Calle en un apuntamiento dice: «Razón de algunas cédulas generales y particulares para exemplares cuando los pide el consexo y açer otras como ellas» y sigue un inven-

²⁷ A. G. I., Patronato, 276, núm. 2. En la Biblioteca Nacional de Madrid, Sección manuscritos, signatura 2.939 hay un formulario de este tipo de certificaciones sobre tema indiano.

²⁸ Una nota manuscrita debida a un oficial de la secretaría sobre una copia de un documento dice: "Minutas para despachos y ay algunas con nombre, etc". Aunque al formulario le llama minuta, la frase nos demuestra que hubo colecciones de copias de documentos originales que sirvieron de formularios. A. G. I., Patronato, 276, ramo, 7.

²⁹ El libro en A. G. I., Indif. Gral., 415.

³⁰ Cfr. el contenido y finalidad de estos libros en el Capítulo I.

tario de cédulas y provisiones que remiten al título y folio del correspondiente registro-cedulario.³¹

3) Fórmulas especialmente redactadas o cláusulas concretas: era el Consejo de Indias el que tenía potestad para introducir, cambiar o anular las cláusulas en los despachos. Tales asuntos eran tratados en las sesiones de esta institución y comunicado a los secretarios y oficiales por autos acordados. Este procedimiento se utilizó cuando la fórmula tenía un claro matiz de precepto jurídico.³²

Así, pues, fue costumbre utilizar formulario, por los encargados de confeccionar la minuta del documento público indiano.

La confección del mundum y la validación

Aprobada la minuta por el funcionario competente —el secretario o el consejero semanero— se procedía a su definitiva puesta en limpio y a su validación.

A la primera de estas operaciones es a la que los tratadistas del *Ars dictandi* llamaban *grossase*, término que to-

31 Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscritos, 2.939, fol. 48. El hecho de que se hayan perdido la mayoría de los formularios de documentos indianos se explica, habida cuenta que los secretarios redactaban los documentos en sus casas, y que a su muerte o ascenso se desperdigaban en muchas ocasiones.

32 Así nos lo dice León Pinelo en: *El Grán Canciller*, muchas de estas fórmulas aparecen recopiladas en la *Recopilación* de 1680. Así la ley 26 del lib. II, tít. VI: "que en los títulos de gobernadores y otros, se pongan cláusulas de que no toquen en la plata de las Caxas de Comunidad" y a continuación transcribe la fórmula. En el mismo sentido la ley 27 y 28 del mismo libro y título. En general estas fórmulas tienen un sentido jurídico y no diplomático.

davía hemos visto utilizado, aunque castellanizado, en el siglo XVIII.³³

El *mundum*, palabra ya clásica para designar al documento redactado en limpio, se convertirá, mediante la aposición en él de los signos de validación, en el original; de aquí que, para su descripción, repitamos las notas que en su lugar expusimos como características del documento original: cuidado aspecto formal, sin enmiendas, ni tachaduras, fórmulas completas, palabras desarrolladas, es decir sin abreviaturas, y escrito no «de mala letra ni procesada».³⁴

Permitasenos un inciso a propósito de esta última nota que hemos entrecomillado y que completará la descripción externa del *mundum* que estamos haciendo.

¿Qué tipo de letra fue la empleada en el documento público indiano o qué se entiende por mala letra y letra procesada?

Comencemos por resolver la segunda parte del interrogante. La prohibición de emplear mala letra y procesada tiende a cumplir un mismo objetivo: conseguir la claridad gráfica del documento. Es en este sentido en el que en la mente del legislador aparecen ambos como sinónimos. En realidad los dos conceptos responden a un plano distinto. Con el término procesada —procesal para el paleógrafo— bautizaron los Reyes Católicos³⁵ a un tipo de letra, evolu-

33 En un expediente iniciado por el virrey de México, Don Matías de Gálvez sobre el uso de la estampilla en la Audiencia de México, dice textualmente que los escribanos mayores de gobierno "engrosasen" por su propia mano todos los decretos, autos y títulos. Ocurre esto en septiembre de 1784. A. G. I., México, 1512.

34 Ord., LXXVII de las del Consejo de 1636, lib. II, tit. III, ley 8 de la *Recopilación*.

35 El término procesada para designar a un tipo de letra aparece en un documento de los Reyes Católicos en que expresan la tabla de derechos a las justicias, alcaldes y otros

ción —o mejor dicho degeneración— de la cortesana. Características de este tipo —que esencialmente conserva la misma figura, nexos y abreviaturas que la cortesana— son su gran tamaño, enlaces abundantes, rasgos inútiles: en definitiva, acusada cursividad y personalidad de su trazado. Estas circunstancias hicieron que alcanzara tan alto grado de complicación que, ya a principios del siglo XVI, su nombre se hizo sinónimo de escritura ilegible.³⁶

El otro término, mala letra, no hace referencia a tipo de letra ninguno, se refiere a que la letra con que se describa el documento no sea oscura y sea fácilmente legible.

Cuando el documento público indiano surge está en su mayor momento de apogeo la letra cortesana,³⁷ y es con este tipo de letra con el que se escriben los primeros documentos públicos indianos.³⁸ Aunque pronto surge en el campo de la escritura la que hemos llamado procesal, ésta estuvo ausente en este tipo de documentos —no así en los judiciales e incluso en los documentos internos de las instituciones indianas—.

Cuando en el siglo XVI pasó a los escribanos profesionales la letra bartarda o itálica que, durante la centuria anterior, habían introducido en España las personas cultas

oficiales de la villa de Manzanares y su condado, expedido en 1475. A. G. I., Simancas, Diversos de Castilla, leg. 9, fol. 30. Citado por Martín Postigo, *María de la Soterraña: La Cancillería de los Reyes Católicos*.

36 Cfr. Mateu Llopis: *Decadencia de la escritura en el siglo XVI*.

37 La cortesana, nombre con que la designaron los Reyes Católicos en el documento citado en la nota 35, es una evolución hacia la cursividad de la gótica cursiva. Tiene sus primeras manifestaciones en la segunda mitad del siglo XIV. Cfr. Millares Carlo, A.: *Album de Paleografía*.

38 Cfr. los originales de los documentos colombinos, hoy día en A. G. I., Patronato, 295 (legajo Veragua), correspondientes a los años 1492 - 1500.

que estuvieron en contacto con los personajes más influyentes del renacimiento italiano, éstos la usaron preferentemente en los documentos públicos. Este tipo de letra clara, regular, casi desprovista de nexos, se impuso poco a poco, primero alternando con la cortesana, más tarde arrinconándola. Tan terminante fue su utilización que ya en el reinado de Carlos I sustituyó absolutamente a las letras hispánicas en el documento público.

Así, pues, resumiendo lo acabado de exponer diremos que el documento público indiano —tanto el redactado en la península como en las Indias— cumplió a rajatabla la legislación en el aspecto paleográfico, utilizando hasta el reinado de Carlos I la escritura cortesana —pura o con influencias itálicas— y a partir de entonces la itálica.

Volvamos a nuestro tema. Aunque en teoría la formación del *mundum* y su *validación* pueden considerarse como dos fases independientes de la *conscriptio* documental, en la práctica no tienen lugar sucesiva y aisladamente sino que la validación incide de lleno en el proceso de la confección del *mundum* cuando éste no está aún terminado. Ambas etapas se realizan simultáneamente.

El *mundum*, de acuerdo con el procedimiento lógico y normal, comienza a realizarse una vez que la *minuta* ha sido revisada y aprobada por el funcionario encargado de tal menester y ésta se inició después que surgió la *actio* a documentar. En tal caso, como la fecha que llevará el documento es la de su expedición, el *mundum* se hará dejando en blanco la cláusula cronológica que se completará una vez que el documento haya sido validado.

Sin embargo, fue relativamente frecuente que el *mun-*

dum se realizara —nos referimos al documento público soberano— aún antes de que la *actio* surgiese. Este anómalo caso sólo se produce cuando la *actio* nace tras la participación en ella de instituciones asesoras del autor del negocio jurídico. En efecto, el Consejo de Indias o la Cámara, por ejemplo, al elevar consulta al rey, bien por ser un asunto de trámite, un nombramiento o porque se estima, con fundadas razones, que el soberano aceptará el dictamen del organismo asesor, junto a aquélla remite el *mundum* en que se documenta la futura *actio*. Este *mundum* carecerá de fecha y cuando el negocio jurídico es un nombramiento presentará en blanco el nombre de la persona a favor de la cual va expedido el documento original.³⁹

En uno y otro caso, el general y el particular, el *mundum* se completará después que se halla iniciado el proceso de validación.

La validación, última de las etapas que cubre la conscriptio documental, consiste en la aposición sobre el *mundum* de una serie de elementos encaminados a conferirle autoridad y fe. Tradicionalmente vienen considerándose como tales las suscripciones, las signatures y los sellos.

Vamos a referirnos, en general, a estos elementos, dejando para más adelante⁴⁰ tratar en particular de los procedimientos autenticadores de los distintos tipos diplomáticos.

39 El rey contesta en la misma consulta de remisión: "Hinchase el blanco conforme a lo que aquí se dize" (1581), A. G. I., Indif. Gral., 741; "Buelben firmados" (1635), A. G. I., Indif. Gral., 758.

40 Vid. Cap. IV con respecto al documento real y V para el documento de autoridades indianas.

Las suscripciones y firmas son la fórmula validativa en virtud de la cual las personas concurrentes, esencial o accidentalmente, al negocio documentado o a la redacción del mismo, dan a éste fuerza legal, bien expresando su asenso a lo convenido o bien atestiguando la realidad del acuerdo instrumental.⁴¹ En ellas, pues, se plasma la participación que por diversos títulos han tenido esas personas en el nacimiento del documento, entendido éste en su conjunto de *actio* y *conscriptio*.

Aunque la suscripción y firma vienen a cumplir los mismos fines, diplomáticamente se consideran como dos elementos distintos.

Esencialmente la suscripción es la expresión del nombre de la persona, no importa cuál sea la razón de su participación en la génesis documental, aunque puede ir, y generalmente es así, acompañada de otras cualidades y circunstancias.

La firma es la representación simbólica de esa persona a través de su signo o rúbrica.

Las suscripciones y firmas, referidas al documento indiano, son siempre autógrafas, excepto cuando en casos determinados bien por la abundancia de firmas que la autoridad, cualquiera que fuera la esfera de su jurisdicción, tenía que estampar, bien por incapacidad o disminución física, usó de estampilla.

La estampilla es «el molde hecho de metal en que están formadas de relieve las letras y rúbricas que componen la firma de alguno con tal puntualidad que estampando con


41 Floriano: *Curso*, pág. 400.

DECRETOS

onde se dirá en el presente de mi conserio de estas guerras y gentilhombre de mi Camara a quien
 proveyo de por mi Virrey y gouernador capitán general de las prouincias del pino colapero y por el
 cuyo cargo fuere y gouerno hauiendose ofrecido entre el Audiencia y el Tribunal de la inge-
 nio de esta ciudad alguna duda o diferencias materia de iurisdiccion y tenido sobre ello muchas
 competencias para escusar las que viene entre ambos Tribunales labuen a correspondencia que
 en futo el Rey mi señor ppa de que tanta gloria aya mande se juntaren dor con referos del con-
 sejo de la general ynquisiçion y otros dos de mi conserio de las Indias y entre ellos traen y confir-
 ren del medio que se oia tener para que cesaren las dhas diferencias y hauiendole pecho con-
 suacuerdo y parecer mande despachar y se despachó el año de reuicientos y diez y ocho vn auto
 cedula por via de concordia en que dio la orden que de alli adelante se auia de tener y guardar
 entre ambos Tribunales y por no estar resuelto ni declarado en la dha cedula de la concordia
 quando se oieren defuntar y oydor y ynquisidor quien auia de preferir a quien rich
 y oydor y ynquisidor o ynquisidor al oydor y donde se auia de hazer la dha junta hauiendo
 se ofrecido esta duda a esta Audiencia y se critome que por esta causa se auia dificultado el
 juntarse y suplicado me le mandare declarar se le respondio en carta de veinte y ocho de
 mayo del año pasado de reuicientos y veinte y vno que quando se ofreciere el caso la junta se
 hiciere en vn sala de esta Audiencia y el y oydor prefiriere al ynquisidor por ser contra el Ramo
 antigua asentada guardada en las chancillerias de Valladolid y granada y por que hauien
 do los ynquisidores de la ynquisiçion de esta ciudad escrito al Tribunal de la general ynquisi-
 çion que por esta Audiencia no se guardaua la dha cedula de la concordia y dandome cuenta de
 ello ordene ami conserio de las Indias me y mforme de lo que se ofresca en el caso y hauiendo lo
 hecho he resuelto que lo dispuesto y ordenado por la dha carta de veinte y ocho de mayo del dho año
 de reuicientos y veinte y vno en q mande q q se ofreciere duda de competencia la junta se hiciere en
 vn sala de esta Audiencia y el y oydor prefiriere en el auto al ynquisidor segun se cumplia con el p. vno de
 dho orden como así se pagó a sin que contra ello se haya ni pido por los dhas ynquisidores y para q ellos
 lo cumplan he ordenado al dho Tribunal de la general ynquisiçion le auisen de la dha resoluçion y que
 lo guardaren y cumplieren puntualmente y ordenareis alor dho de mi dho de esta a n. no se pague en su sala
 ni se gane con voto q fha en de de mill y tres y veinte y ocho años

Cons. (on v. m.

Para guardar lo que V. M. tiene resuelto de si se ofreciere duda de competencia entre el Tribunal de la
 ingeniçion de esta y de la Audiencia de la junta se haga en vn sala de la Audiencia y el y oydor prefiriere
 al ynquisidor y al oydor se haga en el p. vno de los ynquisidores no se obedezca en no se pague en su sala



Antes de alcanzar su perfección diplomática el documento público en su conscriptio, adopta la forma de mundum. El mundum es el documento ya en limpio al que todavía no se le han añadido los signos de validación. La lámina que reproducimos es un ejemplar de Real Cédula en estado de mundum. Concretamente no tiene aún la suscripción real, ni el refrendo del Secretario ni las rúbricas de los consejeros de Indias. Como la fecha de los documentos públicos indianos no representa el momento en que surgió el negocio que se documenta sino el tiempo en que se perfecciona su conscripción, obviamente la tiene en blanco todavía. (Vid. pág. 139).

él en el papel, salga parecida a la propia persona cuya es». ⁴²

El uso de la estampilla por autoridades relacionadas con asuntos indianos se inicia en el siglo XVII, aunque su mayor desarrollo tuvo lugar durante el siglo XVIII. ⁴³

Excepción hecha del soberano, que al usar estampilla —y de hecho la usó frecuentemente— lo hacía por derecho propio, la utilización por autoridades delegadas suponía concesión privilegiada por parte del rey y era necesario que la concesión fuera comunicada a los súbditos sujetos a esa autoridad. ⁴⁴

Validadores del documento público indiano

Las personas —cuyo símbolo son las signatures y suscripciones— que intervienen en el documento público indiano participan en él a título de:

otorgantes,
consultantes,

⁴² Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 3ª edición, Madrid, 1791, voz: *estampilla*, pág. 403. Aunque le atribuye el género femenino dice sin embargo "estampado con el". En la península, sí creemos a Ferrer, Jaime: *Compendio Histórico*, fol. 293, el primer soberano que usó la estampilla fue Juan II de Portugal.

⁴³ La primera firma con estampilla que hemos encontrado, en un documento de asunto indiano aparece en una Real Cédula de 1633 y pertenece a uno de los consejeros validadores. A. G. I., Indif. Gral., 618.

⁴⁴ Por ejemplo, en 1786, el rey concedió al ministro José de Gálvez la autorización para usar estampilla: "con atención ahora al excesivo incremento que diariamente toman los trabajos y negocios del vasto ministerio de vuestro cargo... he venido en concederos la gracia y facultad de firmar con estampilla todas las órdenes, avisos, cédulas reales, patentes y despachos míos poniendo firma entera en todos ellos...": Real Decreto, Aranjuez, 18 mayo 1786. De este documento se hizo copia impresa para circularlo por las Indias. A. G. I., Indif. Gral., 920.

secretarios,
escribanos u oficiales,
cancilleres,
registradores.

El otorgante es el autor del documento en su doble vertiente de *actio* y *conscriptio*, aunque como hemos analizado no sea el autor material del mismo. Al suscribirlo expresa su conformidad con su contenido. La fórmula en que se resuelve es enormemente sencilla: bien expresa el título (rey, príncipe, marqués de N., duque de N.) o grado académico (generalmente en latín: licenciatus N, doctor N.) que ostenta; o simplemente su nombre y apellido. En todos los casos lo acompaña de la signatura personal.

Sólo cuando el autor es persona real, y en este caso siempre suscribe con su título, lo hace preceder del pronombre personal Yo.

Los consultantes al validar el documento —unas veces con su suscripción y signaturas; otras con sólo esta última— testimonian su participación junto al otorgante en la *actio* jurídica.

Finalmente las firmas o rúbricas de los secretarios, escribanos u oficiales, cancilleres, o sus tenientes, y registradores nos hablan de su participación en la *conscriptio* del documento. El secretario en la cláusula del refrendo se nos presenta como el responsable de dicha *conscriptio* e intermediario entre la *iussio* que partió del otorgante y el escribano u oficial que materialmente la plasmó en el documento.

En los más solemnes además de su nombre y rúbrica figura su calidad de secretario y la circunstancia de intermediario: «la fize escribir por mandado de N.». Fórmula

que se simplifica enormemente en documentos menos solemnes.

Por último la suscripción y signatura del canciller —o su teniente— nos dice su intervención en otro de los procedimientos de validación: la aposición del sello. El sello es el signo validativo por excelencia. Simbólicamente representa a la persona a quien pertenece. Con palabras de un autor del siglo XVII y refiriéndolas al sello real, este es «el cuerpo místico y figurativo del rey, nuestro señor». ⁴⁵ Su utilización como medio de validación queda reservado a los documentos más solemnes. En esta ocasión sólo queremos citar su función, ya que le dedicaremos un epígrafe aparte.

Otros procedimientos validativos: el papel sellado

La grave situación financiera del estado español en el primer tercio del siglo XVII, aconsejó al monarca la adopción de una serie de medidas encaminadas a remediarla. Considerando la impopularidad que supondría el establecimiento de un nuevo impuesto o la elevación del tipo impositivo en uno ya existente, se recurrió a establecer uno de tipo indirecto: el llamado papel sellado.

Con la obligatoriedad de su uso se pretendía obtener una nueva vía de ingresos para el erario público y, sin embargo, para disimular su fin y objetivo primordial, su utilización se presentó de cara a la nación como un nuevo procedimiento de autenticación y validación de los docu-

⁴⁵ Salazar de Mendoza, Pedro: *Origen de las dignidades*, pág. 110. El autor pone la frase en boca de Francisco Tello de Sandoval, Presidente de la Cancillería de Valladolid, consejero de Indias (1543-1557), Presidente de este Consejo (1565-1567) y obispo de Osma. El autor equivoca el nombre y le llama Juan.

mentos: «por cuanto habiendo reconocido lo mucho que padece el bien público y particular de mis vasallos con el uso de los instrumentos y escrituras falsas... no se pueda hacer ni escribir ninguna escritura, ni instrumento publico ni otros despachos que por menor aqui van declarados si no fuera en papel sellado con uno de cuatro sellos que para ello he mandado hacer con la forma, diversidad y calidades que se dirán, sin que por esto sea visto derogar las demas solemnidades que de derecho se requieran en los instrumentos para su validacion porque mi voluntad es añadir este nuevo requisito del sello por forma substancial para que sin ella no puedan tener efecto ni valor alguno y desde ahora los irrito y anulo para que en ningun tiempo hagan fe ni puedan presentarse en juicio ni fuera del, ni dar ningun titulo ni derecho a las partes, antes por el mismo caso y hecho pierdan el que pudieren tener...». ⁴⁶

Fue, pues, por una exclusiva razón política, por lo que esta medida, claramente económica, incide de lleno en el campo de la Diplomática.

La fecha de su establecimiento para el documento indiano es el año 1640. ⁴⁷ El procedimiento consiste en tener

⁴⁶ Premática/ en que su magestad/ manda, que desde primero de/ Enero del año de 1640 en adelante, no se/ pueda hazer, ni escriuir ninguna escritura, ni/ instrumento publico, ni otros despachos que/ por menor van declarados, si no fuere en pa/pel sellado, en todos los reynos y prouincias de las Indias Occidentales, Islas/ y Tierra Firme del mar / oceano. Impresa en la imprenta real de las Indias, por Juan Sanchez, año 1639, 6 págs. mas la portada. A. G. I., Indif. Gral., 1694.

La Real Pragmática es de 28 diciembre 1638. En su esencia forma la ley 18 del título XXIII del libro VIII de la *Recopilación*. Hay copia en el registro-cedulario titulado "papel sellado". A. G. I., Indif. Gral., 603.

⁴⁷ En España se mandó establecer por Real Provisión de 15 de diciembre de 1636. Se atribuye su invención, quizá sin fundamento, al Padre Salazar, S. J. y desde 1629 se trataba de su implantación. Cfr. Domínguez Ortiz: *Política y Hacienda*, pág. 229.

cuatro categorías de papel previamente sellado que se venden por parte de la Real Hacienda a cuatro precios distintos, reglamentándose paralelamente el tipo que se debería usar según la clase de documentos. La obligatoriedad del papel sellado atañía tanto a los documentos públicos, surgidos a petición de parte, como privados (desde el punto de vista diplomático).

En el sello primero —papel de pliego entero y con costo de 24 reales— se escribirían «los despachos de gracia y mercedes que se hicieren en las Provincias de las Indias por nuestros Vireyes, Presidentes, Audiencias, Tribunales de cuentas, Gobernadores y Capitanes Generales, Corregidores y otros cualesquier Ministros de Justicia, Guerra y Hacienda, y que si los tales Despachos tuvieren mas que un pliego, todas las otras hojas se escriban en papel del sello tercero»; en el sello segundo —papel de pliego entero y con costo de seis reales— se escribirían todos los instrumentos de Escrituras, Testamentos y Contratos, de qualquier genero y forma que sean, y que se hubieren de otorgar legitimamente ante escribanos, y las demas hojas en los protocolos, y registros han de ser selladas con el sello tercero»; en el sello tercero —papel de medio pliego y con costo de un real— se escribiría «todo lo judicial y que se actuare y fuere de justicia ante nuestros Virreyes, Chancillerías, Audiencias, Tribunales y los demas jueces y Justicias de las Indias, y lo compulsado que se diere de qualquier cosa que sea, no ha de llevar más que el primer pliego sellado con el sello segundo, y lo demas en papel comun»; en el sello cuarto —en papel de medio pliego con un costo de un cuartillo— se escribirán «todos los despachos de oficio y de pobres de

solemnidad, y de los Indios, publicos o particulares (si estos lo reduxeren a papel), y aun en tal caso, si faltaren los Sellos en que sea sellado, no sea causa de nulidad por quanto nuestra intencion, y voluntad siempre ha sido y es aliviarlos de qualquier carga y gravamen». ⁴⁸

Incluso las peticiones y memoriales, como en su momento indicamos se deberían escribir en papel sellado.

Quedaban exentas de la obligatoriedad de usarlo, pudiendo hacerlo en papel común, las cartas oficiales, por medio de las cuales las autoridades indianas se relacionaban con los organismos de la administración central. ⁴⁹

Todo el papel sellado que se preveía podría utilizarse en Indias era enviado desde Madrid, donde se imprimía. ⁵⁰ No obstante, como podía faltar en aquellas provincias, ⁵¹ en

48 Estos valores corresponden al momento de su establecimiento. En 1794 se dobló el costo de los tres primeros sellos, aunque permaneció inalterado el segundo (Real Decreto de 25 de junio de 1794. A. G. I., Indif. Gral., 1.694). En 1830 hubo hasta 6 tipos diferentes (Ilustres: 64 reales; 1º: 48 reales; 2º: 12 reales; 3º: 4 reales; 4º: oficio; 5º: pobres medio real).

49 En la Pragmática citada en la nota 46.

50 Periódicamente se preguntaba a las autoridades indianas el papel que haría falta en los distritos de su jurisdicción. Así se hizo al virrey del Perú y Presidentes de Charcas, Quito, Nuevo Reino de Granada, Panamá y Chile, por Reales Cédulas de Madrid, 16 abril 1639. A. G. I., Indif. Gral., 608.

En un principio se imprimía en unos departamentos del Convento del Carmen, en Madrid, alquilados en 300 ducados de vellón (112.500 mrs.) anuales. A. G. I., Indif. Gral., 608.

A partir del 18 de marzo de 1641, para ahorrar gastos, el rey decidió que el papel sellado de Indias se imprimiese junto con el de Castilla: Resolución a la consulta de 11 marzo de 1641. A. G. I., Indif. Gral., 608.

51 De hecho, en regiones apartadas, faltó en algunas ocasiones. En el traslado de unos autos judiciales el escribano autenticador dice: "y van escritos en papel comun porque al presente no corre el sellado en esta ciudad/Durango, Nueva Vizcaya, 1668/. A. G. I., México, 385.

un determinado momento, se enviaba un duplicado del sello en bronce, para, en caso necesario, imprimirlo allí.⁵²

Para evitar las posibles falsificaciones de los sellos se cambiaban cada dos años. Esta circunstancia hacía posible que cada bienio sobrara papel sellado, para cuya aprovechamiento se utilizó el resellado.

El establecimiento del papel sellado obligó a la creación de una organización burocrático-administrativa: en cada Audiencia indiana se nombraría un comisario, que sería el oidor más antiguo, responsable del nuevo impuesto. La administración del estanco la llevaría un tesorero que entregaría de seis en seis meses el producto de la venta del papel a los oficiales reales. En el Consejo de Indias se designaba a uno de los consejeros como comisario ordenador que junto a dos consejeros más y el fiscal entenderían en sala aparte de los posibles pleitos que sobre esta materia se produjesen.⁵³

Desde 1640, pues, fecha en que se inicia el uso del papel sellado, los documentos indianos se redactaron sobre él. Para el historiador su empleo supone un importante medio para averiguar la fecha de redacción de algunos documentos. En algunas ocasiones los documentos *lato sensu* se expidieron sin fecha. Dado que el papel reproduce en la *marca* el sello, el título, el valor, el reinado del soberano y los dos años para los que servía, se puede si no hay otro elemento, concretar la fecha del escrito por medio de aquél.

52 Los cuatro sellos en bronce se enviaban sólo a las Audiencias de México, Lima, Santa Fe, Santo Domingo y Filipinas. Deberían guardarse en arca de tres llaves. Una la tendría el oidor más antiguo, otra el fiscal y la última el contador más antiguo o en su defecto el oficial real más antiguo: "Instrucción sobre la forma y manera que se ha de administrar el papel sellado en Indias y su cobro y remisión al Consejo". Madrid, 25 abril de 1639. A. G. I., Indif. Gral., 608.

53 Cfr. la Instrucción citada en la nota anterior.

Instituciones documentarias indianas

Estudiado el proceso de la *conscriptio* del documento indiano, vamos a referirnos en seguida al análisis de las instituciones y funcionarios que la llevaron a cabo, no sin antes dejar expuestas unas consideraciones de carácter general.

Paralelo al proceso de simplificación de los tipos documentales que, en páginas precedentes hemos esbozado y que más adelante concretaremos,⁵⁴ se desarrolla otro que tiene por sujeto a las instituciones documentales encargadas de la *conscriptio* del documento real. Al contrario de aquél, tiene como signo la multiplicación de estos organismos y su evolución cronológica admite los mismos hitos que para el primer proceso hemos dejado establecidos.

En efecto, se inicia en el siglo XIII, tiene su punto culminante durante el gobierno de los Reyes Católicos y está cumplido a fines del reinado del Emperador Carlos.

Junto al soberano castellano-leonés, de una manera gradual, fue organizándose, a lo largo de los siglos XI y XII una institución cuya misión consistía en la elaboración y expedición de los documentos despachados por el rey: la Cancillería Real.⁵⁵

⁵⁴ Cfr. Capítulo I, epígrafe: *Panorama general del documento hispanoamericano en la Edad Moderna*; Capítulo V.

⁵⁵ La bibliografía sobre la Cancillería y el canceller del reino castellano-leonés, en comparación a la existente sobre otros temas diplomáticos, es abundante. Entre los trabajos más importantes podemos citar: Millares Carlo, A.: *La Cancillería real de León*. Sánchez Belda, Luis: *La Cancillería de Doña Urraca*. Rassow, Petter: *Die Urkunden Kaiser Alfonsó VII*. González González, Julio: *Regesta de Fernando II*. González González, Julio:

Con pocas excepciones —el soberano siempre tuvo libertad para encargar la *conscriptio* a personas u organismos distintos de su cancillería—⁵⁶ hasta mediados del siglo XIII, era la única institución que de una manera constante y organizada estaba legal y prácticamente capacitada para la confección del documento soberano.

Coincidiendo con el reinado de Alfonso X, y ya en un progresivo y constante desarrollo que alcanzará el reinado de los Reyes Católicos, comienzan a dibujarse una serie de oficinas en las cuales, y por diversos motivos, se lleva a cabo la documentación de determinados documentos reales.

Las Partidas reconocen ya la existencia de una oficina particular del rey que convive con la tradicional cancillería.⁵⁷ Más aún, se señala cómo los documentos reales podían ser expedidos por «los que juzgan en la corte».⁵⁸

Hito importante de esa evolución lo supone la creación de la Audiencia y Chancillería de Valladolid al reconocerse por primera vez la existencia de una institución alejada geográficamente del monarca con capacidad de expedir documentos a nombre del monarca y validados con su sello.⁵⁹

Decíamos que el momento culminante del proceso lo supone el reinado de los Reyes Católicos. En efecto la reorganización del Consejo Real y la creación de los Consejos

Alfonso IX. Procter, E. S.: *The castilian Chancery of Alfonso X*. Sánchez Belda, Luis: *La Cancillería Sancho IV*. Martín Postigo, María Soterraña: *La Cancillería de los RR. CC*. Arribas Arranz, F.: *La cancillería durante las comunidades*.

56 Durante la Edad Media es relativamente frecuente que el rey encargue la *conscriptio* del documento que concede una gracia, al monasterio o beneficiario de ella.

57 Part. III, XIX, 5 y II, IX, 7. La oficina particular emite las que titula cartas de poridat.

58 Partida III, XVIII, 26.

59 Cfr. Mendizábal, Francisco: *La Real Chancillería de Valladolid*.

de Ordenes e Inquisición, con facultad de entender en los asuntos de estas materias y capacidad legal de expedir documentos sobre las mismas, consagran, de una manera definitiva, la multiplicación de oficinas expendedoras de documentos reales.⁶⁰ Ya el Emperador Carlos no hará sino completar esta evolución con la creación de dos nuevos Consejos —Indias (1524); Italia (1526), etc.—.

Con respecto a las instituciones documentarias encargadas de la *conscriptio* del documento público emanado de autoridades indianas, las características que observamos en esta visión de tipo general que estamos exponiendo, son entre otras, la importancia que adquieren en relación con las peninsulares. Esta importancia, en cuanto a su organización, funcionarios y volumen de trabajo desarrollado en ellas, les viene dada por la mayor capacidad ejecutiva que tuvieron que desarrollar las autoridades indianas. Los virreyes en el reino castellano-leonés fueron instituciones temporales, en Indias permanentes y con importante jurisdicción; los presidentes de las audiencias y chancillerías castellanas sólo tuvieron facultades judiciales, en Indias, los presidentes-gobernadores ejercieron el gobierno de su provincia.

Instituciones documentarias del documento real indiano

El estudio de las instituciones encargadas de la *cons-*

60 Aunque la reforma del Consejo Real comenzó en las Cortes de Madrigal (1476) no se llevó a efecto hasta las Cortes de Toledo (1480). Las Ordenanzas las recogió Montalvo en sus *Ordenanzas Reales*. El de Ordenes se fundó en 1495-1496 y el de Inquisición en 1478.

criptio del documento real indiano está en estrecha relación con la evolución de la organización central indiana.

Hasta la fundación del Real y Supremo Consejo de Indias, en 1524, fecha desde la que existe un cuerpo separado e independiente que ostenta la suprema jurisdicción sobre aquellos territorios, con excepción de los asuntos judiciales que, desde el principio hasta esa fecha estuvieron encomendados al Consejo de Castilla en calidad de Tribunal Supremo de Justicia, los intervinientes en los asuntos americanos lo fueron a título personal.

Ya desde la preparación del segundo viaje colombino, aparece ligado a los negocios indianos Juan Rodríguez de Fonseca que, durante años, se convertiría en el árbitro de la política indiana,⁶¹ aunque en sus ausencias, periodos de postergación o debilitación de su influencia, participen con él consejeros de Castilla (García de Mujica, Fernando Tello, Palacio Rubios, etc.) y al advenimiento del rey Carlos, miembros de su séquito, previamente nombrados consejeros reales (cardenal Adriano, Juan de Sauvage, el deán de Bezançon, etc.).⁶²

La preparación de la documentación, en un principio encomendada a la secretaría del Consejo de Castilla, va poco a poco independizándose de ella a medida que aumenta la expedición de documentos sobre temas indianos y se va constituyendo una oficina particular encargada de su *conscriptio*.

El primer paso hacia esa independencia se da cuando

61 La participación de Fonseca en los asuntos indianos es estudiada por Giménez Fernández, M.: *Bartolomé de las Casas*, tomo I.

62 Cfr. Schäfer, Ernesto: *El Consejo de Indias*, tomo I, págs. 33-35.

se tiende a que entre los varios secretarios del rey, sea uno —Gaspar de Gricio— el que refrende los documentos indianos.⁶³ Más aún cuando en 1504 se dispone que toda la correspondencia americana se envíe al mentado Gricio.⁶⁴

En 1508, muerto éste, se encarga el mismo cometido a Lope de Conchillos.⁶⁵

Aunque no hemos encontrado sino escasos testimonios documentales, junto a Conchillos, había una serie de oficiales —Juan de Sámano, uno de ellos—⁶⁶ y escribanos que bajo su dirección llevaban a cabo la redacción del documento indiano. Sin embargo, todavía la dependencia de la secretaría del Consejo de Castilla era patente en cuanto que el sellado de los documentos y su registro se llevaba aún en ella.

La independencia total, al menos en la práctica, debió ocurrir en 1514 cuando se hizo un sello, duplicado del real

63 Cfr. las Provisiones y Cédulas desde 1501 hasta 1507 están en su mayoría refrendadas por Gricio. Cfr. A. G. I., Indif. Gral., 418.

64 Real Cédula, Medina del Campo, 8 de enero de 1504. En Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, tomo 5, pág. 70.

65 Real Cédula dirigida a Nicolás de Ovando, comendador mayor de la Orden de Alcántara y gobernador de las Indias. Burgos, 25 de enero de 1508. A. G. I., Indif. Gral., 1.961, fol. 7. También se ordenó a la mujer de Gricio que entregara a Conchillos los papeles "tocantes a Indias" que conservase en su casa. Real Cédula, 22 febrero de 1508. A. G. I., Indif. Gral., 1.961, fol. 9. El análisis de los documentos originales de estas fechas nos confirman el hecho de que Conchillos se encargaba del despacho de los asuntos indianos. Las Reales Cédulas en su parte expositiva dice: "Por Lope Conchillos nuestro secretario me es fecha relación...". Cfr. las Reales Cédulas copiadas en el registro que actualmente se conserva en el A. G. I., Indif. Gral., 418 y que conserva documentos expedidos entre 3 de mayo 1509 y 30 de mayo de 1511.

66 Se le cita como oficial en una Real Cédula de octubre de 1513. Colec. Doc. Inéd. Ultramar I, pág. 65.

que guardaba el Consejo de Castilla, para validar estos documentos y se nombró a Conchillos registrador.⁶⁷

A semejanza de la personal dirección de la política para las Indias ejercida por Fonseca, observamos cómo la organización burocrática central se ha hecho descansar en Conchillos que reúne en sí el cargo de secretario, registrador y depositario del sello real. Este aumentaría, a medida que aumentaba el cúmulo de asuntos, el personal auxiliar a sus órdenes, concretaría misiones; en una palabra, el organismo se iría estructurando de una manera permanente, aunque simple.

Con los lógicos cambios de personas —asi a Conchillos sucedería Francisco de los Cobos y a éste, primero en sus ausencias, por fin a su muerte, Pedro de los Cobos y Juan de Samano—⁶⁸ y sin que haya notable variación en la estructura de la secretaría, se llega a 1524.

La magnitud de los problemas americanos, la incorporación de nuevas tierras, las desafortunadas consecuencias del gobierno personal, decidieron al emperador a la

67 Se dictaron unos aranceles para los derechos que deberían cobrarse por el sellado de los documentos. En realidad es el mismo arancel en vigor en Castilla pero triplicando los derechos. Se encuentra en A. G. I., Indif. Gral., 419, lib. 5 fols. 47 y ss. publicados en la Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, tomo 9, II págs. 24 a 48 y en Encinas, Diego de: *Cedulario*, tomo II, fols. 293-300. La fecha del arancel es Balbuena, 19 de octubre de 1514. El título de registrador para Lope Conchillos está en A. G. I., Indif. Gral., 419, lib. V, fol. 170v. y su fecha es de marzo 1515.

68 El despacho de los asuntos de Indias se encomendó a Cobos, como secretario, con un salario de 50.000 mrs. de ayuda de costa, por Real Cédula de 1 de octubre de 1578. A. G. I., Indif. Gral., 420, lib. 8, fol. 46. Antes de marchar en 1520 el emperador a Alemania, dado que llevó consigo al Secretario Francisco de los Cobos, dejó encargada la Secretaría de Indias a Pedro de los Cobos y a Juan de Samano, R. C. de 17 de mayo de 1520. A. G. I., Indif. Gral., 420, lib. 8. Estos refrendan las Cédulas hasta 1524 en que se incorpora de nuevo Francisco de los Cobos.

creación de un cuerpo colegiado permanente en el que descansara la suprema jurisdicción sobre los hombres y tierras indianos. Así el 1 de agosto de 1524 nacía, o mejor, se segregaba del Consejo Real de Castilla, el de Indias. Inmediatamente se integraba en la nueva institución la secretaría que hasta entonces se había encargado de la *conscriptio* del documento indiano.⁶⁹

Hasta 1571 el Consejo de Indias no gozó de ordenanzas propias e independientes. Así en un principio estuvo sujeto a las del Consejo Real.⁷⁰ Sin embargo, a lo largo de estos años, dado que el territorio sobre el que ejercía su jurisdicción y porque los problemas y situaciones que se le planteaban eran distintos de los de Castilla, hubo que variar, mediante disposiciones concretas, algunos aspectos tocantes a la organización, procedimiento o personal. Fueron, pues, surgiendo diferencias entre ambas instituciones, lo que obligó a la publicación de las Ordenanzas del Consejo de Indias, el 24 de septiembre de 1571.⁷¹

No permanecería, sin embargo, fija e inamovible la institución. Era un organismo vivo y las circunstancias hicieron que hubiera dentro de él cambios estructurales importantes. De nuevo, pues, hubo que recopilar las disposiciones que las fueron imponiendo, publicándose en 1636, formando

69 Sobre la creación del Consejo de Indias. Cfr. León Pinelo: *Tablas Cronológicas*; Solórzano Pereira: *Política indiana*; Schäfer, E.: *El Consejo de Indias*, tomo I.

70 Las leyes Nuevas de 1542 viene considerándose como la primera Ordenanza del Consejo, en realidad sólo los nueve primeros preceptos de ella se dedican al Consejo de Indias y sí se dispone que se "guarden las que están hechas para los del nuestro Consejo Real". Cfr. Muro Orejón, A.: *Las Leyes Nuevas*.

71 Son el primer cuerpo que de una manera total organiza al Consejo, las publica Muro Orejón, A.: *Ordenanzas de 1571*.

todo un cuerpo legal por el que se gobernaba el Consejo.⁷²

La organización que plasma las citadas ordenanzas es la que se mantuvo con pocas variaciones⁷³ hasta la entronización de la Casa de Borbón en el trono español. La nueva dinastía establecería cambios sustanciales, pero que no afectaron casi en nada a las secretarías del Consejo.

De una manera esquemática vamos a estudiar a continuación la estructura de las oficinas encargadas de la *conscriptio* del documento indiano, desde la creación del Consejo en 1524 hasta el fin del siglo XVIII.

Hasta 1571 la organización es simple. A la cabeza del personal está el secretario con la misión de refrendar los documentos reales y bajo él una serie de oficiales —uno de los cuales era el oficial mayor— que llevan a cabo todas las etapas de la *conscriptio*. En esta única secretaría se redactan tanto los documentos legislativos y gubernativos como los judiciales.

Como consecuencia de la visita llevada a cabo en el Consejo por Juan de Ovando surge la gran reforma de la secretaría. Pocos meses después de la muerte del secretario Francisco de Eraso, en 1571, la hasta entonces única secretaría se dividió en dos «Escribanías de Cámara», una de gobierno y gracia y otra de justicia. A la cabeza de cada una de ellas se nombró a un escribano de cámara.⁷⁴ A cada una

72 Sobre la formación de estas Ordenanzas. Cfr. Manzano Manzano, J.: *Historia de las Recopilaciones*, tomo I.

73 La Recopilación de 1680, en el libro dedicado al Consejo de Indias y sus Secretarios, recoge prácticamente las Ordenanzas de 1636. Cfr. *Recopilación*, lib. II, tit. VI.

74 Juan de Ledesma fue puesto a la cabeza de la de gobierno y gracia y a Francisco de Balmaseda la de justicia. El Secretario, ahora Antonio de Eraso, continuaba con la misión de refrendar los despachos.

de ellas se adscribieron un cierto número de oficiales⁷⁵ con la diferencia esencial de que los de Justicia cobraban sus emolumentos por arancel.

Así, pues, la nueva estructura quedaba así:

Secretario refrendador

Escribano de cámara
de gobierno y gracia

Escribano de cámara
de justicia

Oficiales

Oficiales

Uno de los oficiales ejercía de canciller y registrador.⁷⁶

Así se mantuvo la oficina burocrática del Consejo hasta 1597. En esta fecha, la escribanía de Gobernación y Gracia se hizo secretaria, quedando la escribanía de Cámara de Justicia de la misma forma aunque a su cabeza estuviera circunstancialmente un funcionario con el título de secretario.⁷⁷

Tenemos que llegar a 1604 para encontrar otra nueva modificación como consecuencia de haber aumentado los asuntos y, sobre todo, por haber surgido una nueva institución dentro del Consejo: la Cámara de Indias, cuya misión, como hemos expuesto, consistía en entender sobre todos los asuntos de merced y proponer al soberano los nombramientos para cargos y oficios indianos.

75 León Pinelo, Antonio: *Tablas cronológicas*, pág. 4, nos da la relación de los oficiales adscritos a la Escribanía de Gobernación.

76 Esta es la estructura que recogen las *Ordenanzas de 1571*. Vid. *Ordenanzas* núms. 65 a 98.

77 Por Real Cédula, Torrelodones, 6 de mayo de 1597. A. G. I., Indif. Gral., 516, lib. I, fol. 5v. 6v., publicada en: *Ordenes que se han dado para el Gobierno del Consejo*.

La hasta el momento única secretaría de Gobierno y Gracia fue dividida en cuatro, de acuerdo con el siguiente esquema:

Secretaría de Gobierno de la parte de Nueva España.

Secretaría de Cámara de la parte de Nueva España.

Secretaría de Gobierno de la parte del Perú.

Secretaría de Cámara de la parte del Perú.

Se asignó a cada secretaría un oficial mayor y un oficial segundo, amén de varios «entretenedidos».

La escribanía de Cámara de Justicia quedó sujeta a la misma estructura, con la particularidad de que se convirtió en oficio vendible y renunciable.⁷⁸

Al suprimirse la Cámara de Indias en 1609, las cuatro secretarías se refundieron en dos: secretaría para el Perú y secretaría para Nueva España y cada una de ellas fue dotada de dos oficiales mayores y dos segundos, amén de un número indeterminado —según el trabajo de cada momento— de escribanos generalmente meritorios.⁷⁹

Y esta sería la estructura definitiva que adoptaron las secretarías del Consejo hasta la extinción de la institución, ya en el siglo XIX.

Sólo queremos señalar una innovación ocurrida en el último tercio del siglo XVIII. Fue la creación de una tercera secretaría a las órdenes directas del presidente del Consejo, hecho que ocurrió en 1773. El personal afecto a ella, según

78 La nueva estructura se ordenó por Real Cédula, Valladolid a postrero de diciembre año de 1604, en: *Órdenes que se han dado para el Gobierno del Consejo*. León Pinelo, A.: *Tablas cronológicas*, nos da la lista de Secretarios y Oficiales que las integraban.

79 Real Cédula, Madrid, 16 marzo 1609, en: *Órdenes que se han dado para el Gobierno del Consejo*.

el decreto de fundación fue: un secretario, dos oficiales y un portero.⁸⁰

Secretaría del Despacho Universal de Marina e Indias

Al segregar Felipe V, como en su lugar expusimos, de la jurisdicción del Consejo los asuntos de gobierno en las materias de guerra, hacienda, comercio y navegación y encomendarlas a la secretaría del despacho universal de Marina e Indias, tuvo esta nueva institución que organizar una secretaría donde llevar a cabo la *conscriptio* de los documentos que en el ejercicio de sus funciones emanaran de ella.

Como jefe de la oficina ejercía el mismo secretario del Despacho y bajo sus órdenes una serie de oficiales cuyo número variará a lo largo del siglo XVIII, pero que por término medio sería de dos oficiales mayores (primero y segundo), dos oficiales segundos, dos oficiales terceros, tres oficiales cuartos y dos oficiales quintos.⁸¹

* * *

80 Real Decreto de 12 agosto de 1773, dirigido al Duque de Alba, gobernador del Consejo por su oficio de Grán Canciller. Surgió el decreto por consulta del mencionado duque, Madrid, 31 de julio de 1771; recordado al rey, que en aquella ocasión no resolvió, por nueva consulta de 4 de marzo de 1773. Al Secretario Simeón Martínez Arroyo se le asignaron 16.000 reales de sueldo; 6.000 a uno de los oficiales y 400 al otro; el portero cobraría 5 reales diarios.

81 Anualmente se hacía el reparto de trabajo entre estos oficiales. La distribución se hacía según la materia sobre la que trataba la documentación: comercio, iglesia, justicia, guerra, etc. Cfr. por ejemplo la distribución correspondiente al año 1764, en A. G. I., Indif. Gral., 919. A estos oficiales, en 1766 se les dió un uniforme que tenía las siguientes características: "bordado de hilo de oro, casaca y calzón azul, chupa y vuelta de la casaca encarnada, forro encarnado, botones de hilo de oro de los que llaman de caracol, hasta el talle. Ojales del mismo color de la casaca y chupa respectivamente". Hay diseño del bordado. Decreto de Aranjuez, 10 de junio de 1766. A. G. I., Indif. Gral., 919.

Descritas a grandes rasgos las estructuras de las instituciones documentarias encargadas de la *conscriptio* del documento real, examinemos ahora la misión de los funcionarios de carácter burocrático o con misiones burocráticas. Queda fuera de nuestro examen el estudio de las facultades del presidente, consejeros y fiscal, cuyas actividades inciden de lleno en la génesis de la *actio*, limitándose, como reflejo de aquéllas, a validar con su firma y rúbrica o simplemente con esta última, el documento.

Secretarios

Los secretarios del Consejo, tal como los vemos a partir de 1609, son la fusión del secretario refrendador, del cual nos hablan las Ordenanzas del Consejo de 1571 y del escribano de Cámara de Gobierno.

Las actividades y facultades que ejercieron estuvieron hasta esa fecha repartidas entre ambas figuras. El secretario refrendador, con facultades más políticas que burocráticas, no pertenecía en realidad al Consejo de Indias. Era secretario del rey y, como tal, consejero directo del monarca. Cuando asistía a las sesiones del Consejo, no por derecho propio sino por orden concreta del rey o a requerimiento del propio Consejo, no votaba ni determinaba en los asuntos tratados.⁸² Desde el punto de vista de la insti-

⁸² "Otrosi mandamos que el dicho secretario no entre en el nuestro consejo, ni asista en el, sino quando por nos le fuere mandado, o los de el consejo lo embiaren a llamar para algun negocio, y entonces no se ha de hallar a platicar, votar ni determinar lo que en el dicho consejo se tratara y ha de tener assiento en el Consejo, despues del que tiene en el el fiscal, y que assi mesmo no se halle presente a las consultas que con nos tuuieren los del dicho consejo": *Ordenanzas de 1571*, núm. 66.

tución era el nexo de unión con el rey, ya que a través de él se enviaban los documentos que el soberano firmaría: «...reciba los despachos como se los diesen ordenados los escribanos de Cámara, firmados, o señalados de los del Consejo, y él nos lo lleve o embie a firmar y siendo firmados por nos, los refrende sin dilación y sin dexar en su poder registro, copia ni traslado ni retener alguno, ni publicar o revelar cosa ni parte alguna de lo contenido en ellos, los vuelva luego a los escribanos de Cámara...». ⁸³

Con respecto a la *conscriptio* del documento, su misión, pues, se centra en refrendar los despachos. Y fue esta su actividad la que heredaron los secretarios del Consejo.

De los escribanos de Cámara de Gobierno lo reciben todo, porque en definitiva la real cédula de 1609 no hizo sino cambiarles el nombre por el de secretarios y duplicar el cargo de acuerdo con un criterio geográfico —Perú y Nueva España—.

El secretario, que tiene título de escribano real y, por lo tanto, es depositario de la fe pública, es el jefe nato de la secretaría del Consejo, es decir, de la oficina burocrática del organismo. Es el responsable directo de la *conscriptio* documental, aunque en la práctica las etapas por las que pasa el documento hasta su expedición la ejecuten los oficiales a sus órdenes.

El secretario interviene tanto en la *actio* como en la *conscriptio* documental. Su intervención en la génesis de la *actio* es patente: lee por su persona las cartas y memorias en las sesiones del Consejo, «decretando lo que se acordare y resolviere para hacer conforme a ello los despachos y

⁸³ Ordenanzas de 1571, núm. 65.

consultas que convinieren». ⁸⁴ El secretario escribe las consultas ⁸⁵ y en teoría es el que redacta el documento «en la forma y estilo en que deban despachar», ⁸⁶ sin embargo, en la práctica esta misión está encomendada a los oficiales, aunque aquél siempre lo revisa. Tiene bajo su directa guarda y vigilancia los registros administrativos, es decir, los «libros reales de gobierno y gracia», y una vez copiado el documento es misión suya el corregirlo y autorizarlo con su firma. ⁸⁷ Refrenda los documentos firmados por el rey. ⁸⁸

Escribano de Cámara y Justicia

El escribano de Cámara de Justicia es con respecto a los documentos judiciales del Consejo, lo que el secretario para los gubernativos. Las facultades y obligaciones que la legislación le señala coinciden en esencia con las de aquéllos. Huelga, por tanto, la repetición. ⁸⁹

Oficiales

Los oficiales son meros auxiliares de los secretarios y del escribano de Cámara de Justicia.

⁸⁴ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 5.

⁸⁵ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 13: "que los secretarios escriban las consultas y en las de partes los pareceres, y las envíen y devueltas las guarden con secreto".

⁸⁶ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 10.

⁸⁷ *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 40.

⁸⁸ Tanto si se hicieron en su oficio como los procedentes de la escribanía de Cámara de Justicia: "los despachos de Justicia que se hicieron por el oficio del Escribano de Cámara y nos hubiesemos de firmar se nos enviaran para ello por mano de nuestros secretarios... y habiéndolos refrendado se vuelvan al dicho escribano...": *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 35.

⁸⁹ Cfr. *Recopilación*, lib. II, tít. X, ley 1 a 16.

Existe entre ellos una graduación y los ascensos, cuando no anduvo por medio la recomendación y el favoritismo, se hacían por antigüedad.

A la cabeza de los oficiales está el mayor.⁹⁰ Sustituye a los secretarios en sus funciones. En la práctica revisa la minuta de los despachos, hecha por otros oficiales, y autoriza, mediante la imposición de su rúbrica, el paso de ésta a *mundum*. Escribe también las consultas, aunque en teoría debe hacerlo el secretario. Señala junto al brevete de los documentos duplicados.⁹¹

De entre los oficiales hay uno encargado de los registros administrativos y otro que durante los períodos en que no hubo canciller llevó el sellado de los documentos y el registro del sello.⁹²

A continuación tendríamos que referirnos al canciller y registrador, sin embargo hemos creído conveniente integrar el estudio de este oficio en el capítulo que dedicaremos al sello.⁹³

Secretarios del Consejo de Indias durante el siglo XVIII

Para completar este capítulo, hemos creído de gran

90 Durante cierto tiempo tanto en la Secretaría de Nueva España, como en la del Perú, hubo dos oficiales mayores uno encargado de los asuntos de gracia, el otro de los de gobierno. El rey a consulta del Conde de Castrillo, gobernador del Consejo de Indias, en 29 de septiembre de 1641, ordenó que se consumiese una de las plazas en ambas secretarías. *Recopilación*, lib. II, tit. VI, auto 121.

91 Auto acordado del Consejo de Indias de 18 de marzo de 1655. En *Recopilación*, lib. II, tit. VI, auto 184.

92 León Pinelo: *El Canciller de Indias*, págs. 66 - 67.

93 Vid. Capítulo VI.

utilidad publicar la lista de los individuos que ocuparon la secretaría del Consejo, tanto de la negociación de Nueva España, como la del Perú.

Nos limitamos al siglo XVIII porque la nómina completa de los secretarios durante el siglo XVI y el XVII está publicada por Ernesto Schäfer en su obra *El Real y Supremo Consejo de Indias* y asimismo la incluye León Pinelo en su *Tablas Cronológicas*:

SECRETARÍA DE NUEVA ESPAÑA

Manuel de Aperrequi, 1700.

Gaspar de Pinedo, 1706.

Félix de la Cruz Ahedo, 1708.

Diego Sebastián de Morales, 1714.

Andrés de Elcorobarrutia, 1717.

Jerónimo de Uztáriz, 1719.

Juan Ventura de Maturana, 1732.

Simón Mozo de la Torre, 1737.

Francisco Campo de Arbe, 1738.

Fernando Tribiño, 1740.

Juan Antonio Valenciano, 1748.

José de Goyeneche, 1750.

Tomás del Mello, 1764.

Pedro García Mayoral, 1770.

Antonio Ventura Taranco, 1777.

Francisco Cerdá y Rico, 1795.

Antonio Porcel, 1798.

SECRETARÍA DEL PERÚ

Antonio de Ubilla y Medina, 1695.

Bernardo Tinagero de la Escalera, 1706.

Francisco Castejón, 1715.

Francisco de Arana, 1717.

Francisco Díaz Román, 1727.

Miguel de Villanueva, 1732.

José Joaquín Vázquez, 1747.

Juan Crespo Ortiz, 1757.

Marqués de los Llanos, 1766.

Domingo Díez de Arce, 1769.

Miguel de San Martín Cueto, 1773.

Manuel de Nestares, 1785.

Silvestre Collar, 1791.

Antonio Porcel, 1798.

Instituciones documentarias indianas en ultramar

Entienden de la *conscriptio* del documento público emanado de las autoridades indianas, los escribanos de Cámara, los escribanos de Gobierno, de Guerra, de Hacienda y los secretarios de virreinato.

Estas instituciones no surgen desde un principio sujetas a una organización, con un personal determinado y unas funciones precisas; su aparición y primera estructura es enormemente simple.

Vamos a referirnos en primer lugar a las escribanías de Gobernación y a las de Cámara.

Junto a los primeros descubridores y conquistadores indianos aparece generalmente la figura de un escribano real que además de actuar como escribano público, documenta, si necesario fuere, los negocios emanados de la autoridad, tanto sobre materias judiciales, como gubernativas, y refrenda los despachos.

Es el caso concreto de Cristóbal Colón a quien acompaña, ya en el viaje descubridor, un Rodrigo de Torres «escriuano de toda la armada». ⁹⁴

A medida que la penetración en el continente se va realizando y surgen los primeros asentamientos permanentes, estos escribanos reales multiplican sus funciones. Ejercen como escribanos públicos, escribanos del cabildo y al documentar los negocios emanados de la autoridad, con jurisdicción judicial y gubernativa, comienzan a llamarse escribanos de la Gobernación o más generalmente escribanos de Gobierno.

El escribano Diego Alvarado que documenta y refrenda una real provisión a nombre de los reyes, despachada por Colón, en calidad de virrey de las Indias, en Santo Domingo en 1499, nos sirve de ejemplo sobre esta cuestión. ⁹⁵

Estando investidas estas primeras autoridades —gobernadores, adelantados, capitanes generales— de poderes judiciales y gubernativos, estos escribanos documentan todos los negocios que surgen en el desempeño de sus atribu-

94 Ballesteros, Antonio: *Cristóbal Colón*, tomo II, pág. 12.

95 Real Provisión dada en nombre de los Reyes Católicos por Don Cristóbal Colón, en calidad de virrey, concediendo a Pedro Salcedo el privilegio exclusivo para que durante su vida solamente él pueda llevar y vender jabón a la isla Española: "fecha en la dicha isla Española en la dicha villa del puerto de Santo Domingo, a tres días de agosto, año del nacimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e nueve años". A. G. I., Patronato, 295, núm. 40.

ciones, sin distinción de materias. Decimos esto porque pronto, y con independencia de ellos se van a ir constituyendo las escribanías de Cámara, con funciones específicas. En efecto, cuando en 1511 se establece en Santo Domingo el Juzgado y Audiencia de apelación,⁹⁶ además de darles potestad para que sus jueces puedan despachar las ejecutorias y otras cartas a nombre de los reyes y los mandamientos a su propio nombre,⁹⁷ se ordena «que en la dicha Abdiencia aya vn escriuano de ella, que el Rey mi señor e padre e yo para ello diputaremos e nombraremos; ante el qual, e no ante otro alguno, pasen todas las cabsas, procesos e abtos tocantes al dicho oficio, el qual aya e lleve los derechos a su oficio pertenecientes por el arancel de estos reynos, cresciendo por cada maravedi del dicho aranzel cinco maravedis». ⁹⁸

En el texto citado todavía no se le titula escribano de Cámara pero es su precedente inmediato. Su misión consistirá además de la de entender en la parte burocrática de los procesos, en redactar y refrendar los documentos que bien a nombre de los reyes, bien a nombre propio, emanarán, en asuntos judiciales exclusivamente, de los funcionarios del juzgado.

Tenemos, pues, dibujadas las dos instituciones que, legalmente, estarán capacitadas para desarrollar la *conscriptio* del documento público emanado de los virreyes, presi-

96 Traslado autorizado de las ordenanzas de la Audiencia y Juzgado de Apelación de las Indias, expedidas en Burgos a 5 de octubre de 1511. A. G. I., Patronato, 170, ramo 12.

97 "Poniendo en la cabeça de las dichas cartas e mandamientos: Nos los juezes del Abdiencia e Juzgado que esta e resyde en las Indias, etc". Ordenanzas III, vid. nota 3.

98 Ordenanza IX, de las Ordenanzas citadas en nota 96.

dentes-gobernadores, gobernadores y audiencias, es decir, de la más alta esfera de las autoridades indianas.

Sin embargo, la convivencia de ambas no va a ser fácil y llegará un momento en que, en determinadas circunstancias, se fundan en una sola, como tendremos ocasión de exponer.

Pero continuemos con la evolución y desarrollo de la escribanía de Gobernación. En 1525, el rey hacía merced⁹⁹ a su secretario Juan de Samano de la escribanía mayor de la Gobernación de Nueva España¹⁰⁰ que ejercía Hernán Cortés. Se le autorizaba a poner sustitutos de su persona, tenientes de escribanos, no sólo junto a Cortés, sino en cualquier lugar, dentro de la gobernación¹⁰¹ donde hubiere o residiere una autoridad —alcalde mayor, por ejemplo—. Debería, como es característico en estos primeros escribanos de Gobernación, entender «en todas las cosas que ellos

99 Estas mercedes fueron muy características en estos primeros tiempos. Se pretendía así premiar los servicios de algunos individuos. Por supuesto no servirían por ellos mismos los oficios. Nombraban inmediatamente lugartenientes con los cuales se repartían los beneficios del cargo. Así, a Hernando de la Vega se le hizo merced por Real Provisión de 13 de septiembre de 1512 del oficio de fundidor y marcador del oro de la Española; a Guillermo de Croix se le concedieron, a medida que vacasen o se crearan de nuevo los oficios de tesoreros, contadores, alguaciles mayores, marcadores en Indias, por Real Provisión de 8 de mayo de 1520; a Francisco de los Cobos en 10 de marzo de 1522 se le nombra marcador y fundidor mayor de todas las Indias; a Lorenzo Galíndez de Carvajal se le nombra correo mayor de Indias en 27 de octubre de 1525, etc.

100 R. P., Madrid, 7 marzo de 1525, sobrecartada en otra Provisión de 19 de julio de 1527. A. G. I., Justicia, 154.

101 Se incluye en la gobernación de Nueva España "e en la Vitoria Garayana e rio de Panuco de las nuestras Indias del mar oceano desde la Punta de Tierra Firme del cabo de la ysla o tierra llamada Yucatán al poniente hasta la ysla o tierra Florida de Bimini que descubrió el adelantado Juan Ponce de León, ya difunto se incluyen las tierras que descubrieron el adelantado don Hernando Cortés y los adelantados Diego Velázquez y Francisco Garay y en que al presente esta proveído por nuestro gobernador el dicho adelantado don Hernando Cortés". Real Provisión citada, en nota 106.

proveyesen a los pleitos e negocios que ante ellos pasasen ansi ciuiles como criminales, ansi de gobernacion e repar-timiento como en otra cualquier manera».

El problema surgiría cuando en 1527, el soberano decide establecer una Audiencia en México. El modelo que se seguirá, y así se señala en sus ordenanzas,¹⁰² serán las de Valladolid y Granada; su jurisdicción abarcará el territorio de Nueva España; sus atribuciones serán judiciales.¹⁰³ Al igual que sus modelos hispanos, formarán parte de ella uno o dos escribanos de Cámara. Juan de Samano previendo que este hecho podría perjudicar sus derechos económicos al segregarle de su jurisdicción, como escribano de gobierno, los documentos emanados en materia de justicia por aquella institución, solicita del rey y consigue «que los escribanos que en la dicha abdiencia han de residir e residieren para los despachos de los negocios y pleitos y cosas que en ella obiere y se despacharen sean vuestros lugarestenientes y las personas que vos habeis nombrado o nombrades con vuestro poder bastante y no otra persona ni personas algunas...». ¹⁰⁴

Así, pues, por primera vez, se iban a unir las escribanías de Gobierno y las de Cámara. Y esta misma cuestión irá surgiendo dándosele la misma solución, es decir, la uni-

102 Estas Ordenanzas están hoy perdidas. El único texto completo que se conoce se publicó en Puga, Vasco: *Provisiones-cédulas*, fol. 27v., su fecha en Madrid a 22 de abril de 1528. Textualmente se dice "segun y como pueden y deuen conocer los nuestros oydores de la Nuestra Audiencia de Valladolid y Granada y los Alcaldes de nuestras Chancillerías". Ordenanza I.

103 Conocerían en primera instancia los pleitos civiles y criminales habidos dentro de las cinco lenguas y como tribunal de apelación de las sentencias dictadas por los jueces de toda la gobernación. Ordenanzas III y VI.

104 Real Provisión, Valladolid, 19 de julio de 1527. A. G. I., Justicia, 154.

ficación de las dos instituciones en todos los lugares donde se vayan creando audiencias.

En efecto, Juan de Samano continuó recibiendo del monarca la merced de las escribanías de Gobierno de las distintas gobernaciones indianas de tal manera que en 1536 tenía:

«la de Nueva España e la Audiencia real que en ella reside e de las tierras e provincias de Panuco cuya gobernacion estuvo encomendada a Nuño de Guzmán e de las gobernaciones e provincias de las Palmas e la Florida cuya conquista e gobernacion ouimos encomendado a Panfilo de Narvaez difunto e de las Provincias de Higueras e cabo de Honduras e Yucatan e Cocumel que al presente estan encomendadas al adelantado Don Francisco de Montejo e de la provincia de Nicaragua cuya gobernacion tenemos encomendado al presente a Rodrigo de Contreras e de las Provincias del Peru que es desde la provincia de Castilla del Oro llamada Tierra Firme esclusive hasta el estrecho de Magallanes por la mar del Sur en que se incluye la provincias de la Nueva Castilla cuya gobernacion hemos encomendado al adelantado Don Francisco Piçarro e la provincias de Toledo cuya gobernacion tenemos encomendada al mariscal Don Diego de Almagro e la gobernacion que tenemos dada de docientas leguas a Don Pedro de Mendoza, en la dicha costa del Sur y la Gobernacion que teniamos encomendada a Simón de Alcaçaba e por su fallecimiento habemos encomendado a Francisco de Camargo e la Gobernacion de las provincias de Santa Marta e cabo de San Roman hasta el rio Marañon en que se incluyen las provincias de Santa Marta cuya gobernacion al presente tene-

mos encomendada al adelantado Don Pedro Fernandez de Lugo e la provincia e golfo de Beneçuela e cabo de la Bela cuya gobernación thenemos encomendada a Bartolome e Antonio Belçer alemanes y la provincia de Paria cuya gobernación thenemos encomendada a Geronimo Dortal e la gouernacion de la Nueva Andalucia cuya gouernación thenemos encomendada a don Juan de Pes e otras prouincias que en los dichos terminos se incluyen en que no tenemos probeidos gouernadores asi mesmo el rio de Solis llamado de la Plata a cuya descubrimiento e poblacion fue Diego Garcia piloto cuya conquista e gouernacion al presente esta encomendada al dicho don Pedro de Mendoça con todas las tierras e prouincias a ello anexas e pertenecientes que todo ello es en las nuestras Yndias yslas e Tierra Firme del mar oceano». ¹⁰⁵

Cuando en 1542 se crea la Audiencia de los Reyes, Jerónimo de Aliaga que ejercía por renuncia de Juan de Samano la escribanía de Gobernación de Nueva Castilla, será nombrado también escribano de Cámara de la nueva Audiencia. ¹⁰⁶ Es decir, un fenómeno paralelo a lo ocurrido en Nueva España. Por supuesto este problema ocurrió en los lugares donde a la vez que existía una gobernación

105 La parte transcrita además de señalarnos las escribanías concedidas a Samano, nos presenta un panorama, prácticamente completo (falta la directa gobernación de los Colones) del estado político de las Indias en 1536: Real Provisión, Valladolid, 6 de noviembre de 1536: se concede a Juan de Samano facultad para poder renunciar, durante su vida o en su testamento la posesión de las respectivas escribanías. A. G. I., Justicia, 154.

106 La cuestión en este caso se complicó porque al crearse la Audiencia y Virreinato se unificaban dos gobernaciones la Nueva Castilla y Nueva Toledo. En la primera servía el cargo de escribano Gerónimo de Aliaga por cesión de Samano, y en la otra, lo servía un teniente de este último. Los dos fueron incorporados como escribanos de Cámara y Gobernación de la Audiencia y Virreinato. Auto del Consejo de Indias de 19 de enero de 1544. A. G. I., Escribanía de Cámara, 1.012, C.

—virreinato o gobernación propiamente dicha— se creó una Audiencia.

Habían transcurrido algunos años desde que el trabajo burocrático podía ser desempeñado por un solo individuo. Junto a los escribanos de Gobierno y de Cámara, cuyas oficinas —en los lugares donde hay creada Audiencia— se establecen en esta misma institución, aparecen una serie de funcionarios, todos con el título de escribanos reales, los cuales colaboran en la *conscriptio* documental y se establecen los aranceles por los que recibirían sus emolumentos; ¹⁰⁷ existe un oficial del sello y otro se encarga del registro de las provisiones.

Una razón económica —«por estar nuestros estados muy empeñados y ser mucha la suma que debemos y grandes los intereses que de ellos pagamos»— influirá, a partir de mediados del siglo XVI, en el desarrollo de las instituciones que nos ocupan: a partir de 1557 se ordena la venta de diversos oficios indianos, entre éstos las escribanías de Cámara y Gobernación y se dispone además que se acreciente su número. ¹⁰⁸

107 Por Real Cédula de 1528 se ordena a la Audiencia de Nueva España haga arancel de los derechos de los escribanos y ministros de su Audiencia. En 15 de diciembre de 1548, se ordena en el mismo sentido a la Audiencia de los Confines; en 15 de enero de 1569 a la de Quito, etc.; en 1 de marzo de 1589 a la de Lima. Los documentos los publica Encinas: *Cedulario*, tomo II.

108 Por ejemplo por Real Cédula de Valladolid, 24 de junio de 1559 se ordena al Presidente y oidores de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada que acrecienten y vendan los oficios que se indican en la nota que acompaña firmada del secretario Ochoa de Luyando. La nota dice: "los oficios y cosas que S. M. es servido que se vendan en las Indias para que sea ya todo el mayor dinero que se pueda para socorrer de sus necesidades presentes son: primeramente que se acrecienten escribanos del número en las ciudades y villas de españoles del Nuevo Reino de Granada y de las otras sujetas a la Audiencia Real

El resultado de la creación de nuevas escribanías fue la adjudicación, en personas distintas, de la escribanía de Cámara y de Gobierno, y la aparición de otras nuevas, tales como escribanos de Guerra, escribanos de Hacienda. Es decir, una multiplicación de acuerdo con las materias sobre las que tenderían. Todas, sin embargo, están adscritas en los lugares donde hay Audiencia, a este organismo: en el mismo edificio tienen sus oficinas y en él está constituido el archivo. Cuando el virrey o presidente gobernador despacha asuntos de una determinada materia y dispone sobre la misma, el escribano correspondiente documenta y refrenda los despachos.

En los lugares menos importantes —donde hay gobernador— las escribanías no se multiplican tanto, pues generalmente no acuden postores —habida cuenta que cobrarán por arancel y la documentación no será abundante— y los oficios estarán desempeñados por uno o dos escribanos que recibirán el nombre de escribano de Cámara y Gobernación, escribano de Gobernación y Guerra, etc.

Las misiones que la legislación encomendó a estos escribanos y las de los oficiales que trabajaban a sus órdenes vienen a coincidir en esencia con las desempeñadas en el Consejo de Indias por los secretarios y oficiales. Además de su participación en las etapas burocráticas de la *actio* jurídica emanada de las autoridades a las que están sujetos llevan a cabo la *conscriptio* documental; forman y con-

de esa tierra y asimismo acrecienten escribanías en la dicha Audiencia y en las gobernaciones de aquella tierra y se vendan a personas hábiles y suficientes que no sean de los prohibidos por todo lo más que se pueda...". A. G. I., Justicia, 1.105.

servan los registros; sellan los documentos en cuya validación interviene este elemento, etc.¹⁰⁹

Secretaría del virreinato

Desde un principio, junto a la figura del virrey, aparece un individuo que lo asiste en calidad de secretario, cuya característica fundamental es la de desempeñar un oficio de nombramiento personal, particular y privado.

A petición de los mismos virreyes se les autorizó que en los asuntos «que conviniere auer secreto» pudiesen tratarlos con ellos «despachando los vuestros mandamientos y otros despachos». ¹¹⁰ Apoyándose en esta disposición los virreyes, dándole un sentido más amplio a la ley, aun con las repetidas protestas de los escribanos de Cámara y Gobernación, ¹¹¹ se sirvieron cada vez y de una manera más absoluta de sus secretarios en lugar de estos últimos, sobre todo a partir de 1742, cuando se les dio un carácter oficial—recordemos que hasta este momento eran secretarios particulares—. En efecto, cuando se nombró virrey de Nueva España al conde de Fuenclara se le nombró como secretario a Francisco Fernández Molinillo y se decidió que desde este

109 Recoge las funciones de los escribanos de Cámara y Gobernación: *Recopilación*, lib. II, tít. XXIII y lib. V, tít. VIII.

110 Real Cédula al virrey del Perú, don Francisco de Toledo, Aranjuez, postrero de noviembre de 1568 (impresa). A. G. I., Escribanía de Cámara, 1.012 C; *Recopilación*, lib. II, tít. XVI, ley 5.

111 En nuestro trabajo *Don Martín de Mayorga*, págs. 62-63, recogemos la polémica desarrollada en México entre 1781-1782, entre los escribanos de Gobierno don José Gorráez y Juan Martínez de Soria, y el secretario de Cámara, don Pedro Antonio de Cossío, por asuntos de competencia.

momento los secretarios serían de directo nombramiento real.¹¹²

La secretaría del virreinato de Nueva España llegó a contar entre oficiales, escribientes y meritorios hasta 32 individuos, y en la segunda mitad del siglo XVIII fue objeto de diversas reglamentaciones por parte de los virreyes.¹¹³

112 El título de Mollinillo, dado en Aranjuez, 23 de abril de 1742. A. G. I., Indif. Gral., 265.

113 Vid., por ejemplo, Instrucción que deberá observarse provisionalmente en la Secretaría de Cámara del virreinato para el mejor régimen y gobierno de su ejecutivo, laborioso despacho, desde el día primero del próximo abril /1793/... Instrucción enormemente minuciosa como es característico del virrey que la formó, el 2.º conde de Revillagigedo.

Capítulo IV

TIPOS DIPLOMATICOS INDIANOS, EMANADOS DE LA AUTORIDAD SOBERANA

En páginas precedentes hemos analizado la génesis del documento indiano en su doble aspecto de *actio* y *conscriptio*. Tócanos ahora el estudio del documento en su aspecto formal, es decir, los elementos jurídico-diplomáticos —fórmulas, validación, etc.— que singularizan a cada uno de los tipos.

Para una más comprensiva exposición del tema dedicaremos el presente capítulo a la exposición de los emanados de la autoridad soberana; dedicaremos el capítulo siguiente a los tipos documentales emanados de autoridades públicas delegadas.

Decíamos cómo una de las características primordiales de la documentación emanada de la autoridad soberana durante el periodo que abarca nuestro estudio, es la marcada tendencia a la simplificación de los tipos diplomáticos, fenómeno que es consecuencia inmediata de la instauración del estado moderno que con respecto al campo documental sacrificará usos cancillerescos anteriores en aras de la efi-

cacia, claridad y rapidez en la transmisión del negocio jurídico.

Cuando nace el documento indiano en el reinado de los Reyes Católicos, ese proceso, que se había iniciado a finales del siglo XIV, y lo consideramos cumplido en las postrimerías del gobierno del emperador Carlos, está en su punto culminante.

La abundante gama de tipos documentales que emanan de la cancillería regia en la Baja Edad Media¹ se reducen unos, porque desaparecen, así el Privilegio Rodado y el albalá,² otros, porque se funden para dar lugar a un solo documento, de tal manera que el negocio indiano sólo tendrá como vehículo de transmisión dos tipos diplomáticos: uno, revestido de solemnidad que se reflejará fundamentalmente en su intitulación y en su validación: la Real provisión; otro, en que las fórmulas de estilo y las solemnidades quedan reducidas al mínimo: la real cédula.

Fijados los dos tipos diplomáticos señalados que permanecerán a lo largo de todo el período cronológico durante

1 Denominan y estudian estos tipos los autores citados en la nota 55 del capítulo III.

2 Los últimos ejemplares de Privilegios rodados surgen en el reinado de los Reyes Católicos. Sin embargo, no hemos encontrado ninguno que documente tema indiano. Cfr. Martín Postigo, María de la Soterraña: *La Cancillería de los Reyes Católicos*, págs. 37-113. El albalá concluye también ahora su vida diplomática. Todavía, sin embargo, pudo documentar negocios relacionados con las Indias. Estos tienen las mismas características internas y externas que los castellanos. Están dirigidos a funcionarios económicos y transmiten un negocio de este tipo. En realidad es un documento administrativo e interno. Sólo hemos encontrado dos. Por el primero, Alcalá de Henares, 18 febrero 1498, se ordena al mayordomo y contadores mayores de la despensa e raciones de la Casa Real que paguen cierta cantidad de mrs. a Hernando Colón por haberlo nombrado paje de la Reina. El otro, Alcalá de Henares, 19 febrero 1498, se ordena lo mismo, pero ahora a Diego de Colón. Ambos proceden del Archivo General de Simancas y los publica Fernández Navarrete: *Colección de los Viajes*, tomo II, págs. 257-258.

el cual se desarrolla nuestro trabajo, el proceso de simplificación que comentamos continúa, porque se mantienen vigentes las causas que lo iniciaron. Sin embargo, ahora, no irá encaminado a la supresión de ninguno de ellos. Se manifestará en un predominio abrumador del documento menos solemne sobre el más solemne. En efecto, la oficina productora del documento real indiano acentuará sensiblemente la expedición de reales cédulas restringiendo al máximo la de reales provisiones.

Si en un principio —reinado de los Reyes Católicos y Carlos I— la elección del tipo diplomático dependía en definitiva de la mayor o menor solemnidad (real provisión, real cédula respectivamente) de que se quería revestir la *actio* a documentar, poco a poco se abandona este criterio y se van fijando —no por ley, sino por costumbre— los negocios que adoptarían una u otra categoría documental. Como regla general diremos que la real provisión quedó limitada a transmitir los títulos y las concesiones de gracias y mercedes y la mayoría de los asuntos de justicia,³ quedando la real cédula como vehículo de los demás negocios emanados de la autoridad soberana.

Si a costa de la real provisión, la real cédula vivió un brillantísimo período durante gran parte del siglo XVI y todo el siglo XVII, las reformas borbónicas repercutieron negativamente en su desarrollo.

La nueva estructuración de la administración central indiana implantada con la creación de las secretarías del Despacho de Indias y Marina, y las facultades reservadas

3 Más adelante, en este mismo capítulo, recogemos los negocios que se documentan concretamente por Real Provisión.

al ministro que, para nuestros efectos, se convierte en el obligado intermediario entre el rey y sus súbditos americanos, obliga a la creación de un nuevo documento, la real orden, vehículo normal de comunicación entre el ministro de Indias y las autoridades indianas.

Desde este momento la expedición del documento real indiano disminuye de una manera sensible, pues la política americana se canaliza a través del ministro y sus actos de gobierno se plasman en la mentada real orden la cual reemplaza a la real cédula, y por supuesto a la real provisión, en la mayoría de los negocios a documentar.

Aunque en su momento no hubo un criterio definido con respecto a la nomenclatura de los documentos, y así se usaron términos aplicados desde diversos puntos de vista —nombres genéricos: despachos, cartas, órdenes; de acuerdo con el negocio jurídico que documentan: instrucciones, títulos, etc.— no hay duda sobre que los nombres más comunes con que se designaron —reales provisiones y reales cédulas— lo fueron de acuerdo con su distinto aspecto formal. Es decir se siguió un criterio diplomático, probablemente sin que se fuera consciente de él. Porque, en efecto, la diferencia entre ambas categorías no existe sino en su plasmación formulística. Ni respecto a la fuerza y vigor que el documento lleva en sí, ni al considerar el negocio jurídico documentado, incluso ni al analizar su génesis encontramos elementos que nos permitan diferenciar ambos tipos diplomáticos. La diferencia, ya lo hemos anunciado, reside en la mayor o menor solemnidad con que se reviste a la *actio*. Y esa solemnidad se refleja en esas cláusulas jurídico-

literarias que llamamos fórmulas o partes del discurso diplomático.

Al considerar en general estas cláusulas en que se plasma el documento real indiano, observamos cómo podemos mantener la terminología que establecieron para las mismas los diplomatistas del documento medieval. Claro está que algunas de ellas, precisamente las que no son esenciales para la validez del negocio jurídico, aquellas que son indicio de la solemnidad documental van a desaparecer: así el preámbulo, la invocación verbal expresada en una sola ocasión y en un documento que, aunque relacionado con lo indiano, su conscripción se llevó a cabo en el Consejo Real de Castilla.⁴

Por otra parte se desarrollarán extraordinariamente la exposición de motivos (llamada por los tratadistas indianos *prefacción*), el dispositivo y las cláusulas finales, cumpliendo estas últimas dos fines primordiales: garantizar la observancia y cumplimiento de la acción jurídica contenida en la parte dispositiva y certificar que se han guardado la serie de formalidades necesarias para dar validez y fuerza legal al documento.

Por último queremos referirnos a la cruz, más o menos cursiva con que se inician, sin excepción alguna, todos los

4 "En el nombre de la santísima Trinidad e eterna unidad, Padre e Hijo e Espiritu Sancto, tres personas realmente distintas e una esencia diuina, que uive e reina por siempre sin fin; e de la Bienaventurada Virgen gloriosa Sancta María nuestra Señora, su madre, a quien Nos tenemos por señora e por abogada en todos los nuestros fechos, e a honra, e reverencia suya e del Bienauenturado apostol Señor Santiago, luz e espejo de las Españas, Patron e guíador de los Reyes de Castilla e de Leon, e así mismo a honra e reuerencia de todos los otros Sanctos e sanctas de la Corte celestial": Confirmación del título dado a Cristóbal Colón de Almirante, Virrey y Gobernador de las islas e tierra que descubriere, Barcelona, 28 de mayo de 1493. Original. A. G. I., Patronato, 295.

documentos indianos. Podríamos considerarla como la última evolución del *Chrismon* medieval, o, al menos, su uso está basado en el mismo principio: una costumbre piadosa que impone al cristiano no comenzar cosa alguna si no es en el nombre de Cristo o de su representación simbólica.

La Real Provisión

Es el documento más solemne de los emanados de la autoridad soberana durante el periodo cronológico que estudiamos.

De los posibles aspectos de Diplomática indiana casi absolutamente carente de bibliografía, es el tema de la provisión real el que ha centrado el interés de los diplomatas y sobre el que encontramos mayor número de estudios. Así Aurelio Tanodi⁵ que analiza fundamentalmente las provisiones emanadas de las audiencias indianas o García Gallo⁶ que circunscribe su estudio al siglo XVI, desde un punto de vista más jurídico que diplomático. Claro está que a esta bibliografía específica debemos unir aquella que estudia las provisiones emanadas de la cancellería castellana, coetáneas y modelos de las indianas. Millares Carlo⁷ que la reseña esquemáticamente; Floriano Cumbreño⁸ que ahonda en su origen como tipo diplomático; Filemón Arriba⁹ y María de la Soterraña Martín Postigo.¹⁰

5 Tanodi, Aurelio: *Reales Cédulas y Provisiones*.

6 García Gallo, Alfonso: *La Ley en Indias*.

7 Millares, Carlos, Agustín: *Tratado de Paleografía*.

8 Floriano Cumbreño, A.: *Curso*, pág. 526 y ss.

9 Arribas Arranz, Filemón: *La Carta y Provisión real*.

10 Martín Postigo, María de la Soterraña: *La Cancellaría de los Reyes Católicos*, pág. 115 y ss.

[illegible]

Y. B. 1871

no conegam-se secretaria de Estado e Justia

Grady & Co. Mansfield St.

Goldschuytso

Bozhanalcz

Myr de d'Amoy n

25/1/1925

Dr. J. B. Smith

do
Pelican
more

ya chomona de plata q se labra a 2 reales ca de chomona a salame mas un real
de poneta de a y se tome en otros dyas

NY 2/2

Real Provisión de la Audiencia de los Reyes. Lima, 8 de marzo 1572
(A. G. I., Escribanía, 498 A).

La lámina reproduce la parte final del texto y el escatocolo de una Real Provisión emanada a nombre del Rey de una audiencia indiana. Hay huellas del sello real de placa desprendido. (Vid. pág. 246).

La primera cuestión que queremos plantear, con respecto a este tipo documental, se centra en torno a su nombre. Al documento que vamos a describir, le llamaremos real provisión y denominaremos así incluso a aquellos —el estudio de los cuales hacemos en el próximo capítulo— que aunque emanados a nombre del soberano fueron validados por el Consejo de Indias, un virrey o las audiencias indianas. Y preferimos el nombre de real provisión (especificando en el segundo caso real provisión del Consejo de Indias, de la Audiencia de México, etc.) porque este fue el término utilizado en la época —incluso en disposiciones legales— durante la cual no se hicieron distinciones terminológicas: ni basándose en las varias vías de las que podían surgir, ni en los diversos negocios jurídicos de los que el documento era el vehículo. El término real provisión hacía referencia a un documento con una estructura diplomática concreta. Queremos, sin embargo, dejar especificado que algunos estudiosos de estas disciplinas han propuesto una nomenclatura específica para diversos tipos de reales provisiones. Así Peña y Cámara propugna para el documento el nombre general de real carta, reservando el de real provisión para aquellos cuyo negocio jurídico es un título de nombramiento. Arribas Arranz lo denomina real carta cuando es firmado por la autoridad soberana y real provisión en los demás casos.¹¹

La real provisión no surge espontáneamente en la cancellería castellana. Es el resultado de tipos diplomáticos anteriores y la evolución tiene lugar en la Baja Edad Media.

11 Peña y Cámara, José de la: *Catálogo de documentos... sobre la época española de Luisiana*, tomo I, pág. 455. Glosario, voz: Real carta. Arribas Arranz, Filemón: *La carta y provisión real*.

Su antecesor más inmediato es el mandato y la encontramos constituida de sus cláusulas esenciales en el reinado de Alfonso XI. Cuando aparece el documento indiano el tipo diplomático está ya fijado.¹²

Por supuesto, su materia escriptoria es el papel que puede adoptar diversas formas. Siempre se emplea el doble folio pero a la hora de escribir el documento o bien se utiliza a manera de cuadernillo o bien la escritura adopta un sentido apaisado, quedando en este caso el texto en el centro de los dos folios abiertos enmarcados por amplios márgenes. Esta última forma deja de usarse en el momento de aparecer el papel sellado, en que ya es de uso exclusivo la forma en cuadernillo.

Dado que el soberano, para investir de mayor solemnidad, que no de mayor fuerza y vigor, a los actos emanados de autoridades individuales o colegiadas, autorizó a que lo hicieran por documentos expedidos a su nombre, es decir a través de la real provisión, como quiera que en este capítulo lo dedicamos sólo al documento emanado de la máxima autoridad quedan aquéllos de momento fuera de nuestra atención.

Antes de comenzar el estudio del desarrollo formulístico de las reales provisiones digamos que con respecto a éste podemos hacer las siguientes observaciones generales: consideramos cláusulas fundamentales, que nunca han de faltar, y son las que caracterizarán siempre a esta categoría diplomática la intitulación y la validación; son cláusulas en general propias de la provisión, aunque falten algunas

12 Estudian su origen los autores reseñados en las notas 7 a 10 de este capítulo.

veces y con el tiempo lleguen a desaparecer la salutación y la notificación; completan el tenor documental la dirección, la motivación, el dispositivo, las cláusulas finales y la data, que, sin ser exclusivas de este tipo documental, no faltan nunca.

Comienza este tipo diplomático con esa última evolución de la invocación simbólica o monogramática que es la cruz, cursiva o impresa cuando el papel que se utiliza es el sellado.

El documento propiamente dicho, se abre con la intitulación: fórmula que nos permite a simple vista calificarlo diplomáticamente, en la que se expresa en esencia el nombre de la autoridad soberana y que recoge las especiales circunstancias políticas del momento. Y decimos esto porque en la intitulación veremos reflejados los problemas que planteó el matrimonio de los Reyes Católicos o los que suscitaron la incapacidad de doña Juana y la minoría de edad de Carlos II.

El nombre del soberano se hace preceder del tratamiento y éste se resuelve siempre por *don* o su femenino, y se hace seguir de la fórmula de derecho divino, *por la gracia de Dios*. A continuación el cargo —rey, reina, emperador— y los dominios más significativos sobre los que histórica o jurídicamente ejercen efectiva u honoríficamente su poder. Enumeración que siempre terminaría con un etcétera abreviado.

Carlos II es el único que incluye un nuevo elemento —aunque no siempre— en la intitulación al hacer seguir su nombre del ordinal que le corresponde como rey de España,

expresado en letras: : «Don Carlos segundo por la gracia de Dios...». ¹³

Sólo nos queda hacer algún comentario sobre la expresión de los reinos y señoríos sobre los que ejerce su poder el soberano. Podemos establecer dos periodos cuyo hito sería 1381. Durante el primero, la expresión de los reinos y señoríos se caracteriza por innovaciones y variaciones en su enumeración; en el otro, fijada legalmente una intitulación determinada, se mantiene invariable con una excepción notable: la desaparición en el dictado del reino de Portugal, obligada por la independencia del reino vecino. ¹⁴

La concordia de Segovia ya había establecido que los reinos de Castilla y León antecederan a los de Sicilia y Aragón, y después de su conquista, Granada pasa a formar parte del dictado. ¹⁵

La intitulación de los Reyes Católicos, después de 1492 queda redactada así:

«Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes

13 Real Provisión, Madrid, 28 de enero de 1686. A. G. I., Justicia, 341.

14 Fue, no obstante, Carlos II el que dejó de usar ya en su intitulación el reino de Portugal, pues aunque Felipe IV, al final de su reinado, no era prácticamente rey del país lusitano, conservó todavía su mención.

15 Sobre las características y estados que integran la intitulación de los Reyes Católicos, Vid. Martín Postigo, María de la Soterraña: *La Cancillería de los Reyes Reyes Católicos*, pág. 19 y ss., y Arribas Arranz, Filemón: *La Carta o Provisión real*, pág. 35 y ss.

de Barcelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdaña, marqueses de Oristan e de Goçiano». ¹⁶

Es digno de notarse cómo los Reyes Católicos no incluyeron nunca en la enumeración de sus dominios las recién descubiertas e incorporadas tierras americanas.

Todavía, sin embargo, no estaba fijado el dictado.

El advenimiento de la casa de Austria introdujo modificaciones notables en él. En primer lugar la incorporación de los dominios tradicionales de la nueva casa reinante «archiduque de Austria, duque de Borgoña y Brabante, conde de Flandes e de Tirol». Por otra parte, Navarra, recién conquistada, se incorpora también. Por último aparecen los dominios indianos con la expresión de «rey... de las Indias, islas e Tierra Firme del mar oçeano».

Después de estas innovaciones la intitulación de Carlos I, queda así:

«Don Carlos por la gracia de Dios emperador semper Augusto, doña Juana su madre y el mismo don Carlos por la misma gracia, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Seçilias, de Jherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcias, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, islas e Tierra Firme del mar oçeano, Condes de Barcelona, sen-

¹⁶ Cfr. Real Provisión 16 agosto 1494, 10 abril 1494, 23 abril 1497. A. G. I., Patronato, 295. Todas son originales.

nores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristán, e de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgoña e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, etc...». ¹⁷

Durante este periodo no es difícil encontrar intituciones más restringidas e incluso que alteran el orden de los dominios. En gran parte se deben a errores de copista o a deseos de simplificar la fórmula.

En 1581, decíamos, se inaugura una segunda etapa que viene caracterizada porque se legaliza el uso y contenido del dictado.

Aprovechando don Felipe II la incorporación del reino vecino de Portugal escribió al Consejo: «he mirado en como se pondría el título de Portugal entre los demás que se suelen poner y me he resuelto en que se haga como vereis por el papel que aquí ira que aun fuera de lo de Portugal, andaua antes errado y con mala orden. Agora va en la que conviene y assi de aquí adelante se guardara esta en lo que se despachare por la vida de ese consejo, y se auisara a las Indias para que allá se haga lo mismo». ¹⁸ Al decreto, incluso en una consulta, acompañaba la fórmula de la intitulación que deberían reproducir desde entonces las reales provisiones. El dictado prescrito era el siguiente:

«Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,

17 Real Provisión, Madrid, 21 diciembre 1539. A. G. I., Escribanía de Cámara, 507, A.

18 Decreto autógrafo de Felipe II en consulta del Consejo de Indias de 12 de diciembre de 1580. A. G. I., Indif. Gral., 739 a 292. A las audiencias indianas se les comunicó por Real Cédula, Tomar, 17 de abril de 1581.

de León, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mollarcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias, islas e Tierra Firme del mar Oceano; archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, y de Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina, etc.».

Y esta sería ya la intitulación que, con los lógicos cambios de nombre del soberano y la desaparición de Portugal, se usaría de una manera constante en las provisiones,¹⁹ incluso durante el gobierno de los Borbones, pues al renunciar Felipe de Anjou a la corona francesa, lo hizo a todos los títulos franceses, no introduciendo novedad alguna en su dictado como rey español.

Dirección

La dirección puede expresarse directa e indirectamente, o lo que es lo mismo puede aparecer explícita o hallarse implícitamente incluida en la motivación o en el dispositivo.

Este segundo caso ocurre cuando la provisión concede una gracia o merced a petición de parte, representada por procurador y toca el cumplimiento de ella a las autoridades, o cuando es un título. La fórmula común que se utiliza es:

¹⁹ La Recopilación recoge, despersonalizándolo (don N.), el dictado anteriormente transcrito y ordena que siempre se ponga así. Cfr. lib. II, tit. I, ley 8.

«...Por cuanto N, en nombre de N. me ha hecho [o me ha sido hecha] relación que... e mandamos al Presidente e oidores de la nuestra Audiencia e chancilleria real de la isla Española y a qualesquier otras nuestras justicias de las dichas nuestras Indias, islas e Tierra Firme del mar oceano...».

En los demas casos la dirección aparece explicitamente expresada, a continuación de la intitulación. Sería prácticamente imposible recoger los distintos modelos en que se resuelve esta cláusula, que depende, claro está, de la persona, personas o instituciones a quien se dirige la disposición.

Las hay de dirección general en cuyo caso aparece una enumeración casi exhaustiva de autoridades o personas representativas:

«A vos los duques, condes, marqueses, ricos homes y a los presidentes, gobernadores, gran canceller y a los del nuestro Consejo de las Indias, y a los nuestros virreyes, presidentes y oidores de nuestras Audiencias reales, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y oficiales de nuestra real hacienda de estos reynos y de las Indias, islas e Tierra Firme del mar oceano, prior y consules de los consulados de Sevilla y Mexico y Lima y a nuestros presidentes y jueces oficiales y letrados de la Casa de la Contratación de Sevilla, generales, almirante, cabos y demas ministros y oficiales de las armadas, flotas y navíos de la carrera y navegacion de las Indias y a qualesquier otras personas

a quien lo contenido en esta nuestra carta toca o tocar pueda». ²⁰

Es muy característica de las pragmáticas esta dirección de tipo universal, obligada por la validez general que tenían para todo el reino.

También se desarrolla extraordinariamente cuando la provisión es una ejecutoria:

«Mis virreyes, presidente y oidores de mis Audiencias y Chancillerías reales que residen en los mis reinos y provincias del Perú y de la Nueva España, gobernadores y corregidores, alcaldes maiores y ordinarios y otros mis juezes y justicias qualesquier de todas las çiudades, villas y lugares de esos mis reinos y provincias y a cada uno y qualquier de vos ante quien esta mi carta executoria fuere presentada y lo en ella contenido tocare su cumplimiento y ejecución». ²¹

Cuando la provisión va dirigida a personas o autoridades concretas, la dirección se reduce considerablemente. Se procura expresar el nombre de la autoridad y a continuación su cargo y el lugar de su ejercicio, todo antecedido del pronombre vos:

Como ejemplo expresaremos algunas de estas cláusulas:

«A vos Jerónimo Dortal, nuestro governador de la provincia e golfo de Paria».

²⁰ Real Provisión en que se declara la autoridad que ha de tener la Recopilación de Indias. Madrid, 18 de mayo de 1680. Se imprimió en la misma *Recopilación*.

²¹ Real Provisión, Ejecutoria desde el punto de vista jurídico, Zaragoza, 13 enero 1711. A. G. I., Escribanía, 284.

«A vos el reverendo yn Christo padre fray Vicente de Valverde, electo obispo de las provincias del Peru».

«Prior y consules del consulado y comercio de la universidad de cargadores a los nuestros reinos de las Yndias de la ciudad de Seuilla».

«a Vos Matheo de Mazo a quien e proueito por mi gobernador y capitan general de la ciudad de Cumana y su provincia o a la persona que os sucediere en dicho empleo...».

Salutación

Con esta cláusula se cierra el protocolo inicial de las provisiones. Aunque es característica de este tipo diplomático, no es constante e incluso llega a desaparecer por completo.

Hasta el último tercio del siglo XVI, aparece siempre, excepto en aquellas cuya dirección va implícita en la motivación, es decir las provisiones en que la exposición de motivos se inicia inmediatamente después de expresada la intitulación. A partir de la fecha señalada no volvemos a encontrarla y desaparece de la redacción documental.

Su fórmula más común es «Salud e gracia» o más breve aún «salud».

Notificación

De acuerdo con un orden ideal debería seguir a la salutación el preámbulo, cláusula con que se inicia la parte

central o texto del documento. Sin embargo, por las imprecisiones de su contenido, lo arcaico de su redacción y lo innecesario desde el punto de vista jurídico, falta absolutamente de la provisión. En su lugar, y sirviendo mejor que ella de nexo entre el protocolo inicial y el texto, aparece la notificación. Con ella se abre, pues, la parte sustancial del documento. Es, al igual que la salutación, fórmula característica de la provisión, aunque no constante ni esencial de ella.

En realidad con la notificación el autor del documento pretende hacer una llamada de atención a los destinatarios de él para que no pasen por alto el contenido de la exposición de motivos, fundamento del negocio jurídico documentado.

Su fórmula, cuando aparece, es sencilla «Sabad», «Sepades» o «bien sabeis».

Exposición

Al expresar esta cláusula, como es sabido, los fundamentos en que se apoya el autor del documento para que de él haya emanado la *actio* jurídico documentada, su redacción no puede quedar sujeta a modelos más o menos estereotipados. Por el contrario su redacción ha de ser libre, coincidiendo, eso sí, en documentos cuya *actio* sea la misma. Su redacción, por tanto, dependerá en gran parte de la naturaleza del negocio documentado.

Intentaremos expresar algunos prototipos, pero antes digamos que si la provisión ha mantenido un orden normal en sus cláusulas (intitulación, dirección, salutación, notifi-

cación) la exposición queda unida a la notificación por las conjunciones *que* o *como*; si, por el contrario, sigue inmediatamente a la intitulación, comienza por la locución: *por cuanto*.

a) Provisiones de nombramientos, es decir, títulos. Todavía durante el siglo XVI observamos algunas provisiones que recogen en la exposición fórmulas usuales y consagradas en la baja edad media:

«por hazer bien y merced a vos Diego de Agüero, acatando vuestra suficiencia e habilidad e algunos servicios que nos haveis fecho y esperamos que nos hareis de aqui adelante y en alguna enmienda e remuneración dellos». ²²

En títulos posteriores la fórmula evoluciona:

«Por quanto por ser cumplido el tiempo porque fue mi boluntad de proveer por mi virrey, gouernador y capitan general de la Nueva España al duque de Alburquerque conbiene proueer persona que sirua los dichos cargos de las partes y calidades que para tan grande ministerio se rrequiere y teniendo atencion a la calidad, meritos y partes que concurren en vos Don Juan de Leiuá y de la Zerda marques de Leiuá y Ladrada Conde de Baños y esperando que tendreis siempre delante el seruicio de Dios y mio y bien de aquellos reynos procurando su perpetuydad poblacion y ennoblecimien-to y que los indios y naturales dellos sean bien trata-

²² Real Provisión 28 febrero 1568. A. G. I., Lima, 565, lib. 2, fol. 301.

dos instruydos y doctrinados en las cosas de nuestra sancta fee catolica y mantenidos y amparados en la justia y que en todo lo demas prozedereis como de buestra prudencia y buen celo se confia por la presente...». ²³

b) Ejecutorias:

En este tipo de provisiones la exposición recoge todas las circunstancias del pleito, las distintas sentencias que en los diversos momentos de él se dieron hasta la sentencia final en grado de revista.

La fórmula comienza siempre así:

«Sabed [notificación], que pleito se ha tratado ante los del nuestro Consejo Real de las Indias, entre N. y N. su procurador en su nombre de la una parte y N. y N. su procurador en su nombre de la otra...»,

continúa la exposición de las incidencias del pleito.

Por último, antes de que aparezca el dispositivo, se recoge siempre la petición hecha por la parte beneficiaria de la sentencia para que se despache la ejecutoria, en fórmula parecida a ésta:

«E agora el dicho N., en nombre de N. ha pedido y suplicado que para que lo contenido en las sentencias por los del dicho nuestro consejo dadas, fuere guardado, cumplido y executado le mandasemos dar nuestra carta ejecutoria dellas, o como la nuestra merced fuese

²³ Título de virrey de Nueva España para don Juan de Leiva y de la Cerda, Madrid, 26 febrero 1660. A. G. I., Indif. Gral., 514, lib. I, fol. 147 v.

lo cual visto por los del dicho nuestro consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta ejecutoria para vos...».

c) Provisiones de gobernación:

La exposición de este tipo de provisiones expresará alguna de estas circunstancias: expresión del hecho o acto sobre el que recaerá la parte dispositiva y circunstancias por las que viene a conocimiento del soberano; se aclara si la resolución se toma a petición de parte; se señala la participación de consejeros en la génesis de la *actio*:

«por cuanto N., en nombre de Vos el concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de la ciudad de N., me ha hecho relación que... lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón...».

En este caso se cita la fuente de información, el hecho informado y la participación de los consejeros en la génesis de la *actio*.

En otras ocasiones el informador además de participar el hecho pide o suplica una determinada resolución:

«N. en nombre de N., me hizo relacion que... e nos suplicó mandasemos que... lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias fue acordado que debíamos dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien...».

Una última redacción que queremos destacar es la que se emplea cuando la información del hecho no provino de parte sino como consecuencia de un acto de gobierno:

«A nos es hecha relacion... e por proveer e remediar sobre ello, como cumple a mi servicio e al bien e pro comun de mis reinos mande a los del mi consejo que viesen y platicasen sobre ello...».

d) Provisiones que sobrecartan otras:

En este caso la parte expositiva está integrada por el documento que se sobrecarta, antecedido de las características externas del documento y seguidas de la expresión de las causas que han hecho necesaria la nueva disposición: ²⁴

«Bien sabeis como nos mandamos dar e dimos para vos una nuestra carta e provision real firmada de mi el rey e sellada con nuestro sello e librada de algunos del nuestro consejo de las Indias, su tenor de la cual es este que se sigue...»,

se transcribe a continuación el documento a sobrecartar y se concluye con los motivos por el cual se expide el documento: incumplimiento de su contenido, generalmente.

Consideración final

A través de los ejemplos prácticos que hemos transcrito,

²⁴ De las sobrecartas nos ocupamos en el capítulo I al analizar los modos de tradición documental.

hemos podido observar que en la exposición se reflejan dos de las etapas por las que pasa la *actio* en su génesis, con independencia del tipo que sea: la *petitio* y la participación de los intervinientes.

En efecto, cuando el soberano actúa a petición de parte, y no de oficio, es común que se haga constar este extremo en la exposición de motivos, incluso haciendo referencia a la petición escrita.

«Por parte de N. nos fue fecha relación por su petición que presento en el nuestro consejo de las Indias...».

La participación de los intervinientes, generalmente de los consejeros de Indias, aunque no siempre como pronto observaremos, es casi constante, hasta tal punto que las provisiones en cuya *actio* participaron fueron nombradas ya en aquellos tiempos *cartas acordadas*.²⁵

La fórmula la hemos transcrito en varias ocasiones:

«e visto por los del nuestro consejo de las Indias fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon...»

«e visto por los del nuestro consejo de las Indias fue acordado que vos debíamos encomendar y cometer...».

En el caso de no ser el Consejo, institución permanente de consulta, el que interviene, se acostumbra a asentar los

²⁵ El término de acordado calificando a un documento es frecuente cuando el tal documento emana de una sustitución de gobierno colegiada. Así vemos también: auto acordado.

nombres y cargos de los que participaron en el negocio o simplemente se indica de un modo genérico:

«...hemos mandado juntar presonas de todos estados assi prelados como caualleros y rreliгиозos y algunos del nuestro consejo para praticar y tratar las cosas de mas ymportancia de que hemos tenido ynformacion que se devian mandar proueer lo qual maduramente altercado y conferido y en presençia de mi el rrey diversas vezes praticado y discutido y finalmente aviendome consultado el paresçer de todos me resolui en mandar...». ²⁶

...«e consultado con la emperatriz e reyna mi muy cara y muy amada hija e mujer avemos acordado de...». ²⁷

Dispositivo

A semejanza de la motivación, es el dispositivo la parte del documento de redacción más libre. Al ser la expresión del negocio jurídico, debe expresarse sin ambigüedades, con claridad y precisión y tenderá a ser semejante en documentos que transmiten un mismo negocio.

Como dice García Gallo, ²⁸ «en la decisión el monarca, en el ejercicio de su poder real dispone lo que tiene a bien y sus órdenes adquieren por ello vigor y fuerza habiendo de ser obedecidas y cumplidas en consecuencia por las per-

²⁶ *Leyes Nuevas* de 1542-43. Cfr. edición de Muro Orejón, Antonio.

²⁷ La Real Provisión está intitulada por doña Juana y don Carlos y firmada por la reina Isabel, esposa de Carlos V, de aquí que se diga hija y mujer. Real Provisión, Valladolid, 6 de noviembre de 1536. A. G. I., Lima, 565, fol. 230 v.

²⁸ García Gallo, Alfonso: *La Ley de Indias*, pág. 682.

sonas a quienes se dirigen», salvo si alegan los vicios de subrepción u obrepción, añadiríamos nosotros. El dispositivo se presenta como consecuencia lógica de la motivación y apoyada en ella. Es, por esta razón, frecuente que sus redacciones se entrecrucen, fundiéndose ambas, aunque son siempre perfectamente separables.

En el dispositivo el rey adopta el plural mayestático y es muy frecuente el uso de una pareja de verbos, más o menos sinónimos, para expresar el negocio documentado. Así encontramos:

«Vos mandamos»; «vos mandamos y encargamos»; «ordenamos y mandamos»; «prorrogamos y alargamos»; «confirmamos, loamos e aprobamos y tenemos por bien»; «es nuestra merced de os nombrar, como por la presente os nombramos...».

Sería prácticamente imposible intentar una sistematización de esta cláusula, cuya redacción depende de la calidad del negocio documentado.

En un principio la legislación²⁹ admite o reconoce la posibilidad de documentar por real provisión tres materias y así habría provisiones de Gobernación, de Gracia y de Justicia. Ahora bien, la razón de que un negocio sobre estas tres determinadas materias, adopte este tipo diplomático, reside en la mayor o menor solemnidad con que el autor de la *actio* quiera revestirlo. Es en teoría imposible trazar un esquema previo, apoyado en la legislación indiana, que recogiera las calidades del negocio jurídico. Sin embargo, dado

²⁹ Recopilación, lib. II, tit. VI, ley 23.

que la voluntad del autor no se manifiesta nunca explícitamente y entonces la elección del tipo diplomático es cuestión de costumbre cancelleresca, esta costumbre estableció, andando el tiempo, los asuntos documentados por provisión, fijando, si no la exacta redacción del dispositivo que transmite negocios semejantes, sí la estructura general de él.

De acuerdo con esta práctica hemos hecho la siguiente lista de los asuntos que se documentan por real provisión, a partir del reinado de Carlos I, pues durante éste todavía no se ha establecido de una manera rigurosa la costumbre y aún encontramos negocios que en adelante se documentaran por real cédula, usando como vehículo la solemne provisión: ³⁰

—Ordenanzas.

—Títulos para cargos:

- a) eclesiásticos: Ejecutoriales de arzobispos y de obispos, dignidades y canonjías.
- b) seculares: títulos de virreyes, de gobernador, capitanes o comandantes generales; teniente de rey, sargentos mayores, alcaldes, escribanos mayores de gobernación presidentes, de Audiencia, oidores, fiscales, alcaldes de corte, alguacil mayor, escribanos de cámara, receptores de cámara y gastos de justicia, regente, contadores, oficial real (contador tesorero, factor), escribano mayor de minas y

³⁰ Esta lista de asuntos documentados por Real Provisión la hemos establecido después de considerar un gran número de Reales Provisiones, que actualmente se conservan en el A. G. I. No pretendemos que sea exhaustiva, pero sí la consideramos bastante completa.

registros, del tribunal de cuentas, regidor, alférez mayor, alcalde de hermandad, alguacil mayor, depositario general, corregidor y alcalde mayor, escribano de número y concejo, escribano de provincia, notaría y notario mayor, de corregimientos, superintendente, tesorero y contador, ensayador, fundidor de la casa de la moneda; generales de armada; general de flota; almirante de la flota, capitanes veedores de plazas honorarias y jubilaciones, de pacificador y poblador, de oficios perpetuos.

- Títulos de ciudades.
- Títulos de muy noble, leal, etc. a ciudad o uso de otro renombre.
- Concesión de blasón de armas para ciudad o particular.
- Asientos de alcabalas y otras rentas.
- Mercedes a villas y ciudades.
- Cartas de naturaleza.
- Ejecutorias de naturaleza.
- Despachos de merced perpetua.
- Confirmaciones de encomiendas.
- Prorrogación de rentas.
- Facultad vitalicia para nombrar teniente.
- Facultad para fundar mayorazgo.
- Perdones o indultos.
- Futuras sucesiones.
- Confirmaciones de ventas y composiciones de tierras.
- Facultad a los provistos de gobernadores, corri-

mientos y alcaldías para que sirvan estos empleos nuevos nominados.

—Facultad de poder nombrar a un teniente poseedor perpetuo.

—Legitimación de hijos expureos para heredar.

—Legitimación de hijos bastardos.

—Legitimación de hijos naturales.

—Facultad para hacer probanzas.

—Emplazamientos.

—Comisión en grado de segunda súplica.

—Ejecutorias en forma de pleito fenecido.

Cláusulas finales

Estrechamente relacionadas con el dispositivo aparecen las que con un término general y poco preciso se designan con lenguaje diplomático: cláusulas finales.

Aun a pesar de la posible clasificación que de ellas se puede hacer en: preceptivas, prohibitivas, derogativas, reservativas, obligatorias, denunciativas, conminatorias, penales, mencionadoras de formalidades diversas y anuncio del signo de validación, su redacción es variadísima y escapa a toda sistemática.

A modo de ejemplo transcribiremos varias de ellas, acompañadas de un breve comentario.

Entre las más constantes debemos citar, en primer lugar, la de sanción o penal, es decir aquella cláusula en que se expresan las penas a las que serían acreedores los que no cumplieran lo ordenado en el documento.

Es esta cláusula tradicional en la documentación real

española y ya la encontramos en los ejemplares correspondientes al período astur. Aunque desaparecen ahora de su fórmula las amenazas de tipo espiritual, tan características del documento medieval, continúan expresándose una serie de penas pecuniarias, multas en definitiva, amén de la pérdida del favor real:

«e los unos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra cámara»;

«e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e mill castellanos de oro para la nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziere».

La cláusula preceptiva tiende a recordar a los que integran la dirección del documento el deber ineludible que tienen de cumplir lo mandado. Ha sido llamada también *requerimiento*, en cuanto que se cita a aquellos a quienes va dirigida la disposición, requiriéndoles a su cumplimiento:

«Porque vos mando a todos e a cada uno de vos, el dicho Almirante e gobernador, e jueces e oficiales que agora sois o fueredes de aqui adelante e otras cualesquier personas a quien lo de suso en estas Ordenanzas que de suso van encorporadas y se hace mincion, que las guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir e ejecutar en todo e por todo, segun que en ellas y en cada una dellas se contiene; y en guardandolas e cumpliendolas, las executeis y hagais ejecutar las penas e las otras cosas en ellas y en cada una de ellas conteni-

das en las personas e bienes de las que en ellas cayeren e incurrieren e asi mismo las guardedes y cumplades vosotros segun e de la forma e manera en las dichas Ordenanzas contenidas...». ³¹

Lo general, sin embargo, es que esta cláusula se reduzca, adoptando una expresión más simple:

«y encargamos al ilustrisimo principe Don Felipe e a los otros infantes, nuestros muy caros nietos e hijos que guarden y cumplan e fagan guardar e cumplir nuestra carta e todo lo en ella contenido y contra el tenor y forma de ella no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera». ³²

Y más simple aún:

«e mandamos al presidente e oidores de la nuestra audiencia e chancilleria real de la isla Española y a cualquier otras nuestras justicias de las dichas nuestras Indias, islas e Tierra Firme del mar oceano que hagan guardar y cumplir lo contenido en esta nuestra carta». ³³

Es característico de las provisiones que transmiten un hecho de interés y cumplimiento general, el uso de las cláu-

31 Real Provisión que transmite las llamadas Ordenanzas de Burgos de 27 de diciembre de 1512. Capítulo 35. Estas Ordenanzas las reproduce Muro Orejón, Antonio: *Ordenanzas reales sobre las Indias*.

32 Real Provisión, Valladolid, 3 de noviembre de 1536. A. G. I., Santo Domingo, 1.121.

33 Real Provisión, Valladolid, 13 de enero de 1537. A. G. I., Santo Domingo, 1.121.

sula de publicación.³⁴ En ellas o se ordena que se pregone, indicando a veces los lugares donde debe hacerse; o bien que se imprima para darle la difusión necesaria:

«e porque todo lo suso dicho sea mas notorio especialmente a los naturales de las dichas nuestras Indias en cuyo provecho y beneficio esto se ordena, mandamos que esta nuestra carta sea impremida en molde y se envíe a todas las nuestras Indias a los religiosos que en ellas entienden en la instruccion de los dichos indios a los cuales encargamos que alla las hagan traducir en lengua india para que mejor lo entiendan y sepan lo proveido...». ³⁵

«Y para que sean mejores guardadas y cumplidas y mas publico y notorio a todos, mandamos que esta nuestra carta sea imprimida al pie de la dicha nuestra provision y ordenanzas porque ninguno pueda de ello pretender ignorancia». ³⁶

Las provisiones por las que se encargaba realizar algún negocio a los ministros y justicias indianos o aquellas en las que se les pedía información sobre algo en que hubiera

³⁴ Así estaba legislado: "los del Consejo de las Indias procuren siempre dar orden, que nuestras leyes y provisiones, que de aqui adelante diéremos [es de 1571] se publiquen donde y quando convengan, y que de la publicacion y cumpliminto de ellas se tenga siempre en el Consejo aviso y certificacion, salvo si pareciere que alguna provision sea secreta, porque en tal caso mandamos que no se haga publicacion. Y para que se entienda las que se han de publicar, o no ordenamos que en las que se hubieren de publicar se ponga la forma, tiempo y lugar en que se publiquen": *Recopilación*, lib. II, tit. II, ley 24.

³⁵ *Leyes Nuevas*, 1542. Edición de Muro Orejón, Antonio.

³⁶ *Leyes Nuevas* de 1543, edición de Muro Orejón, Antonio.

que proveer, era preceptivo³⁷ incluir una cláusula en la que se ordenaba se diera pronto aviso y relación:

«y embiareis al nuestro consejo de las Indias relación de como lo hubieredes fecho». ³⁸

Es relativamente frecuente la cláusula de emplazamiento, cuya redacción viene a ser así:

«e si no pudieredes o no quisieredes facer lo aqui contenido, mando al que os la mostrare que os emplace que parecais ante mi virrey en la mi Audiencia y Chancilleria dende el dia que os emplaçare a quinze dias primeros siguientes a dezir cual es la razon porque no cumplis mi mandado». ³⁹

Por las cláusulas que hemos transcrito y otras muchas, cuya enumeración haría interminable esta parte del trabajo, ya de por sí monótono, podemos comprender cuán variada es la redacción que pueden adoptar y cuán amplio es su contenido. No debemos olvidar que estas llamadas de sanción, van destinadas a garantizar el cumplimiento del hecho documentado y son amplísimas y variadas las garantías jurídicas que la autoridad soberana utilizó para ello.

37 "Mandamos que en todas las Provisiones, cédulas y cartas en que cometiremos algunos negocios a Ministros y Justicias de las Indias o en que pidieremos informacion de las cosas, sobre que convenga proveer, se ponga cláusula, en que se les mande que con brevedad lo determineis y con ella nos den aviso e informen de lo que proveyeren o nos debamos saber para proveer lo que convenga". *Recopilación*, lib. II, tít. VI, ley 32.

38 Real Provisión, Valladolid, 19 de julio de 1536. A. G. I., Lima, 565, lib. 2, fol. 154.

39 Real Provisión 30 agosto 1520. A. G. I., Patronato, 198.

Por último queremos sólo citar algún ejemplo de cláusulas de corroboración que, como es sabido, anuncian las fórmulas necesarias para la perfección del documento y ponen en relación el texto con el protocolo final:

«de lo cual vos mandamos dar e dimos la presente firmada de la emperatriz y reina nuestra cara e muy amada hija e mujer, sellada con nuestro sello». ⁴⁰

Sólo llevan este tipo de fórmulas aquellas provisiones que, aunque intituladas por el monarca reinante, están validadas con la firma de la persona que ejerce circunstancialmente la gobernación del reino.

Protocolo final

Pasamos al estudio de la parte final de las provisiones. Recordemos que está integrada por la fecha y la validación.

De la primera sólo decimos ahora —pues dedicamos un epígrafe concreto a la cronología del documento indiano— que consta de fecha tópica —lugar— y crónica —día, mes y año—.

La validación integrada en sus tres partes —suscripción, signatura y sello— es, junto con la intitulación, aquella cláusula que nos permite reconocer a simple vista este tipo documental. Parte esencial del documento, adopta en la provisión unas características peculiares. Para hacer más

40 Real Provisión, Valladolid, 3 de noviembre de 1536. A. G. I., Santo Domingo, 1.211.

comprensible su estudio vamos a desgajar de ellas dos partes: I) firmas y rúbricas, II) sello.

I) Firmas y rúbricas

a) DEL REY: las provisiones emanadas de la autoridad soberana —las que estudiamos en este capítulo— están validadas en primer lugar por la firma y rúbrica del rey. Coincide por tanto la persona que la intitula con la que lo valida.

Sólo una excepción hay que señalar: cuando el soberano está ausente, o es menor de edad, la provisión la firmará y rubricará el gobernador del reino. En este caso hay siempre un real decreto previo anunciando los poderes que se conceden al gobernador, una instrucción al Consejo de Indias sobre el modo de despachar los asuntos y una orden circular a las instituciones indianas comunicando que los despachos los firmará el gobernador.⁴¹

Generalmente en el texto de la provisión se añade una

⁴¹ Así, en 1554, Carlos I deja una instrucción fechada en La Coruña a 12 julio 1554: "La orden que S. M. [Carlos I] e yo [el príncipe Felipe] desseamos que la serenísima princesa Doña Juana mi muy amada hermana mande que se guarde y tenga durante la ausencia de S. M. y mía en la Gobernacion de las Indias, yslas e Tierra firme de la mar oceana es la siguiente..." (A. G. I., Patronato, 170, ramo 53).

En virtud de esta instrucción se faculta a la Princesa a firmar las Provisiones. Se dio cuenta a las autoridades indianas por una Real Cédula de la misma fecha. Hemos encontrado el acuse de recibo del cabildo de San Juan de Puerto Rico (carta de 15 de octubre de 1555, A. G. I., Santo Domingo, 164) y del gobernador de esa isla, licenciado Carasa (carta de 15 de octubre de 1555, A. G. I., Santo Domingo, 155). Lo mismo ocurrió en 1706, cuando Felipe V tiene que marchar al campo de batalla y deja a su esposa como gobernadora del reino: "los despachos de oficio y parte los firmara la reina..." Instrucción al Consejo de Indias, 22 de febrero de 1706. A. G. I., Indif. Gral., 260.

cláusula en la que se advierte que el documento va validado por dicho gobernador.⁴²

Por último en el refrendo del secretario se hace constar que la orden para suscribirlo partió del lugarteniente general del monarca, como representante suyo y haciendo sus veces.⁴³

Es decir se tomarán una serie de medidas para garantizar y autenticar al documento que viene validado por otra persona distinta del monarca.

El rey firma siempre con el pronombre *Yo* seguido de su cargo u oficio, y la rúbrica. Los gobernadores, si es el príncipe heredero o la reina adoptan la misma forma «Yo el príncipe [rúbrica]», «Yo la reina [rúbrica]»; si es otra persona, con su nombre y rúbrica. Así en 1548 cuando quedan por gobernador Maximiliano y la infanta María, firman «Maximiliano y María», más sus rúbricas.

b) **REFRENDO DEL SECRETARIO:** a continuación y a línea tendida refrenda la provisión el secretario. La fórmula en

42 "En el formulario de ellos [Las Reales provisiones] se observara poner en el dictado en renglón más abajo y algo apartado del mío la reina gobernadora", Real Decreto 22 de febrero de 1706. A. G. I., Indif. Gral., 260.

43 "Habiendo S. M. resuelto por justas consideraciones que de aquí adelante el Príncipe, nuestro señor, firme todos los despachos que él solía firmar me ha mandado avise a Vm. para que lo tenga entendido, con advertirle que dichos despachos se han de hacer en nombre de S. M. y por la misma forma y estilo que hasta qui, poniendo en la refrendada las palabras siguientes: Por mandado del Rey nuestro señor, su alteza en su nombre [caso de las Reales Cédulas] y en los despachos que van por Don Phelipe [Reales Provisiones]. Yo, fulano, secretario del rey nuestro señor la fize escriuir por su mandado, su alteza en su nombre": Oficio dirigido por el secretario real Jerónimo Gassols al secretario del Consejo Juan de Ibarra. San Lorenzo, 6 de septiembre de 1597. A. G. I., Indif. Gral., 868. Aunque se refiere concretamente al Príncipe Felipe II es la fórmula práctica en que se resuelve siempre este caso.

que se resuelve es siempre constante: en primer lugar el pronombre personal *Yo*, a continuación el nombre y apellido del secretario (Lope Conchillos, Juan de Samano, Fernando Triviño, etc.) que a partir de la mitad del siglo XVII va antecedido del tratamiento «Don». Sólo un secretario, Francisco de los Cobos, acompaña a su nombre el título que ostenta: «Yo Francisco de los Cobos, comendador mayor de León».

A continuación sigue el oficio: secretario del rey, expresándose a éste por su tratamiento característico cuando lo usó: «Secretario de sus cesarea y catolicas magestades» (en el caso que se refiera a Don Carlos y doña Juana conjuntamente); de su cesarea y catolica majestad (cuando se trata de Don Carlos sólo) y en los restantes casos «Secretario del rey nuestro señor» que es la fórmula que perdurará.

Se indica inmediatamente después cómo lo ordenó hacer y la autoridad de quien partió la *iussio*. En las provisiones directamente firmadas por el rey, es éste, como autor de la *actio*, quien en teoría ordena redactarla.

«... la fize escribir por su mandado», fórmula que se mantiene a lo largo de los tres siglos, con el solo cambio de la evolución filológica del *fize* por el *hice*.

Si la provisión va firmada por un gobernador del reino es ahora cuando se señala:

«...la fize escribir por su mandado sus altezas en su nombre» (firmada de Maximiliano y de María).

Así, pues, dejando a un lado las variantes excepcionales que hemos expuesto, la fórmula común y más duradera es:

«Yo N., secretario del rey nuestro señor, la hice escribir por su mandato».

c) **FIRMAS Y RÚBRICAS DE LOS «INTERVENIENTES»:** en otra parte de este trabajo hemos señalado cómo los intervinientes en la génesis del documento indiano, por su propio instituto, son los consejeros del Consejo de Indias. Su participación junto al rey, como peritos especializados en asuntos americanos, fue constante. Por supuesto un documento firmado por el rey estaba suficientemente validado, sin embargo, primero porque cuando nace el documento indiano era costumbre en la cancillería castellana —modelo de las secretarías indianas— y segundo, porque a partir de 1564, por precepto concreto, los consejeros indianos validaban con su firma y rúbrica las provisiones conjuntamente con el rey.⁴⁴

Hasta tal punto quiso el monarca hacer necesaria la validación de la real provisión por los consejeros que, aun en contra de la tendencia general y siempre manifestada de evitar los posibles incumplimientos de sus disposiciones —voluntad ésta que nos parece claramente expuesta por Felipe IV cuando ordenaba en 1622:⁴⁵ «Nuestras Reales Audiencias se abstengan de representarnos inconvenientes y razones de derecho en lo que por Nos les fuere mandado, pues cuando lo disponemos y ordenamos estan las materias

⁴⁴ En "los capítulos que el rey nuestro señor mandó guardar para en los casos que se hubiesen de proveer para las Indias" [año 1510], se ordena ya "que en la provisiones y cédulas vayan señaladas de los que tienen a cargo el despacho". A. G. I., Indif. Gral., 418, lib. 3, fol. 18.

⁴⁵ Disposición fechada en Madrid, 9 de febrero de 1622 y que fue recogida en la *Recopilación*, lib. II, tít. I, ley 28.

más bien vistas y mejor entendidas y así lo guarden y observen precisa y puntualmente»—, tuvo a bien disponer que: «...las Provisiones [se despachen] firmadas de los del nuestro Consejo Real de las Indias y las que no tuviesen esta solemnidad, sean obedecidas y no cumplidas, y los virreyes, presidentes y oidores y otros cualesquier jueces y justicias de las Indias así lo guarden, cumplan y executen». ⁴⁶

¿Por qué entonces la importancia que se da a la validación por parte de los consejeros de Indias?, y más aún, ¿por qué esa misma validación, teóricamente innecesaria desde el momento que el propio rey autoriza el documento con su firma y sello?

El soberano que no es perito en cada una de las materias que en el desempeño de su alta magistratura se le plantean, ha creado junto a sí una serie de instituciones—los consejos— para que lo asesoren en ellas. A su firma directa o a la oficina de la estampilla, se presentan diariamente muchos documentos, cuyo contenido ha sido inspirado por los miembros de estas instituciones. El hecho de que vengan firmados por los consejeros garantiza, no sólo al rey, sino a los destinatarios del mismo, la legalidad de lo ordenado. En definitiva que el hecho se ha documentado con conocimiento de causa y que se responsabilizan con su contenido. ⁴⁷

⁴⁶ *Recopilación*, lib. II, tit. I, leyes 23 y 24.

⁴⁷ Manuel José de Ayala, comentando esta disposición dice: "El motivo de la disposición de la ley fue porque muchas personas que pasaron de estos reynos a las Yndias y residían en ellas, so color de tener cédulas libradas por el Consejo de Cámara de Castilla para traer armas ofensivas y defensivas de día y de noche y expresarse en ellas las pudiesen traer en estos Reynos y señoríos, juzgaron y dieron el entendimiento extenderse debajo de esta generalidad en las Yndias contra la Real intención que fue sola para estos reynos y no para aquellas partes donde estaba ordenado particularmente lo que convernía, demas

El número de los consejeros de Indias que firman y rubrican las provisiones no es constante. Legalmente deberían hacerlo todos los consejeros que se hallaren presentes en el momento de la validación, aunque no hubieran intervenido en la determinación del negocio documentado.⁴⁸

Las firmas, pues, dependen del número de consejeros que integran la institución en cada momento y de su presencia en el acto de la firma de la disposición. Sin embargo, en el siglo XVIII la huella de los intervinientes se redujo a tres: en último lugar —van a línea tendida— firma el consejero semanero que debía reconocer el documento por si hubiera en él algún reparo; en medio, un consejero cualquiera y en primer lugar el presidente del Consejo o su gobernador.

Al estar los consejeros repartidos en dos salas dentro del Consejo de Indias: la de gobierno y la de justicia, los firmantes, excepto el presidente, común para las dos, serían distintos según procediera la provisión de una u otra sala.

II) Sello

La real provisión aparece, por último, validada por el sello real de placa. Cobra así el documento una extraordinaria solemnidad.

de ser ocasión para hacer algunos desacatos y desvergüenzas a las justicias...". Para Ayala, pues, las firmas de los Consejeros en las Provisiones demostraban a simple vista que la disposición había emanado con la intervención del Consejo de Indias, único organismo que ejercía la jurisdicción suprema sobre los territorios americanos. Ayala: *Notas comentario a la ley 23 del lib. II, tít. I de la Recopilación*.

48 *Recopilación*, lib. II, tít. II, ley 66.

Real Provisión, 13 junio 1522 (A. G. I., Contratación, 5.009).

Diplomáticamente es una Real Provisión que documenta unas Ordenanzas para la formación de una armada para la guarda de la carrera de las Indias. La parte dispositiva del documento está dividida en capítulos y externamente se distingue de las restantes cláusulas. Todas las demás fórmulas adoptan las mismas características del tipo diplomático que encarna: la Real Provisión. (Vid. págs. 222 y ss.).

El sello va generalmente colocado a las espaldas del documento, aunque no es raro, sobre todo cuando la provisión se escribió en doble folio abierto, encontrarlo al pie del texto.

La custodia del sello real estaba encomendada al gran canciller de Indias que no servía por sí mismo el oficio sino por medio de un teniente de gran canciller. Este en el acto de sellar la real provisión firmaba y rubricaba a la derecha del sello, antecediendo su nombre de la fórmula «Por el gran canciller N.» [rúbrica].

Otras fórmulas de las Provisiones

a) El breveté

Con el fin de que el rey en el acto de la firma del documento pudiera fácilmente enterarse del negocio documentado, sin tenerlo que leer o hacérselo leer, fue costumbre resumir brevemente —de aquí su nombre—, en el margen inferior, el asunto y la dirección de la provisión.

Habiendo encontrado en alguna ocasión poco precisos los brevets e incluso diferencias entre lo que éstos decían y el tenor del documento, se ordenó en 17 de octubre de 1622: «que los títulos o brevets se pongan con vista del consejo y vayan señalados de los secretarios, conforme tocaren a sus oficios y de un consejero».⁴⁹

Así, pues, junto al breveté aparecen dos rúbricas, la del secretario y la de un consejero, generalmente el semanero, que se responsabilizan de la veracidad de esta fórmula con

49 *Recopilación*, lib. II, tít. VI, auto 51.

respecto al contenido documental. Cuando el documento era el duplicado la rúbrica la hacía el oficial mayor.⁵⁰

b) Pruebas externas de la génesis del documento

Como ya hemos indicado el negocio documentado por provisión podía surgir previa consulta del Consejo al rey o sin que ésta mediara, pues aquél estaba legalmente capacitado, en algunos asuntos, para directamente proponer al rey la cuestión presentándole al mismo tiempo, para ahorrar tiempo, el *mundum* de la provisión a su firma.

Queriendo el soberano que esta circunstancia se le hiciera patente, ordenó a los secretarios del Consejo en 26 de abril de 1621 que las provisiones —y en general todos los despachos— que hubiesen surgido por consulta resuelta, se indicara mediante su rúbrica debajo del brevete; y en otro caso expresaran por qué se despachaban. En el primer extremo la disposición real se cumplió siempre y en la práctica se resolvió indicando la palabra *consultada*, generalmente abreviada, seguida de la señal del secretario; no así en el segundo caso, pues no hemos encontrado ninguna provisión —ni real cédula— que indique los motivos por los que se despachó.⁵¹

c) Derechos

En el Consejo de Indias podían despacharse documentos a petición de parte y de oficio.

50 *Recopilación*, lib. II, tít. VI, auto 184.

51 Real Decreto de 26 de abril de 1621. A. G. I., Indif. Gral., 1.621; *Recopilación*, lib. II, tít. VI, auto 47.

Estos últimos no devengaban derecho alguno por su *conscripción*, en cambio los primeros estaban sujetos a una serie de ellos. Por la expedición de él cobraban tasas: el secretario, el canciller y el registrador. La cuantía de los derechos a cobrar por cada uno de estos funcionarios varió a lo largo de los tres siglos que estudiamos. Estaban fijados por arancel. Era preceptivo anotar en cada documento —también en las provisiones— la cantidad y el concepto de estos derechos y debía rubricarlo el oficial mayor.⁵²

En caso de ser gratis —todos los despachos de oficio y aquellos de parte en que se le hiciera esa merced— se indicaba: derechos nihil (nichil) o gratis.⁵³

d) Registro

Todo documento sellado —la provisión— debía ser registrado en el registro del sello. Para dejar constancia de que este acto que había realizado el registrador —cargo que simultaneaba el gran canciller y por él, un teniente, firmaba y rubricaba la provisión haciendo notar este extremo: «Registrada N. (rúbrica)».

e) Carácter del ejemplar

Todavía se señala en las provisiones una última cir-

52 A lo largo de los tres siglos que abarca nuestro estudio hubo varios aranceles. Como ejemplo podemos citar: Arancel de los derechos /que se han de llevar/ en las dos secretarías /de el Supremo Consejo y Cámara/ de las Indias /por cada uno de los despachos/ que se expiden de parte, assi en lo secular /como en lo perteneciente a lo eclesiástico/. En Madrid, año de MDCCXLIX. En la imprenta de la viuda de Peralta, impresora del dicho consejo. Este arancel fue aprobado por Decreto del 17 de noviembre de 1749.

53 Por ejemplo en Real Provisión de 15 de enero de 1565. A. G. I., Justicia, 1.167.

cunstancia: su carácter de duplicado o triplicado cuando lo era. En efecto de una manera abreviada (Duppl. Trip.) aparece en el margen izquierdo del documento esta indicación, por otra parte no necesaria para su validez jurídica.

Fórmulas posteriores al despacho de las Provisiones

El análisis de las reales provisiones originales nos muestra otro tipo de fórmulas, huellas de etapas posteriores a la expedición del documento. Son fundamentalmente dos: cláusula en la que se recoge el obediencia de la disposición y cláusula que certifica el hecho de haberse pregonado.

I) Fórmula de obediencia

Ya hemos comentado cómo los documentos emanados del rey que transmiten una disposición deben ser obediencia y cumplidos, salvo si se alegaren los vicios de subrepción y obrepción.

Cuando la real provisión llegaba al destinatario éste, en un acto espectacular y simbólico, la obediencia públicamente. De este acto se dejaba constancia en el propio documento. La fórmula, prácticamente semejante en todos los casos, recoge los siguientes extremos:

- a) circunstancias de la notificación del documento: fecha tónica y crónica de la comunicación; por quién, a quién y ante quién; acto de la lectura del documento.

- b) obediencia propiamente dicho: acto del obediencia; simbolismo del mismo.
- c) cumplimiento: promesa de su cumplimiento o anuncio de que se reclamará.
- d) firma y rúbrica de la persona que la notificó.

Como ejemplo veamos el siguiente:

«En la villa de Madrid a cinco dias del mes de março de mill e quinientos e cinquenta y tres años, yo Ochoa de Luyando ley y notefique esta provision de sus magestades a los señores del Consejo Real de las Yndias estando en el consejo y ellos lo tomaron y besaron y pusieron sobre su cabeça y quanto al cumplimiento dixeron que estavan prestos a le hazer y cumplir lo que por ella su magestad les manda estando presentes el licenciado Agreda fiscal de su magestad y el licenciado Santander relator del dicho Consejo y en certinidad dello lo firme de mi nombre. Ochoa de Luyando [rúbrica]». ⁵⁴

II) Fórmula de pregon

En su momento también expusimos cómo unas determinadas provisiones, entre otras las pragmáticas, aquellas cuyo cumplimiento era de interés general, incluían entre sus cláusulas finales la orden de que se pregonasen. Cumplido este requisito se hacía constar en la misma provisión. La fórmula recoge los siguientes extremos:

54 Real Provisión, Madrid, 3 de octubre de 1539. A. G. I., Contratación, 5.009.

- a) fecha tópica y cronológica de la lectura pública;
- b) presencia de un escribano público y testigos;
- c) nombre y profesión del que pregona;
- d) acto del pregón;
- e) autenticación del acto por el escribano público.

Prácticamente se plasma en fórmula semejante a:

«En la muy noble e muy leal cibdad de Seuilla sabado seys dias del mes de diziembre anno del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e nueve años estando en la calle de las gradas desta çibdad en fas de mucha gente que ende estava e en presençia de mi Garcia de Leon escriuano publico de Seuilla e de los testigos de suso escritos que a ello fueron presentes de pedimento de Diego de las Cruces en nombre de los Señores juezes oficiales de su magestad que residen en dicha çibdad Francisco de Seuilla pregonero del concejo desta cibdad pregono la carta e prouision real de sus magestades desta otra parte contenida toda de verbo al verbo testigos que fueron presentes...». ⁵⁵

Ordenanzas

Dentro de las provisiones, cuya estructura diplomática acabamos de describir, cobran personalidad propia las llamadas, desde un punto de vista jurídico, ordenanzas. Aun

⁵⁵ Real Provisión, Madrid 3 de octubre de 1539. A. G. I., Contratación, 5.009.

conservando las cláusulas características de la provisión —y esto es diplomáticamente hablando— este documento tiene unas características peculiares. Por esta razón le dedicamos un epígrafe aparte.

Las ordenanzas transmiten un negocio jurídico cuyo fin es establecer normas amplias y orgánicas para determinadas instituciones o materias.⁵⁶ Decimos normas porque a diferencia de las provisiones que transmiten un precepto de gobernación, éstas establecen una reglamentación, en su momento completa. De aquí que el dispositivo adopte una estructura distinta de las demás provisiones. En realidad, las ordenanzas son una suma de órdenes concretas —muchas de ellas ya publicadas y en vigor— que en un momento preciso se reúnen, de una manera conjunta.

Las ordenanzas del Consejo de Indias, publicadas en 1636 por ejemplo, recogen una serie de disposiciones emanadas de la autoridad soberana en distintas fechas, cuyo vehículo de transmisión habían sido provisiones o reales cédulas determinadas.

La cláusula dispositiva de las ordenanzas incluye cada uno de los preceptos concretos, procurando incluso una separación física entre cada uno de ellos. Constituyen los *capítulos* de ordenanzas. En cada capítulo manifiesta el rey, por medio de un verbo de mandato, su decisión, lo que no empece para que al fin insista sobre el cumplimiento general de las ordenanzas.

La estructura del dispositivo adopta, pues, la siguiente forma:

56 García Gallo, A.: *La ley en Indias*, págs. 658 y ss. establece una serie de consideraciones muy precisas y atinadas sobre las Ordenanzas.

«—Primeramente ordeno y mando (u ordenamos y mandamos)

—Item

—otro si

—Item

Las cuales dichas leyes y capitulos de ordenanzas en esta nuestra carta suso contenidas, vos mandamos a todos y a cada uno de vos que las veais y tengais por ley y las guardéis» ⁵⁷

o bien

«Todo lo cual ordeno y mando se guarde, cumpla y execute». ⁵⁸

Con respecto a las otras cláusulas de la provisión, las ordenanzas no ofrecen novedad ninguna. En aquellas cuyo cumplimiento afecta en general a todo el mundo es característico que lleven fórmula de pregón. ⁵⁹

La Real Cédula

Y pasamos al estudio de la real cédula, el documento

⁵⁷ Real Provisión que documenta las *Ordenanzas del Consejo de Indias de 1571*.

⁵⁸ Real Provisión que trasmite las Ordenanzas militares, Madrid, 28 de junio de 1632.

A. G. I., Contratación, 5.020.

⁵⁹ Real Provisión que publica las Ordenanzas de Armada, Vitoria, 13 de junio de

1523. A. G. I., Contratación, 5.009.

tas en la forma expresada por convenir así a mi Real
Servicio. Tendreislo entendido así y hareis que esta mi Le-
tula refrendada de mi Primer Secretario de Estado, Superin-
tendente General de Correos y Postas de España, y de las In-
dias, y tomada la Razon en la Contaduría General de Correos,
se registre, y archive donde corresponda. Dado en SAN -
Lorenzo, a doce del Mes de Octubre, de mil Sete-
cientos ochenta y cinco.

Yo El Rey.

Joseph Murillo

O. M. Declara por Subdelegado de Correos, Postas y Loterías del Reyno
de la Navarra, al actual Gobernador, y a los que le sucedieren en propiedad,
ó interinamente, mientras V. M. no nombrare fuxero determinado
que la sirva.

Real Cédula al gobernador de La Habana. San Lorenzo, 12 octubre 1785
(A. G. I., Cuba, 1.414).

Es una cédula del tipo que hemos llamado de la vía reservada, que surge a la vida diplomática con la creación, a principios del siglo XVIII, de las Secretarías de Estado. Precisamente es en el escatocolo del documento que publicamos donde se observan los rasgos diferenciales con la tradicional Real Cédula emanada por la vía del Consejo. La suscripción del secretario no es aquí la firma y rúbrica del del Consejo, acompañada de la fórmula «por mandado del rey», sino la exclusiva firma y rúbrica del secretario de Despacho, en este caso el de Estado, D. José Moñino. La cláusula de corroboración anuncia que la Real Cédula ha emanado del rey por la vía reservada. La firma del monarca es de estampilla. (Vid. pág. 227).

menos solemne y más abundante de entre los que, con carácter de público, emanaron de la autoridad soberana, durante el período que estudiamos. La poca solemnidad se refleja en la sencillez y simplicidad de su redacción que rehuye las fórmulas de estilo, estereotipadas y barrocas en su expresión, y sus formalidades están subordinadas a la claridad y precisión del negocio jurídico contenido en ellas y a la facilidad y prontitud de su expedición.

La real cédula es un documento eminentemente dispositivo y se convierte en el vehículo normal de relación entre el rey y las autoridades indianas. Encierra generalmente un precepto de gobernación.

Su origen como tipo diplomático hay que buscarlo en las cartas misivas, documento que surge en el reinado de Enrique II de Castilla (1369-1379) y que unas veces transmite negocios de carácter oficial y otras asuntos privados del monarca. Después de unas primeras vacilaciones, el formulario de las misivas se fija, sobre todo, en las de tipo oficial y queda constituido del siguiente modo: se abre por la cláusula intitiativa —yo el rey, nos el rey e la reina— ligada a la salutación que invariablemente es «envio saludar» o «mucho saludar». Inmediatamente expresan la dirección en dativo —a vos N.— seguida de una fórmula de aprecio y buen augurio —«como aquel de quien mucho fio e para quien querria mucha honra e buena ventura»—. Como fórmula de enlace con el texto documental, que recoge el negocio que se transmite con gran libertad expresiva, encontramos las cláusulas notificativas —hago vos saber o bien sabedes—. El escatocolo está integrado por la fecha y di-

versos elementos validativos —firma autógrafa del rey y refrendo del secretario o canciller—. ⁶⁰

Pues bien, como indicábamos, de la misiva de carácter oficial por evolución de sus fórmulas surgirá la real cédula. El momento en que se encuentra formado el nuevo tipo podemos fijarlo en el reinado de Juan II y, al igual que la real provisión, alcanzará una larga vida administrativa.

Queremos resaltar el acentuado carácter de documento dispositivo de la real cédula, es decir, que la *actio* cobra realidad y efectividad en el momento de su *conscriptio* y que no existió con independencia o anterioridad a su redacción. Este carácter se refleja con mucha frecuencia en su misma redacción en la que encontramos frases como «por la presente declaramos y mandamos», ⁶¹ «he tenido por bien dar la presente, por la cual mando»; ⁶² «por la presente doy licencia...». ⁶³

La real cédula es un documento, ya lo hemos dicho, que emana de la autoridad soberana. Pero también sabemos que el negocio jurídico, contenido en ella, rara vez surge espontánea y exclusivamente del rey. De una manera general podemos afirmar que durante el siglo XVI y XVII las reales cédulas despachadas por el monarca fueron con intervención del Consejo y que su *conscriptio* se llevó a cabo en las secretarías de la institución.

⁶⁰ Estudia el origen de la Real Cédula, Floriano Cumbrefío, A.: *Curso*, pág. 539 y Tanodi, A.: *Reales Cédulas y Provisiones*.

⁶¹ Real Cédula, Madrid, 17 de agosto de 1535. A. G. I., Santo Domingo, 1.121.

⁶² Real Cédula, 7 de noviembre de 1680. A. G. I., Indif. Gral., 430.

⁶³ Fórmula característica de las Reales Cédulas que transmiten una licencia para pasar a las Indias. Esta pertenece a una Real Cédula, Madrid, 27 de marzo de 1536. A. G. I., Santo Domingo, 1.121.

Y decimos de una manera general porque, en ocasiones, el rey sometió a juntas especiales la elaboración de un asunto, surgiendo la real cédula que lo documentaba sin la participación del Consejo. Así la real cédula fecha en Valladolid a 25 agosto 1600 por la que entre otras disposiciones contenía la creación de la Cámara de Indias y de la Junta de Guerra de Indias, fue elaborada por lo que hoy llamaríamos «junta interministerial», es decir, representantes de varios consejos (Estado, Castilla, Indias, Hacienda). Y su *conscriptio* se encomendó al secretario del Consejo Real.⁶⁴ Sin embargo, en cualquiera de los dos modos, la real cédula tiene una estructura diplomática semejante y sólo conoceremos su origen por el secretario refrendador que lo será del Consejo de Indias en el primer caso, y ajeno a él en el segundo,⁶⁵ y por las rúbricas de los intervinientes que, como veremos, dejan constancias de su participación en la *actio* que documenta.

Todo lo anteriormente dicho lo hemos referido a los siglos XVI y XVII, y es porque en los primeros años de la

64 Cfr. la génesis de la Real Cédula citada en Real Díaz, J. J.: *La Cámara de Indias*.

65 No siempre que el secretario refrendador no es del Consejo de Indias, la Real Cédula emanó con la intervención de consejeros ajenos, a esta institución. Hubo casos en que en el interin que se nombraba secretario del Consejo de Indias por fallecimiento del titular para no atrasar la *conscriptio* documental se autorizó a secretarios de otros Consejos a refrendar las Cédulas.

Por consulta de 10 de octubre de 1596, el Consejo proponía al rey que habiendo fallecido el secretario Francisco de Valmaseda, se nombrase a uno de los escribanos de Cámara del Consejo de Castilla para que interinamente refrendara los despachos emanados del Consejo de Indias. El Rey aceptó la propuesta con un lacónico "esta bien" (A. G. I., Indif. Gral., 744). Así ocurrió también cuando casi simultáneamente murieron los secretarios del Consejo, Francisco Díaz Román y Gerónimo de Ustariz, S. M. autorizó a Francisco Antonio de Maturana, secretario de la Junta de Azogues a refrendar las Reales Provisiones y las Reales Cédulas (Real Orden, Sevilla, 6 de febrero de 1732. A. G. I., Indif. Gral., 652).

siguiente centuria, la nueva estructura político-administrativa instaurada por el primer Borbón, con la creación de las secretarías de Despacho, concretamente para nuestro caso la de Marina e Indias, iba a tener consecuencias en el tema que nos ocupa. En efecto, cuando, según tuvimos ocasión de expresar, en 1717, el rey segregó del conocimiento del Consejo todas las materias tocantes a hacienda, guerra, comercio y navegación, provisiones de empleos, etc. dispuso «que expidiéndose por las [secretarías] de ese Consejo todo lo que según mis antecedentes resoluciones le tocara como de su instituto en lo que procediere de causas contenciosas y demás negocios de mera justicia, se abstengan desde hoy, así el Consejo de mandar expedir, como las secretarías de formar y dirigir por ellas, cédulas, despachos, ni otras órdenes de gobierno, porque todo lo que fuere de esta naturaleza y calidad y en cualquiera manera y de todas las cosas de la dependencia del Consejo que tocara a lo gubernativo, económico y providencial, lo reservo en mí para mandarlo ejecutar por la vía reservada como tuviere por conveniente». ⁶⁶

A la notable reducción de la capacidad consultiva del Consejo en negocios hasta ahora propios de su instituto acompañará, como podemos observar en el texto transcrito, una tajante prohibición de participar en la *conscriptio* de las cédulas, vehículos de esos negocios.

De la consideración que acabamos de exponer no se deduce, sin embargo, que la real cédula hubiera acabado su vida diplomática. La reducción de la jurisdicción del Consejo en facetas tan importantes del gobierno, no significaba su desaparición como órgano general consultivo, ni

⁶⁶ Real Decreto, 20 de enero de 1717. A. G. I., Indif. Gral., 542.

mos oficiales q asidos en la cibdad de Sevilla en la casa de la contratación
 de las Indias por el m^{or} mi Señor ha mandado q se lleue en moneda de oro de bona
 y ala goleta ochocientos e nros los quales vos seran entregados por parte
 de Juan de Bolmediano y Juan de Enciso a quien su m^{or} ha cometido la d^{ha} provision
 por ende yo vos mande q entregando los d^{hos} ochocientos en moneda de plata
 q corra en estos reynos les entreguéis a ellos o a la persona q ellos mostraren
 tanta cantidad de oro m^{or} o de merca de res o palaperos q por m^{or} manda de esta
 de temido en cada casa q valga justa y verdadera mente los d^{hos} ochocientos de
 nros los quales d^{hos} ochocientos q asi os fueron entregados por ende
 el lugar donde estavan las partidas del oro q asi entregaredes y
 llamaredes a los dueños de el o de lo para q en su presencia se haga la avalla
 cion dello lo qual haze con toda brevedad por q asi conviene a mi seruicio
 de valled e de diez e siete dias de Julio de mill e quatro y treinta e ocho años

Yo la Reyna

Por mandado de Sumar
 y Juan de Gamara

Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación. Valladolid, 30 de julio 1538 (A. G. I., Contratación, 5.009).

Cuando por ausencia del soberano la Reina —como en este caso concreto— o el Príncipe gobiernan el reino, la Real Cédula se intitula a nombre de quien ejerce la gobernación. Esta persona valida con su título. En el refrendo del secretario no se señala su condición de gobernador del reino. (Vid. pág. 232).

ejecutivo en algunas materias; «pero que todo lo respectivo al gobierno municipal de las Indias y observancia de sus leyes, que no sean opuestas a esta mi resolución (pues las que lo fueren es mi real voluntad derogarlas en aquella parte sola que lo fueren) corra como hasta aqui, sin novedad alguna, por el Consejo, como tambien la facultad de conceder las licencias para pasar a aquellos dominios los que lo desearan dentro de los límites de las leyes y ordenanzas establecidas sobre este asunto; queriendo igualmente que todo lo concerniente a mi real patronato, las providencias y correspondencias a él anejas, corran como han corrido por el Consejo, pero que en cuanto a las provisiones de esta clase, me consulte el mismo Consejo en la forma regular, sin proveer por sí materia alguna. Que en cuanto a lo provisional de presidencias, plazas de administración de justicia y gobierno, corregimientos, alcaldías mayores, varas de alguaciles mayores, de regidores y demás ministros de las audiencias y cabildos seculares, escribanías mayores de provincia real y del número, y otros empleos puramente políticos y sin conexión próxima, ni remota, con las expresadas materias de hacienda, guerra, comercio y navegación, consulte el consejo como lo practicaba antes, proponiéndome los sujetos que tuviere por mas habiles y dignos para que yo elija el que fuere mas de mi Real agrado». ⁶⁷

Es decir, la real cédula, cuya *actio* versa sobre asuntos que preceptivamente están encomendados al Consejo, en cuya secretaría se llevará a cabo su documentación, continúa emanando sujeta a los mismos formularios y al mismo procedimiento en su génesis.

67 Real Cédula, 13 de noviembre de 1717. A. G. I., Indif. Gral., 542.

Sin embargo, ¿en qué tipo diplomático se verterán los asuntos que, según la disposición, el soberano se reservaba en sí para mandarle ejecutar por la «via reservada». ⁶⁸ En el decreto a que nos referimos nos responde el mismo soberano: «como tuviere por conveniente».

Y S. M. tuvo por conveniente, pensando autorizar a las recién instauradas Secretarías de Despachos —auténticos ministerios— crear un nuevo documento y traspasar la validación del mismo al secretario de Despacho correspondiente. Este nuevo tipo diplomático fue la real orden. ⁶⁹

Este procedimiento cubrió el amplio campo que antes ocupaba la real cédula, emanada con intervención del Consejo. Sin embargo, para transmitir decisiones importantes o porque se las quería revestir de solemnidad fue necesario contar con un documento que firmará el rey, y en lugar de crear otro tipo se aprovechó la estructura diplomática de la real cédula tradicional que, sin embargo, reflejaría en ella ciertas modificaciones que más adelante comentaremos.

Todo este preámbulo nos lleva a distinguir, pues, tanto porque en la génesis de su *actio* han participado instituciones distintas, como porque su *conscriptio* ha tenido lugar en oficinas diversas, dos tipos de reales cédulas: la que podríamos llamar real cédula a secas, única durante el siglo XVI y XVII y coexistiendo durante el siglo XVIII con la que designaremos real cédula ministerial o de la vía reservada.

Excepto en sus fórmulas validativas, una y otra presentan estructura semejante.

⁶⁸ Se conoce con este nombre el camino que sigue la documentación cuando va o viene del rey o para el rey, a través de los secretarios de Despacho.

⁶⁹ Nos referiremos a ella en el capítulo próximo.

nos oficiales q dize en las cartas de sevilla en la casa de la contratación de las yndias v
 rra letra de x del presente en q me haze saber la venida de los naos de quos maestre
 fran Rodriguez de cobarrubias q viene de la yslas de españa y la draga del oro y plata q
 en ella venia y las cartas q nos embia de los oficiales de aquella ysla se diuieron en el
 nro consejo de las yndias. quando las otras dos naos q dezis q venian en conserta desta
 fueren llegadas avisarnos en el dho y enbiarnos en las cartas q en ellas venieren pararnos
 y la draga de los Negocios / &

vilo q dezis q los nros oficiales de la dha ysla os acordaron q por que teman miedo de
 cosarios franceses no enbiaran encofros de plata q en aquella ysla ay nro y
 por q como deys de no dez agora de nro y hemos acordado q por los ynteres q pagamos
 a las personas q tenemos hechas libranças ello enbiar amandaz a los dhos nros oficiales q
 luego sin dilacion alguna / le enbien y conserta vos mande enbiar dos cartas en tenor para
 q vayan suplicas de ternos ayres de las enbiar en los dmeros nros q por aquella
 ysla partieren / &

el barril de azeyte pettolio q la casa de piedras q dizen de zemeraldas q los tres maz
 os de turquesia q dezis q los oficiales de la ysla de cubagua enbian para nos qbiareys
 luego q sin dilacion to d ello anox como viene de madre a xviii dias
 del mes de octubre de M D xxx x años

[Handwritten signature]

Contm 5009

[Handwritten signature]
 por mandado de sume
 de oon desamano

[Vertical handwritten text on the left margin]
 a los señores de la casa de la contratación de las yndias
 para que se acuerde lo que se ha de hacer en esta parte

[Vertical handwritten text on the right margin]
 a los señores de la casa de la contratación de las yndias
 para que se acuerde lo que se ha de hacer en esta parte

Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación. Madrid, 18 de octubre 1539 (A. G. I., Contratación, 5.009).

Aunque de estructura análoga a las Reales Cédulas, constituye un tipo característico este que presentamos y que llamamos Carta Real. Surge siempre en contestación a una carta previa de autoridades o instituciones indianas y en el dispositivo se contesta a lo que se comunicaba en aquélla. (Vid. pág. 234).

Comienza con la intitulación destacada del texto documental. A diferencia de las reales provisiones esta cláusula no expresa el nombre, título y dominios sino escuetamente el oficio de la autoridad soberana o de quien, en esos momentos, ostenta la gobernación del reino, si es de sangre real, pues en el caso de que no sea así la persona firma pero la real cédula se intitula por el rey: el Rey; la Reina; el Rey e la Reina; el Rey y la Reina gobernadora.⁷⁰

Separado de la intitulación comienza el texto documental. Hemos observado dos variantes significativas que se corresponden con los dos modos como puede surgir el negocio documentado: de oficio o a petición de parte.

Las reales cédulas de oficio, es decir, las que surgen como un acto de la administración, comienzan por la dirección, que puede ser individual o colectiva. Inmediatamente sigue la motivación que da entrada al dispositivo.

Las que emanan del soberano a petición de parte comienzan citando expresamente esta *petitio*: «Por cuanto por parte de N.», seguida inmediatamente de la motivación. No se expresa, pues, la dirección explícitamente, sino que ésta se encuentra incorporada en la exposición de motivos. Continúa con el dispositivo. El formulario de ambas variantes vuelve a unificarse para expresar las cláusulas finales que como las reales provisiones pueden adoptar una amplísima gama de expresiones. La real cédula termina con la fecha. Si en las reales provisiones era característico el *incipit* de *dada en*, ahora lo es el de *fecha en*, fórmula que a

70 Cfr. Las Reales Cédulas dirigidas a la Casa de la Contratación de Sevilla, 1503-1548. A. G. I., Contratación, 5.009.

veces se reduce a la preposición *en* o *de*. El lugar va seguido de la fecha crónica completa: día, mes y año.

Es en la validación donde claramente se pueden distinguir los dos tipos de reales cédulas a que hemos aludido. Unas y otras van firmadas y rubricadas por el rey, o por la persona que por él tiene la gobernación del reino. Sin embargo, al considerar el refrendo del secretario surge la diferencia. En las que emanan con intervención del Consejo se inicia con la expresión: «*Por mandado de*» que, en definitiva, como en su lugar expusimos, pretende manifestar que tanto la *actio* como su *conscriptio* partió de la autoridad que a continuación se menciona. El modo de citarla varía de acuerdo con la época y su personalidad. Con los Reyes Católicos es «del rey e de la reina», escuetamente, o añadiendo «nuestros señores»; «*Por mandado de su majestad*» es la fórmula característica del emperador y que después será la que se mantenga en el refrendo cuando la cédula vaya firmada por la reina, en su condición de gobernadora. Durante el gobierno del príncipe heredero Felipe, la expresión será «*Por mandado de su Alteza*». A partir de Felipe II, ya soberano, la fórmula sin excepción, en caso de firmarla el monarca se vertirá en: «*Por mandado del rey nuestro señor*».

En todos los casos a continuación se añade el nombre y apellido del secretario refrendador. Después de las reformas del Consejo de Indias, el nombre corresponde a los secretarios de dicha institución.

Por último, caracterizan a las cédulas emanadas con intervención del Consejo las *señales* o *rúbricas* que, en «las espaldas» del documento, estampan los consejeros, práctica

Real Cédula a Bernardino de Carvajal, 20 de junio 1526 (A. G. I., Contratación, 5.009).

El negocio que documenta es desde el punto de vista jurídico una Instrucción. La única cláusula en que se aparta del modelo normal de las Reales Cédulas es la parte dispositiva que adopta la estructura de capítulos. (Vid. págs. 234 y ss.).

sancionada por la legislación.⁷¹ Hasta el primer tercio del siglo XVII las *señales* varían en su número. A partir de esta fecha se concretan a tres: la del presidente o gobernador del Consejo, la del consejero semanero y la de otro de los consejeros que intervino en el negocio documentado.

En la real cédula que surge con intervención del secretario del Despacho Universal y de Indias, el refrendo se reduce a la sola firma y rúbrica del ministro sin que se acompañe de ninguna expresión. Desde el momento que en la génesis de esta real cédula no interviene el Consejo desaparecen de ella las señales o rúbricas de los consejeros que en la real cédula tradicional estampaban en el documento.⁷² Esta circunstancia obligó a modificar la legislación pertinente. En efeceto, estaba ordenado que las cédulas que se despacharan sin llevar las rúbricas o señales de los consejeros no fueran cumplidas.⁷³ El nuevo tipo de *cédula ministerial* o *de la vía reservada* carecía de esos signos, como acabamos de expresar. Hubo, pues, que derogar esta disposición y ante la reclamación del Consejo de Indias hecha por consulta de 22 de septiembre de 1717 el rey dispuso por real cédula de 13 de noviembre del mismo año: «que no obstante lo dispuesto y prevenido por la ley 23, libro II, título I de la Recopilación de Indias, acerca de que a las cédulas y despachos que no fueran señalados y firmados por los ministros del Consejo no se les dé cumplimiento, la cual

71 *Recopilación*, lib. II, tit. I, ley 23.

72 Ejemplo de este tipo de Real Cédula, Buen Retiro, 27 de marzo de 1727: el refrendador es el Ministro de Indias, José Patiño. A. G. I., Cuba, 2.263.

73 "Nuestras Reales Cédulas se despachen señaladas... y las que no tuvieren esta solemnidad, sean obedecidas y no cumplidas y los virreyes, Prsidentes y Oidores, y otros cualesquier Jueces y Justicias de las Indias así lo guarden, cumplan y executen", *Recopilación*, lib. II, tit. I, ley 23.

he venido en derogar por tanto mando a mis virreyes de los reinos del Perú y Nueva España, presidentes, audiencias, gobernadores, oficiales reales y a todos los demas jueces, ministros y justicias de ambos reinos... la cumplan, guarden y ejecuten». ⁷⁴

En casos muy excepcionales, cuando se quiso revestir de extraordinaria solemnidad a este tipo de reales cédulas, se le añadió un nuevo signo de validación: el sello real. El que se utilizó entonces no fue el sello mayor, que guardaba el canciller, o por él su teniente, sino el sello personal del rey, el que guardaba su oficial en la Cámara, el que con terminología medieval se denominó de la «poridat» y que ahora continuaba llamándose sello «secreto». En estos casos en el tenor documental se anuncia este procedimiento validativo en fórmula constante: Dada en ..., firmada de mi real mano y sellada con mi sello secreto, a ... dias de ..., de mil setecientos ... ⁷⁵

Instrucciones y cartas reales

Como ya hemos indicado, el dispositivo de las reales cédulas no se somete a fórmulas estereotipadas, ni es posible una sistematización de esta parte del documento. Sin embargo, a semejanza de lo que hicimos al estudiar las reales provisiones, vamos a distinguir algunos tipos característicos en los que esta cláusula adopta una determinada estructura. Nos vamos a referir concretamente a las *instruc-*

⁷⁴ Real Cédula, 13 de noviembre de 1717. A. G. I., Indif. Gral., 432, lib. 48, fol. 61.

⁷⁵ Cfr. Real Cédula, San Ildefonso, 17 de agosto de 1780. Refrendada por el Ministro de Indias, José de Gálvez. A. G. I., México, 2.421.

mos oficiales q' desidia en la obra de Sevilla en la casa de la contratación de las yndias ante don Aluarez de Toledo maestre de campo q' tiene una casa de la hysa de su madre naçida en estos Reynos de España de q' naço como por esta por una y informago de q' antenagend nro conde de las yndias hizo presentago en la qual dha casa de la quetria pagaz alas yndias a nu guplino le diese licencia para ello e comela en mas fuese lo qual viro por los del dho mio conseyo justa mente en la dha y informago fue acordado q' se via mandar a esta m' pedula para dos e otouido por bien por q' nos mande q' se oyo la dha y informago de q' de dho se haze m' nro q' con esta va senalada de nro ynfra escaripo secret' y siendo la codada quel dho don Aluarez de Toledo de la madalesna quere pagaz la contenta en la dha y informago de la dha de xerica de noventa y seis y ochar alas dhas m' yndias en q' en ello le pongais m' congetura por el en lo q' no se p'ne alguno q' ponga en dha m' ma casa la contenta en la dha ynfra mande en la opaga y no se pone q' en aliger por m' nro q' en esto no aya foute por el y en condimento q' trae de pagar alas dhas yndias en la de moros y adien de lo m' nro mente pagado a dho de la dha cambio en m' con los dos ducados de la legua de la dha por quanto el go nro mandado tiene cargo de la cobiar fecho en la villa de Madrid a siete dias del mes de seth - de m' de quito e quarenta años

f. e. r. Carh
Infante

Id e/or
p'm de m' e/or en un noble
y oom de comans

Cont = 5009

In Talle de Angu
en el dho de V.

alos oficiales de Sevilla q' sean nro ynfra q' con esta va senalada del secret' fonde de mano y nro de una codada m' nro q' nro don Aluarez de Toledo de la madalesna quere pagaz alas yndias la contenta en la dha ynfra de la de m' nro pagaz a dho de la dha de m' nro

Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación. Madrid, 7 de septiembre, 1540 (A. G. I., Contratación, 5.009).

Muy excepcionalmente, en caso de ausencia del soberano, quedó por gobernador del reino alguna persona que no perteneciera a la familia real. En estos casos la Real Cédula se intitula a nombre del Soberano: el Rey. Valida el gobernador y el secretario en el refrendo hace constar la circunstancia: «Por mandado de S. M., el gobernador en su nombre».

ciones y a las que en su momento se denominaron *cartas reales*.

El nombre, *instrucción*, con que se calificó, incluso en cuerpos legales, al tipo de real cédula que vamos a describir, hace referencia al negocio jurídico contenido en ella y, excepción hecha de la cláusula dispositiva, ciertamente distinta en su estructura, está sujeta al mismo formulario general de esta categoría documental y usa su mismo sistema y signos de validación. De aquí que desde el punto de vista diplomático debamos calificarla como real cédula.

Las instrucciones van dirigidas a personas determinadas, no por ellas mismas, sino por el oficio o cargo que desempeñan. Documentan un programa de actuación, de aquí que el dispositivo esté dividido en capítulos, cada uno de ellos ordenando un asunto concreto. El primer apartado comienza siempre con la palabra *primeramente*, los siguientes van alternando los términos otrosí, ítem, asimismo, etc. En cada uno de los capítulos el dispositivo se hace preceder de la motivación que justifica la orden.⁷⁶

Las cartas reales⁷⁷ son, diplomáticamente consideradas,

76 Cfr. Real Cédula que documenta la Instrucción dada a Cristóbal Colón para el buen gobierno de los que quedaron en las Indias y de los que nuevamente irán a poblar en aquellas tierras. Medina del Campo, 15 de junio de 1497. A. G. I., Patronato, 295. Real Cédula que transmite la Instrucción dada al virrey del Perú, Conde de Chinchón, sobre lo que deberá observar en el desempeño de su oficio. Madrid, 15 de mayo de 1628. A. G. I., Indif. Gral., 512.

77 Decimos que en la época se les llamó cartas, así: en una Real Cédula de este tipo fecha en Valladolid, 22 de enero de 1556. (A. G. I., Contratación, 5.010), se dice: "bien teneis entendido como por dos cartas nuestras...". Juan de Samano en carta a la Casa de la Contratación, 10 de marzo de 1556, les comunica: "las que vuestras mercedes escriuieron a S. M. en XXV del pasado y primero y segundo del presente se reçibieron y a ellas ha mandado responder lo que verán por tres cartas suyas que van con esta...". Hemos comprobado que no se trata de un término usado genéricamente.

reales cédulas. Sólo se apartan de la estructura general de éstas en su cláusula dispositiva. Lo que las individualiza es el hecho de que siempre surgen en contestación a una carta previa de la autoridad o institución a la que van dirigidas. El dispositivo dividido también en capítulos contesta, aprobando en unos casos, modificando en otros lo que se le comunicó⁷⁸ por aquella carta, a la que se cita en el tenor documental indicando su fecha: «Vi vuestra carta de XI de março...».

78 Cfr. Cartas reales correspondientes a los años 1550-1556, en A. G. I., Contratación, 5.010. Cfr., García Gallo, A.: *La Ley en Indias*, págs. 696 y ss.

Capítulo V

DOCUMENTOS EMANADOS DE AUTORIDADES DELEGADAS INDIANAS

Siguiendo la estructura prevista, y ya anunciada, vamos a dedicar el presente capítulo al estudio del documento emanado de autoridades indianas —personas o instituciones— que ejercieron función pública por delegación del soberano.

El análisis de los originales conservados nos permite distinguir dos grandes grupos de documentales: uno primero constituido por los que emanaron de aquellas autoridades tintitulados a nombre del monarca; otro segundo formado por los que despacharon en su propio nombre. Y es así, integrados en dos grandes apartados que emprenderemos su caracterización.

Instituciones indianas facultadas para despachar documentos a nombre del soberano

Estaban legalmente autorizados a despachar documen-

tos a nombre del rey el Consejo de Indias, las audiencias indianas, los virreyes y los presidentes-gobernadores.¹

En realidad con esta autorización se seguían usos diplomáticos y costumbres jurídicas castellanas, pues en este reino durante el gobierno de los Reyes Católicos documentaban negocios concretos a nombre del soberano los consejos, las chancillerías de Valladolid y Granada y los virreyes.²

Las determinadas novedades que suponen los documentos que transmiten negocios indianos en relación con los castellanos son consecuencia de los peculiares rasgos que en Indias adquieren las instituciones de quienes emanan. Rasgos específicos que las distinguen de sus homónimas castellanas.

Las chancillerías de Valladolid y Granada por su propio instituto eran tribunales de justicia: los negocios que documentan a nombre del rey son exclusivamente tocantes a esta materia. Las audiencias indianas, aunque no todas,³ además de ser tribunales de justicia son organismos de gobierno: además de negocios de justicia, documentarán a nombre del monarca asuntos gubernativos.

1 El Presidente-gobernador es una figura sin precedente en la legislación coetánea castellana. Esta autoridad es a la vez gobernador del territorio o provincia y presidente de la Real Audiencia que está establecida en la cabecera de la gobernación. A este tipo de Audiencias la legislación les llamó pretoriales. Su Presidente, como los virreyes con respecto a las Audiencias virreinales, no participa en la resolución de los asuntos judiciales que ante ella pasan. De este tipo fueron por ejemplo el gobernador de Guatemala y Santo Domingo.

2 Cfr. Martín Postigo, María de la Soterraña: *La Cancillería de los Reyes Católicos*; Arribas Arranz, Filemón: *La carta y Provisión Real*. Existen también Provisiones emanadas de los Contadores Mayores.

3 Nos referimos a las Pretoriales y Subordinadas. Sobre estas distinciones, Cfr., *Recopilación*, lib. II, tit. XV.

Una de las características de los virreyes castellanos⁴ es la circunstancialidad de su cargo; es decir no es un oficio permanente y sólo son nombrados por los reyes cuando éstos se alejan del territorio, generalmente cuando marchan a la guerra contra el moro. Aunque con posibilidades de documentar a nombre del soberano, esa misma circunstancialidad de su existencia hace que de ellos emanen pocos documentos de este tipo.

Los virreyes indianos, sin embargo, son instituciones permanentes de gobierno.⁵ Producirán una abundante documentación a nombre del monarca.

Por último, al no existir precedente hispánico de los presidentes-gobernadores, también los documentos emanados de estas autoridades a nombre del rey presentan una característica peculiar en relación al mismo tipo de documentación despachado en la península.

Pero ¿por qué esta anómala realidad diplomática por la que un documento intitulado a nombre de un determinado soberano, que habla en primera persona a lo largo de todo el discurso, que en el refrendo del escribano se dice haberse documentado por orden del mismo, que lleva el sello real de placa y sin embargo va validado con la firma y rúbrica de una persona o personas distintas?

4 La falta de noticias sobre existencia de virreyes en los territorios de la corona castellano-leonesa, tema que comenzó a interesar a la actual bibliografía al considerar los precedentes del virreinato colombino, llevó a algunos historiadores incluso a negar la realidad del cargo. Nuevos documentos prueban la existencia de los mismos aunque con carácter transitorio. Cfr., Manzano Manzano, J.: *Cristóbal Colón*, Cap. XIV.

5 A lo largo de los tres siglos durante los cuales se desarrolla nuestro trabajo, además del virreinato colombino, de características propias, hubo cuatro grandes virreinatos: México y Lima, exclusivos durante los siglos XVI y XVII y Nueva Granada y Buenos Aires, de creación borbónica.

La razón nos la da el mismo soberano:

«Para que las Audiencias tengan la autoridad que conviene y se cumpla y obedezca mejor lo que en ellas se proveyere y mandare, es nuestra voluntad que las cartas, provisiones y otras cosas que se proveyeren se despachen y libren por titulo nuestro y con nuestro sello real, las cuales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones firmadas de nuestro nombre». ⁶

Aunque el texto transcrito se refiere a la documentación emanada de las audiencias, podemos referirlo a las demás autoridades que despacharon este mismo tipo documental, pues fueron estas las mismas razones que movieron al soberano a concederles tal facultad.

Por supuesto la autoridad delegada no puede por propia iniciativa emprender este uso diplomático. Necesita de una previa autorización real que puede expresarse concretamente al individuo o genéricamente al cargo o institución en cuestión.

La primera persona que estuvo autorizada para expedir documentos sobre tema indiano a nombre del rey fue el propio Cristóbal Colón. En efecto, los Reyes Católicos dispusieron en 28 de mayo de 1493: «es nuestra merced e voluntad que las cartas e Provisiones que dieredes sean e se expidan e libren en nuestro nombre diciendo: Don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios, rey e reina de Castilla e de Leon, etc... e sean sellados con nuestro sello,

⁶ *Recopilación*, lib. II, tit. XV, ley 116.

que nos vos mandamos dar para las dichas islas e tierra firme». ⁷

Autorización que le fue repetida en la instrucción sobre lo que debería realizar en el segundo viaje que entonces preparaba. ⁸

Pero aún hubo más, pues simultáneamente se le facultaba para que pudiera nombrar persona que en sus ausencias entendiera en los negocios y pleitos que surgieran, pudiendo, a su vez, despachar cartas y provisiones a nombre de los reyes y sellarlas con su sello. ⁹ Y de acuerdo con esta facultad despachó los primeros documentos que surgieron

⁷ Confirmación del título dado a Cristóbal Colón de Almirante, visorey y gobernador de las islas, tierra firme que había descubierto, Barcelona, 28 de mayo de 1493. A. G. I., Patronato, 295. Esta cláusula debió añadirse en la confirmación pues ni en las Capitulaciones de Santa Fe, ni en el título de Almirante, virrey y gobernador, dado en Granada a 30 de abril de 1492, se le incluye. A. G. I., Patronato, 295.

⁸ "Instrucción del Rey e de la reina nuestros sennores para Don Cristóbal Colón, Almirante de sus Altezas de las islas e tierra firme, descubiertos e por descubrir en el mar Oceano a la parte de las Indias, e su visorey e gobernador dellas; e otrosí, capitán general de esta armada que agora sus Altezas envían a las dichas islas e Tierra Firme, para la forma que se ha de tener en este viaje que agora face por mandado de sus Altezas, así en su partida e del armada que lleva, como en su camino y después que alla sea llegado, Dios queriendo, es esta que se sigue...". Barcelona, 29 de mayo de 1493.

Capítulo 13 "que todas las prouisiones e mandamientos patentes que el dicho Almirante, visorey e gobernador hobiere de dar, vayan escritas por Don Fernando e donna Isabel, rey e reina etc. e firmadas del dicho Don Cristóbal Colón, como visorey e sobre-escritas e firmadas del escribano que toviere en la forma que lo acostumbra los otros escribanos que firman cartas de los visoreyes e selladas en las espaldas con el sello de sus Altezas, como lo acostumbra facer los otros visoreyes que ponen sus Altezas en sus reinos". A. G. I., Patronato, 295. Copia testimoniada.

⁹ "...Por quanto en el poder que mandamos dar e dimos a vos Don Cristóbal Colón nuestro almirante de las islas e tierra firme que se han descubierto e han de descubrir en el mar Oceano a la parte de las Indias... se contiene que vos hayais de librar las cartas e provisiones patentes que se hobieren de faser y expedir". Real Cédula, Barcelona, 28 de mayo de 1493. A. G. I., Patronato, 295.

a nombre del monarca sobre asuntos indianos, como más adelante analizaremos.

Su hijo Diego, su sucesor en el virreinato, también fue autorizado a esta práctica. Claro está que, por haber muerto ya la reina Isabel, en la disposición en que se le comunicaba se decía que documentara a nombre de Don Fernando y Doña Juana, aquél como gobernador de Castilla, ésta como reina propietaria.¹⁰

De la misma facultad estuvieron investidos los demás virreyes indianos. Sin embargo, ya no aparece un decreto concreto que los autorice, quizá porque esta práctica se ha hecho ya costumbre.

Sólo una prohibición se les estableció: no podrían despachar —ni firmar— ellos solos los documentos que, emanados a nombre del soberano, transmitieran negocios de justicia.¹¹ Prohibición que no obedece a un puro capricho de la administración, sino que es consecuencia de las atribuciones concretas de que estuvieron investidos.

En efecto, al no ser los virreyes peritos en derecho —no eran «togados» sino de «capa y espada»—¹² y al existir en la cabecera de su gobernación una Audiencia, se reservaba

10 ...Por Don Fernando e doña Juana, e que vayan sellados con nuestro sello... E esto mismo mandamos que faga el nuestro Almirante que es o fuere en las dichas Yndias, sin embargo de qualquier costumbre que fasta aqui aya tenido de librarlo e ponerlo de otra manera. Ordenanza III de las Ordenanzas de la Audiencia y Juzgado de Apelación de las Indias, Burgos, 5 de octubre de 1511. Traslado autorizado. A. G. I., Patronato, 170, ramo 12.

11 *Recopilación*, lib. III, tít. III, ley 36. Cfr., también la ley 37 del mismo libro y título donde se ordena que los virreyes en materia de justicia dejen proveer al oidor más antiguo, sin votar ni mostrar inclinación ni voluntad. Se insiste sobre esta materia en el libro II, tít. XV, ley 32.

12 Con estas dos expresiones se designan respectivamente a los juristas y a los dedicados a las armas. Responde pues al atuendo que llevaban, que a su vez se lleva de acuerdo con la función social que desempeñan.

a ésta, como tribunal de justicia, al entender en los negocios judiciales. En diversas ocasiones habían declarado los reyes: «que los virreyes de Lima y México por Presidentes de las Reales Audiencias no tienen voto en las materias de justicia. Y mandamos que dexen la administración de ella a los oidores de las Reales Audiencias, para que la administren en la forma que las de nuestras reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada...». ¹³

Lógico es, pues, que la documentación emanada a nombre de los reyes sobre estas materias la ordenen y despachen los que entiendan en la *actio* de la que el documento es vehículo de transmisión.

Y así estaba proveído «que los virreyes del Perú y Nueva España no despachen por sí solos provisiones con nuestro nombre y sello real en negocios de justicia de que toca conocer a las Audiencias por apelación, suplicación u otro recurso, así seculares como eclesiásticos; y en cuanto a los demas se guarde la costumbre». ¹⁴

Pero no hay que olvidar que, aunque con un carácter más representativo y honorífico que ejecutivo, los virreyes son presidentes de las audiencias virreinales de ahí que se les considere coparticipantes con los oidores en el despacho de este tipo documental y tendrían, juntamente con ellos, que validarlos con su firma, aunque en la práctica el hecho documentado surja sin su intervención. ¹⁵ Lo que se les prohi-

¹³ *Recopilación*, lib. II, tít. XV, ley 32.

¹⁴ *Recopilación*, lib. III, tít. III, ley 42.

¹⁵ "... y en los negocios de justicia, que los oidores proveyeren, despachasen y sentenciaran, firmen los virreyes con ellos en el lugar que los Presidentes de las Audiencias de estos reynos de Castilla". *Recopilación*, lib. II, tít. XV, ley 32.

bió, por tanto, fue el despachar a nombre del monarca *exclusivamente* solos este tipo de asuntos.

Con respecto a otros negocios, los virreyes usaron de esta facultad, aunque a veces ocasionó algunos problemas. En diversos momentos las audiencias se quejaron de haber recibido órdenes de los virreyes transmitidas por documentos a nombre del monarca. Hecho que fue considerado por el rey que decidió que a las audiencias no escribiera el virrey sino por carta particular habida cuenta «el respeto que se deue a un tribunal que tambien despacha provisiones con sello y nombre de S. M.». ¹⁶

Otra tendencia que tuvieron los virreyes, y también fue corregida por la corona, fue el despachar este tipo documental con intervención de sus secretarios que lo refrendaban y no con el escribano de gobernación cuya misión específica era ésta. ¹⁷

16 Real Cédula, 15 de octubre de 1603. Inserta en sus partes fundamentales en carta del virrey de Nueva España, Montescarlos a S. M., México, 10 de mayo de 1604. A. G. I., México, 26. Surge la Real Cédula en cuestión por las quejas elevadas al soberano por la Audiencia de Manila que recibió una Real Provisión firmada por el Conde de Monterrey, antecesor de Montescarlos en el virreinato de Nueva España. Cfr., Real Cédula transcrita en la nota 17.

17 Real Cédula al virrey del Perú, 27 de febrero de 1575. En uno de los capítulos se dice: "Por los recaudos que vos y la Audiencia aueys embiado para satisfazer a los capítulos de las cartas se han visto muchas prouisiones vuestras con titulo nuestro y sello nuestro, despachadas y refrendadas de vuestro secretario, y aunque dezis que para esto teneys cedula nuestra, aquello se estiende en los casos en que los virreyes estan en costumbre de despachar por patente en nuestro nombre y entonces no las ha de refrendar vuestro secretario, sino el escribano de gobernación y especialmente auiendo de escribir a la Audiencia, lo aueys de hacer por carta como a oydores nuestros y vuestros colegas y no por patente en nuestro nombre, por vía de mandato, pues estays mas obligado que otros, por el lugar nuestro que teneys, a honrar y autorizar la Audiencia. Y porque el mandar a la Audiencia esta reseruado a nos, y porque aca no parece el registro de la cédula que

De lo que llevamos indicado podemos deducir cómo las audiencias también estaban facultadas para documentar a nombre del monarca y la disposición que las autorizaba se incluyó siempre en las ordenanzas fundacionales de estas instituciones.¹⁸

También se les impuso ciertas limitaciones en el uso de esta práctica diplomática. Sólo podrían despachar «provisiones, executorias y otras cartas... libradas en nuestro nombre, título y sello real y registro... para fuera de las cinco leguas...». ¹⁹ Es decir, se establecía un círculo alrededor de la Audiencia de cinco leguas de radio y sólo los despachos dirigidos a personas o instituciones radicadas fuera de esa circunscripción podrían documentarse a nombre del rey. La proximidad física de la Audiencia autorizaba los documentos expedidos para dentro del determinado territorio de las cinco leguas, lo que hacía que pudieran documentar a nombre de los propios oidores, en el tipo que llamaremos *autos acordados*.

Ya hemos anunciado cómo el Consejo de Indias también estaba facultado para despachar documentos a nombre del rey. Y lo está cuando actúa como tribunal de justicia. El Consejo además de las atribuciones características que como organismo asesor del rey le están conferidas es tribu-

para poderlo hazer teneys, embiareis una copia della para que por la data se busque y en lo demas que dezis que seria bien que el virrey despache con un oydor, y en lo demas no conulene se haga nouedad".

18 Cfr. como ejemplo Ordenanzas de la Audiencia que de nuevo se fundó en Guatemala. El Escorial, 28 de junio de 1568. Cap. 10: "Ytem mandamos que las prouisiones que dieren los dichos nuestros presidentes y oidores y otras cosas vayan libradas en nuestro nombre y con nuestro sello real y registro...". A. G. I., Guatemala, 520. Esta cláusula aparece en todas las Ordenanzas de las Audiencias indianas.

19 Vid., nota anterior.

nal supremo de apelación en las materias judiciales indianas. En este caso concreto es una Audiencia más, aunque investida de mayor rango.

La facultad de despachar a nombre del rey se le restringió, sin embargo. Sólo podrían librar —validando exclusivamente el documento el presidente y consejeros y no el rey— los despachos de justicia dirigidos a personas e instituciones radicadas en la península.²⁰

Tipo documental utilizado en los documentos expedidos a nombre del rey: La provisión

Hasta ahora en todos los casos a que nos hemos referido hemos dicho documentos emanados a nombre del rey, ¿qué tipo diplomático se utilizó? Exclusivamente se utilizó la *real provisión*. Sólo existe un caso que, por lo singular, vamos a describir con detalle, en que la autoridad delegada escogió como vehículo del negocio a documentar la real cédula.²¹

El negocio jurídico que se documenta es la licencia dada a Juan de Villoria y Diego Caballero, vecinos de la

20 "Ordenamos que las provisiones y despachos de justicia entre parte que se libren en y despacharen en el Consejo de Indias para estos reynos, se despachen en nuestro nombre, firmadas de los del dicho Consejo, y no sea necesario que nos las firmemos; y las demas cosas de gobernación y gracia para estos reynos, y las de gobernacion, gracia y justicia para las Indias, se libren y despachen firmadas por Nos segun y por la forma que hasta ahora se ha hecho". *Recopilación*, lib. II, tit. VI, ley 23.

21 El documento, que es original, se encuentra en A. G. I., Patrona, 295, núm. 86. Es un doble folio en forma de cuadernillo. El tenor documental ocupa el primer folio en sus dos caras (recto y vuelto). El primer folio está cerrado y rubricado en su margen inferior. Expresa su contenido en forma de brevete.

isla Española para que puedan «rescatar» en la costa de Tierra Firme. Está fechada en Santo Domingo, 20 de octubre de 1522, y emana de Diego Colón, virrey, que la valida.

El formulario que adopta es el de la real cédula, pero intercalando alguna cláusula característica de la real provisión. Comienza con la intitulación —el rey— destacada en el texto; el cuerpo documental se inicia con la motivación que lleva implícita la dirección al expresar en aquélla la petición presentada por Villoria y Caballero para que emane de la autoridad el hecho documentado. Inmediatamente aparece la fórmula del acuerdo —«lo qual visto por el dicho nuestro virrey fue por el acordado que debíamos mandar dar la presente por ende conformandonos...»— cláusula característica de las provisiones que por ella recibían el nombre de *cartas acordadas*. Unida a ella, el dispositivo que se manifiesta acentuando el carácter de documento dispositivo: «por el presente os doy licencia e facultad para que...». El texto documental termina con una cláusula final de tipo condicionante —«pero que guarde y cumpla la ynstruccion que por el dicho nuestro virrey le sea dada en todo y por todo como en ella se contiene». El protocolo final lo integran la fecha y la validación, esta última constituida por la firma de Don Diego Colón que la expresa por su oficio —el virrey— y el refrendo del secretario que adopta la forma característica de la real cédula: «Por mandado del virrey, Lope de Barden (rubricado)».

Si no tuviéramos una lógica explicación para justificar la anomalía diplomática que supone el hecho de que el virrey despache un negocio determinado en cuya génesis no ha intervenido el monarca, por real cédula, tendríamos sufi-

cientes motivos para sospechar de la originalidad del documento que comentamos.

Hay que considerar la personal organización, sin precedentes ni tradición alguna, de la oficina encargada de la conscripción de los documentos emanados de los dos primeros virreyes indianos en Santo Domingo, Cristóbal y Diego Colón. Reducida aquélla al secretario y escribano personal de estos virreyes, sin normas u ordenanzas oficiales por las que regirse, sin formulario, sin práctica alguna de documentos públicos. Sólo sabían que el virrey estaba facultado para expedir documentos a nombre del rey. Ror otra parte, como probablemente entre las misiones que tendrían encomendadas por su jefe sería la guarda y organización del archivo personal de la autoridad, es decir, de los documentos reales que lo integraban, tomarían modelo de éstos para redactar los emanados por la autoridad del virrey.

Dejando aparte este caso especialísimo, y que sepamos sin precedentes, el tipo diplomático que adoptan los negocios surgidos de estas autoridades delegadas cuando documentan a nombre del rey, es el de real provisión. El profesor Arribas Arranz, refiriéndose a Castilla, ha propuesto que sea a este tipo documental al que se le aplique el nombre de provisión, reservando el de carta real a las validades por el propio rey.²²

El formulario de estas provisiones se acomoda en general a las emanadas directamente del rey, y que ya describimos minuciosamente en el capítulo anterior.²³ Por esta

²² Cfr., Arribas Arranz, Filemón: *La carta y Provisión real*.

²³ Cfr., Cap. IV, pág. 184. En vista de las diferencias que en el Consejo de Indias notaron en las intituciones de la Provisiones emanadas de las distintas Audiencias indianas, se

Real Provisión. Valladolid, 6 junio 1544 (A. G. I., Contratación, 5.009).

Recoge la lámina que presentamos el final del texto y el escatocolo de una Real Provisión. Aunque intitulada a nombre del emperador Carlos V, está validada por el gobernador del reino, en este caso el príncipe, luego Felipe II. Es característico el refrendo del secretario y las firmas y rúbricas de los consejeros de Indias. El sello real de placa se ha desprendido y sólo queda su huella. Aparecen también las firmas y rúbricas del registrador y del teniente de chanciller. (Vid. págs. 184 y ss.).

razón sólo dedicaremos nuestra atención a las fórmulas validativas: precisamente donde surgen las diferencias entre ambos tipos diplomáticos.

El documento lo valida en primer lugar la autoridad de quien emanó: si fue un virrey, éste firma con su título si lo tuvo —conde de Nieva—,²⁴ o con su nombre y apellido —Martín de Mayorga—. ²⁵ En ambos casos acompaña la rúbrica. Si quien lo libró fue el Consejo de Indias o una Audiencia lo firman los oidores precedidos del virrey o presidente según la institución de que se trate. Las firmas van a línea tendida, acompañadas generalmente del grado académico que ostentan (licenciado Grageja; doctor Orozco). ²⁶

En segundo lugar vamos a considerar el refrendo del secretario. Es esta cláusula donde se expresa la autoridad de quien realmente emanó el documento. Cuando la despachó un virrey:

«E yo García de Aguilar escriuano de sus Cesarea e catolicas magestades la fize escreuir por mandado de su visorey e gobernador [rúbrica]». ²⁷

fijó ésta y se les comunicó por Real Cédula fecha en Tomar, 17 de abril de 1581. El texto aprobado es el citado por nosotros en el Cap. IV, páf. 190, recogido más tarde en la *Recopilación*, lib. II, tit. I.

24 Real Provisión "dada en la cibdad de los Reyes a syete dias del mes de hebrero de mill e quinientos e cinquenta e doss años". A. G. I., Escribanía de Cámara, 498. Don Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de Nieva fue virrey del Perú desde 1561 a 1564.

25 Real Provisión que acompaña a carta del mismo virrey al Secretario de Indias, José de Gálvez, núm. 1.174, año de 1781. A. G. I., México, 1.391. Martín de Mayorga fue virrey interino de Nueva España desde 1779 a 1783.

26 Provisión del Consejo de Indias, Madrid, 10 de agosto de 1652. A. G. I., Contratación, 5.028; Provisión de la Audiencia de Santa Fe, 23 de julio de 1562. A. G. I., Justicia, 1.105.

27 Real Provisión, dada en Santo Domingo a 4 de marzo de 1521, por Don Diego Colón. A. G. I., Patronato, 295, núm. 85.

En caso de ser un presidente-gobernador:

«Yo Pedro de Cuevas escribano de la Gobernación del Nuevo Reyno de Galicia y de Camara de la Audiencia y Chancilleria Real por su magestad la fize escreuir por su mandado con acuerdo de su Presidente e Gobernador[rúbrica]». ²⁸

Si es el Consejo de Indias:

«Yo Lope de Vadillo Llerena escribano de Camara del rey nuestro señor la hice escriuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo Real de las Indias [rúbrica]». ²⁹

Por último, cuando la despacha una Audiencia indiana:

«E yo Francisco Velázquez escribano de Camara de su catholica magestad la fize escriuir por su mandado con acuerdo de su Presidente e oydores» [rúbrica]. ³⁰

La autoridad que libra la provisión aparece en estas fórmulas como acordando, junto a S. M., el negocio documentado y el rey figura como la persona de quien partió la orden de iniciar la conscripción del mismo. En estos refrendos aparecen reflejadas las instituciones documentarias —secretarios, escribanos de gobernación, escribanos de cámara— ante las que se llevó a cabo. ³¹

²⁸ Real Provisión, Guadalajara, 29 de marzo de 1576. A. G. I., México, 218.

²⁹ Real Provisión, Madrid, 10 de agosto de 1652. A. G. I., Contratación, 5.028.

³⁰ Real Provisión, Santa Fe, 23 de julio de 1562. A. G. I., Justicia, 1.105.

³¹ Estudiamos estas instituciones en el capítulo III.

Elle donat²⁰
pome de laon

Elle de
moncom

Sanuazal.

oz r. u. p. z. i. b. r. s. b. y. r. a. f.

Elle lazam. y. utarua. confime. utarua. a. ula. q. e. m. i. de. cl. u. i. a. q. z. r. u. g. m.
fu. donat. u. de. h. e. s. o. v. e. l. g. a. l. e. n. e. l. p. o. i. n. t. o. z. e. l. e. t. i. e. s. e. l. g. y. p. p. e. n. e. m. e. n. t. a. l. g. e. p. p. a.
m. u. e. p. a. r. e. z. a. n. p. o. t. o. r. e. p. o. r. u. a. r. u. a. z. a. n. e. e. n. d. i. n. g. e. r. a. l. d. e. p. o. i. a. d. i. n. s. e. m. l. m. e.
t. e. s. p. p. i. t. o. a. d. y. n. i. n. c. i. a. d.

Real Provisión (A. G. I., Escribanía, 498 A) que documenta un emplazamiento y citatorio, emanado de la audiencia indiana de los Reyes. Es de notar, además de las firmas y rúbricas de los oidores de la audiencia, que validan el documento, el señalamiento de los derechos a pagar por la parte: del Secretario tres pesos; por el Registro seis reales, y por el sello siete reales.

Por supuesto estas provisiones se validaban con el sello real, duplicado del que se custodiaba en el Consejo de Indias, y en las Indias, se guardaba en cada una de las audiencias, estando a cargo del canciller o su teniente. Las que emanan de los virreyes y presidentes-gobernadores, excepto en el caso concreto de Cristóbal Colón al que personalmente se le entregó un sello real, se validan con el sello de las audiencias que residen en la cabecera de sus respectivas gobernaciones.

En su aspecto externo estas provisiones presentan, en general, un cuidado aspecto. Estaba dispuesto que no se escribieran en letra *procesada*³² ni «con abreviaturas poniendo A por Alonso, ni C por ciento».³³ Sin embargo, en algunas provisiones se perciben ciertos elementos de la procesal redonda y de la encadenada, pero que no entorpecen la lectura del documento. El aspecto paleográfico de estas provisiones se clarificó enormemente cuando la itálica o bastarda sustituyó plenamente a las escrituras tradicionales del documento español.

Como huellas de su validación con el sello, conservan la firma y rúbrica del canciller o su teniente, y la del registrador, garantía de que la provisión quedó trasladada en el registro del sello de la Audiencia. Se indica en «las es-

32 "Mandamos que no se selle provisión alguna de letra procesada ni de mala letra, y si la traxeren al sello que la rasguen luego..." Ordenanzas de la Audiencia de 1530. *Recopilación*, lib. II, tit. XXI, ley 4.

33 *Ordenanza de la Audiencia de Guatemala* (de los Confines), Barcelona, 20 de noviembre de 1542. A. G. I., Patronato, 170, ramo 47; *Ordenanzas para la de Quito*, 4 de octubre de 1563. A. G. I., Quito, 211, lib. I; para *Chile*, 18 de mayo de 1565. A. G. I., Chile, 170, lib. I; *Manila*, 5 de mayo de 1583. A. G. I., Filipinas, 339, lib. I, 2.ª parte; para las Audiencias de *Panamá y Charcas*, ambas de la misma fecha de las Quito. A. G. I., Panamá, 236, lib. 9; *Charcas*, 418, lib. I.

paldas» del documento los derechos que su expedición causó a los distintos oficiales que participaron en su *conscriptio*.³⁴

Si en un principio, siglo XVI, las provisiones despachadas por virreyes, presidentes-gobernadores y audiencias gobernadoras documentaron negocios de toda naturaleza —judiciales, legislativos (éstos necesitaron siempre confirmación real) y gubernativos— el mismo proceso general, característico del documento moderno que hemos advertido y señalado, hizo que se fuera abandonando la utilización de este tipo revestido de cierta solemnidad y documentándose en tipos más sencillos y de concipción menos complicada: documentos emanados directamente a nombre de aquellas autoridades.

Documentos emanados a nombre de autoridades delegadas

Las autoridades delegadas indianas, singulares o colectivas, tanto si residían en la península, como en las Indias, desde el momento que estuvieron investidas de capacidad ejecutiva —bien sobre materias judiciales, legislativas o gubernativas—, en virtud del oficio que desempeñaban pudieron documentar en su propio nombre los negocios que en el ejercicio de su cargo emanaron de ellas.

Por supuesto, no cabe preguntarse si estos documentos

34 "Yten, que los escribanos sean obligados a poner e pongan en las espaldas de todas las provisiones e cartas que librasen todos los derechos que ellos y el sello y registro hubiesen de haber de ellos, so pena de cada dos pesos por cada vez que lo contrario hiciesen, para los estrados de la dicha nuestra Audiencia". Ordenanzas de Audiencia, citadas en la nota anterior.

pueden ser incluidos en el grupo de los públicos. Desde el momento que estas autoridades ejercen, aunque sea por delegación, una función pública, y el negocio documentado toca al derecho público, su adscripción a esta clase de documentos es patente.

Desde el punto de vista jurídico estos documentos son simples mandatos, es decir, simples disposiciones de gobierno y, sin embargo, su autoridad no sólo les viene dada por el funcionario que los valida: en efecto, el rey, en repetidas ocasiones, ordenó en su deseo de revestirlos de fuerza y vigor suficientes, que fueran obedecidas y cumplidas como «si por nuestra persona o cartas firmadas de nuestra real mano lo mandasemos». ³⁵

Característica general de todos estos despachos es su simplicidad formulística. En ellos, más aún que en los reales, se ha sacrificado toda la solemnidad —conseguida generalmente por la abundancia de fórmulas más o menos estereotipadas, no esenciales y por ende innecesarias— en

35 Con respecto a las órdenes y documentos surgidos de los virreyes el rey ordenó: "Y mandamos y encargamos a nuestras Reales Audiencias del Peru y Nueva España, y sujetas y subordinadas al gobierno y jurisdicción de los virreyes y a todos los gobernadores, justicias, subditos y vasallos nuestros, eclesiásticos y seculares, de qualquier estado, condición, preeminencia, o dignidad, que los obedezcan y respeten como a personas, que representan la nuestra, guarden, cumplan y executen sus órdenes y mandatos por escrito o de palabra, y a sus cartas, órdenes y mandatos no pongan excusa ni dilación alguna, ni les den otro sentido, interpretación, ni declaración, ni aguarden a ser mas requeridos, ni nos consulten sobre ello, ni esperen otro mandamiento, como si por nuestra persona o cartas firmadas de nuestra Real mano lo mandasemos. Todo lo qual hagan y cumplan, pena de caer en mal caso, y de las otras en que incurren los que no obedecen nuestras cartas y mandamientos, y de las que por los virreyes les fueren impuestas, en que por esta nuestra ley condenamos y habemos por condenados a los que lo contrario hicieron". Y refiriéndose a los documentos emanados de las Audiencias: "...las quales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones selladas con nuestro nombre y sello real". *Recopilación*, lib. III, tít. III, ley 2, y lib. II, tít. XV, ley 110.

favor de la precisión, claridad de su contenido y simplicidad de su conscripción.

Intitulación, dirección, motivación, dispositivo y fórmulas validativas —éestas reducidas al mínimo de su expresión— son las cláusulas en que se plasma la documentación de estas autoridades. Y aun a veces todavía adoptará un formulario más sencillo.

Real Orden

En un orden jerárquico vamos a ocuparnos, en primer lugar, de la *real orden*, documento que surge en el campo de la diplomática española como consecuencia de la creación de los secretarios de Despacho, concretamente por lo que afecta a nuestro tema, del secretario de Indias y Marina.

En otra parte de este estudio,³⁶ ya expresamos no sólo la evolución de esta institución, de marcada ascendencia francesa, sino las consecuencias que produjo en el campo del documento al intercalarse entre los administrados y el rey esta figura que demanda para sí muchas de las atribuciones tradicionalmente desempeñadas por el Consejo de Indias. También expusimos cómo el rey canalizará, a través de ella, muchos de los negocios emanados de su autoridad soberana, el vehículo de los cuales será la real orden.

Este tipo documental se nos presenta, pues, con acusadas características propias.³⁷ El negocio documentado apa-

36 Cfr. capítulo anterior.

37 Cfr. Real Orden firmada por el marqués de la Ensenada y dirigida a Francisco Cagigal de la Vega, San Lorenzo, 15 de noviembre de 1777. A. G. I., Cuba, 2.263.

rece como emanado del rey pero comunicado al destinatario por el secretario del Despacho: el formulario de la real orden es un reflejo exacto de la realidad jurídica de la nueva institución que, desde nuestro punto de vista y como acabamos de decir, es el intermediario entre la voluntad real y los súbditos. Su redacción, enormemente libre, se reduce a expresar la motivación y el dispositivo. Puede comenzar por aquélla o encontrarse ambas cláusulas ligadas. Si es constante que en alguna parte del tenor documental se exprese que es el rey el que lo ordena: «quiere el rey que...», «lo aviso a Vm. de real orden...», «...ha resuelto el rey...», «...a quien lo participo de real orden...», lo cual nos permite denominar al documento, como lo hicieron los contemporáneos, *real orden*.

El documento se cierra con la fecha, tónica y crónica, y la validación. Representada ésta por la firma y rúbrica del ministro de Indias. La dirección va en línea separada del tenor documental, al pie del folio —éste el tamaño del papel empleado—: «Al virrey de Nueva España», «Don Pedro Antonio de Cossio Intendente de Ejercito de Nueva España», etc.

Este tipo documental, habida cuenta su simplicidad, formulística, emanó con verdadera profusión durante todo el siglo XVIII.

Mandamientos

El mandamiento, documento librado por virreyes, presidentes-gobernadores y gobernadores indianos, se nos presenta como el tipo documental equivalente a la real cédula

emanada del rey, en cuanto que documenta preceptos de gobernación.

El nombre con que es conocido este documento le viene dado por el negocio jurídico del que es vehículo: siempre encierra una orden o precepto, un mandamiento. Sin embargo, cada vez que aparece este término en la legislación o en la documentación de la época no hace referencia sólo a ese negocio jurídico sino que denomina a un tipo definido y concreto de documento, con unas características formulísticas, así se dice: «Nuestros virreyes y Presidentes nos envíen las Ordenanzas, Mandamientos y Provisiones que se han despachado...». ³⁸

El modelo que adoptan en su estructura formulística es el documento real. Como a continuación señalaremos, imitan de las reales provisiones la intitulación y la expresión de la fecha; la suscripción y el refrendo de las reales cédulas.

El carácter dispositivo de este tipo documental se refleja frecuentemente en la redacción de su tenor con frases como «...por la presente cometo y mando a Gil Verdugo que luego que vea este mi mandamiento...». ³⁹

En la intitulación o dictado, primera cláusula con la que se abre el documento, se expresa el nombre, títulos y oficio del autor del negocio jurídico:

«Don Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, guardamayor de la ciudad de Cuenca, visorey, capitán

³⁸ Real Cédula, El Pardo, 25 de noviembre de 1609. Recogida en la *Recopilación*, lib. II, tit. I, ley 6.

³⁹ Mandamiento del virrey de Nueva España, conde de Monterrey, México, 25 de mayo de 1602. A. G. I., México, 25.

siguiente que por mis de julio del presente año salgays de la dicha ciudad de san bartholome con setenta y cinco hombres
armados y condonacion deyndos q. fueren necesario y con todos los demas bastimentos y comidas q. supieren haer y traer
a los dichos indios de pigota y buscar el sellio combiniendo por pólax la dicha ciudad agays un fuerte donde los indios
y españoles puedan estar seguros de los acometimientos y trayeron de los dichos indios chiguanaes y alli seruen
ceran y luego habiendo echo el dicho fuerte darays orden en sembrar en las partes mas fértiles y combiniendo q. os
pareciere la mayor cantidad de comidas que fuere posible y fraccayes el pueblo y repartierys los solares y cha-
rras a los españoles y los asientos para los pueblos de los dichos naturales q. se andemudar de la dicha ciudad y
prohibay de san bartholome y usaray vos con la dicha gente en guerra de las dichas semeterras y gente de san bartholome
tanto q. venga la cosecha y habiendola coxido trayey y fuyes traer la dicha gente q. quedare en la dicha
ciudad y lo mas de los naturales de los dichos Repartimientos de la dicha ciudad desmienten los tenedores primer
la cantidad de comidas necesarias para su sustento y en esto habay de tener muy particular cuenta porque si los
yndios que nueva mte se andemudar en las prinapis tubieyen hambre y necesidad de mas del dño q. es vendiendoles
o asion quise hayessen y publicando mal de la tierra los otros pueblos fueyen malos de traer alla y asomada y de
la dicha pobacion de la dicha Ciudad de san bartholome y de los dichos naturales enq. habay de poner toda la diligencia
y cuidado q. de vna persona se confia como dicho es y no antes porq. si la poblacion de condonillo q. cambian
dela y importunia quise hayes para la pueblacion de la cordillera y de los yndios de las llanos q. para todo es q. dichos y
lo ello exporcionante es doy poder y comision en forma qual en tal caso se requiere y mando q. en esto todos se
conjunten con vos y cumplan lo que les ordenareys y mandareys solas penas q. dixere desu mte. lo paxido de las
quales no en su natural nombre aspongo y he por puestas y por condonados en ellas para que las podays escudar y
escutay en las que remisor y no obediente fueren y siempre me acordando aiso de lo que entodo he dicho
es vnos milos otros no dexeys ni dexen de lo así cumplir por alguna manera Sopina de cada mil pesos de oro
para la camara de su cargo y que de lo contrario setena por de serbido fhecho en la ciudad de la paz a on de mayo
de mill e quinientos e setenta y cinco años. Yo el Rey. Yo el Rey. Yo el Rey. Yo el Rey. Yo el Rey.

Polkman

Pedding

[Handwritten signature]

Desse 1000
Alvaro Pina
D. n. d. m. d. d.

[illegible]

Mandamiento del virrey del Perú, Don Francisco de Toledo. La Paz, 11 mayo 1575 (A. G. I., Patronato, 190, r. 16).

Como es característico en este tipo diplomático, firma y rubrica el virrey y refrenda el escribano de gobernación, precediendo a su suscripción —a imitación, de las reales cédulas— la fórmula de «por mandado de su excelencia». (Vid. págs. 255-261).

general en estos reinos y prouincias del Piru por su magestad, etc...». ⁴⁰

«Don Alonso Manrique de Çuñiga, marques de Villamanrique, virrey, lugarteniente del rey nuestro señor, gobernador y capitan general en esta Nueva España y presidente de la Audiencia y Chancilleria Real que en ella reside, etc...». ⁴¹

«El licenciado Garcia de Castro, del Consejo de S. M. presidente en la Audiencia y Chancilleria Real desta ciudad de los Reyes e su gobernador en estos reinos y provincias del Piru». ⁴²

«Don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, gobernador y capitán general destos reinos e provincias de Chile e provincias de la Nueva Inglaterra por su magestad..., etc.». ⁴³

La cláusula que continúa nos permite inmediatamente distinguir dos tipos: a) los que expresan la dirección explícita: «A vos el que es o fueredes corregidor o justicia mayor, alcaldes ordinarios y otras cualesquier justicias de Huamanga...», ⁴⁴ y b) los que pasan inmediatamente a exponer la motivación, siendo prácticamente constante la expresión

40 Mandamiento del virrey del Perú, "fecha en los Reyes a doze dias del mes de agosto de mill e quinientos e cinquenta e seis años". A. G. I., Escribanía de Cámara, 498, A.

41 Mandamiento del virrey de Nueva España, México, 29 de abril de 1587. A. G. I., Lima, 25.

42 Mandamiento del presidente-gobernador, Los Reyes, 16 de agosto de 1568. A. G. I., Escribanía de Cámara, 498, B.

43 Mandamiento de gobernador, en la Imperial, 30 de agosto de 1558. A. G. I., Justicia, 396.

44 Mandamiento del virrey del Perú, Francisco de Toledo, Los Reyes, 6 de enero de 1570. A. G. I., Escribanía, 498, A.

«Por cuanto» que le sirve de introducción. La dirección entonces se diluye en esta motivación. El dispositivo, expresa el negocio jurídico que puede ser, y en muchos casos es así, la orden de que se cumpla algo, de aquí el carácter imperativo del verbo utilizado.

En el primero de los casos descritos antes de pasar a la motivación hay una fórmula notificativa: «saued».

Son abundantes los mandamientos que terminan el texto documental con la cláusula de sanción, siempre de carácter pecuniario. En las fórmulas del siglo XVI todavía se observa una redacción, muy característica de los siglos XIV y XV:

«...y los unos y los otros no dexen de lo ansi cumplir por alguna manera so pena de cada mil pesos de oro para la Cámara de S. M.».⁴⁵

«...lo cual ansi haced e cumplid so pena de cada quinientos pesos de oro para la Camâra de S. M.».⁴⁶

La fecha es siempre tópico y crónica y supone el fin del texto documental. La suscripción del otorgante queda reducida a su firma y rúbrica. Firma que puede expresar el título que ostenta —nunca el cargo—: El marque de N.; el conde de N.; o el nombre precedido, si lo tiene, del grado académico —el licenciado N., Don N.—.

El refrendo del secretario, semejante al de las reales cédulas, expresa que la conscriptio del documento se realizó

⁴⁵ Mandamiento del virrey del Perú, Francisco de Toledo, Los Reyes, 12 de octubre de 1576. A. G. I., Escribanía, 498, C.

⁴⁶ Mandamiento del virrey Toledo, Los Reyes, 6 de enero de 1570. A. G. I., Escribanía, 498, A.

Mandamiento del Virrey del Perú don García Hurtado de Mendoza. El Callao, 30 de abril, 1590 (A. G. I., Patronato, 190, r. 43).

Un característico ejemplo del tipo diplomático mandamiento. Se intitula a nombre del Virrey acompañado de sus cargos más representativos. Se valida con la firma —en este caso concreto el nombre— y rúbrica del Virrey. Lo refrenda el escribano de gobernación y no se valida con el sello. (Vid. pág. 255).

del orden del otorgante, que queda citado por su oficio o por su tratamiento. «Por mandado del virrey»; «de su Excelencia»; «de su Señoría».

A continuación la firma y rúbrica del escribano de gobernación o de cámara, sin que se especifique su condición de tal.

Por supuesto no se valida con el sello real, ni siquiera con el sello personal de la autoridad.

A semejanza de los documentos reales también se encuentran en éstos huellas de ciertas etapas por las que pasa su conscripción. Así normalmente aparece en ellos la palabra: Asentado, seguida de una rúbrica, término y rúbrica que garantizan que el documento fue copiado en los libros registros que preceptivamente debían tener estas autoridades.⁴⁷

Aparecen también señalados los derechos que, el destinatario del documento, cuando no surgió de oficio, tuvo que pagar por su expedición.⁴⁸ En caso de ser gratuitos también esta circunstancia se expresa: «sin derechos».⁴⁹

47 En una copia de un mandamiento del virrey don Gaspar de Zúñiga, librado en México, 14 de enero de 1602, A. G. I., México, 25, se puntualiza: "Es copia, sacado del libro de gobernacion", seguido de la rúbrica del funcionario que garantiza su fidelidad. Sobre estos libros administrativos o de gobierno que llevan las autoridades indianas, Cfr. capítulo I, pág. 62.

48 "Los derechos que han de llevar en los oficios de gobierno y guerra de esta Nueva España, con execucion de lo mandado por S. M. en cédula de 30 de junio de 1661 años... de un mandamiento con insercion de Ordenanza que llevaban los escribanos dos pesos de minas, uno por él y otro por la Ordenanza inserta, los Oficiales mayores un peso, y el que lo escribe otro peso: lleven lo mismo, con que los pesos, no sean de minas, sino comunes.

—de un mandamiento ordinario lleven los escribanos un peso comun, el oficial mayor quatro reales y otros quatro el escribiente..." Bentura Beleña, Eusebio: *Recopilación sumaria*, págs. 12 y 13.

49 Por decreto, la Real Audiencia de México, en funciones de gobierno por vaca el virreinato, librado en 13 de noviembre de 1784, ordenó: "que por agora y mientras

Por último para facilitar a la hora de la validación por la autoridad, la lectura del documento se expresa escuetamente en el margen inferior del folio, el resumen de su contenido. Es lo que hemos llamado el *brevete*.

De entre los muchos tipos de mandamientos —tantos como asuntos documentados— vamos a dedicar nuestra atención a dos de ellos, que alteran en cierta manera el formulario general que adoptan y ya hemos descrito.

En primer lugar las *ordenanzas*.⁵⁰ Son aquellos mandamientos que documentan un conjunto de disposiciones que reglamentan de un modo general una determinada materia, asunto, institución o cargo.

La diferencia con los demás mandamientos estriba en su cláusula dispositiva. Al ordenar diversos puntos concretos éstos se expresan separadamente anteceditos de los términos: Primeramente; ítem, otrosí; los cuales alternan a lo largo del articulado. Con respecto a las demás fórmulas son semejantes, incluso en los signos de validación, de los mandamientos ordinarios.⁵¹

El otro tipo de mandamiento a que nos referimos es el llamado *bando* cuyo nombre la viene dado por las especiales circunstancias de su publicación.

S. M. resuelva otra cosa los despachos que, como en los negocios de gobierno y justicia, no deben ser Reales Provisiones se lleven a la Chancillería para que se tome en ella una breve razón y se califiquen si son de los que deben o no pagar derechos según el Arancel..." Publicado en Beleña, Eusebio: *Recopilación Sumaria*, auto núm. 87.

50 La potestad de hacer ordenanzas la tienen expresamente autorizada los virreyes y gobernadores: "ordenamos que se ejecute sin embargo de apelación lo que ordenaren y proveyeren los virreyes... y hacer las Ordenanzas que les pareciere convenientes al buen gobierno..." *Recopilación*, lib. III, tít. III, ley 52.

51 Mandamiento que documenta unas Ordenanzas emanadas del virrey de Nueva España, conde de Monterrey, México, 14 de enero de 1602. A. G. I., México, 25.

Cuando el mandamiento debe ser conocido universalmente —entiéndase dentro de la jurisdicción de la autoridad de quien emana— se imprime y fija en los lugares acostumbrados para general conocimiento. El mandamiento en este caso lleva una cláusula que así lo ordena:

«para que llegue a noticia de todos esta determinación... mando se publique por Bando en los parajes de estilo de ella...».

El documento siempre expresa una cláusula⁵² penal para los contraventores de lo dispuesto.

* * *

Los mandamientos fueron poco a poco, por su sencillez formulista, sustituyendo como vehículo de expresión de los negocios emanados del virrey, presidentes-gobernadores y gobernadores, a los documentos emanados por estas mismas autoridades a nombre del rey, fenómeno paralelo a lo que ocurrió entre la real provisión y la real cédula, libradas por el soberano.

Cartas acordadas

Hasta ahora nos hemos referido a documentos emanados de autoridades delegadas indianas singulares. Pero también hubo autoridades colectivas dotadas de capacidad

52 Numerosos bandos en A. G. I., México, 1.385 y 1.433.

ejecutiva que documentaron determinados negocios a su propio nombre: tales fueron el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación y las Audiencias indianas. El documento transmisor de estos negocios es la carta *acordada*, aunque también hemos observado que en la documentación de la época se le denomina mandamiento y auto acordado. Este último nombre es, sin duda, más jurídico que diplomático y hace referencia a la génesis del negocio documentado.⁵³ De acuerdo con esta circunstancia, es característico y siempre constante de este tipo documental el expresar en el dispositivo que el hecho documentado surge, por acuerdo de los que integran la institución de la que emana:

«he visto por nos fue acordado...».

«visto en el Consejo se ha acordado...».

«nos los oidores de la Audiencia y Chancillerías real hemos acordado...».⁵⁴

Las cartas acordadas pueden adoptar dos estructuras distintas, siendo semejantes en su validación.

Tipo a)

Se inicia con la intitulación que, dado el carácter del otorgante, es colectiva:

⁵³ Auto se utilizó con un doble significado: proceso de alguna causa o pleito y decreto judicial dado en alguna causa civil o criminal. *Auto acordado* equivalía a la determinación que toma por punto general algún consejo o tribunal supremo con asistencia de toda la sala.

⁵⁴ Las fórmulas transcritas proceden de dos originales citados en las notas 55 y 56.

«Nos los del Consejo de las Indias de sus magestades...».

Una fórmula notificativa la une con la dirección:

«Hacemos saber a vos N.».

Se expresa seguidamente la motivación y a continuación el dispositivo. El texto documental termina con las cláusulas penales de corroboración o sanción.⁵⁵

TIPO b)

El documento principia por la dirección en vocativo: «señores oficiales de su magestad que residís en la Casa de la Contratación de las Indias». A continuación se expresa la motivación y seguidamente el dispositivo.⁵⁶

Uno y otro tipo se unifican en el protocolo final. Así ambos indican la fecha —tópica y crónica—, y utilizan los mismos signos de validación: las rúbricas —no los nombres— de los otorgantes. Por último el refrendo del secre-

55 Ya en las Ordenanzas de la primera Audiencia indiana, la de Santo Domingo, se ordena "e que las otras cartas e mandamientos que los dichos mis jueces dieren, que no fuesen de la calidad sobredicha [se refiere a las emanadas a nombre del soberano] se despachen poniendo en la cabeza de las dichas cartas e mandamientos: Nos los Jueces del abdiencia e juzgado que esta y resyde en las Indias..." Ordenanza III de las de Santo Domingo, 5 de octubre de 1511. A. G. I., Patronato, leg. 170, ramo 12. Esta fórmula intitiativa se cambió por la de: "Nos los Oidores..." cuando este capítulo de Ordenanza se incorporó a la *Recopilación*, como ley 110 del lib. II, tít. XV. Ejemplo de este tipo de carta acordada, librada por el Consejo de Indias. Madrid, 16 de octubre de 1533. A. G. I., Santo Domingo, 170.

56 Cartas acordadas del Consejo de Indias de 3 de mayo de 1553. A. G. I., Contratación, 5.010, y 17 de marzo de 1671. A. G. I., Indif. Gral., 968.

tario, que ordenó la *actio* y mandó hacer la *conscriptio*, suscribe mediante fórmula semejante a la que llevan las reales cédulas y mandamientos:

«Por mandado de los señores del Consejo de las Indias [o de los oidores de la Audiencia], N. [firma y Rúbrica]».

Sobre la fuerza y vigor de estos documentos diremos que obligaban a quienes iban dirigidos como preceptos emanados de legítima autoridad, pero además el soberano quiso equipararlos a los documentos emanados de su real persona, cuando dispuso:

«las cuales [cartas acordadas, libradas por las audiencias en su propio nombre] sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones selladas con nuestro nombre y sello real...». ⁵⁷

Sentencias

En el desempeño de su misión judicial, el Consejo de Indias, las audiencias indianas y la Casa de la Contratación libraron una serie de documentos, denominados por su contenido jurídico —pesquisa, comisión, compulsorias, presentaciones, receptorías, informaciones, probanzas, etc.— pero que adoptaron la estructura diplomática de reales provisiones, cartas acordadas, mandamientos o simples decretos.

57 *Recopilación*, lib. II, tít. XV, ley 110.

Sentencia (A. G. I., Patronato, 12, r. 2). Sobre el mismo documento que hemos calificado de probatorio se han señalado las pertinentes notificaciones a las partes. (Vid. pág. 264).

Un negocio, sin embargo sí exigirá un nuevo tipo documental: la sentencia.

Hay dos tipos de sentencias: la interlocutoria y la definitiva. Aquélla es la que se da sobre un artículo o incidente del pleito; ésta la que decide el litigio y le da fin, absolviendo o condenando a la parte.⁵⁸

El mecanismo de la pronunciación de la sentencia y el desarrollo de su conscripción era el siguiente: una vez que los oidores acordaban la sentencia⁵⁹ deberían llamar al escribano asignado en la causa, el cual la escribiría, bien en presencia de los oidores que inmediatamente la firmarían, o bien en su propia oficina, guardando el mayor secreto, con tal que en el momento en que los oidores fueren a pronun-

58 Partida II, tit. VI, ley 4.

59 Sobre el modo de actuar los oidores para decidir un pleito: "en la determinacion de los pleytos civiles o criminales que se sigueron en las Audiencias, haga sentencia lo que a la mayor parte de los oidores pareciere y estando iguales, nombren por tercero al Fiscal, que fuere de la Audiencia, no siendo parte en los negocios y pleytos de discordia; y si no hicieren sentencia, y todavia discordaren elijan y nombren un abogado, dos, o tres, sin sospecha, como mejor les pareciere, para la determinación del pleyto, y executese lo que la mayor parte determinare, aunque la mayor parte no sea mas que dos; y si en la Audiencia no hubiere mas de dos oidores, ellos solos puedan conocer y determinar todas las dichas causas, y si estuvieren conformes, valga su sentencia, y en caso de discordia, elijan jueces en la forma susodicha; y si en la Audiencia no hubiere mas de un oidor, pueda él solo ordenar los procesos en todas las dichas causas, has'ta concluir las en definitiva, hacer informaciones y dar mandamientos para prender, y concluso el pleyto, para la determinacion de él, se elija y nombre al fiscal, o acompañado, que conforme a lo referido pareciere, y lo mismo se haga en todos los artículos perjudiciales, que incidieren y no se puedan reparar por la sentencia definitiva; y si la causa fuere civil, de doscientos pesos, y menos, él solo pueda determinar en vista y revista: y lo mismo pueda hacer en las causas criminales, siendo sobre palabras ligeras, con que si no hubiere tanto numero de abogados para acompañarse en los casos referidos, se acompañe con otras personas de letras, qualesquiera que hubiere: y en quanto a las Audiencias de México y Lima se guarde la orden contenida en la ley siguiente". *Recopilación*, lib. II, tit. XV, 97.

ciarla, reunidos en acuerdo, el documento les fuere presentado para validarlo.⁶⁰

Las características formulísticas de la sentencia son las siguientes: se inicia con la exposición del pleito, citando las partes en litigio y los procuradores que las representan:

«En el pleito que es entre N. estante en L. e N. su procurador de la una parte e N., vecino de L., e N. su procurador en su nombre, de la otra...».

Inmediatamente se expresa el negocio documentado, es decir, la sentencia:

«Fallamos que... por ende que debemos absolver e absolvemos [o condenar e condenamos]».

El texto del documento se cierra con una cláusula corroborativa:

«y por esta nuestra sentencia definitiva ansi lo pronunciamos y mandamos».

60 En las Ordenanzas de las Audiencias indianas se establecía esta práctica. Fue sintetizada y recogida en la *Recopilación*, lib. II, tít. XV, ley 106, así: "Ordenamos y mandamos, que al tiempo que los oidores, acordaren la sentencia, llamen al escribano de la causa, y secretamente le manden escribir ante ellos los puntos, y el efecto de la sentencia que han de dar, y que allí se ordene y escriba en limpio, y firme antes de que se pronuncie, o a lo menos se hubiere de pronunciar, venga escrita en limpio, y se firme por todos los que fueren en el Acuerdo, aunque el voto, o los votos de alguno o de algunos no sean conformes a lo que la sentencia contiene: por manera, que a lo menos en los negocios ordinarios no se pronuncie la sentencia hasta que esté acordada y escrita en limpio y firmada y despues de publicada no se pueda mudar cosa alguna, y luego el Escribano dé allí el traslado de ella a la parte, si la pidiere, pena de dos pesos para los Estrados".

El documento va validado por las rúbricas de los oidores, tantas cuantos estuvieren en el acuerdo aunque no hubieren asistido a la determinación del pleito o su voto hubiera sido contrario.⁶¹

Tras las «señales» de los oidores se expresa la fecha, acompañada del anuncio de la validación, plasmada en fórmula constante:

«Dada e pronunciada fue esta sentencia por los señores del Consejo de las Yndias (del Abdiencia e Chancilleria real que reside en la ciudad de L.) de sus magestades que en ella firmaron sus nombres, en la villa de Valladolid a catorce dias del mes de abril de mill e quinientos e cinquenta e quatro años [rúbrica]».

La rúbrica pertenece al escribano de Cámara del Consejo o de la Audiencia indiana.

Como jurídicamente es imprescindible la notificación de la sentencia a las partes, en las «espaldas» de la misma, el mismo escribano deja constancia de tal acto, acompañándolo de la fecha en que se realizó.

«En Valladolid el dicho día catorce del dicho mes de abril de dicho año de 1554 notifique esta sentencia a N. [rúbrica]».⁶²

61 "Mandamos que en todos los negocios, que a nuestras Audiencias ocurrieren, y se determinaren, firmen todos los Jueces lo que por la mayor parte se hubiere resuelto, así en las sentencias definitivas, como en autos interlocutorios, y otras qualesquier determinaciones y provisiones, aunque hayan sido de voto y parecer contrario". *Recopilación*, lib. II, tit. XV, ley 107.

62 Las frases entrecomilladas del formulario, de la sentencia pronunciada por el Consejo de Indias, en Valladolid, 7 de abril de 1551. A. G. I., Justicia, 399. Abundantes sentencias en A. G. I., Justicia, 13.

En torno a las sentencias podemos plantearnos el problema de la naturaleza del documento en relación al negocio jurídico que documenta, es decir, ¿es un documento dispositivo o probatorio?

Si analizamos la génesis de la *actio*, y de la *conscriptio* del documento en cuestión, tal como la hemos expuesto más arriba y según el formulario en que se vierte, observaremos cómo la sentencia surge y adquiere todo su valor en el momento en que se pronuncia o publica por los oidores reunidos en el acuerdo. El documento recoge el negocio emanado oralmente y se redacta como si la documentación se llevara a cabo con posterioridad:

«dada y pronunciada fue esta sentencia...»,

y aunque la legislación disponía que el documento estuviere escrito antes que los oidores la pronunciaran, no supone en absoluto que la sentencia adquiriera su fuerza y vigor por el hecho de su documentación, existiendo desde el momento —y sólo entonces— en que se pronuncia oralmente.

La sentencia documento es, pues, probatorio. El documento original queda guardado por la administración de justicia, y a las partes, para que les sirva de prueba de la misma, se dan los traslados que pidieren.

Una vez transcurridos los plazos previstos por las leyes, la parte podía solicitar la ejecutoria del pleito —documento que adoptaría el tipo de provisión real— para guarda de su derecho.

Carta del virrey de Nueva España, D. Martín Enríquez, a S. M. México, 6 diciembre 1574 (A. G. I., México, 19).

Presentamos el último folio de la carta de un virrey. Todavía, en esta fecha, no se han promulgado disposiciones que determinen la estructura de este tipo de correspondencia oficial. El virrey trata en la carta hasta 42 temas diversos sobre los asuntos de gobierno del virreinato (capítulos). La fórmula de despedida, así como la suscripción y rúbrica del virrey, son autógrafas. Recibida la carta en el Consejo, al margen, se tomaron las resoluciones de los problemas planteados. (Vid. págs. 269-274)

Cartas

Una última categoría documental vamos a describir, la carta,⁶³ sobre la cual, sin embargo, creemos necesario hacer una serie de consideraciones en torno a su posible calificación diplomática.

La legislación indiana reconoció siempre y protegió la libertad de los súbditos americanos de mantener una estrecha correspondencia con la península, y así la carta fue el vehículo normal de relación entre las autoridades y particulares residentes en Indias y los organismos de la administración central.⁶⁴

A través de ellas se comunicaron al soberano, personalmente («en sus reales manos») o por intermedio del Consejo de Indias, un sin fin de noticias sobre variadísimos temas de carácter oficial o puramente particular.

Una cuestión que se ha planteado más de una vez la Diplomática general —las cartas son características de todas las épocas— es su misma denominación de documento.

De la solución que se dé a este problema dependerá su estudio como objeto de esta ciencia. Porque, en efecto, si

63 En alguna ocasión recibieron el apelativo, de tradición medieval, de misivas: "Breve summa de lo que en sustancia contienen las letras misivas que de las Indias han venido al Consejo" [primer tercio del siglo XVI]. A. G. I., Indif. Gral., 856.

64 "Ordenamos que... nuestras justicias reales o personas de cualquier grado, o dignidad que sean, no pongan embargo ni impedimento directa, ni indirectamente a los que quisieren venir o enviar darnos cuenta de lo que conuenga a nuestro real servicio..." *Recopilación*, lib. III, tit. XVI, ley 4. De la importancia que los gobernantes dieron a las cartas es muestra clara el hecho de dedicarles un título exclusivo en la *Recopilación*, el XVI del libro III. La correspondencia que actualmente guardan los archivos, el de Indias por ejemplo, es clara muestra de nuestra aseveración. Cfr. en el mencionado A. G. I., la sección V.

analizamos el contenido de las cartas tendríamos que concluir que, al no documentar un negocio jurídico determinado, al no transmitir derechos y obligaciones, en puridad no podemos denominarla documento diplomático *stricto sensu*. Sin embargo, dado que las cartas, y esto es doctrina general, tienen por fin asegurar o dar a conocer la realización de las órdenes del soberano; su existencia está sancionada por la legislación, la cual incluso las estructura, y las noticias que transmiten son origen de actos jurídicos, tienen clara cabida dentro del campo diplomático, aunque en un lugar jerárquico inferior al documento específicamente diplomático. Así le asignamos el título de documento *lato sensu*.

Las cartas de contenido indiano aceptan y cumplen los tres puntos señalados que nos han permitido considerarlas objeto de la Diplomática: Así, a través de ellas, las autoridades y particulares, acusan recibo de documentos *stricto sensu*, dan cuenta de su cumplimiento o de los problemas surgidos en su ejecución, etc.⁶⁵

Su existencia y estructura está determinada en los cuerpos legales vigentes para las Indias, como lo prueba el hecho de que un título, el XVI, del libro III de la Recopilación de 1680 esté exclusivamente dedicado a esta cuestión. Por último, cumplen el tercer requisito, siendo la misma legislación la que nos da adecuada respuesta en este sentido:

«Porque de las cartas de los virreyes, Audiencias, y otras personas, assi publicas, como particulares que de

⁶⁵ Cfr. Cartas de los virreyes de México del siglo XVI a S.M., A. G. I., México, 19 y ss.

las Indias y de la Casa de la Contratación de Sevilla, y otras partes se nos escriben resulta la mayor parte de cosas de gobernación a que se debe mucho atender por lo que nos importa...». ⁶⁶

Estructura diplomática de las cartas

Las cartas, ya lo hemos indicado, son susceptibles de ser divididas en dos grandes grupos: las particulares y las oficiales. Las primeras no estuvieron nunca sujetas a una determinada estructura, antes bien el particular que las escribió lo hizo siempre guiado de su propia voluntad y sólo se sometieron a las modas generales de época. Las oficiales, en cambio, las que escriben las autoridades sobre materias del «servicio», estarán pronto sometidas a un estrecho ordenamiento, aunque no siempre se cumplió.

La característica fundamental de la carta es la libertad de su redacción, siempre en forma expositiva, pues pocas son las fórmulas y solemnidades que exigen. Sin embargo no faltan algunas que se hacen características y comunes en este tipo documental.

Se encabezan siempre por el tratamiento dado —según la época— a la persona a la que se dirigen, en nuestro caso a la persona del rey.

Hasta la llegada a las Indias de la pragmática de los tratamientos y cortesías ⁶⁷ el tratamiento que se da al soberano coincide con el expuesto cuando tratamos de la con-

⁶⁶ *Ordenanzas de 1571*, núm. 13; *Ordenanzas de 1636*, núm. 27.

⁶⁷ Del recibo de esta Pragmática dió cuenta el virrey de Nueva España, Marqués de Villamanrique, en carta de 28 de abril de 1587. *A. G. I., México*, 21, doc. núm. 11.

sulta y que en general es el usado en los documentos: S[acra], C[esárea], R[eal] M[ajestad] para Carlos V; S[acra], C[atólica] M[ajestad] para su hijo y sucesor Felipe II. Pero la citada pragmática dispone que se simplifique el tratamiento: desde ese momento el término que quedará establecido será *Señor*.

Tendremos que llegar al escatócalo de la carta para volver a encontrar unas fórmulas de estilo: la cláusula de saludo final y despedida, en la que se recogen toda una serie de cortesías al uso de la época:

«Cuya catolica persona Dios guarde con acrescentamiento de mayores reinos y señorios»

o en expresión más reducida, a medida que pasan los años. Esta fórmula va seguida de la fecha, tónica y crónica, que se adaptará a los usos de expresión de la misma, según la época, y a los que nos referiremos, en general, en el próximo capítulo.

En el siglo XVI y sólo hasta 1585, aproximadamente, es costumbre utilizar una fórmula de sometimiento y acatamiento a la persona regia que va destacada del tenor documental, en dos o tres líneas, formando una especie de antefirma:

«De V[uestra] C[atólica] R[eal] M[ajestad].
vasallo que sus ilustres pies [o manos]
besan».

Expresión que coincide con la utilizada en este mismo momento en las consultas y que les da cierta solemnidad a ambos tipos documentales.

El número de firmas y rúbricas que validan el documento dependen del autor de la carta (virrey, cabildo secular o eclesiástico, obispo, etc.). Generalmente si es el virrey firma con su nombre y apellido y la rúbrica (Luis de Velasco) o bien con el título de nobleza, si lo tiene (El Conde de Nieva); si es un cabildo secular firman los componentes del mismo, antecediendo cada uno su nombre de su grado académico, en último lugar firma el escribano del cabildo antecediendo su firma de la expresión: «por la ciudad, Juan Tissol escribano del cabildo»; si se trata de un obispo, la suscripción queda reducida al nombre propio de la autoridad eclesiástica seguido de su título eclesiástico y el lugar de su jurisdicción en latín: Pedro, archiepiscopus mexicanus, etc., etc.

El texto documental como decíamos fue de redacción personal y libre, sin embargo se reglamentó su estructura en diversas ocasiones. Y ello se debió a la multiplicidad de asuntos que se relataban en dichas cartas, asuntos que incluso se repetían en una misma carta, que hacían lenta su lectura y dificultaban su conocimiento.

En 1595 se dictaron las primeras normas que pretendían unificar la estructura de las cartas oficiales hasta ese momento de variadísima ordenación. Entonces se dictaminó que «vengan escritas en el papel doblado a la larga, por manera que quede otra tanta margen como fuere lo escrito». En el margen no escrito debería resumirse el asunto documentado que a lo largo de la carta debería estar ordenado de acuerdo con los siguientes temas: gobierno, justicia, guerra y hacienda.⁶⁸

68 Real Cédula, El Campillo, 15 de octubre de 1595 dirigida a las Audiencias Indianas, A. G. I., Indif. Gral., 427, lib. 30, fol. 451v. publicada en Encinas, Diego: *Cédulas-provisiones*, tomo II, fol. 314.

Años después, 1605, se creyó más conveniente separar cada uno de estos asuntos, dedicando una carta a cada uno, y dividir los distintos temas de cada asunto por capítulos.⁶⁹

En años posteriores⁷⁰ fueron apareciendo nuevas disposiciones sobre la materia de tal manera que ya en el siglo XVIII, momento en que definitivamente está fijada la estructura, la correspondencia está sometida a las siguientes normas: cada autoridad numera su propia correspondencia, correspondiendo el número 1 a la primera que escribe inmediatamente después de la toma de posesión. Dedicar una carta a cada asunto; dejar un gran margen en blanco donde se resume el asunto tratado. Se numeran los documentos, copias, que acompañan a la carta en prueba de lo que en ella se dice. Independientemente se envía un índice de la correspondencia con el resumen de lo que se trata en la carta. Llevan numeración distinta las cartas reservadas o secretas.

69 Real Cédula, Valladolid, 28 de marzo de 1605. A. G. I., Indif. Gral., 428, lib. 32.

70 Entre las disposiciones que sobre esta materia hemos encontrado son: Real Cédula, Madrid, 5 de noviembre de 1609. A. G. I., Indif. Gral., 429, lib. 38, fol. 64v. *Recopilación*, lib. II, tit. XVI, ley 6. Real Cédula, Madrid, 28 de abril de 1702. A. G. I., Indif. Gral., 515, lib. 3, fol. 8. Real Cédula, Madrid, 12 de febrero de 1718 (impresa). Real Cédula, Buen Retiro, 25 de diciembre de 1748. Indif. Gral., 653. Real Orden, 24 de enero de 1758. A. G. I., Filipinas, 1.070. A. Real Orden, 13 de junio de 1761. A. G. I., México, 1.507.

Capítulo VI

La FECHA Y EL SELLO EN EL DOCUMENTO INDIANO

La cronología, ciencia independiente y auxiliar de la Historia, tiene, sin embargo, conexiones directas con la Diplomática en cuanto que la data es parte integrante de la estructura documental. De aquí que dediquemos la primera parte de este capítulo —en la segunda exponemos unas consideraciones sobre sigilografía indiana— a una serie de cuestiones relacionadas con la fecha de los documentos indianos.

La cláusula cronológica que señala el tiempo y el lugar donde ha sido redactado, es esencial en el documento público indiano. De tal manera es así que el hecho de que no aparezca en un documento de este tipo, aun estando completo en las demás fórmulas validativas, es un claro signo de que, por cualquiera causa, no emanó de la autoridad correspondiente.¹

Acabamos de decir que la fecha que aparece en el do-

¹ Recordemos que según la costumbre seguida en las oficinas encargadas de la *conscripción* del documento indiano, éste se fecha, incluso, después de firmado y rubricado por el otorgante. De aquí que siempre aparezca la escritura de la fecha, sino de otra mano, sí de otra tinta.

cumento corresponde a la de su redacción, es decir a la de su *conscriptio*. En el documento moderno no se plantea el agudo problema que los diplomatas encuentran en el medieval —sobre todo el documento alto medieval— donde frecuentemente existe la duda de si su fecha corresponde al momento en que surgió la *actio* o negocio jurídico o al instante de su puesta por escrito, de su documentación, entre las cuales hubo a veces un relativo espacio de tiempo.² En nuestro caso, repetimos, la fecha corresponde siempre a la redacción documental.

La cláusula cronológica del documento indiano es susceptible de descomponerse en tres elementos: el *incipit*, la fecha tópica y la crónica.

El incipit

Es la expresión que da entrada a los elementos puramente cronológicos.

El documento indiano utiliza diversos términos, alguno de ellos característico de un determinado tipo diplomático. Estos términos son: *Fecha, dada, de y en*.

Fecha, es característico, aunque no exclusivo, de las reales cédulas, pues este tipo diplomático también usa la

2 Es el caso relativamente frecuente de los reyes medievales que al pasar por un determinado monasterio le conceden de palabra un concreto beneficio. Con la prisa de la marcha no se documenta el negocio. Tiempo después, en una nueva visita del soberano se documenta el negocio. Al observar como la documentación utiliza dos términos distintos al iniciar la fórmula cronológica: *Actum* o *datum*, se ha querido ver en ellos una indicación del momento a que corresponde la fecha. Así la expresión *Actum* correspondería a la fecha del negocio jurídico y *datum* a la de su *conscriptio*. Las verificaciones realizadas sobre estas hipótesis no han aclarado el problema.

expresión más sencilla de comenzar la fórmula cronológica con la preposición *de*. La real provisión prefiere el *dada* y es casi constante en los mandamientos y reales órdenes.

Fecha tónica

Expresa el lugar en que se llevó a cabo la *conscriptio* del documento. Es elemento constante en la documentación indiana, pues es «defecto legal y sustancial no expresar la ciudad, villa o lugar de sus otorgamientos o datas».³

En su resolución práctica, lo esencial es el nombre de la población, apareciendo, sin embargo, otros elementos accesorios que concretan el lugar («en las casas del cabildo»). Son precisiones más constantes en el documento probatorio que en el dispositivo.

La expresión del lugar no plantea otro problema que el paleográfico. La aparición de nombres geográficos autóctonos cogidos al oído por amanuenses españoles, presentan alteraciones sensibles de su correcta expresión a la hora de escribirlos, y mucho más cuando lo que conservamos es una copia del documento que los transmitía. El copista, en muchas ocasiones, se vio precisado a dibujar el nombre al no poderlo interpretar.

Fecha crónica

En ella se expresa la data del día, mes y año y sólo en

3 Ayala, Manuel José, *Notas*. Comentario al libro II, tít. VI, ley I.

documentos probatorios, aunque no sea constante, el día de la semana y la hora.⁴

De todos estos elementos es la expresión del año la que vamos a analizar en primer lugar.

La reforma gregoriana

Le toca vivir al documento indiano una de las reformas más profundas de la historia del calendario: la reforma gregoriana.⁵

La reforma del calendario llevada a cabo por César, con la colaboración del astrónomo Sosígenes, en esencia consistió en hacer coincidir el año civil con el año solar, para lo cual se estableció que el tiempo que el sol tardaba en dar una vuelta completa —creencia de la época— era de 365 días y cuarto. El año civil tendría 365 días y cada cuatro años —ese cuarto de día sumaría un día completo— el año constaría de 366 días.

En realidad la tierra realiza su movimiento de traslación alrededor del sol en 365 días, 5 horas, 48 minutos 47'51 segundos, es decir, le faltan casi 12 minutos para el cuarto de día, base de la reforma juliana. De acuerdo con esta realidad el año civil romano duraba poco más que el año solar. Como consecuencia de esta desigualdad el equinoccio de primavera que en aquel año 46 antes de Jesucristo coincidió con el 25 de marzo, había avanzado unos cuantos

4 "El sábado por la mañana que se contaron 19 días del mes de febrero deste año de 1564". Carta de la Audiencia de Lima, a S.M., A. G. I., Lima, 92.

5 Amplia bibliografía sobre el tema en Giry, *Manuel*. En España es interesante la obra de Pérez Millán, J.: *El calendario*.

siglos después —año 325, fecha de la celebración del Concilio de Nicea— hasta el 21 de marzo.

Los padres conciliares resolvieron fácilmente esta cuestión, pues trasladaron el equinoccio de primavera a este 21 de marzo. Claro está que no resolvían el origen del problema, y de nuevo el itinerante equinoccio del primavera iba ganando días, a medida que transcurrían los siglos. En 1581 coincidía con el 11 de marzo, es decir el adelanto era de 10 días con respecto a la fecha fijada por el Concilio de Nicea.

Durante la Edad Media y el Renacimiento ya hubo intentos de reforma. La Iglesia Católica, era la más interesada en resolver la cuestión por la importancia que tenía el calendario para fijar la fecha de la Pascua, festividad alrededor de la cual gira su año litúrgico y actuó unas veces apoyando iniciativas personales, otras planteando el problema en los Concilios. Así en los de Constanza, Basilea, V de Letrán y Trento.

Por fin el Papa Gregorio XIII se ocupó desde el principio de su pontificado de reunir bajo la presidencia del cardenal Sirleto una comisión de teólogos y sabios para el estudio de la reforma. Ignacio Dantés, el jesuita alemán Cristóbal Clavius y el matemático español Pedro Chacón, entre otros, fueron los autores de la reforma, que fue promulgada el 24 de febrero de 1582, por la bula «Inter Gravissimas».

Un doble objeto tenía la reforma: 1) situar de nuevo el equinoccio de primavera en el 21 de marzo, 2) impedir que se produjera una diferencia notable entre el año civil y el astronómico.

Respecto al primer punto, como el equinoccio de primavera se producía el 11 de marzo en lugar del 21 de dicho mes, se decidió suprimir 10 días del año de la reforma, fijando tal supresión del 4 de octubre al 15 de octubre.

El segundo punto se solucionó por intercalación de un día en los años bisiestos, suprimiendo la intercalación, sin embargo, en los años seculares.

La reforma en Indias

La primera noticia oficial que el Consejo de Indias tuvo sobre la reforma que se pretendía llevar a cabo le llegó por carta de 7 de julio de 1582, firmada por el secretario real Mateo Vázquez. Por esta carta de orden del rey, se comisionaba al Consejo para que estudiara la aconsejada corrección del calendario a fin de implantarla en Indias.

Después de un detenido estudio, durante el cual, y a través del secretario del Consejo, Ledesma, la institución estuvo en contacto con el nuncio de su Santidad, se propuso al rey dadas las características especiales de las Indias una serie de aspectos y detalles que deberían tenerse en cuenta.

Por fin el rey decidió, y así lo comunicó a los consejeros desde Lisboa,⁶ que se llevara a efecto en el año 1583. De acuerdo con este deseo los consejeros de Indias prepararon

6 Sabemos de la carta de Mateo Vázquez por la consulta que el Consejo elevó al monarca sobre esta materia en 21 julio 1582. A la consulta el rey contestó en decreto marginal: "Yo he mandado mirar lo que toca a este kalendario y se os auisara despues lo que mas parecera conuenir, y si quando le ayais visto se os offresciere algo de que conuenga auisarme, lo hareis". La Real Cédula firmada en Lisboa es de fecha de 7 de febrero de 1583. El expediente en A. G. I., Indif. Gral., 740.

el documento pertinente que, firmado por el soberano, se convirtió en la real pragmática de 14 de marzo de 1583.⁷

Por ella, tras anunciar a las autoridades indianas el envío del nuevo calendario que, a la sazón se imprimía «por el prior y frailes y convento del monesterio de San Lorenzo el real», se reglamentaban una serie de aspectos en estrecha vinculación con la corrección que se establecía.

En primer lugar, se ordenaba «que del mes de octubre de este año de ochenta y tres se quiten diez dias, contando quinze de octubre quando se hayan de contra cinco y ansi venga a tener y tenga octubre en este presente años veynte y un dias y no mas...».

Sin embargo, previendo la ley la posibilidad de que, debido a lo apartado de algunas provincias americanas y la falta de fáciles comunicaciones, el documento no fuera conocido a tiempo, admitía: «Y porque en algunas partes de las dichas nuestras Indias, por estar distantes, no se podrán tener noticia de lo susodicho que Su Sanctidad ha ordenado y en esta ley se contiene, para poder hacer la diminución de diez días en el mes de octubre de este presente año, ordeno y mando que se hagan el año siguiente de ochenta y quatro, o el primero que de lo suso dicho tuuiere noticia y esta ley en los dichos reynos fuere publicada, según que Su Sanctidad lo provee y ordena».⁸

7 La Real Pragmática de 14 de marzo, 1583 está publicada en Encinas, Diego de: *Provisiones-cédulas*, tomo I, fols. 269-271 y modernamente por Comas, Juan: *El Calendario Gregoriano*, págs. 208-210.

8 Lo entrecomillado pertenece a la Pragmática en cuestión. Generalmente los historiadores que han tratado de la reforma gregoriana en Indias, han interpretado que de no llevarse a efecto la corrección el 5 de octubre de 1583, se hiciera al año siguiente o siguientes pero siempre el 5 de octubre. Así, Comas, Juan: *El Calendario Gregoriano en América y Caso*, Alfonso: *Mas sobre el Calendario Gregoriano*. Sin embargo, también pudiera interpre-

La pragmática concluía solucionando los inmediatos problemas que surgirían al aplicar la rectificación: en primer lugar, deberían ampliarse en diez días los plazos y términos judiciales que estuvieren señalados antes de la entrada en vigor de la disposición; en segundo lugar, habría que descontar de los sueldos y salarios de ese mes de octubre los 10 días que no existían.⁹

Para dar la difusión necesaria al documento, se ordenaba a las autoridades americanas que lo publicasen, imprimiéndolo, en los territorios de sus jurisdicciones.¹⁰

Los problemas que puede plantear la documentación indiana emanada en aquellos territorios, en relación con la reforma gregoriana del calendario, nacen del hecho de que no sepamos en qué año se adoptó en cada una de las provincias indianas. Sí consta que en México y Guatemala se introduce la reforma en 1583; en Perú en 1584 y en Córdoba de Tucumán en 1585. Pero, ¿y en provincias apartadas,

tarse —el contenido del documento así lo permite— como que de no hacer la corrección propuesta el 5 de octubre de 1583 se realizara el año en que se conociera la pragmática, pero en cualquier mes y día. Así por lo menos nos consta que lo interpretarían los notarios de Córdoba de Tucumán que realizaron la corrección entre el 1 de enero y el 11 de abril de 1585. Cfr. Tanodí, A.: *Comienzos de la función notarial en Córdoba*, pág. 38.

9 A esta última medida se resistieron las autoridades indianas y hubo de ordenárseles en repetidas ocasiones que lo cumplieran: "... yo he sido informado que, sin embargo de estar dispuesto y ordenado por la premática que mandé hazer en lo tocante a la reformation del año que se descuenta lo que monta en los diez días a todas las personas a quien doy salario, el Presidente e oydores de esa mi Audiencia [de Guatemala] no han consentido que se les quiten ...".

Real Cédula, Madrid, 14 de noviembre de 1584 a los oficiales reales de Guatemala para que descuenten del Presidente y oidores y otras personas los diez días de sus salarios. A. G. I., Guatemala, 386.

10 Así se ordenó por ejemplo al virrey del Perú, Martín Enríquez, por Real Cédula, 14 de mayo de 1583, publicada por Encinas, Diego de: *Provisiones-cédulas* (cedulario), tomo I, pág. 269.

de pocos habitantes, donde ni siquiera hubo escribanos públicos?¹¹

Problemas de la expresión de los estilos cronológicos utilizados en Indias

Con contadas excepciones —y en estos casos se utilizaron sistemas cronológicos ajenos al mundo occidental, como aquella carta dirigida al gobernador de Filipinas, escrita en castellano por unos mandarines radicados en Manila, cuya cláusula cronológica dice así: «fecha en treinta y un años del reyno de Vandel a las diez de la quarta luna que es la presente de mayo segun se cuenta—»¹² el documento indiano utilizó siempre en la expresión del año la era cristiana. Sin embargo, y sólo durante el siglo XVI, alternaron dos estilos: el de la Circuncisión, que perduró como exclusivo a partir de aquel siglo, y el de la Natividad.

Como es sabido, el primero hace empezar el año el día uno de enero; el segundo el 25 de diciembre. Cuando se utiliza el primer estilo la fecha del año se expresa directamente; en el segundo se hace acompañar de la fórmula: *año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo* (o de *nuestro Salvador Ihesu Christo*) *de...*.

Pero cuando en un documento observamos en la expresión de la fecha esta fórmula, ¿es señal absolutamente cierta de que se fecha por la Navidad?

Y es que hemos podido comprobar en dos casos con-

11 Cfr. la bibliografía citada en nota 8.

12 Corresponde, según anotó el Secretario del Gobernador, en mayo de 1603. A. G. I., Filipinas, 7.

cretos en que aparece la fórmula en cuestión, cómo en uno en verdad se fecha por la Natividad y en otro no responde a esta realidad.

Veamos:

a) una carta de poder otorgada por el obispo de México, Zumárraga, a favor de Francisco Rodríguez Santos, canónigo, se fecha en México en 29 de diciembre «año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de 1543».

Esa misma carta fue presentada en el Consejo de Indias, a la sazón en Valladolid «en 27 de agosto de 1543».

No hay la menor duda que el 29 de noviembre arriba expresado no corresponde al año 1543, sino al 1542. El escribano inauguró el nuevo año el 25 de diciembre.¹³

b) en un memorial presentado al virrey de Lima, fechado «en la cibdad de los Reyes a 27 dias del mes de diciembre año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de 1567» decretó el citado virrey: «no hay que responder 30 de enero de 1568».¹⁴

Claramente se observa que aun expresando la fórmula característica del estilo de la Navidad, se fechó de acuerdo con el de la circuncisión. Para que verdaderamente se hubie-

13 El documento está en A. G. I., Justicia, 1.009. En otro documento (A. G. I., Santo Domingo, 164), se dice: "en la muy noble e muy leal cibdad de Seuilla, veinte e nueve dias del mes de diciembre año entrante del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e sesenta e ocho...". Tampoco hay duda sobre la cuestión. Nuevo testimonio sobre el uso del estilo de la Navidad nos lo da el siguiente documentos: "en la estancia de Guanajuato que es de Rodrigo Vázquez, provincial de Michoacán, jueves 13 dias del mes de henero año de 1547 ante el justicia mayor se presentó una petición y una carta de poder cuya fecha es, Michoacán, 25 dias del mes de diciembre, año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo de 1547". A. G. I., Escribanía de Cámara, 159 B. La utilización de este estilo por los notarios de Córdoba de Tucumán ha sido probada por Aurelio Tanodi en *Comienzos de la función notarial*.

14 A. G. I., Justicia, 118.

ra empleado la fecha por el estido de la Navidad la fecha del memorial correspondería al año 1566 y el virrey hubiera tardado más de un año en decretarla.

Siempre, pues, que un documento indiano —nunca real que sólo fechó por la Circuncisión— esté fechado entre los días 25 a 31 de diciembre y exprese la fórmula en cuestión, tendremos que intentar averiguar, por otras noticias cronológicas la realidad del estilo utilizado.

La expresión del mes y del día

Para la expresión del mes y del día se sigue el sistema directo, único utilizado en la documentación española desde el siglo XV.

Generalmente el mes se designa por su nombre, completo o abreviado, aunque esta modalidad alterna, sobre todo, en los siglos XVI y XVII, con otra que pudiera, si no se está impuesto en ella, provocar equivocación al querer interpretarla. Consiste este sistema en designar algunos meses del año de acuerdo con su significación etimológica que, a su vez, es consecuencia del lugar que dicho mes ocupaba en el calendario romano. Así, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se expresaron a veces por los números, siete, ocho, nueve y diez, con numeración romana o arábica coronados generalmente por la letra *e* superpuesta.

Un documento cuya fecha se expresa: «a 17 días de X^o de 1648»,¹⁵ no corresponde, como quizás pudiera pensarse, al

¹⁵ Corresponde a una carta del cabildo de San Juan de Puerto Rico. A. G. I., Santo Domingo, 156.

mes que ocupa el lugar décimo en el año actual —octubre— sino a diciembre.

El Sello

El sello puede estudiarse desde diversos puntos de vista: histórico, artístico, paleográfico, diplomático. El punto de vista que presidirá nuestro breve comentario será el histórico-diplomático.

El sello en relación con el documento público indiano¹⁶ desempeña un doble cometido: lo valida o lo cierra. Esta doble función no supone ninguna novedad ya que desde siempre le han sido reconocidas.

El único sello que, con respecto al documento público indiano, ejerce función validativa es el real.

La ceremonia con que se recibía el sello, es decir su matriz, en la Audiencia estaba reglamentada y ofrecía un espectáculo colorista:

«...y porque como sabeys quando el nuestro sello real entra en qualquiera de las nuestras audiencias reales de estos reynos, entra con la autoridad que nuestra real persona entrasse. Por ende yo vos mando que llegado el dicho nuestro sello real a essa tierra, vosotros y la justicia y regimiento de esta ciudad de la Plata salgays un buen trecho fuera de ella a recebir al dicho nuestro sello, y desde donde estuviere hasta el dicho

16 La bibliografía sobre sigilografía indiana es muy escasa. Conocemos las dos obras siguientes: Saltilló, marqués de *Sigilografía hispano-americana* y Arribas *Sellos de placa* (incluye alguna noticia sobre el tema).

pueblo vaya encima de una mula o de un caualllo bien adereçado y vos el Regente y el oydor mas antiguo le lleuad en medio con toda veneracion que se requiere, segun y como se acostumbra a hazer en las audiencias reales de estos reynos, y ansi por esta orden vays hasta le poner en la casa de essa audiencia real, donde el dicho selle este, para que en ella tenga cargo la persona que pusieredes para que sirua el dicho oficio de chanciller del dicho sello, entre tanto que nos proueemos del a quien fuereamos seruido, de sellar las prouisiones que en essa audiencia se despacharen». ¹⁷

El sello personal de las autoridades delegadas indianas no fue utilizado para cumplir este menester, pues los documentos públicos que emanaron en su propio nombre no exigían este procedimiento de autenticación. Les bastó la firma y rúbrica de sus otorgantes y el refrendo del escribano de Cámara o Gobernación.

En cambio, tanto el sello real, como el personal de estas autoridades, fue utilizado, al adherirlo al documento convenientemente plegado y amarrado con una fina cuerda de cáñamo, como garantía de que el documento no había sido leído hasta llegar a manos del destinatario; es decir en su función de servir de cierre.

Clases de sellos reales

Por supuesto, siendo la materia escriptoria que trans-

¹⁷ Real Cédula, Valladolid, 4 de septiembre de 1559: *Recopilación*, lib. II tít. XXI, ley 1.

mite el negocio indiano, el papel, el sello utilizado fue el de placa.

Tres tipos de sello utilizaron los monarcas de la Edad Moderna en relación con el documento indiano: el sello mayor, con función exclusivamente validativa; el sello pequeño o de cierre y el sello secreto.

El sello mayor es el sello depositado a la custodia del canciller. Se conserva en el Consejo de Indias y en las audiencias indianas.

En un principio el sello utilizado en los primeros documentos de tema indiano fue guardado en el Consejo Real. El progresivo aumento de los asuntos indianos obligó a «abrir» un duplicado del sello real para validar exclusivamente documentos indianos.¹⁸ Debió ocurrir hacia 1514.

Desde el momento que las audiencias y chancillerías indianas, como las españolas, estuvieron facultadas para documentar a nombre del soberano y validar estos documentos —reales provisiones— con el sello real, cada vez que se fundó un nuevo tribunal hubo de enviárseles un duplicado del sello real.¹⁹

18 Schäfer, E.: *El Consejo Real*, tomo I, pág. 28.

19 Aunque las Ordenanzas de la primera Audiencia indiana, la de Santo Domingo, fundada en 1511, señalaban que sellaran las Provisiones con el sello "que mandaremos poner en las dichas Yndias", no se le envió nunca. Sospechamos que utilizaron un duplicado del sello real que se había dado a Cristóbal Colón y que heredaría su hijo Diego Colón, también facultado para despachar Provisiones validadas con el sello real. La Audiencia de Santo Domingo tuvo sello propio en 1528, cuando recibió sus segundas ordenanzas. En aquel mismo año se enviaba otro para la recién creada audiencia mexicana. No todas las Audiencias tuvieron desde el principio el sello real. Encinas, Diego de: *Cédulas-Provisiones*, tomo I, fol. 25, publica una lista de las Audiencias que hay en Indias en el último tercio del siglo XVI, señalando las que se erigieron sin sello y cuando lo recibieron. En la *Recopilación*, lib. II, tít. XV se indican las Audiencias existentes en 1681.

Tanto los sellos mayores del Consejo de Indias como los de las audiencias indianas, son idénticos. La materia de la impronta fue la plata. Siempre que fallecía un soberano se destruían los suyos a la vez que se «abrían» otros con la nueva leyenda.²⁰

La legislación era explícita con respecto al sellado y el sistema a seguir:

«y que se selle sobre papel, y para esto sea la cera colorada y bien aderezada, de forma que no se puede quitar el sello».²¹

Las leyendas y los símbolos que representan el sello mayor coinciden con los que reproducen el sello mayor del Consejo Real.²²

20 Por Real Cédula de 24 de octubre de 1665 se anuncia a la Audiencia de Lima el envío de nuevo sello por haber muerto Felipe IV, sucediéndole Carlos II, "he mandado que se hagan sellos de las armas reales para el despacho de los títulos... remitiéndolos para esa Audiencia el que va con esta... y que el del rey mi señor que esta al presente en su poder se remache y funda...". A. G. I., Indif. Gral., 430, lib. 41, fol. 88v.

Para mandar nuevos sellos no hacía falta la muerte de un soberano. El uso los gastaba: "porque habiendo pasado mucho tiempo sin renovar los sellos de nuestras Armas Reales, conviene remitir otros a nuestras Reales Audiencias: Mandamos, que quando los enviaremos nuevos, los reciban los Presidentes y oidores, y los entreguen a los Chancilleres de ellas, y hagan remachar y fundir los antiguos, que alla tuvieren, y poner en nuestras Caxas Reales, haciendo cargo de su peso a los oficiales Reales para que con la demas hacienda nuestra nos lo envíen, y de haberlo hecho así nos den aviso". *Recopilación*, lib. II, tít. XXL, ley 9.

21 *Recopilación*, lib. II, tít. XXI, ley 4.

22 Los diversos tipos y leyendas utilizados en el Consejo Real hasta el reinado de Carlos V los estudia Arribas Arranz, Filemón: *Sellos de placa*. La leyenda del sello de Felipe II es: PHILIPPVS. D. G. HISPANIARUM VTRIUSQUE. SICILIAE. HIERUSALINIS. INDIARUM. INSULARVM. AC. TERRAE. FIRMAE. MARIS OCEANI. REX. (Real Provisión, 26 de octubre de 1561. A. G. I., Justicia, 432). Esta leyenda con los lógicos cambios de hombre de soberano (PHILIPPVS III, PHILIPPVS IIII, CAROLUS) fue constante durante el gobierno de la casa de Austria.

El sello secreto no es más que el sello personal del monarca: el que guarda en su cámara, cuyo antecedente es el que en la Edad Media se llamó de la «poridat».²³ Tuvo función validativa y precisamente fue el utilizado para autenticar las reales cédulas emanadas con intervención del ministro de Indias: en ellas se hace constar, en la fórmula corroborativa:

«sellada con el sello secreto de S. M.»; «sellado con el sello de mis armas...».²⁴

Este sello, de menor tamaño que el mayor —45 mms.—, utiliza el lacre rojo como materia adhesiva y su leyenda se simplifica extraordinariamente:

PHILIPUS. V. D.G. HISPANIA. REX.²⁵

CAROLUS. III. D. G. HISPANIARUM. REX.²⁶

El sello de cierre, de menor tamaño que el secreto —30 mms.— tiene exclusivamente la función de cerrar el documento. Se custodiaba en el Consejo de Indias y de él había varios ejemplares.²⁷ Reproduce las armas reales y la leyenda es semejante a la del secreto.²⁸

23 Cfr. Arribas Arranz, Filemón: *Sellos de placa*; Sánchez Belda, Luis: *La Cancillería de Sancho IV*.

24 Cfr. Capítulo IV, epígrafe Reales Cédulas. Ejemplos de este tipo documental validado con el sello secreto, emanadas de Felipe V en 1734, en A. G. I., Indif. Gral. 147.

25 En Real Cédula de Felipe V, Madrid, 1 de junio de 1706. A. G. I., Indif. Gral., 138.

26 Reales Ordenanzas para la Minería de Nueva España promulgadas por Carlos III. Madrid, 22 de mayo de 1783.

27 "Preguntado si sabe que orden tiene quando se cierran los pliegos para enbiar a las Yndias dixo que este confesante se crio en el escriptorio del secretario Luyando y algunos días en el del secretario Ledesma hasta abrá dos años y medio que se fue a las

El canciller y el registrador de Indias

Hemos preferido estudiar estas dos instituciones, íntimamente relacionadas entre sí, a continuación del epígrafe que hemos dedicado al sello, por la vinculación que con respecto a este elemento de validación tuvieron ambas, y no cuando en el capítulo III nos ocupamos de los funcionarios y oficios relacionados con la *conscriptio* documental.

Una visión general del tema nos permite, como observaremos, señalar dos grandes etapas, cuyo hito 1623, marca una clara distinción en el desarrollo histórico de ambos cargos. De acuerdo con esta periodificación emprenderemos su estudio.

Previamente, creemos preciso, exponer, siquiera sea esquemáticamente, las características y misiones de estas dos instituciones.

El canciller²⁹ surge en el reino castellano-leonés como jefe de la oficina encargada de la *conscriptio* del documento real. Como funciones específicas, además de la guarda y custodia del sello real, le está encomendado el ordenar la puesta por escrito de los negocios surgidos del soberano,

Yndias y bio que los pliegos que se despachavan por S. M. para las Yndias después de cerrados los sellauan con un sello real que tenían en su poder los dichos secretarios" Información hecha por Orden del Consejo de Indias contra Pablo de Cianca sobre el robo de varios sellos de cierre de la Secretaría del Consejo. A. G. I., Justicia, 1.167.

28 Por tenerse que romper para abrir los pliegos, apenas se conservan estos sellos. Sus huellas sin embargo son abundantísimos. Cfr. un sello en la "espalda" de una Real Cédula, Valencia, 25 de abril de 1632. A. G. I., Contratación, 5.020.

29 La bibliografía sobre el Canciller de los reinos castellano-leonés la hemos citado en el Cap. III, nota 55. Con respecto al Canciller indiano existe una obra del tratadista clásico; León Pinelo que vivió en el siglo XVII. *El Gran Canciller*.

controlar la redacción documental, inspeccionar si el contenido documental está de acuerdo con la voluntad del otorgante, etc. Durante la Baja Edad Media, la institución evolucionará, evolución que estará terminada al iniciarse la Edad Moderna. El canciller se ha convertido en un título honorífico a cuyo poseedor inviste de atribuciones políticas y representativas. Otro aspecto importante que ha adquirido el cargo es el de su rentabilidad económica.

La venida a España del emperador Carlos acentuaría ese doble carácter —político y de merced económica— del oficio de canciller que incluso alteraría su nombre tradicional. En efecto, hasta su llegada a los reinos castellanos el oficio se designa con el nombre de canciller mayor.³⁰ A partir de su reinado el nombre con que oficialmente se le conoce será el de gran canciller. La razón del nuevo nombre nos la da el padre Las Casas: ³¹ «el rey truxo consigo a Valladolid un hombre [Jean le Sauvage] docto en derechos, flamenco, por chanciller mayor, que según el uso de flamencos llaman Gran Chanciller, cuyo oficio es ser cabeza y presidente de todos los Consejos... En este puso el rey toda la justicia y gobernación de Castilla y de las Indias».

El registrador, oficio de menos categoría social y burocrática («que son puestos para escribir cartas en libros que han por nombre registros»),³² nace también en la Edad Media. En el reinado de los Reyes Católicos el registrador ha

³⁰ Canciller mayor porque tiene encomendado a su custodia el sello Mayor. Existió también el Canciller de la poridat que guarda el sello personal del monarca. A partir de la Edad Moderna este último sello está a cargo de un secretario de la Cámara.

³¹ Casas, Fray Bartolomé de las: *Historia de las Indias*, lib. III, Cap. XCIX, tit. 33, pág. 168.

³² *Partidas*, III, XIX, 8.

concretado su misión y se llama así al funcionario que registra los documentos que emanan de los reyes validados con el sello real³³ y autoriza los traslados que de este registro se sacan, cobrando por arancel.

El canciller y registrador de Indias, hasta 1623

Hasta 1532, el Consejo de Indias no tuvo canciller propio. Ejerce este oficio, con respecto a los documentos reales, el canciller mayor de Castilla. Ni incluso cuando se abrió un nuevo sello, duplicado del depósito en el Consejo Real para validar los documentos indianos, se creó un canciller propio. Las funciones inherentes a este cargo las desempeñó concretamente el teniente de canciller castellano, Urbina, que siguió ejerciendo su oficio cuando fue nombrado canciller de Castilla en 1517 Jean le Sauvage —ahora titulado gran canciller—, y cuando el cargo fue desempeñado interinamente por el deán de Besançon, Juan Carondelet al ser nombrado Gattinara.³⁴

Fue durante el ejercicio de este oficio por Mercurino Gattinara, al crearse las dos chancillerías indianas de Santo Domingo y México³⁵ a las que se dotó de sendos sellos reales, cuando el soberano se vio en la necesidad de crear un nuevo cargo de canciller de esas dos audiencias.

33 Vid. Capítulo I, epígrafes *Registro del Sello* y *Registros administrativos*.

34 Noticias biográficas y sobre la actuación política de estos tres personajes en Giménez Fernández, Manuel: *Bartolomé de las Casas*, tomo II.

35 La de Santo Domingo estaba creada desde 1511; pero es ahora, en 1528, cuando se le envía un sello real. Vid. nota 19 de este mismo capítulo.

El designado fue el mismo Gattinara al que se despachó título por real provisión de 22 de abril de 1528.³⁶

Así, pues, se da la paradoja que hubo primero oficio concreto, con título propio, de canciller de las audiencias indianas que de canciller del Consejo de Indias.

A la muerte de Gattinara es nombrado para el oficio Diego de los Cobos. Ahora concretamente se le titula «Canciller de las cosas que se despachan en el nuestro Consejo de las Indias y en las nuestras Audiencias y Chancillerías que al presente estan y residen en las ciudades de Santo Domingo de la isla Española y Tenustitlan Mexico de la Nueva España». ³⁷ Es, pues, el primer canciller del Consejo de Indias con título concreto.

La muerte, en 1575, de Cobos supuso para la institución que estudiamos un momento de crisis. En primer lugar, el oficio de canciller de las audiencias indianas se convirtió en oficio vendible y se multiplicó en tantos cargos como audiencias hubiere creadas o se fundaren; por otra parte, el canciller del Consejo recayó en un personaje, sin relieve so-

36 "Por quanto nos avemos mandado que el nuestro Presidente i oidores de la nuestra Audiencia Real de las Indias que reside en la isla Española, en los despachos e prouisiones, que en la dicha Audiencia se proueieren e despacharen, sea con nuestro título, i para ello tengan nuestro sello e registro; y assi mismo avemos mandado proveer otra nuestra Audiencia e Chancillería Real para la Nueva España, en la qual assi mismo ha de aver sello i registro, como lo ay en las otras nuestras Audiencias e Chancillerías reales destos nuestros Reynos. Por ende, por hazer bien e merzed a vos el Conde Don Mercurino de Gatinara nuestro Gran Chanciller... es nuestra merced e voluntad que agora e de aqui adelante por todos los dias de vuestra vida, seais nuestro Chanciller de las dichas nuestras Audiencias, i tengais el sello dellas": León Pinelo, Antonio: *El Gran Canciller*. A. G. I., Indif. Gral., 421, lib. 13, fol. 90v. El Dr. Schäfer: *El Consejo de Indias*, tomo I, pág. 48, no interpreta bien al documento y dice que por esta Real Provisión fue nombrado Gattinara Gran Canciller del Consejo como lo era de Castilla desde 1518.

37 Real Provisión, Ratisbona, 8 de agosto de 1532. A. G. I., Indif. Gral., 421, lib. 15, fol. 173.

cial, escribano de Cámara del Consejo, Juan de Sardaneta.³⁸

Bien es verdad que hasta ese momento ninguno de los grandes cancilleres había desempeñado por sí mismo el oficio, nombrando siempre a un teniente que, generalmente, fue un oficial del Consejo,³⁹ sin embargo, la dignidad del cargo estuvo bien representada por las personalidades antes citadas.

A partir de Juan de Sardaneta, el cancillerato del Consejo sigue en la misma tónica y lo desempeñan sucesivamente Juan de Ledesma, Pedro de Ledesma, Sebastián de la Vega, Juan Ramírez de Arellano y Felipe de Salas.⁴⁰ Este último cesaba en su cargo en 1623.

El primer registrador del Consejo, cargo creado a raíz de la «abertura» del primer sello especialmente dedicado a los documentos indianos, lo ostentó Lope Conchillos⁴¹ con carácter vitalicio. El oficio fue desempeñado después por los oficiales mayores de la secretaría y escribanía de Cámara de Gobernación hasta que en 1605 al ser nombrado canceller el citado Arellano, en el mismo título, se le hacía registrador del Consejo.⁴² Ambos cargos fueron simultaneados por sus sucesores.⁴³

38 Real Cédula, Madrid, 11 de enero de 1577. A. G. I., Indif. Gral., 426, lib. 26, fol. 22.

39 Actuaron de Tenientes de Canciller: Blas de Saavedra, Martín Ramoín, cuyos nombres y firmas aparecen en la Real Provisión.

40 León Pinelo, Antonio: *El Gran Canciller*.

41 Se le dió el oficio el 21 de marzo de 1515: A. G. I., Indif. Gral., 419, lib. 5 fol. 170v., publicado en C. D. I., tomo XIV, pág. 14. En 1514 se debió segregar del Registro del sello castellano el indiano. Coincide la fecha con la «abertura» de un sello real especialmente dedicado a los documentos indianos.

42 El Consejo de Indias recibió un decreto real en el que se le comunicaba el nombramiento de Arellano para Canciller. Aprovechó la ocasión para dictar el siguiente auto acordado: «En la ciudad de Valladolid a 22 días del mes de enero de 1605, los Ss. Presidente y consejeros del Consejo Real de las Indias acordaron y mandaron que de aquí en

El registro de las audiencias indianas, fue por otros derroteros. Creadas las dos primeras, Santo Domingo y México, el cargo fue dado, como merced económica, al consejero doctor Diego Beltrán, en 1528, facultándole a nombrar tenientes.⁴⁴

El canciller y el registrador desde 1623

El conde-duque de Olivares, valiéndose de su enorme influencia, como describe el doctor Schäfer,⁴⁵ conseguiría en 1623 reunir en sí mismo los oficios hasta ahora dispersos de canciller y registrador del Consejo y de las audiencias indianas.⁴⁶ Incluso consiguió rehabilitar para sí el título de gran canciller de las Indias.⁴⁷ Pero aún hay más, el cargo quedaba vinculado a su familia por juro de heredad.

adelante el Registro de los títulos y provisiones que se despachasen así por el Consejo como por la Cámara no esté en poder del escribano de Cámara ni de los oficiales de los secretarios como hasta ahora ha estado por ser contra la Ordenanza del Consejo. Sino que el registro de todos los dichos títulos y provisiones que se acostumbra y deben sellar este junto con el oficio de Chanciller por el mejor y más bien despacho de las partes y de los dichos títulos y provisiones y que en esta conformidad se despache título de Registro a la persona a quien S. M. ha hecho merced del oficio de Chanciller". A. G. I., Indif. Gral., 863. El título de Arellano con le doble nombramiento en A. G. I., Indif. Gral., 502, lib. I, fol. 57.

43 Fueron sucesores: Francisco de Mondragón, Felipe de Salas. Cfr., León Pinelo: *El Gran Canciller*.

44 El título de Beltrán se le dió por Real Provisión, Madrid, 22 de abril de 1528. A. G. I., Patronato, 277, núm. 4, ramo 61.

45 Schäfer, E.: *El Consejo de Indias*, tomo I, pág. 217.

46 Como los Cancilleres y Registradores de las Audiencias indianas eran cargos vendibles se ordenó a las autoridades indianas que en cuanto vacaren se agregasen dichos cargos al Conde-duque. Real Cédula al virrey de Nueva España, 5 de noviembre de 1623. A. G. I., Indif. Gral., 916.

47 "Se pueda intitular i intitule i llame i se puedan intitular i llamar, intitulen y llamen pueda firmar i firmen Gran Canciller de las Indias". A. G. I., Indif. Gral., 503, libro 4, folio 49.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado. En el presente de la vida social y económica del país, el estudio de la lengua y de la literatura, en el campo de la lingüística, ha alcanzado un nivel de desarrollo que no se alcanzó en el pasado.

BIBLIOGRAFIA *

- ALBA, Duque de: *El Archivo de la Casa de Alba*. "Hidalguía. Revista de Genealogía, Nobleza y Armas", núm. 1, Madrid, abril-junio, 1953, pág. 151.
- ALTAMIRA, Rafael: *Los Cedularios como fuente histórica de la legislación indiana*. "Revista de Historia de América", núm. 10. México, diciembre, 1940, págs. 5-86.
- ARMAS MEDINA, Fernando: *La Audiencia de Canarias y las Audiencias indianas*. "Anales de la Universidad hispalense", XXII. Sevilla, 1962, págs. 103-127.
- ARRIBAS ARRANZ, Filemón: *La organización de la Cancillería durante las comunidades de Castilla*. "Hispania", X, núm. 38. Madrid, 1950, págs. 61-84.
- *La Carta y Provisión Real*. "Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y Diplomática", II. Valladolid, 1959, págs. 1-45.
- *La confirmación de documentos reales a partir de 1562*. "Revista de A. B. y M.", LIX. Madrid, 1953, págs. 39-49.
- *Sellos de placa de las Cancillerías regias castellanas*. Valladolid, 1941.
- AYALA, Manuel José de: "Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, Norte de los Acercamientos y Actos positivos de la Experiencia". Ms. Madrid, Biblioteca de Palacio.
- *Notas a la Recopilación de Indias*. Edición y transcripción de Juan Manzano, 2 tomos. Madrid, 1946.
- BALLESTEROS, Tomás: *Tomo primero de las Ordenanzas del Perú*. Reimpreso en Lima, año 1752.
- BALLESTEROS BERETTA, Antonio: *Cristóbal Colón y el descubrimiento de América*. Barcelona, 1945.
- BENTURA BELEÑA, Eusebio: *Recopilación sumaria de todos los Autos Acordados de la Real Audiencia y sala del crimen de esta Nueva España y providencias de su superior gobierno*. México, 1787.

* Se cita la bibliografía utilizada. En su exposición se sigue un criterio alfabético, sin distinguir en apartados diversos las colecciones documentales, las monografías elaboradas o las fuentes legales.

- BERNARD, Gildas: *Liste des secretaires d'Etat spagnols de l'advenement des Borbons jusqu'à 1808*. "Revista de A. B. y M.", LXII. Madrid, mayo-agosto, 1957, pág. 887.
- BERWICK Y ALBA, Duquesa de: *Autógrafos de Colón*. Madrid, 1892.
- BOUARD, Alain de: *Manuel de Diplomatie française et pontificale*. 2 tomos. París, 1929-1952.
- CASAS, Bartolomé de las: *Historia de las Indias*. Edición de Agustín Millares Carlo. México, 1951.
- CASO, Alfonso: *Más sobre el calendario gregorianos* "Historia Mexicana", VII, núm. 4. México, abril-junio, 1958, págs. 536-537.
- CÓDIGOS españoles concordados y anotados. 12 vols. Madrid, 1872. Vols. I, II y III: Las Partidas; VI: Ordenanzas de Montalvo; VII a XI: Novísima Recopilación de Castilla.
- COLECCIÓN de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españoles en América y Oceanía. 1.ª serie, 42 tomos. Madrid, 1864-1885; 2.ª serie, 25 tomos. Madrid, 1885-1932.
- COMAS, Juan: *El calendario gregoriano en América*. "Historia Mexicana", VII, núm. 2. México, octubre-diciembre 1957, págs. 207-215.
- CORTES de los antiguos reinos de León y Castilla. Madrid, 1866.
- CUESTA GUTIÉRREZ, María Luisa: *Un formulario inédito de Cataluña*. "A.H.D.E.", XI. Madrid, 1934, págs. 479-486.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús: *Manuscritos de América*. Madrid, 1935.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: *Política y Hacienda de Felipe IV*. Madrid, 1960.
- ENCINAS, Diego de: *Cedulario Indiano*. Reproducción facsímil de la edición única de 1596. 4 tomos. Madrid, 1945-1946.
- ESCUDERO, José A.: *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*. 4 vols. Madrid, 1969.
- ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro: *Práctica del Consejo Real*. 2 tomos. Madrid, 1796.
- FENÁNDEZ NAVARRETE, Pedro: *Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV*. 5 tomos. Madrid, 1825-1837.
- FERNÁNDEZ NAVARRETE, Martín: *Conservación de monarquías y discursos políticos sobre la Gran Consulta que el Consejo hizo al señor rey don Phelipe tercero al Presidente y Consejo Supremo de Castilla*. Madrid, 1626.
- FERRER, Jaime: *Compendio histórico de los más principales sucesos*. Valencia, 1699.
- FLORIANO CUMBREÑO, Antonio: *Curso general de Paleografía y Diplomática española*. Oviedo, 1946.

- *Diplomática española del período astur*. 2 tomos. Oviedo, 1949-1951.
- GAMBOA, F. Javier: *Comentarios a las Ordenanzas de Minas*. Madrid, 1761.
- GARCÍA GALLO, Alfonso: *La ley como fuente de derecho en Indias en el siglo XVI*. "A.H.D.E.", XXI-XXII. Madrid, 1951-1952, páginas 607-737.
- GARCÍA VILLADA, Z.: *Paleografía española*. Madrid, 1923.
- GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel: *Bartolomé de las Casas*. Sevilla, 1953.
- *Las doctrinas populistas en la independencia de Hispanoamérica*. Sevilla, 1947.
- GIRY, A.: *Manuel de Diplomatique*. París, 1894.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio: *Alfonso IX*. Madrid, 1949.
- *Regesta de Fernando II*. Madrid, 1949.
- GONZÁLEZ HURTEBISE, Eduardo: *Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona*. Madrid, 1920.
- HARING, Clarence Henry: *El origen del gobierno real en las Indias*. "Boletín del Instituto de Investigaciones históricas", III, núms. 21-24. Buenos Aires, 1925.
- IDOATE, Florentino: *Un formulario de la Cancillería navarra en el siglo XV*. "A.H.D.E.". Madrid, 1956, págs. 517-657.
- LEÓN PINELO, Antonio: *El Gran Canciller de Indias*. Edición y estudio de Guillermo Lohmann Villena. Sevilla, 1953.
- *Libros Reales de Gobierno y Gracia*. Edición y estudio de Antonio Muro Orejón. Sevilla, 1960.
- "Real Junta de Guerra de Indias. Su origen, forma y jurisdicción". Ms. Archivo General de Indias (Lima, leg. 467). Editado por Lewis Hanke: *Un manuscrito desconocido de Antonio León Pinelo*. "Revista Chilena de Historia y Geografía", núm. 91. Santiago, julio-diciembre 1937, págs. 198-226.
- *Tablas Cronológicas de los Presidentes, Consejeros, Fiscales, Secretarios, Relatores y Contadores*. Edición, Madrid, 1892.
- MALAGÓN BARCELÓ, Javier: *El distrito de la Audiencia de Santo Domingo en los siglos XVI-XVII*. Ciudad Trujillo, 1942.
- MANZANO MANZANO, Juan: *Cómo funcionaba el Consejo de Indias*. "H.A.H.R.", XV, núm. 3. Durham, 1935.
- *Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida, 1485-1492*. Madrid, 1964.
- *Historia de las Recopilaciones de Indias*. 2 tomos. Madrid, 1950-1956.
- MARÍN MARTÍNEZ, Tomás: *Confirmación real en documentos castellano-leoneses*. "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", III. Madrid, 1951, págs. 583-593.

- MARTÍN POSTIGO, María de la Soterraña: *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos*. Valladolid, 1959.
- MATEU LLOPIS, Felipe: *Decadencia de la escritura en el siglo XVI*. "Emerita", XIII. Madrid, 1945, págs. 99-102.
- MENDIZÁBAL, Franciscò: *Investigación acerca del origen, historia y organización de la Real Chancillería de Valladolid, su jurisdicción y competencia*. "Revista de A. B. y M.", XXXI-XXXII. Madrid, julio-diciembre 1914-1915, págs. 95-112 y 459-467.
- MILLARES CARLO, Agustín: *Tratado de Paleografía española*. 2 tomos. Madrid, 1932.
- *La Cancillería real de León y Castilla hasta finales del reinado de Fernando III*. "A.H.D.E.", tomo III. Madrid, 1926, págs. 227-306.
- MILLARES CARLO, Agustín, y José Ignacio MANTECÓN: *Album de Paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII*. México, 1955.
- MOLINA ARGÜELLO, Carlos: *Monumenta Centroamericae Histórica*. Managua-Sevilla, 1965.
- MUÑOZ ROMERO, Tomás: *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*. Madrid, 1887.
- MURO OREJÓN, Antonio: *Cedulario americano del siglo XVIII*. Tomo I. Sevilla, 1956.
- *Cristóbal Colón: el original de las capitulaciones de 1492 y sus copias contemporánea*. "A.E.A.", VII. Sevilla, 1951, págs. 505-515.
- *Las Leyes Nuevas de 1542-1543*. Sevilla, 1961.
- *Los libros registros-cedularios del Consejo de Indias*. "Anales de la Universidad Hispalense", XVIII. Sevilla, 1957-58.
- *Ordenanzas reales sobre los indios*. (Las leyes de 1512-13). Sevilla, 1957.
- ORDENANZAS del Consejo Real de las Indias. Nuevamente recopiladas por el rey don Felipe quarto N. S. para su gobierno establecidas. Año MDCXXXVI. Madrid, 1636.
- ORDENANZAS de la Junta de Guerra de Indias nuevamente recopiladas por el rey don Felipe quarto N. S. para su gobierno establecidas, año de MDCXXXVI. Madrid, 1636.
- ORDENES que se han dado para el gobierno del Consejo Real de las Indias y Secretarios del desde el año pasado de quinientos y noventa y siete hasta el de seyscientos nueve. Impreso, s. a., s. l. Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 3-34336, fols. 154-165.
- PAOLI, Cesare: *Diplomatica*. Nueva edizione aggiornata de G. C. Buscape. Florencia, 1942.

- PEÑA Y CÁMARA, José de la (y otros): *Catálogo de Documentos del Archivo General de Indias. Sección V. Gobierno. Audiencia de Santo Domingo, sobre la época española de Luisiana*. Tomo II. Sevilla, 1968.
- PÉREZ MILLÁN, J.: *El Calendario, su origen, evolución y reforma*. Santiago, 1956.
- PLEITOS COLOMBINOS. Tomos I y VIII. Edición de Muro Orejón, Antonio (y otros). Sevilla, 1964-1967.
- PROCTER, E. S.: *The castilian Chancelery during the reign of Alphonso X (1252-1284)*. Oxford, 1934, págs. 104-121.
- PUGA, Vasco de: *Provisiones-cédulas-instrucciones para el gobierno de la Nueva España*. México, 1563. Reedición, Madrid, 1945.
- RASSOW, Peter: *Die Urkunden Kaiser Alfons VII von Spanien Eine Paleographische diplomatische Untersuchung*. Berlín, 1929.
- REAL DÍAZ, José Joaquín: *Cartas y peticiones del cabildo de San Juan de Puerto Rico*. Puerto Rico, 1968.
- *El Consejo de Cámara de Indias. Génesis de su fundación*. "A. E. A.", Sevilla, 1962, págs. 725-758.
- *Las ferias de Jalapa*. Sevilla, 1959.
- *Don Martín de Mayorga, virrey de Nueva España*. Sevilla, 1968.
- RECOPILACIÓN de las Leyes de los Reynos de las Indias. 4.^a edición. Madrid, 1791.
- SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: *Origen de las dignidades seglares de Castilla y León*. Madrid, 1794.
- SALTILLO, Marqués de: *Sigilografía Hispano-americana*. "Revista de Indias", núm. 3. Madrid, 1941, págs. 99-113.
- SÁNCHEZ, Galo: *Colección de fórmulas jurídicas castellanas de la Edad Media*. "A. H. D. E.", tomo II. Madrid, 1925, págs. 470-491.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: *Documentos de Samos de los Reyes de Asturias*. "Cuadernos de Historia de España", núms. 1, 2, 3. Buenos Aires, 1964.
- SÁNCHEZ BELDA, Luis: *Notas de Diplomática. La confirmación de documentos por los Reyes del Occidente español*. "Revista de A. B. y M.", tomo XIX. Madrid, 1953, págs. 85-116.
- *La Cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV*. "A. H. D. E.", XXI-XXII. Madrid, 1951-1952, págs. 173-223.
- *La Cancillería castellana durante el reinado de doña Urra (1109-1126)*. "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", IV. Madrid, 1953, págs. 587-599.
- SÁNCHEZ BELLA, Ismael: *La Organización financiera de las Indias (siglo XVI)*. Sevilla, 1968.
- SARRABLO AGUARELE, Eugenio: *Nociones de Diplomática (Según las obras de Giry, Bouärd, Muñoz Rivero, etc.)*. S. I., 1941.

- SCHÄFER, Ernesto: *El Consejo Real y Supremo de Indias*. 2 tomos, Sevilla, 1935-1947.
- SEVILLANO COLOM: *Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso*. "A.H.D.E.", XX, Madrid, 1950, págs. 137-239.
- SOLÓRZANO PEREIRA, Juan: *Política indiana...* Amberes, 1703.
- TANODI, Aurelio: *Institución notarial hispanoamericana*. "Archivum", 31-32, 1951.
- *Comienzos de la función notarial en Córdoba. Reseña histórica y notas sobre Diplomática, Paleografía y Cronología*. Córdoba, 1956.
 - *Manual de Archivología hispano-americana*. Córdoba (Argentina), 1961.
 - *Notas Diplomáticas sobre el repartimiento de indios del año 1582*. "Revista del Museo Mitre", núm. 6, 1953, págs. 65-72.
 - *Reales Cédulas y Provisiones*. "Revista del Museo Mitre", núm. 7, 1954, pág. 64.
- USÓN Y SESE, M.: *Un formulario de la Cancillería real aragonesa*. "A.H.D.E.", VI, Madrid, 1929, págs. 329-407, y tomo VII, Madrid, 1930, pág. 442; IX, Madrid, 1932, pág. 334.
- YBOT LEÓN, Antonio: *Juntas de Teólogos del estado para las Indias, 1512-1550*. "A.E.A.", V, Sevilla, 1948, págs. 327-438.

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

Concepto del documento indiano, 2. — Clasificación del documento indiano, 8. — Documento dispositivo y documento probatorio, 10. — Documento público y documento privado, 11. — Otras divisiones del documento indiano, 14. — Panorama general del documento hispano-indiano en la Edad Moderna, 15.

CAPÍTULO I

TRADICION DOCUMENTAL

Original, 20. — Original múltiple, 23. — Copias, 28. — Clasificación de las copias, 29. — Copias simples, 29. — Copias autorizadas, 30. — Copias certificadas, 30. — Traslados, 32. — Traslado simple, 36. — Traslado acta, 39. — Códices diplomáticos, 41. — Códices de formación privada, 42. — Códices de formación oficial, 43. — Registros, 43. — a) Registro del sello, 44. — Antecedentes castellanos, 45. El registro del sello indiano, 48. — Traslados del registro, 52. — Registro del sello de las audiencias indianas, 53. — b) Registros administrativos, 54. — Registros administrativos indianos, 56. — Contenido y caracterización, 57. — Valoración de los libros reales de gobierno y gracia, 61. Libros de gobierno de las autoridades indianas, 62. — Libros registros formados por el destinatario, 64. — Libros registros de documentos lato sensu, 66. — Inserciones, 67. — Confirmaciones, 67. — Sobrecartas, 70. Incluidos, 71.

CAPÍTULO II

LA ACTIO DEL DOCUMENTO INDIANO

Fases de la actio, 73. — Petitio, 74. — Peticiones y memoriales, 74. Caracterización diplomática, 75. — Formulario y caracteres externos de

la petición, 76. — La petición en el documento original, 79. — Intercessio, 80. Intervenientes, 82. — Intervenientes en la actio del documento público indiano, 84 — a) Intervenientes en la actio emanada del soberano, 84. — La consulta, 91. — Caracterización diplomática de las consultas, 96. — Cláusulas de la consulta, 97. — Forma externa de la consulta, 104. — Clasificación de las consultas, 106. — Consultas sobre provisión de cargos, 108. — Libros registros de consultas, 114. — b) Intervenientes en la actio del documento emanado de autoridades indianas, 116. — La Real Audiencia, 117. — El asesor general, 118. — Fiscal de la audiencia, 119. — Junta de Hacienda, 119. — Comunicación de la actio, 120. — El Decreto, 121.

CAPÍTULO III

GENESIS DE LA CONSCRIPTIO DEL DOCUMENTO INDIANO

Iussio, 126. — Minutatio, 130. — Formularios, 134. — Formularios indianos, 135. — La confección del mundum y la validación, 139. Validadores del documento público indiano, 145. — Otros procedimientos validativos: el papel sellado, 147. — Instituciones documentarias indianas, 152. — Instituciones documentarias del documento indiano, 154. Secretaría del Despacho Universal de Marina e Indias, 162. — Secretarios, 163. — Escribano de Cámara y Justicia, 165. — Oficiales, 165. Secretarios del Consejo de Indias, durante el siglo XVIII, 166. — Instituciones documentarias indianas en ultramar, 168. — Secretaría del virreinato, 177.

CAPÍTULO IV

TIPOS DIPLOMATICOS INDIANOS, EMANADOS DE LA AUTORIDAD SOBERANA

La Real Provisión, 184. — Dirección, 191. — Salutación, 194. Notificación, 194. — Exposición, 195. — Consideración final, 199. Dispositivo, 201. — Cláusulas finales, 205. — Protocolo final, 210. — I) Firmas y rúbricas, 211. — II) Sello, 216. — Otras fórmulas de las Provisiones, a) el brevete, 217; b) pruebas externas de la génesis del documento, 218; c) derechos, 218; d) registro, 219; e) carácter del ejemplar, 219. — Fórmulas posteriores al despacho de las Provisiones, 220: I) fórmula de obediencia, 220; II) fórmula de pregón, 221. — Ordenanzas, 222. — La Real Cédula, 224. — Instrucciones y cartas reales, 234.

CAPÍTULO V

DOCUMENTOS EMANADOS DE AUTORIDADES
DELEGADAS INDIANAS

Instituciones indianas facultadas para despachar documentos a nombre del soberano, 237. — Tipo documental utilizado en los documentos expedidos a nombre del rey: la Provisión, 246. — Documentos emanados a nombre de autoridades delegadas, 252. — Real Orden, 254. Mandamientos, 255. — Cartas acordadas, 261. — Sentencias, 264. — Cartas, 269. — Fórmulas diplomáticas de las cartas, 271.

CAPÍTULO VI

LA FECHA Y EL SELLO EN EL DOCUMENTO INDIANO

El incipit, 276. — Fecha tónica, 277. — Fecha crónica, 277. — La reforma gregoriana, 278. — La reforma en Indias, 280. — Problemas de la expresión de los estilos cronológicos utilizados en Indias, 283. La expresión del mes y del día, 285. — El sello, 286. — Clases de sellos reales, 287. — El canciller y el registrador de Indias, 291. — El canciller y registrador de Indias hasta 1623, 293. — El canciller y registrador desde 1623, 296.

PUBLICACIONES

DE LA

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

OBRAS PUBLICADAS:

- 1 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. I.—Sevilla, 1944.—XII + 844 págs., 17 láms. 24 × 17 cms.; 1.500 grs.—AGOTADO.
- 2 Pérez-Embid, Florentino: *El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones de Santa Fe*.—Sevilla, 1944.—XVI + 186 págs., 5 ilust., 14 × 17 cms.; rústica, con sobrecubierta; 360 grs.—AGOTADO.
- 3 Giménez Fernández, Manuel: *Las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a las Indias*. Sevilla, 1944.—XVI + 258 págs., 5 ilust., 24 × 17 cms.; rústica, con sobrecubierta; 450 grs.—AGOTADO.
- 4 *Memoria de Gobierno de José Fernández de Abascal y Sousa, Virrey del Perú*. Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Quijano. Estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado.—Sevilla, 1944.—Dos tomos. CLII + 495 y 584 págs., 15 láms., 20 × 13 cms. Tela, con sobrecubierta; 1.750 grs.—AGOTADO.
- 5 Calderón Quijano, José Antonio: *Belice. 1663-1821*.—Sevilla, 1944.—XIV + 504 págs., 32 láms., 20 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 850 grs.—AGOTADO.
- 6 Carro, O. P., Venancio D.: *La Teología y los teólogos-juristas españoles ante la Conquista de América*.—Madrid, 1944.—2 tomos. 453 y 473 págs., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta.—1.250 grs.—AGOTADO.
- 7 Rumeu de Armas, Antonio: *Colón en Barcelona*.—Sevilla, 1944.—XII + 86 págs. 24 × 17 cms., 170 grs.—AGOTADO.
- 8 Jos, Emiliano: *Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de D. Fernando Colón*. Sevilla, 1945.—XVIII + 164 págs., 6 ilust., 24 × 17 cms.—330 grs.—AGOTADO.
- 9 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. II.—Sevilla, 1945.—XVIII + 936 págs., 24 × 17 cms.—1.790 grs.—AGOTADO.
- 10 Bayle, S. J., Constantino: *El protector de indios*.—Sevilla, 1945.—VIII + 176 págs., 24 × 17 cms.—325 grs.—AGOTADO.
- 11 Gutiérrez de Arce, Manuel: *La colonización danesa en las Islas Vírgenes*.—Sevilla, 1945.—VIII + 161 págs., 6 láms., 24 × 17 cms., 275 grs.—AGOTADO.
- 12 Lohmann Villena, Guillermo: *El arte dramático en Lima durante el Virreinato*. Madrid, 1945.—XX + 647 págs., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 1.050 grs.—AGOTADO.
- 13 Alonso Getino, O. P., P. Luis: *Influencia de los dominicos en las Leyes Nuevas*. Sevilla, 1945.—VIII + 94 págs., 24 × 17 cms.; 170 grs.—AGOTADO.
- 14 *Las Leyes Nuevas, 1542-1543*. Reproducción fotográfica. Transcripción y notas de Antonio Muro Orejón.—Sevilla.—XXI + 26 págs., 24 × 17 cms.—AGOTADO.
- 15 Céspedes del Castillo, Guillermo: *La avería en el comercio de Indias*.—Sevilla, 1945. VIII + 187 págs., 8 láms., 24 × 17 cms.; 300 grs.—AGOTADO.
- 16 Matilla Tascón, Antonio: *Los viajes de Julián Gutiérrez al Golfo de Urabá*.—Sevilla, 1945.—VII + 84 págs., 4 láms., 24 × 17 cms.; 195 grs.—AGOTADO.
- 17 Palacio Atard, Vicente: *El Tercer Pacto de Familia*.—Sevilla, 1945.—XVII + 377 págs., 8 láms., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta.—600 grs.—AGOTADO.
- 18 Múzquiz de Miguel, José: *El Conde de Chinchón, Virrey del Perú*.—Sevilla, 1945.—334 págs., 16 láms., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 650 grs.—AGOTADO.
- 19 Pérez Embid, Florentino: *Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado de Tordesillas*.—Sevilla, 1948.—370 págs., 35 láms., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 760 grs.—AGOTADO.

- 20 Portillo y Díez de Sollano, Alvaro del: *Descubrimientos y expediciones en las costas de California*.—Madrid, 1947.—540 págs., 57 láms., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 900 grs.—AGOTADO.
- 21 *Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, Virrey del Perú*. Edición y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez-Embid.—Sevilla, 1947. XCII + 845 págs., 12 láms., 20 × 13 cms.; tela, con sobrecubierta; 800 grs.—AGOTADO.
- 22 Ayala, F. Javier de: *Ideas políticas de Juan de Solórzano*.—Sevilla, 1946.—XIII + 583 págs., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 1.080 grs.—AGOTADO.
- 23 Lohmann Villena, Guillermo: *El Conde de Lemos, Virrey del Perú*.—Madrid, 1946. XVIII + 472 págs., 11 láms., 22 × 16 cms., tela, con sobrecubierta; 800 grs.—AGOTADO.
- 24 Arregui, Domingo Lázaro de: *Descripción de la Nueva Galicia*. Edición y estudio de François Chevalier.—LXXI + 161 págs., 4 láms., 24 × 17 cms., 490 grs.—AGOTADO.
- 25 Agia, Fr. Miguel de: *Servidumbres personales de indios*. Edición y estudio preliminar de F. Javier de Ayala.—Sevilla, 1946.—LII + 141 págs., 24 × 17 cms.; 450 grs.—AGOTADO.
- 26 *Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú*. Estudio y Prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.—Sevilla, 1947.—XLVI + 912 págs., 3 láms., 20 × 13 cms.; tela, con sobrecubierta; 850 grs.—AGOTADO.
- 27 Rodríguez Casado, Vicente y Pérez-Embid, Florentino: *Construcciones del Virrey Amat*. Sevilla, 1949.—XII + 307 págs., 58 láms., 22 × 16 cms.; 500 grs.—AGOTADO.
- 28 Schafer, Ernesto: *El Consejo Real y Supremo de las Indias en la administración colonial*.—Sevilla. Centro de Estudios de Historia de América (I tomo) y E. E. H. A. (II tomo), 1935 y 1947.—XVIII + 434 y XV + 680 págs., 5 láms., 25 × 17 cms.; tela, con sobrecubierta; 2.500 grs.—AGOTADO.
- 29 Rumazu, José: *La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI*.—Sevilla, 1945.—XII + 268 págs., 12 láms., 24 × 17 cms.; 500 grs.—AGOTADO.
- 30 Palacio Atard, Vicente: *Areche y Guirior: Observaciones sobre el fracaso de una visita al Perú*.—Sevilla, 1946.—VIII + 106 págs., 5 láms., 24 × 17 cms.; 200 gramos. AGOTADO.
- 31 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. III.—Sevilla, 1946.—XVI + 1.306 págs., 50 láms., 24 × 17 cms.; 2.300 grs.—AGOTADO.
- 32 Herráez S. de Escariche, Julia: *Don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de Cartagena de Indias*.—Sevilla, 1946.—VIII + 137 págs., 6 láms., 24 × 17 cms.; 250 grs. AGOTADO.
- 33 Giménez Fernández, Manuel: *Las doctrinas populistas en la independencia de Hispanoamérica*.—Sevilla, 1947.—VIII + 156 págs., 24 × 17 cms.; 300 grs.—AGOTADO.
- 34 Céspedes del Castillo, Guillermo: *Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas y políticas de la creación del Virreinato del Plata*.—Sevilla, 1947.—VIII + 214 págs., 6 láms., 24 × 17 cms.; 400 grs.—AGOTADO.
- 35 Rumeu de Armas, Antonio: *Los viajes de John Hawkins a América (1562-1595)*. Sevilla, 1947.—XX + 486 págs., 26 láms., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 650 grs.—AGOTADO.
- 36 Angulo Iñiguez, Diego: *El Gótico y el Renacimiento en las Antillas. Arquitectura, escultura, pintura, azulejos, orfebrería*.—Sevilla, 1947.—VIII + 101 págs., 81 ilustr., 24 × 17 cms.; 200 grs.—AGOTADO.
- 37 Díaz Vento, Fernando: *Las campañas militares del virrey Abascal*.—Sevilla, 1948. XIII + 416 págs., 22 × 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 500 grs.—AGOTADO.
- 38 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. IV.—Sevilla, 1947.—XVIII + 804 págs., 44 láms. e ilustr., 24 × 17 cms.; 1.500 grs.—AGOTADO.
- 39 *Estudios Americanos*. Vol. I, núms. 1, 2, 3 y 4.—Sevilla, 1949, 842 págs.; 25 × 17 cms. AGOTADO.
- 40 Díaz de Iraola, Gonzalo: *La vuelta al mundo de la expedición de la vacuna*. Prólogo de Gregorio Marañón.—Sevilla, 1948.—XVI + 102 págs., 20 láms.; 24 × 17 cms.; rústica, con sobrecubierta; 300 grs.—AGOTADO.
- 41 Gil Munilla, Octavio: *Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770*.—Sevilla, 1948. VIII + 154 págs., 24 × 17 cms.; 257 grs.—AGOTADO.

- 42 Leturia, S. J., Pedro de: *La Encíclica de Pío VII (30 de enero de 1816) sobre la Revolución Hispanoamericana*.—Sevilla, 1948.—VIII + 93 págs., 24 × 17 cms.; 195 grs. AGOTADO.
- 43 Giménez Fernández, Manuel: *Hernán Cortés y su revolución comunera en la Nueva España*.—VII + 144 págs., 24 × 17 cms.; 295 grs.—AGOTADO.
- 44 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. V.—Sevilla, 1948.—XVI + 280 págs., 25 láms., 24 × 17 cms.; 1.450 grs.—AGOTADO.
- 45 Cascajo Romero, Juan: *El Pleito de la curación de la lepra en el Hospital de San Lázaro de Lima*.—Sevilla, 1948.—VIII + 118 págs., 6 láms., 24 × 17 cms.; 200 grs. AGOTADO.
- 46 Borregán, Alonso: *Crónica de la conquista del Perú*. Edición y Prólogo de Rafael Loredó.—Sevilla, 1949.—124 págs., 24 × 17 cms., 200 grs.—AGOTADO.
- 47 Molina Argüello, Carlos: *El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI*.—Sevilla, 1949. XII + 256 págs., 22 × 16 cms.; 400 grs.—Col. *Dos Colores*.—AGOTADO.
- 48 Trujillo, Diego de: *Relación del descubrimiento del Reyno del Perú*. Prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.—Sevilla, 1948.—XIV + 124 págs., 24 × 17 cms.; 210 grs. AGOTADO.
- 49 Santa Cruz, Alonso de: *Crónica de los Reyes Católicos*. (Inédita hasta ahora). Publicación de Juan de Mata Carriazo.—Sevilla, 1951.—2 vols. de CCC + 367 págs. el tomo I, y X + 646, el II; 22 × 16 cms.; 1.750 grs.—600 pesetas.
- 50 Lohmann Villena, Guillermo: *Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII*. Sevilla, 1949.—XVII + 466 págs., 9 láms., 22 × 16 cms., 750 grs., rústica, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 51 *Catálogo de documentos de la Sección novena del Archivo General de Indias*. Dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata: Tomo I.—Sevilla, 1949.—822 págs., 1.450 gramos. AGOTADO.
- 52 Herráez, S. de Escariche, Julia: *Beneficencia de España en Indias*.—Sevilla, 1947. II + 182 págs., 4 láms., 22 × 16 cms.; 300 grs.—AGOTADO.
- 53 Jos, Emiliano: *Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el Peregrino*.—Sevilla, 1950. XII + 168 págs., 7 láms., 22 × 16 cms.; 300 grs.—AGOTADO.
- 54 Gil Munilla, Octavio: *El Río de la Plata en la Política Internacional. Génesis del Virreinato*.—Sevilla, 1949.—XIV + 464 págs., 8 láms., 22 × 16 cms.; 700 grs.; rústica, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 55 Marco Dorta, Enrique: *Cartagena de Indias*.—Sevilla, 1951.—XXIV + 326 págs., 8 láminas, 170 figuras; 32 × 22 cms.; 1.550 grs.; tela, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 56 Pulido Rubio, José: *El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla*.—Sevilla, 1950.—VIII + 948 págs., 22 × 16 cms.; rústica, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 57 Carvajal y Robles, Rodrigo: *Fiestas de Lima*. Edición y Prólogo de Francisco López Estrada.—Sevilla, 1950.—XXIV + 198 págs., 2 láms., 22 × 16 cms.; 350 grs.; rústica, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 58 Pérez-Embid, Florentino: *Diego de Ordás, compañero de Cortés y explorador del Orinoco*.—Sevilla, 1950.—156 págs., 5 láms., 22 × 16 cms., 225 grs.—Col. *Dos Colores*. AGOTADO.
- 59 *Estudios Americanos*. (Vol. II, números 5, 6 y 7).—Sevilla, 1950.—AGOTADO.
- 60 Calderón Quijano, José Antonio: *Fortificaciones en Nueva España*.—Sevilla, 1953.—XXXVIII + 338 págs., 183 figuras, 34 × 24 cms., 2.000 grs., con sobrecubierta.—900 pesetas.
- 61 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. VI.—Sevilla, 1949.—XIV + 875 págs., 24 × 17 cms., 1.120 grs.—AGOTADO.
- 62 *Estudios Americanos*. Vol. III (números 8, 9, 10 y 11).—Sevilla, 1951.—25 × 17 cms. AGOTADO.
- 63 Gusinde, Martín: *Fueguinos*. Traducción de la obra *Urmenschen im Feuerland*, por Diego Bermúdez Camacho.—Sevilla, 1951.—X + 400 págs., 48 láms., 22 × 16 cms., 600 grs.—AGOTADO.
- 64 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. VII.—Sevilla, 1950.—XVI + 608 págs., 8 láms., 24 × 17 cms., 900 grs.—AGOTADO.

- 65 Muro Orejón, Antonio: *Cristóbal Colón. El original de la capitulación de 1492 y sus copias contemporáneas*.—Sevilla, 1951.—12 págs., 3 fotograbados, 24 × 17 cms., 65 grs AGOTADO.
- 66 Marco Dorta, Enrique: *Fuentes para la Historia del Arte Hispano-Americano*.—Sevilla, 1951.—XXIII + 730 págs., 24 × 17 cms., 700 grs.—AGOTADO.
- 67 Morales Padrón, Francisco: *Jamaica Española*.—Sevilla, 1952.—XXXII + 504 págs., 22 láms., 1 mapa, 22 × 17 cms., 650 grs., tela, con sobrecubierta.—600 pesetas.
- 68 Porras Troconis, Gabriel: *Historia de la Cultura en el Nuevo Reino de Granada*.—Sevilla, 1952.—X + 652 págs., 22 × 16 cms., 700 grs.—AGOTADO.
- 69 Estudios Americanos. Vol. IV (números 12, 13, 14 y 15).—Sevilla, 1952.—25 × 17 cms. AGOTADO.
- 70 Mariluz Urquijo, José María: *Ensayo sobre los juicios de residencia indianos*.—Sevilla, 1952.—XX + 520 págs., 22 × 16 cms., 400 grs.—Col. *Dos Colores*.—120 pesetas.
- 71 Giménez Fernández, Manuel: *Bartolomé de las Casas. Tomo I: El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias*.—Sevilla, 1955.—XXIV + 776 págs., 30 láms., 22 × 16 cms., 1.350 grs., tela, con sobrecubierta (vid. núm. 121).—AGOTADO.
- 72 Anuario de Estudios Americanos. Vol. VIII.—Sevilla, 1951.—XII + 658 págs., 24 × 17 cms., 980 grs.—AGOTADO.
- 73 Estudios Americanos, Vol. V (números 16, 17, 18, 19 y 20).—Sevilla, 1953.
- 74 Estudios Americanos, Vol. VI (números 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27).—Sevilla, 1953.
- 75 Armas Medina, Fernando de: *Cristianización del Perú*.—Sevilla, 1953.—XXVIII + 640 páginas, 14 fotograbados y mapas, 1.000 grs., tela, con sobrecubierta.—AGOTADO.
- 76 León Pinelo, Antonio: *El Gran Canciller de las Indias*. Edición, estudio y notas de Guillermo Lohmann Villena.—Sevilla, 1954.—CLXXIV + 232 págs., 22 × 16 cms., rústica, con sobrecubierta, 500 grs.—360 pesetas.
- 77 Anuario de Estudios Americanos. Vol. IX.—Sevilla, 1952.—XVI + 780 págs., 5 láminas y gráficos, 24 × 17 cms., 1.050 grs.—AGOTADO.
- 78 Peñalver Simó, Patricio: *Modernidad tradicional en el pensamiento de Jovellanos*.—Sevilla, 1953.—XXXII + 168 págs., 20 × 13 cms., 210 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 79 Elías de Tejada, Francisco: *Las doctrinas políticas de Raimundo de Fariás Brito*. Sevilla, 1953.—196 págs., 20 × 13 cms., 200 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 80 López Núñez, Carlos: *Horizonte doctrinal de la Sociología Hispano-Americana*.—Sevilla, 1953.—164 págs., 20 × 13 cms., 165 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 81 Estudios Americanos. Vol. VII (números 28, 29, 30, 31 y 32).—Sevilla, 1954.
- 82 Tobar, Balthasar de: *Compendio Bulario Indico*. (Tomo I). Edición y estudio de Manuel Gutiérrez de Arce.—Sevilla, 1945.—LIII + 558 págs., 18 × 25 cms., 1.050 grs., tela, con sobrecubierta.—600 pesetas.
- 83 Larrea, Juan Ignacio: *La Santa Sede y el Ecuador*.—Sevilla, 1954.—LIII + 176 págs., 18 × 25 cms., 225 grs.—Col. *Dos Colores*.—AGOTADO.
- 84 Gil Munilla, Ladislao: *Descubrimiento del Marañón*.—Sevilla, 1954.—XVI + 392 págs., 13 láms., 16 × 22 cms., 600 grs., rústica, con sobrecubierta.—300 pesetas.
- 85 Asís Garrote, Agustín: *Bartolomé Herrera*.—Sevilla, 1954.—148 págs., 20 × 13 cms., 200 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 86 Vila Selma, José: *Procedimiento y técnicas en Rómulo Gallegos*.—Sevilla, 1954.—196 págs., 20 × 13 cms., 200 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 87 Tejado Fernández, Manuel: *Aspecto de la vida social en Cartagena de Indias durante el seiscientos*.—Sevilla, 1954.—348 págs., 22 × 16 cms., 500 grs.—300 pesetas.
- 88 Anuario de Estudios Americanos. Vol. X.—Sevilla, 1953.—733 págs., 9 láms., 1.050 grs.—AGOTADO.
- 89 Estudios Americanos. Vol. VIII. (números 33-34, 35-36, 37, 38 y 39).—Sevilla, 1954.
- 90 Rodríguez Casado, Vicente: *De la Monarquía Española del Barroco*.—Sevilla, 1955.—180 págs., 20 × 13 cms., 180 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 91 Morales Padrón, Francisco: *El comercio canario-americano en los siglos XVI, XVII y XVIII*.—Sevilla, 1955.—XX + 432 págs., 26 láms., 22 × 16 cms., 645 grs., rústica, con sobrecubierta.—360 pesetas.
- 92 Levillier, Roberto: *Los Incas*.—Sevilla, 1956.—260 págs. y un mapa plegable, 22 × 16 cms., 360 grs.—Col. *Dos Colores*.—AGOTADO.

- 93 Morales Padrón, Francisco: *Fisonomía de la Conquista Indiana*.—Sevilla, 1955.—XII + 182 págs., 20 × 13 cms., 200 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 94 Asís Garrote, Agustín: *Ideas sociopolíticas en Alonso de Polo (El Tostado)*.—Sevilla, 1955.—160 págs., 20 × 13 cms., 180 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 95 Rodil, José Ramón: *Memoria del sitio del Callao*. Edición, estudio preliminar y notas de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.—Sevilla, 1955.—XXX + 344 páginas, 20 × 13 cms., 500 grs.—360 pesetas.
- 96 Elías de Tejada, Francisco: *El pensamiento político de los fundadores de Nueva Granada*.—Sevilla, 1955.—XII + 262 págs., 20 × 13 cms., 275 grs.—Col. *Mar Adentro*. 120 pesetas.
- 97 *Estudios Americanos*. Vol. IX. (Núms. 40-41, 42, 43-44 y 45).—Sevilla, 1955.
- 98 *Estudios Americanos*. Vol. X. (Núms. 46, 47, 48, 49 y 50-51).—Sevilla, 1955.
- 99 Muro Orejón, Antonio: *Cedulario Americano del siglo XVIII*.—Sevilla, 1956.—XCVI + 834 págs., 24 × 17 cms., 1.300 grs., rústica, con sobrecubierta.—720 pesetas.
- 100 Morales Padrón, Francisco: *Rebelión contra la Compañía de Caracas*.—Sevilla, 1955. 146 págs., 12 láms., 25 × 18 cms., rústica, con sobrecubierta, 250 grs.—120 pesetas.
- 101 *Estudios Americanos*. Vol. XI. (Núms. 52, 53, 54, 55, 56).—Sevilla, 1956.
- 102 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XI, Sevilla, 1954.—24 × 17 cms., 820 págs., 50 láminas.—AGOTADO.
- 103 *Estudios Americanos*. Vol. XII. (Núms. 57-58, 59, 60, 61, 62, 63).—Sevilla, 1956.
- 104 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XII.—Sevilla, 1955.—989 págs., 28 láms., 24 × 17 cms.—900 pesetas.
- 105 *Estudios Americanos*. Vol. XIII. (Núms. 64-65, 66, 67-68, 69-70).—Sevilla, 1957.
- 106 Arella Farias, Eduardo: *El Régimen de la Encomienda en Venezuela*.—Sevilla, 1957. 378 págs., 22 × 16 cms., 500 grs.—Col. *Dos Colores*.—AGOTADO.
- 107 Acevedo, Edberto Oscar: *El ciclo histórico de la Revolución de Mayo*.—Sevilla, 1957. 378 págs., 20 × 13 cms., 300 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 108 Alvar, Manuel: *La poesía de Delmira Agustini*.—Sevilla, 1958.—VII + 113 págs., 4 ilust., 20 × 13 cms.—Col. *Mar Adentro*.
- 109 *Estudios Americanos*. Vol. XIV. (Núms. 71-72, 73-74, 75).—Sevilla, 1957.
- 110 *Estudios Americanos*. Vol. XV. (Núms. 76-77, 78-79, 80-81).—Sevilla, 1958.
- 111 Muro Orejón, Antonio: *Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Yndios. (Las Leyes de 1512-1513)*.—Edición y estudio.—Sevilla, 1959.—85 págs., 32 láms., 24 × 17 cms., rústica.—AGOTADO.
- 112 Rubio Merino, Pedro: *Don Diego Camacho y Avila, Arzobispo de Manila y de Guadalupe de México. (1695-1712)*.—Sevilla, 1958.—XVIII + 651 págs., 7 ilust., 16 × 22 cms.—300 pesetas.
- 113 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XIII.—Sevilla, 1956.—604 págs., 24 × 17 cms. AGOTADO.
- 114 *Estudios Americanos*. Vol. XVI. (Núms. 82-83, 84-85, 86-87). Sevilla, 1958.
- 115 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XIV.—Sevilla, 1957.—636 págs., 24 × 17 cms. Ilustraciones. 1.000 grs.—AGOTADO.
- 116 Coulthard, G. R.: *Raza y Color en la Literatura Antillana*.—Sevilla, 1959.—VIII + 175 págs., 20 × 13 cms., 190 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 117 Díaz-Trechuelo, María Lourdes: *Arquitectura Española en Filipinas*.—Sevilla, 1959, 193 láms., 24 × 17 cms., 1.500 grs.—900 pesetas.
- 118 Navarro García, Luis: *Intendencias en Indias*.—Sevilla, 1959.—226 págs., 19 mapas, 22 × 16 cms., 350 grs.—Col. *Dos Colores*.—240 pesetas.
- 119 Collantes de Terán, Juan: *Las novelas de Ricardo Güiraldes*.—Sevilla, 1959. XV + 209 págs., 20 × 13 cms.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 120 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XV.—Sevilla, 1958.—769 págs., 24 × 17 cms. Ilustraciones.—AGOTADO.
- 121 Giménez Fernández, Manuel: *Bartolomé de las Casas. Tomo II: Política Inicial de Carlos I en Indias*.—Sevilla, 1960.—1.352 págs., 23 láms., 31 fotoc., 25 × 18 cms., 1.700 grs. [vid. núm. 71].—900 pesetas.
- 122 Romero Gómez, Manuel: *La Constitución Británica*.—Sevilla, 1960.—144 págs., 20 × 13 cms., 55 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.

- 123 *Estudios Americanos*. Vol. XVII. (Núms. 90-91, 92-93, 94-95, 96-97, 98-99).—Sevilla, 1959.
- 124 Muro Orejón, Antonio: *Ordenanzas Reales del Consejo de las Indias*.—Sevilla, 1957
3 págs. + 56 fotograbados, 24 × 17 cms., 100 grs.—AGOTADO.
- 125 *Estudios Americanos*. Vol. XIX. (Núms. 100, 101, 102). *Índice*.—Sevilla, 1960.
- 126 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XVI.—Sevilla, 1959.—743 págs., 24 × 17 cms.
Ilustraciones.—AGOTADO.
- 127 Ruiz, Helena: *La búsqueda de Eldorado por Guayana*.—Sevilla, 1959.—XIV + 166
páginas + 18 láms., 24 × 17 cms., 350 grs.—AGOTADO.
- 128 Real, José Joaquín: *Las Ferias de Jalapa*.—Sevilla, 1959.—XII + 148 págs. + 9 láms.,
24 × 17 cms., 300 grs.—AGOTADO.
- 129 Lohmann Villena, Guillermo: *Las relaciones de los virreyes del Perú*.—Sevilla, 1959.
218 págs., 24 × 17 cms., 300 grs.—AGOTADO.
- 130 Muro Orejón, Antonio: *Las Leyes Nuevas*.—Sevilla, 1961.—59 págs. Reproducciones
facsimilares, transcripción y estudios.—24 × 17 cms., 150 grs.—AGOTADO.
- 131 *Estudios Americanos*. Vol. XX. (Núms. 103, 104, 105).—Sevilla, 1960.
- 132 Pedro Borges: *Los conquistadores espirituales de América*.—Sevilla, 1961.—189 págs.,
20 × 13 cms., 200 grs.—Col. *Mar Adentro*.—AGOTADO.
- 133 *Estudios Americanos*. Vol. XXI. (Núms. 106, 107, 108).—Sevilla, 1961.
- 134 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XVII.—Sevilla, 1960.—810 págs., 24 × 17 cms.
Ilustraciones.—AGOTADO.
- 135 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XVIII.—Sevilla, 1961.—819 págs., 24 × 17 cms.
Ilustraciones.—900 pesetas.
- 136 Rodríguez del Valle, Mariana: *El Castillo de San Felipe del Golfo Dulce*.—Sevilla,
1968.—103 págs. + 28 láms., 24 × 17 cms., 250 grs.—AGOTADO.
- 137 Campo Lasaca, Cristina: *La Iglesia en Puerto Rico en el siglo XVIII*.—Sevilla, 1962.
127 págs. + 20 láms., 24 × 17 cms., 250 grs.—120 pesetas.
- 138 Luque Alcalde, Elisa: *La Sociedad Económica de Guatemala*.—Sevilla, 1962.—226 págs.,
22 × 16 cms., 350 grs.—Col. *Dos Colores*.—180 pesetas.
- 139 *Estudios Americanos*. Vol. XXII. (Núms. 109-110, 111).—Sevilla, 1962.
- 140 Cordoncillo Samada, José María: *Historia de la Real Lotería en Nueva España
(1770-1821)*.—Sevilla, 1962.—139 págs. + 14 láms., 24 × 17 cms., 350 grs.—AGOTADO.
- 141 Muro Orejón, Antonio: (Antonio de León Pineló). *"Libros Reales de Gobierno
y Gracia"*. Contribución al conocimiento de los Cedulares del Archivo de Indias
(1492-1650). Estudio y edición. —Sevilla, 1962.—64 págs. Reproducción facsimilar.
24 × 17 cms., 150 grs.—AGOTADO.
- 142 Calderón Quijano, José Antonio y Luis Navarro García: *Biblioteca Nacional de París.
Museo Británico. Public Record Office. Guía de Documentos, mapas y planos
españoles y americanos*.—Sevilla, 1962.—70 págs., 24 × 17 cms., 100 grs.—AGOTADO.
- 143 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XIX.—Sevilla, 1962.—878 págs., 24 × 17 cms.
Ilustraciones. 1.400 grs.—900 pesetas.
- 144 Calderón Quijano, José Antonio: *El Banco de San Carlos y las Comunidades de indios
de Nueva España*.—Sevilla, 1963.—24 × 17 cms., 144 págs., 250 grs.—AGOTADO.
- 145 Markman, Sidney David: *San Cristóbal de las Casas*.—Sevilla, 1963, 24 × 17 cms.,
115 págs. Ilustraciones, 250 grs.—AGOTADO.
- 146 Pikaza, Otto: *Don Gabriel José de Zuloaga, Gobernador de Venezuela*.—Sevilla, 1963
24 × 17 cms., 195 págs., 250 grs.—AGOTADO.
- 147 *Pleito Colombinos*. Tomo VIII: *Rollo del proceso sobre la sentencia de Dueñas
y probanzas del Fiscal y del Almirante (1534-1536)*. Edición de Muro Orejón, Anto-
nio; Pérez Embid, Florentino, y Morales Padrón, Francisco.—Sevilla, 1964.—XXXI
+ 155 págs., 25,50 × 18 cms., 1.600 grs.—950 pesetas.
- 148 Navarro García, Luis: *Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias
Internas del Norte de Nueva España*.—Sevilla, 1964.—24 × 17 cms., IX + 602 págs.,
133 ilust., 1.100 grs.—720 pesetas.
- 149 Córdova Bello, Eleazar: *Compañías holandesas de Navegación*.—Sevilla, 1965.—24 × 16
cms., VII + 303 págs., 2 ilust., 500 grs.—300 pesetas.
- 150 Muro Orejón, Antonio: *Los capítulos de corregidores de 1500*.—Sevilla, 1963.
28 págs., 16 fotograbados, 24 × 17 cms., 120 grs.—120 pesetas.

- 151 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XX.—Sevilla, 1963.—24 × 17 cms., 862 págs., 1300 grs.—900 pesetas.
- 152 Rodríguez Macías, Juana: *El Correo en Puerto Rico*.—Sevilla, 1964.—94 págs., 24 × 17 cms., 175 grs.—100 pesetas.
- 153 Mariscal Romero, Pilar: *Los Bancos de Rescate de Platas*.—Sevilla, 1964.—85 págs., 1 lám., 24 × 17 cms., 175 grs.—100 pesetas.
- 154 Lohmann Villena, Guillermo: *Las defensas militares de Lima y Callao hasta 1746*. Sevilla, 1964.—217 págs., 32 láms., 24 × 17 cms., 400 grs.—240 pesetas.
- 155 Pajarón Parody, Concepción: *El Gobierno en Filipinas de don Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo*. (1717-1719).—Sevilla, 1964.—131 págs., 4 láms., 24 × 17 cms., 225 grs.—100 pesetas.
- 156 Morales Padrón, Francisco, y Llavador Mira, José: *Mapas, Planos y Dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias* (Primera serie).—Sevilla, 1964, 86 págs., 38 láms., 24 × 17 cms., 250grs.—AGOTADO.
- 157 *Índice del Anuario de Estudios Americanos*.—Sevilla, 1964.—24 × 17 cms., 136 págs., 200 grs.—AGOTADO.
- 158 Díaz-Trechuelo Spínola, Lourdes: *La Real Compañía de Filipinas*.—Sevilla, 1965. 24 × 17 cms., XIX + 366 págs., 13 ilustr.—360 pesetas.
- 159 Deustua Pimentel, Carlos: *Las Intendencias en el Perú*. (1790-1796).—Sevilla, 1965. 22 × 16 cms., XXVIII + 263 págs., 300 grs.—Col. *Dos Colores*.—AGOTADO.
- 160 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XXI.—Sevilla, 1964.—24 × 17 cms., 907 págs., 1.400 grs.—900 pesetas.
- 161 Garrido Conde, María Teresa: *La creación del virreinato de Nueva Granada (1717-1723)*. Sevilla, 1965.—24 × 17 cms., 120 págs., 1 lám., 200 grs.—AGOTADO.
- 162 Navarro García, Luis: *Las provincias internas en el siglo XIX*. Sevilla, 1965.—24 × 17 cms., 133 págs., 12 láms., 240 grs.—AGOTADO.
- 163 Morales Padrón, Francisco y Llavador Mira, José: *Mapas, Planos y Dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias*. (Segunda serie).—Sevilla, 1965. 24 × 17 cms., 75 págs., 36 láms., 250 grs.—120 pesetas.
- 164 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XXII, Sevilla, 1965.—24 × 17 cms.—900 pesetas.
- 165 Pérez Aparicio, Josefina: *Pérdida de la isla de Trinidad*. Sevilla, 1966, 24 × 17 cms., 230 págs., 2 láms.—120 pesetas.
- 166 Cuello Martinell, María Angeles: *La renta de los naipes en Nueva España*. Sevilla, 1966, 24 × 17 cms., 105 págs.—AGOTADO.
- 167 Tobar, Balthasar: *Compendio del Bulario Indico* (Tomo II). Estudio y edición de Manuel Gutiérrez de Arce. Sevilla, 1966. 17 × 24 cms., 435 págs.—350 pesetas.
- 168 Navarro García, Luis: *La Sublevación Yaqui de 1740*. Sevilla, 1966. 24 × 17 cms., 159 págs., 1 lám.—AGOTADO.
- 169 Vila Vilar, Enriqueta: *Los rusos en América*. Sevilla, 1966. 24 × 17 cms., 9 láminas, 104 págs.—120 pesetas.
- 170 Lohmann Villena, Guillermo: *Juan de Matienzo. Autor del "Gobierno del Perú"*. (Su personalidad y su obra). Sevilla, 1966. 24 × 17 cms., 120 págs.—120 pesetas.
- 171 Rodríguez Baena, María Luisa: *La Sociedad Económica de Amigos del País de Manila en el siglo XVIII*. Sevilla, 1966. 22 × 16 cms., XIV + 216 págs., 300 grs. Col. *Dos Colores*.—250 pesetas.
- 172 González Martín, Jerónimo Pablo: *Cinco poetas franco-canadienses actuales*. Sevilla, 1966. 20 × 13 cms., 167 págs., 250 grs.—Col. *Mar Adentro*.—120 pesetas.
- 173 Sarrablo Aguares, Eugenio: *El Conde de Fuencalra. Embajador y Virrey de Nueva España (1687-1752)*. Tomo I, Sevilla, 1955. 17 × 24 cms., X + 330, 525 grs., 300 pesetas.—Tomo II, Sevilla, 1966. 17 × 24 cms., 709 págs., 1.000 grs.—500 pesetas.
- 174 *Anuario de Estudios Americanos*. Vol. XXIII. Sevilla, 1966.—24 × 17 cms., 792 págs. Ilustraciones.—900 pesetas.
- 175 *Estudios Lascasianos*. IV Centenario de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, 1566-1966. Sevilla, 1966, 474 págs., 24 × 17 cms. Ilustraciones.—AGOTADO.
- 176 Navarro García, Luis: *Sonora y Sinaloa en el siglo XVII*. Sevilla, 1967. 22 × 16 cms., 319 págs. Ilustraciones, 350 grs.—300 pesetas.
- 177 *Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III*.—Dirección y estudio preliminar de José Antonio Calderón Quijano. Tomo I: *El Virrey Marqués de Cruillas*,

- por María del Pópulo Antolín Espino: *El Marqués de Croix*, por Luis Navarro García; *Don Antonio María Bucarell*, por María Lourdes Díaz-Trechuelo, Concepción Pajarón Parody, María Luisa Rodríguez Baena.—Sevilla, 1967.—XXXIV + 683 págs., 1.500 grs. 24 × 17 cms.—Ilustraciones.—600 pesetas.
- 178 *Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III.*—Dirección y estudio preliminar de José Antonio Calderón Quijano. Tomo II: *Martín de Mayorga*, por José Joaquín Real Díaz y Antonia Marina Heredia Herrera; *Matías de Gálvez*, por Mariana Rodríguez del Valle y Angeles Conejo Díez de la Cortina; *El Conde de Gálvez*, por María del Carmen Galbis Díez; *Alonso Núñez de Haro*, por Adolfo Rubio Gil.—Sevilla, 1968. 418 págs., 450 grs., 24 × 17 cms.—Ilustraciones.—450 pesetas.
- 179 Sánchez Bella, Ismael: *La Organización financiera de las Indias. (Siglo XVI).* Sevilla, 1968.—24 × 17 cms., 361 págs., 3 láms., 550 grs.—500 pesetas.
- 180 Muro Orejón, Antonio; Pérez-Embid, Florentino y Morales Padrón, Francisco: *Pleitos Colombinos.* Tomo I. Sevilla, 1967. XXVI + 234 págs., 25'50 × 18 cms., 700 grs.—600 pesetas.
- 181 Muro Orejón, Antonio: *Hernando Cortés, exequias, almoneda e inventario de sus bienes.*—Sevilla, 1967.—24 × 17 cms., 73 págs., 4 láminas, 150 grs.—100 pesetas.
- 182 *Anuario de Estudios Americanos.* Vol. XXIV. Sevilla, 1967.—24 × 17 cms., 1.258 págs., 46 láms., 1.950 grs.—900 pesetas.
- 183 *Anuario de Estudios Americanos.* Vol. XXV.—Sevilla, 1968.—24 × 17 cms., 838 págs., 88 láms., 1.350 grs.—900 pesetas.
- 184 Calderón Quijano, José Antonio: *Nueva Cartografía de los Puertos de Acapulco, Campeche y Veracruz.*—Sevilla, 1969.—24 × 17 cms., 49 págs., 72 láms., 225 grs.—200 pesetas.
- 185 Muro Orejón, Antonio: *Cedulario Americano del siglo XVIII.* Vol. II. Sevilla, 1969. LXXVIII + 786 págs., 1 lámina, 24 × 17 cms., 1.360 grs., rústica, con sobrecubierta. 750 pesetas.
- 186 Bernaldes Ballesteros, Jorge: *Edificación de la Iglesia Catedral de Lima. (Notas para su historia).* En colaboración con la Cátedra "Inca Garcilaso" de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla.—Sevilla, 1969. VIII + 115 págs., 24 × 17 cms., 21 láms., 300 grs.—250 pesetas.
- 187 Torres Ramírez, Bibiano: *Alejandro O'Reilly en las Indias.* Sevilla, 1969. 239 págs., 7 láms., 22 × 16 cms., 450 grs.—Col. *Dos Colores*.—300 pesetas.
- 188 Pérez-Embid, Florentino; Morales Padrón, Francisco: *Bibliografía Española de historia Marítima (1932-1962).* Sevilla, 1970. XV + 155 págs., 20 × 15 cms., 230 grs.—150 pesetas.
- 189 Gil-Bermejo García, Juana: *Panorama Histórico de la Agricultura en Puerto Rico.* Sevilla, 1970, XVI + 385 págs., 27 láms., 17 × 24 cms., 700 grs.—500 pesetas.
- 190 Real Díaz, José Joaquín: *Estudio Diplomático del Documento Indiano.* Sevilla, 1970, 300 págs., 20 × 15 cms., 450 grs., 22 láms.—250 pesetas.
- 191 *Anuario de Estudios Americanos.* Vol. XXVI. Sevilla, 1969.—24 × 17 cms., 842 págs., 11 láms., 1.250 grs.—1.000 pesetas.
- 192 Luque Alcalde, Elisa: *La Educación en Nueva España en el siglo XVIII.* Sevilla, 1970. XLIV + 403 págs., 6 láms., 17 × 24 cms., 750 grs.—500 pesetas.
- 193 Morales Padrón, Francisco: *Cedulario de Canarias, Tomo I: (1566-1597).* Sevilla, 1970. XXV + 415 págs., 17 × 24 cms., 750 grs.—260 pesetas.
- 194 Morales Padrón, Francisco: *Cedulario de Canarias, Tomo II: (1601-1693 y 1701-1704).* Sevilla, 1970. 403 págs., 17 × 24 cms., 700 grs.—260 pesetas.
- 195 Morales Padrón, Francisco: *Cedulario de Canarias, Tomo III: (1592-1709).* Sevilla, 1970. 421 págs., 17 × 24 cms., 725 grs.—260 pesetas.

